

TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DESECHOS
PELIGROSOS: TÉCNICAS DEL CONVENIO DE BASILEA
DE 1989 PARA EVITAR LOS PROBLEMAS
DE INCOMPATIBILIDAD

TRATADOS INTERNACIONALES
SOBRE DESECHOS PELIGROSOS: TÉCNICAS
DEL CONVENIO DE BASILEA DE 1989
PARA EVITAR LOS PROBLEMAS
DE INCOMPATIBILIDAD

JORGE ZAVALA

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL, ECLESIAÍSTICO
Y FILOSOFÍA DEL DERECHO
INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y EUROPEOS
«FRANCISCO DE VITORIA»
MADRID, 2001

ISBN: 84-89315-20-5

Depósito legal: M-42.629/2001

IMPRENTA NACIONAL DEL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
MADRID, 2001

A María José

SUMARIO

	Páginas
AGRADECIMIENTOS	9
PRÓLOGO	11
INTRODUCCIÓN	15
CAPÍTULO PRIMERO: CONCURRENCIA Y CONFLICTO ENTRE NORMAS CONVENCIONALES SUCEASIVAS SOBRE LA MISMA MATERIA, LAS SOLUCIONES GENERALES DE LA CONVEN- CIÓN DE BASILEA	23
A) Los problemas surgidos de la concurrencia y el conflicto	23
a) Cuestiones generales	23
b) Supuestos de conflicto y concurrencia	26
c) El caso de los tratados aplicables al movimiento transfronterizo de dese- chos peligrosos: el transporte por mar y el transporte de productos quí- micos	33
B) Técnicas convencionales de armonización y cooperación institucional para la prevención de los conflictos	34
a) Las técnicas de armonización	36
1. Anteriores a la entrada en vigor del Tratado	36
2. Posteriores a la entrada en vigor del Tratado	39
b) El rol de la cooperación internacional en la armonización: pluralidad de órganos e instituciones	42
C) Las técnicas generales de armonización establecidas por la Convención de Basilea	46
a) El principio favorable a la vigencia de la norma más exigente	47
b) La cláusula de armonización	49
c) Aplicación prioritaria de los usos internacionales en materia de embalaje, etiquetado y transporte	53

	Páginas
d) La admisión de la adopción de medidas más rigurosas en el orden interno de los Estados parte	54
CAPÍTULO SEGUNDO: ARMONIZACIÓN DEL CONVENIO DE BASILEA CON LAS NORMAS DE LA OCDE Y CON EL DERECHO COMUNITARIO EUROPEO	57
A) Observaciones generales	57
B) Las técnicas de armonización normativa de la OCDE y su influencia en el Derecho Comunitario	59
C) Armonización del Convenio con las disposiciones del Derecho Comunitario en el marco de este ordenamiento	65
a) Cuestiones generales	65
b) Armonización del Convenio con las disposiciones internas: la competencia concurrente de los Estados miembros	67
c) La armonización de las normas concurrentes dentro del ordenamiento comunitario	69
CAPÍTULO TERCERO: ARMONIZACIÓN DEL CONVENIO DE BASILEA CON LOS PRINCIPALES CONVENIOS INTERNACIONALES RELATIVOS AL RÉGIMEN DEL COMERCIO INTERNACIONAL	81
A) Cuestiones generales	81
B) Solución de conflictos normativos en el marco de la OMC	82
C) Armonización entre normas de la OMC y el Convenio de Basilea	86
D) Armonización entre el Convenio de Basilea y la Convención de Lomé IV	90
E) Armonización entre el Convenio de Basilea y el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte	92
CAPÍTULO CUARTO: ARMONIZACIÓN NORMATIVA DEL CONVENIO DE BASILEA CON OTROS CONVENIOS E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES	97
A) Instrumentos particulares sobre movimiento transfronterizo de desechos	97
a) Los tratados regionales sobre movimiento transfronterizo de desechos ...	97
b) El Código de Buena práctica sobre el movimiento transfronterizo de desechos radioactivos	100
B) Convenios sobre la protección del medio marino	101
a) El Convenio de Londres de 1972 sobre vertimiento de desechos en el mar.	101
b) La Convención de Montego Bay	104
c) El Tratado Antártico	109
CONSIDERACIONES FINALES	113
BIBLIOGRAFÍA	117
APÉNDICES	127

AGRADECIMIENTOS

El tema de la presente investigación obedece a los resultados que la cooperación entre las Organizaciones Internacionales ofrece para evitar los problemas de incompatibilidad entre los tratados ambientales, en general, y, en particular, entre aquellos tratados relativos al movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y materias conexas. Este fenómeno, de indudable relevancia en el Derecho Internacional del medio ambiente, me ha llevado a realizar un estudio sistemático de las técnicas utilizadas para armonizar los tratados ambientales. Esta monografía es, pues, el resultado del trabajo de investigación que llevé a cabo, principalmente, en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon - Assas (Paris II) y en la Universidad Carlos III Madrid.

Quisiera dejar constancia de mi sincero agradecimiento a todas aquellas personas que han contribuido en su elaboración. En primer lugar, al Profesor Fernando Mariño, Director del Instituto de Estudios Internacionales y Europeos «Francisco de Vitoria» de la Universidad Carlos III de Madrid, no sólo por haberme orientado en la elección del tema, sino también por la crítica constructiva sobre conceptos e ideas del plan expositivo y la labor de supervisión. Al Profesor Pierre-Marie Dupuy, Codirecteur del Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon - Assas (Paris II), por sus valiosos comentarios, reflexiones y las discusiones sobre partes de este trabajo. Finalmente, quiero agradecer también al Profesor Charles Leben por haberme facilitado el acceso a los fondos bibliográficos de la biblioteca del Institut des Hautes Études Internationales y por su ayuda durante mi estancia en la Universidad de París II.

PRÓLOGO

Con enorme agrado doy la bienvenida a este trabajo del Doctor Jorge Zavala, que estudia un tema tremendamente complejo, con ambición, esmero y claridad.

La proliferación de normas jurídicas internacionales medioambientales, sobre todo las establecidas por diferentes convenios internacionales, cuyos ámbitos de aplicación se superponen con frecuencia, es un fenómeno de tal envergadura que su inevitable concurrencia y los consiguientes e ineludibles conflictos, potenciales o actuales, entre ellas han exigido un importante esfuerzo no ya de búsqueda de una compatibilidad normativa por los medios tradicionales de cláusulas de remisión o preferencia insertas en los convenios en cuestión, sino más específicamente por medio de nuevas técnicas de «armonización» de los diferentes instrumentos en presencia.

Es en ese ámbito de la armonización, sobre todo de la «previa» a la aprobación de nuevos instrumentos medioambientales, pero también de la posterior a ésta, donde inciden los análisis de este volumen, con la frescura de la novedad que constituyen en nuestra doctrina.

La complejidad de las normas en presencia, provenientes en ocasiones de varios sistemas jurídicos y aún de diferentes ordenamientos, simultáneamente relevantes, y dotadas de naturaleza jurídica que oscila entre la programática y la estrictamente vinculante, ha hecho que las técnicas de armonización constituyan un medio preferente de la actividad de las Organizaciones Internacionales y de otros organismos internacionales, como son los Secretariados de las grandes Convenciones internacionales medioambientales.

Con buen criterio y en clara muestra de su audacia científica, el autor ha elegido para penetrar en el estudio de la armonización de las normas internacionales medioambientales el ámbito cubierto por la gran Convención de Basilea de 1989 sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación.

Tantos son los aspectos de la regulación del tráfico «transfronterizo» de desechos a tener en cuenta, que la «gestión» de normas e instituciones parece inevitable: la consideración de que los desechos mismos puedan constituir mercancías a ciertos efectos; la calificación de su «peligrosidad» en cuanto tal; la determinación del lugar posible para su eliminación o vertido o la prohibición total o parcial de éste; los problemas de su transporte por mar, por tierra o por otras vías de comunicación; la protección del derecho humano a la salud frente a vertidos de desechos peligrosos; la pertinencia también en este ámbito de la distinción jurídica entre países desarrollados y subdesarrollados; etc.

Sin embargo, la acción «armonizadora» emprendida por los organismos internacionales, a escala universal y regional, está estableciendo las bases para el desarrollo de una especie de «Derecho común» del tráfico de desechos peligrosos, el cual, sobre un fundamento jurídico internacional, se va concretando en los distintos ámbitos del Derecho Público y Privado, ya sea de fuente internacional, comunitaria o estatal.

La búsqueda del equilibrio entre las exigencias de la conservación del entorno y las de un comercio libre y competitivo, sin menoscabo del objetivo universal del desarrollo de los países pobres, es el objetivo central del conjunto de principios y normas jurídicas que forman un sector tan amplio y especializado.

No es el menor de los méritos del trabajo del doctor Jorge Zavala mantener con pulso firme una visión universal de los complicados problemas planteados por la pluralidad de los intereses en conflicto y de las normativas consiguientes. Su vía de buen investigador universitario, ya iniciada, se continúa así con un excelente trabajo.

Junio de 2001

FERNANDO M. MARIÑO MENÉNDEZ
Universidad Carlos III de Madrid

ABREVIATURAS MAS UTILIZADAS

An.HLADI.	Anuario del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional
CEBDI	Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho Internacional
CLC	International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 (= Convención internacional sobre responsabilidad civil por los daños causados por la contaminación de hidrocarburos, 1969)
CNUCED	Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo
CPMM	Comité de Protección del Medio Marino
Eur. Env. L.R	European Environmental Law Review
EPL	Environmental Policy and Law
FUND	International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Damage, 1971 (= Convención internacional para la creación de un fondo internacional de indemnización por daños causados por la contaminación de hidrocarburos, 1971)
ILC	International Law Commission
ILM	International Legal Materials
IMDG (Código)	Código Internacional de Mercancías Peligrosas
HNS	Hazardous and Noxious Substances (Sustancias peligrosas y nocivas)
DOCE	Diario Oficial de las Comunidades Europeas
MARPOL	Convention, 73/78 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (1973), as modified by the related 1978 Protocol (= Convención internacional para la prevención de la contaminación por buques [1973], modificada por el Protocolo de 1978)
NYIL	Netherlands Yearbook of International Law
OMM	Organización Meteorológica Mundial
OSPAR	Oslo/París. Convenio para la protección del medio marino en el Atlántico Nordeste
PNUMA	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
RTD eur	Revue Trimestrielle de Droit Européen
YBIEL	Yearbook of International Environmental Law

INTRODUCCIÓN

La fragmentación del derecho internacional del medio ambiente y la progresiva multiplicación de los tratados medioambientales ha producido en un tiempo relativamente breve (unos treinta años) un corpus jurídico denso, compuesto por más de mil convenios internacionales de ámbito universal, regional y local¹. Este enorme paquete convencional no presenta una gran coherencia; al contrario, el fenómeno de su congestión ha aumentado las posibilidades de concurrencia y conflicto entre ellos.

Para hacer frente a los problemas derivados de esa saturación parece imponerse la utilización de cláusulas convencionales de compatibilidad, al mismo tiempo que se utilizan otras cláusulas que pueden realizar en la práctica una función similar, como las establecidas para regular la Modificación, Enmienda, Revisión y Suspensión total o parcial y Terminación de los tratados en cuestión².

Por otra parte, la toma de conciencia de los medios que ofrece la cooperación internacional institucionalizada ha desplazado las estrategias desde la

¹ SZAS, P. C., «International Law Making», Environmental change and international law, Tokyo, United Nations University Press, 1992, p. 41. Subráyese a este respecto que una investigación, publicada unos años más tarde (1998), cifró el número de acuerdos internacionales ambientales en más de novecientos. Véase MALJEAN-DUBOIS, S., «Le foisonnement des institutions conventionnelles», *L'effectivité du droit international de l'environnement, contrôle de la mise en oeuvre des conventions internationales*, Claude Imperiali éd., Centre d'Études et de Recherches Internationales et Communautaires Université d'Aix-Marseille III, Economica, 1998, p. 25.

² UN. Doc.A/Conf.62/122 (1982).

simple neutralización de los conflictos por medio de las cláusulas mencionadas, hacia la fase de elaboración de los tratados que se harían compatibles desde el principio a través de la coordinación de la acción normativa de las diferentes organizaciones internacionales

Si es necesario, éstas realizan entre sí una verdadera negociación con el propósito de reconciliar los diferentes puntos de vista, y han llegado incluso a prever la realización de acciones concertadas, establecidas por medio de técnicas de cooperación en sentido estricto. Tales técnicas de cooperación se orientan a lograr objetivos en dos niveles: primero, la prevención del conflicto antes de la entrada en vigor de un nuevo tratado; y segundo, la previsión de modos para lograr una eventual armonización de los tratados devenidos incompatibles después de su respectiva entrada en vigor. Para el análisis de estas técnicas de cooperación, ofrece interesantes perspectivas el contenido del Convenio de Basilea sobre el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, puesto que éste constituye un paso ejemplar en la vía de la armonización preventiva de las normas en situación de futuros conflictos y en la de la armonización correctiva de los instrumentos internacionales ya aplicables sobre la materia. Resulta ineludible mencionar al respecto la experiencia acumulada en el seno de la OMI durante sus sesiones de 1982 y 1983, destinadas a resolver ciertas contradicciones entre la Convención de 1969 sobre responsabilidad civil por daños causados por la contaminación de hidrocarburos, sus protocolos adicionales de 1984 y la convención FUND de 1971 ³.

Las operaciones de armonización representan la forma más especializada de cooperación internacional, en la que las Secretarías de las Convenciones van a jugar un papel fundamental en la neutralización de los conflictos reales o potenciales entre tratados ambientales. Esto es ya evidente en las conclusiones y recomendaciones del *Trade and Environment Policy Committee* de la OCDE ⁴, del Secretario General de UNCTAD ⁵, del Comité Administrativo de Coordinación de las Naciones Unidas y, por supuesto, de la Secretaría del Convenio de Basilea sobre el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y otros desechos ⁶.

³ Véase la 49 sesión del Comité, 4 al 8 de octubre de 1982, *JMM* del 21 de octubre de 1982, p. 2459, y la 52 sesión, 19 al 29 de septiembre de 1983, *JMM* del 29 de septiembre de 1983, p. 2109.

⁴ Report on Trade and Environment to OECD Council at Ministerial Level, OCDE/GD(95) 63, 1995, p. 6.

⁵ Trade, Environment and Sustainable Development, UN Doc. E/CN.17/1996/8, párrafo 13.

⁶ Véase Cap. I, B, b) *infra*.

En este contexto, los Estados y las organizaciones internacionales han prescindido de toda remisión o referencia al artículo 30 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para resolver los problemas originados por la concurrencia y conflicto entre tratados referentes al movimiento transfronterizo de desechos, lo que muestra que la cooperación institucionalizada entre los Estados es ya una vía indispensable en la aplicación armonizada de esos tratados.

Todo ello aconseja que comencemos la aproximación al análisis de las «técnicas de armonización» recordando los elementos básicos del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, adoptado en Basilea el 22 de marzo de 1989⁷.

Al analizar el Convenio, no debemos perder de vista que, en un primer momento, uno de sus objetivos principales era reducir la producción y exportación de desechos tóxicos o peligrosos y lograr su eliminación utilizando todas aquellas operaciones (Anexo IV) que no llevaran a la recuperación, reciclado, regeneración, reutilización u otros usos de los mismos (art. 4). Este objetivo, sin embargo, fue ampliado unos años más tarde por la segunda conferencia de

⁷ Véase el texto del Convenio con sus anexos y modificaciones en el apéndice núm.1.

En general, MOÏSE, E., «La convention de Bâle sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux», *RGDIP*, 1989, vol. 93, pp. 899-906; BOTHE, M., «International regulation of transboundary movement of hazardous wastes», *GYIL*, 1990, vol. 33, pp. 422 y ss.; KISS, A., y SHELTON, D., *International environmental law*, Transnational Publishers, Inc. Ardsley-on-Hudson, New York Graham & Trotman Limited, London, England, 1991, pp. 326-328; KUMMER, K., «The international regulation of transboundary traffic in hazardous wastes: The 1989 Basel Convention», *ICLQ*, 1992, vol. 41, pp. 530 y ss.; ID., *International management of hazardous wastes, the Basel convention and related legal rules*, Clarendon Press-Oxford, 1995; MURPHY, S. D., «Prospective liability regimes for the transboundary movement of hazardous wastes», *AJIL*, 1994, vol. 88, pp. 24 y ss.; BITAR, F., *Les mouvements transfrontières de déchets dangereux selon la convention de Bâle, étude des régimes de responsabilité*, Pedone, Paris, 1997; RUMMEL-BULSKA, I., «Les aspects juridiques et institutionnels de la mise en oeuvre de la convention de Bale», *L'effectivité du droit international de l'environnement, contrôle de la mise en oeuvre des conventions internationales*, Claude Imperiali (éd), Centre d'Études et de Recherches Internationales et Communautaires Université d'Aix-Marseille III, Economica, 1998, pp. 201-224; JUSTE RUIZ, J., «La regulación internacional de los movimientos transfronterizos de desechos y otras materias peligrosas», *An.HLADI*, vol. 12, 1995, pp. 57-98; RUMMEL-BULSKA, I., «The Basel convention and the UN Convention on the law of the sea», *Competing norms in the law of marine environmental protection* (ed.); HENRIK R., *International Environmental Law & Policy Series*, Kluwer Law International, London-The Hague-Boston, 1997, pp. 83-92; PÉREZ MARTÍN, M. T., *Que fait le village planétaire de ses déchets dangereux? La mise en œuvre de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination*, Bruylant, Bruxelles, 2001.

los Estados partes en el Convenio de Basilea (1994), en la que se decidió «prohibir» la exportación de desechos peligrosos, destinados a su eliminación final, desde los países miembros de la OCDE y de las Comunidades Europeas hacia países no miembros de ambas organizaciones internacionales. La medida comenzó con la reducción gradual de los movimientos hasta su total prohibición el 31 de diciembre de 1997⁸. Posteriormente, durante la tercera conferencia de los Estados partes en el Convenio de Basilea (1995), la medida de prohibición se convirtió en una enmienda formal del Convenio a través de la Decisión III/1 por la que se insertó un nuevo párr. 7 bis en el Preámbulo del Convenio, un nuevo artículo 4 A y un nuevo Anexo VII en el que se agrega una lista de los países desde los que se pueden realizar movimientos transfronterizos de desechos peligrosos⁹.

El Convenio define los «desechos» como aquellas sustancias u objetos a cuya «eliminación» se procede o se está obligado a proceder en virtud de la legislación nacional¹⁰; y la noción de «eliminación» se define teniendo en cuenta el Anexo IV, que cataloga una serie de operaciones cubiertas por el propio Convenio de Basilea¹¹. Este punto tiene interés debido a la ausencia de una distinción clara entre desechos reciclables y no reciclables, por lo que el Convenio merece sin duda críticas severas. Ahora bien, los desechos serán considerados peligrosos o no; de acuerdo con las disposiciones del Convenio y con las normas que puedan dictar los Estados sobre la materia, a condición en este caso de que la definición estatal correspondiente sea comunicada previamente a la Secretaría del Convenio para que ésta lo difunda al resto de los Estados parte¹².

Los desechos que, de acuerdo con la definición del Convenio, no posean la condición de «peligrosos» y aquellos que pertenezcan a cualquiera de las categorías del Anexo II denominados «otros desechos», fueron excluidos del régimen que prohíbe la exportación y control. Igualmente, se excluyeron de forma expresa de la regulación del Convenio los desechos radioactivos y los

⁸ *Report of the First Meeting of the Conference of the Parties to the Basel Convention*, Annex II, pp. 12, 37-38; UNEP/CHW.1/24, 5 de diciembre de 1992, y *Report of the Secretariat of the Ad Hoc Committee on Implementation*, 30 de septiembre de 1994, UNEP/CHW/C.1/2/5. Enmienda y anexos en BOE de 20 de mayo de 1999.

⁹ Cap. I, C, b), *infra*.

¹⁰ Art. 2, párr. 1.

¹¹ Art. 2.4.; KUMMER, *International...*, pp. 48-49.

¹² Art. 1, párr. 1.

desechos fruto de las operaciones normales de los buques por estar sometidos a otros acuerdos y sistemas de control internacional¹³.

Si nos atenemos a lo esencial, hay que resaltar las enormes posibilidades que ofrece el artículo 11 del Convenio para lograr la adaptación de éste a las necesidades particulares, propias de diferentes situaciones ambientales. Gracias a aquéllas, el Convenio es un instrumento internacional destinado a influir de modo importante en el desarrollo del derecho internacional sobre la materia¹⁴, como lo demuestra la adopción de una serie sucesiva de acuerdos regionales sobre el movimiento transfronterizo de desechos que, de alguna forma, constituyen su prolongación regional¹⁵.

En efecto, el citado artículo 11 permite que los Estados partes celebren *acuerdos o arreglos bilaterales, multilaterales o regionales* sobre el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos a condición de que «no sean menos ambientalmente racionales» que el Convenio de Basilea. Esta disposición propicia la vigencia simultánea del Convenio y de una gran variedad de instrumentos internacionales anteriores y posteriores sobre la misma materia, introduciendo el riesgo de que el régimen convencional de Basilea acabe descomponiéndose o desvirtuándose en favor de los compromisos bilaterales y multilaterales¹⁶. Para disminuir los inconvenientes de esta situación, el propio

¹³ Cfr. JUSTE RUIZ, «La regulación...», p. 64; PÉREZ MARTÍN, *Que fait le village...*, pp. 73-78. También fueron excluidos del Convenio de Basilea los productos químicos y los contaminantes orgánicos persistentes, cuya regulación respectiva está prevista en el «Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional» (UNEP/FAO/PIC/CONF/5, 17 de septiembre de 1998), que aún no ha entrado en vigor, y en el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, pendiente de aprobación por la conferencia de plenipotenciarios (UNEP/POPS/CONF/2, 9 de marzo de 2001). La información concerniente al número de ratificaciones del primer instrumento y el proceso de elaboración del segundo está disponible en las direcciones de Internet <http://www.pic.int> y <http://firptc.unep.ch>.

¹⁴ PAOLILLO, F., *Annuaire de l'Institut de Droit International*, Session de Strasbourg, vol. 67-1, 1977, p. 367.

¹⁵ Véase, por ejemplo, el preámbulo del Protocolo sobre prevención de la Contaminación del mar Mediterráneo, causada por el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y su eliminación (disponible en www.mae.es/mae/textos/convenios/index.htm); el preámbulo de la Convención de Bamako sobre la prohibición de importar desechos y el control de sus movimientos transfronterizos a África; el preámbulo del Código de Prácticas del Organismo Internacional de Energía Atómica; el preámbulo del Acuerdo centroamericano sobre el movimiento transfronterizo de desechos; etc.

¹⁶ CAMPINS ERITJA, M., «La práctica de la Comunidad Europea en relación al artículo 11 del Convenio de Basilea sobre el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y su eliminación», *GJ*, B-123, mayo 97, p. 16.

Convenio de Basilea incorpora el llamado «principio de armonización internacional»¹⁷. A decir verdad, la noción no es nueva, pues desde hace mucho tiempo infinitos de tratados internacionales contienen cláusulas para evitar problemas originados por la concurrencia o conflicto entre tratados sucesivos sobre la misma materia o sobre materias conexas.

De manera más precisa, nosotros constataremos en las líneas que siguen la existencia de esos fenómenos entre los tratados internacionales destinados a regular el movimiento transfronterizo de desechos, cuestión escasamente estudiada por la doctrina¹⁸ pero cuya realidad está respaldada por la práctica internacional.

Así, el presente estudio se ha estructurado sistemáticamente en cuatro capítulos. El primero de ellos tiene por objeto hacer una presentación de las soluciones a los problemas de compatibilidad entre tratados internacionales, destacando las técnicas de armonización empleadas para la coexistencia del Convenio de Basilea sobre movimiento transfronterizo de desechos y otros instrumentos sobre la misma materia o materias conexas. Esta rica información permite analizar tanto la prevención de los conflictos normativos, realizada antes de la entrada en vigor de los tratados, como aquella que se opera con posterioridad a su entrada en vigor. Para alcanzar este fin se han tenido en cuenta las técnicas de armonización empleadas por las organizaciones internacionales y los principios y cláusulas sobre esta materia establecidas en el propio Convenio de Basilea.

En el segundo capítulo se exponen las técnicas de armonización de la OCDE y su influencia en el Derecho comunitario relativo al movimiento transfronterizo de desechos peligrosos. Sucesivamente se estudia la articulación del Convenio de Basilea con las disposiciones del Derecho Comunitario, analizando los resultados del control previo de la conformidad entre el Derecho Comunitario y los acuerdos internacionales que la comunidad proyecta celebrar (art. 300 del TCE), así como la neutralización de los conflictos normativos entre el Convenio y las disposiciones internas de los Estados miembros.

El tercer capítulo está dedicado a examinar la armonización del Convenio de Basilea con las cláusulas y principios de los principales tratados comerciales internacionales (GATT, OMC, NAFTA, incluida la Convención Lomé IV), pres-

¹⁷ El artículo 10.1 y 2. a); BITAR, *Les mouvements...*, pp. 51 y 71.

¹⁸ CASANOVAS Y LA ROSA, O., «Unidad y pluralismo en Derecho Internacional Público», *CEBDI*, vol. II, 1998, p. 103.

tando atención a la posibilidad de actuación de los nuevos órganos de solución de diferencias instituidos por estos tratados en los que aún no se percibe ningún protagonismo en lo relativo a la solución de los conflictos normativos. Finalmente, la obra se cierra con un cuarto capítulo, en el que se analiza la coexistencia del Convenio de Basilea con los tratados ambientales de carácter sectorial.

CAPÍTULO I: CONCURRENCIA Y CONFLICTO ENTRE NORMAS CONVENCIONALES SUCESIVAS SOBRE LA MISMA MATERIA, LAS SOLUCIONES GENERALES DE LA CONVENCIÓN DE BASILEA

A) LOS PROBLEMAS SURGIDOS DE LA CONCURRENCIA Y EL CONFLICTO

a) Cuestiones generales

Si bien cada Tratado internacional es independiente de los demás, en la práctica, sin embargo, es habitual que entre los tratados que regulan una misma materia o materias conexas se creen relaciones de complementariedad e interdependencia, puesto que las partes en ellos coinciden total o parcialmente; ello plantea la regulación de las condiciones necesarias para una «coexistencia difícil» entre tales tratados¹⁹. Como se ha señalado, debido a su proliferación en el ámbito de la protección internacional del medio ambiente, ha aumentado también el riesgo de su concurrencia y conflicto. El conflicto entre tratados sucesivos se puede originar siempre que los instru-

¹⁹ ROUCONAS, E., «Engagements parallèles et contradictoires», *RCADI*, 1987, VI, p. 199; JUSTE RUIZ, J., «La evolución del derecho internacional del medio ambiente», *Hacia un nuevo orden internacional y europeo*. Homenaje al Profesor M. DIEZ DE VELASCO, Tecnos, Madrid, 1993, p. 402.

mentos en cuestión, en vigor entre grupos de Estados parcial o totalmente coincidentes, se ocupen de materias idénticas o conexas, de modo que al ser aplicados puedan conducir de alguna manera al incumplimiento del otro instrumento. Para ello no importa que tales instrumentos se adopten dentro de una misma organización o de diferentes organizaciones universales regionales, o se concluyan directamente por los Estados sin la intervención de una organización internacional ²⁰.

Ya Grocio, Puffendorf y, sobre todo, Vattel aportaron en este ámbito algunos principios que luego la doctrina se esforzó en profundizar ²¹. Más recientemente, los estudios de Hans Kelsen, de Herbert Hart y otros especialistas han aportado interesantes contribuciones al esclarecimiento del tema ²². En 1935, la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, en el artículo 22.b) de su proyecto de Convención sobre el derecho de los tratados, reconocía a las partes la posibilidad de concluir un nuevo acuerdo para superar el conflicto entre dos tratados concurrentes o en conflicto ²³. Pero, lógicamente, la regulación más relevante se encuentra en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 y en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales y entre Organizaciones Internacionales de 1986.

La incompatibilidad entre un tratado anterior y otro tratado posterior, celebrado este último entre todas o algunas de las partes en el primero de ellos y

²⁰ JENKS, C. W., «The conflict of law making treaties», *BYIL*, 1953, p. 404.

²¹ GROCIO, H., *De jure belli ac pacis*, Libro II, Cap. XVI, párrafo 29; PUFFENDORF, S., *De jure naturae et gentium*, Libro V, Cap. XII, párrafo 23; VATTEL, E., *Droit des Gens*, Livre II, Cap. XVII, párrafo 316; véase JENKS, «The conflict...», p. 405; LECA, J., *Les techniques de revision des conventions internationales*, París, LGDJ, 1961, p. 163; para una perspectiva histórica DO NASCIMENTO E SILVA G. E., «Le facteur temps et les traites», *RCADI*, 1978, vol. 154, pp. 242 y ss.; BINDER, G. «The dialectic of duplicity: Treaty conflict and political contradiction», *Buffalo Law Review*, 1985, vol. 34, n.º 2, pp. 363 y ss.; CASANOVAS Y LA ROSA, «Unidad...», p. 105.

²² KELSEN, H., «Derogation» R. A. Newman, (ed.) *Essays in Jurisprudence in Honor of Roscoe Pound*, American Society of Legal History, Indianapolis, 1962, pp. 339-361; HART, H. L. A., *The Concept of law*, Oxford, Clarendon Press 1961, pp. 90 y 92; MCNAIR, A. D., *The law of treaties*, Oxford, 1961 (reimpresión, Oxford University Press Inc. New York, 1998), pp. 213-236; véase también a VIERDAG, E. W., «The time of the Conclusion of a Multilateral Treaty: Article 30 of the Vienna convention on the law of Treaties and Related Provisions», *BYIL*, 1988, pp. 92-111.

²³ Art. 22.b) «Two or more of the States parties to a treaty to which other states are parties may make a later treaty which will supersede the earlier treaty in their relations *inter se*, only if this is not so inconsistent that the general purpose of the earlier treaty as to be likely to frustrate that purpose». Draft Convention on the Law of Treaties, with comment, *AJIL*, vol. 29, 1935, suplemento n.º 4, pp. 1024-1029.

siendo ambos sobre la misma materia, se encuentra regulada en el artículo 30²⁴, cuyo texto es prácticamente idéntico en ambos tratados²⁵.

De acuerdo con el párrafo 3 del artículo 30, la prioridad debe ser conferida al tratado posterior. Esta fórmula, prudente en exceso y a cuyo tenor «el tratado anterior no se aplicará más que en la medida en que sus disposiciones sean compatibles con las del tratado posterior», muestra, en opinión de P. Reuter, que la compatibilidad no puede ser apreciada más que en función de la intención de las partes²⁶. La cuestión esencial es determinar en qué condiciones esa descomposición en dos órdenes de relaciones jurídicas es posible.

Por ejemplo, la aplicación del artículo 30 de la Convención de Viena a las relaciones entre el Convenio de Basilea y la Convención de Londres de 1972 sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias fue puesta en duda por las dificultades prácticas que planteó²⁷. Por otro lado, de poco sirve afirmar en abstracto que las contradic-

²⁴ Artículo 30. *Aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma materia*.

«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, los derechos y las obligaciones de los Estados partes en tratados sucesivos concernientes a la misma materia se determinarán conforme a los párrafos siguientes.

2. Cuando un tratado especifique que está subordinado a un tratado anterior o posterior o que no debe ser considerado incompatible con ese otro tratado, prevalecerán las disposiciones de este último.

3. Cuando todas las partes en el tratado anterior sean también partes en el tratado posterior pero el tratado anterior no quede terminado ni su aplicación suspendida conforme al artículo 59, el tratado anterior se aplicará únicamente en la medida en que sus disposiciones sean compatibles con las del tratado posterior.

4. Cuando las partes en el tratado anterior no sean todas ellas partes en el tratado posterior:

a) en las relaciones entre los Estados partes en ambos tratados se aplicará la norma enunciada en el párrafo 3;

b) en las relaciones entre un Estado que sea parte en ambos tratados y un Estado que sólo lo sea en uno de ellos, los derechos y obligaciones recíprocos se regirán por el tratado en el que los dos Estados sean partes.

5. El párrafo 4 se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41 y no prejuzgará ninguna cuestión de terminación o suspensión de la aplicación de un tratado conforme al artículo 60 ni ninguna cuestión de responsabilidad en que pueda incurrir un Estado por la celebración o aplicación de un tratado cuyas disposiciones sean incompatibles con las obligaciones contraídas con respecto a otro Estado en virtud de otro tratado.»

²⁵ SINCLAIR, I. M., *The Vienna Convention on the Law of Treaties*, Dover, Manchester, 1984, pp. 10-21.

²⁶ REUTER, P., *Introduction au droit des traités*, 3e édition revue et augmentée par Philippe Cahier, Press Universitaires de France, 1995, p. 119.

²⁷ A/46/21A, E/1991/77, 4 de junio de 1991, párrafo 33, letra c). Acerca de los problemas de compatibilidad entre el Convenio de Londres y otros tratados regionales sobre la misma materia

ciones entre los dos convenios no se resolvieron de forma arbitraria, porque tal afirmación queda desvinculada de las realidades ambientales que ambos, Convenios regulan. Como veremos más adelante, la solución de las contradicciones señaladas implicó un estudio profundo de las disposiciones incompatibles, efectuado conjuntamente por la Secretaría de la Convención de Londres de 1972 y el Comité interino del Convenio de Basilea²⁸.

Podemos constatar que las incidencias de un acuerdo sobre otro que regula la misma materia entre las mismas partes conciernen no sólo a la cuestión de los efectos de los tratados en el tiempo. La técnica de celebrar tratados sucesivos, donde el segundo se convierte encubiertamente en una interpretación del primero, es en realidad una forma de revisión, como ha ocurrido con la forma particular de modificar por la vía de un nuevo Convenio la parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar²⁹. En todo caso, el conflicto entre tratados sucesivos sobre la misma materia no siempre se zanja de forma satisfactoria en la práctica. La dificultad procede, sin duda, del hecho de que el conflicto entre tratados siempre tendrá como trasfondo un conflicto de intereses entre los Estados partes.

b) Supuestos de conflicto y concurrencia

Para poder hablar de un auténtico conflicto entre tratados es necesario comprobar la existencia de una verdadera contradicción entre las normas convencionales susceptibles de aplicarse a un mismo caso concreto y que se encuentren en diferentes instrumentos. En palabras de G. Binder, *treaty conflict occurs when a state concludes a treaty which creates international obligations the performance of which would be inconsistent with the performance of an international obligation to a third state under a previously concluded treaty*³⁰. Ello significa que una de las normas excluye a la otra, haciendo imposible su aplicación simultánea. El conflicto implica para los Estados partes en dichos instrumentos la imposibilidad de cumplir con las obligaciones de uno sin dejar de incumplir con las del otro. Ahora bien, la divergencia abstracta entre las disposiciones de los tratados sucesivos sobre la misma materia no

véase, BRUBAKER, D., *Marine pollution and international law: principles and practice*, Belhaven Press, London and Florida, 1993, pp. 73-74, 244-249.

²⁸ *Ibid.*, letra d).

²⁹ DUPUY, P. M., *Droit international public*, 5e édition, Dalloz, Paris, 2000, p. 288.

³⁰ BINDER, «The dialectic...», p. 340.

constituye por sí misma un conflicto. Según Jenks, un conflicto en sentido estricto de incompatibilidad directa se produce solamente cuando un Estado parte en los dos tratados no puede cumplir simultáneamente con las obligaciones reguladas en ambos tratados³¹.

En ese sentido, la doctrina se ha ocupado de estudiar la relación que existe entre los Convenios internacionales que regulen el comercio internacional y los que se refieren a la protección internacional del medio ambiente: su admitida incompatibilidad tiene reflejo en las «cláusulas comerciales» que figuran en los acuerdos de protección del medio ambiente³² y en las disposiciones relativas a la protección del medio ambiente incorporadas en los acuerdos sobre comercio³³, especialmente en las disposiciones que prevén la adopción de

³¹ JENKS, «The conflict...», p. 426. La doctrina ha clasificado los conflictos entre tratados de derechos humanos en dos grandes categorías: en primer lugar, se produce el conflicto entre dos disposiciones cuyo texto se contradice de forma evidente. Se trata de un conflicto patente, perceptible a través de la simple lectura de ambas disposiciones; el segundo género de antinomia es aquella que se produce por el paso del tiempo, al margen del texto expreso de la norma, es el llamado conflicto latente, que emerge a raíz de la interpretación contradictoria de la normas en cuestión. ROUCONAS, «Engagements...», pp. 29, 40, y SCIOTTI, C., *La concurrence des traités relatifs aux droits de l'homme devant le juge national*, Université Robert Schuman, Institut des Hautes Études Européennes, Bruylant, Bruxelles 1997, pp. 29 y ss.

³² Es un hecho notable que en la actualidad están en vigor unos 200 acuerdos internacionales ambientales, de los que unos 20 aproximadamente contienen disposiciones que pueden afectar al comercio internacional en determinadas circunstancias. El Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC ha identificado entre esos acuerdos al Protocolo de Montreal sobre la protección de la capa de ozono; el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación; el Convenio de Bamako sobre la prohibición de importar desechos peligrosos a África y el control de su movimiento transfronterizo, y la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre (CITES). Véase el Report by Ambassador H. Ukawa (Japan), Chairman of the Group Environmental Measures and International Trade, to the 49th Session of the Contracting Parties, L/7402, en *World Trade Organization, Special Studies, 4, Trade and Environment*, Håkan Nordström and Scott Vaughan, p. 88; *Trade and Environment in the GATT/WTO, Background Note by the Secretariat, World Trade Organization, Special...*, p. 69; Nordström and Vaughan, *World Trade Organization, Special...*, pp. 34, 47-60 (disponible en www.wto.org); WEISS, E. B., «Environment and trade as partners in sustainable development; a commentary», *AJIL*, 1992, vol. 86, núm. 4, p. 728; LONDON, C. y M. LLAMAS, *EC law on protection of the environment and the free movement of goods*, Butterworths, London, Dublin, Edinburgh, 1995, p. 161; SAN MARTÍN SÁNCHEZ DE MUNIÁN, L., *La Organización Mundial del Comercio (OMC) y la protección del medio ambiente. Aspectos jurídicos*, Universidad Pública de Navarra, Nafarroako Unibertsitate Publikoa, 2000, pp. 31 y ss.; PUCKETT, J., *When trade is toxic, the WTO threat to public and planetary health*, Asia Pacific Environmental Exchange (APEX), Basel Action Network (BAN), p. 14. (disponible en www.ban.org).

³³ Por ejemplo, el Acuerdo general sobre el comercio de servicios, el Tratado que instituye la Comunidad Económica Europea, revisado por Acuerdo de Maastricht, y el Acuerdo internacional sobre los bosques tropicales.

medidas unilaterales restrictivas del comercio adoptadas para proteger el medio ambiente³⁴. Esta situación conlleva múltiples consecuencias desde el punto de vista tanto de la determinación de las obligaciones establecidas por los tratados multilaterales sobre medio ambiente como de las obligaciones establecidas por los acuerdos que regulan el comercio internacional, concluidos a nivel mundial (GATT/OMC) y regional (CEE, ALENA, CEA, etc).

La relación entre instrumentos de aplicación universal y regional se complica no sólo por la existencia de subregiones y regiones superpuestas, sino también porque esos instrumentos han sido negociados y elaborados en foros distintos. Esas diferencias se manifiestan claramente en falta de «compromiso medioambiental» que los defensores del libre comercio han asumido durante las negociaciones de los acuerdos ambientales y, en consecuencia, en el hecho de que los acuerdos comerciales no tienen necesariamente en cuenta la protección del medio ambiente³⁵.

Por otra parte, la práctica de aplicación reveló la existencia de un conflicto entre el artículo 6.a) de la Convención de París sobre responsabilidad civil en el campo de la energía nuclear, firmada en París el 29 de julio de 1960³⁶, y el artículo 2.5 de la Convención de Viena relativa a la responsabilidad civil en materia de daños nucleares, firmada el 21 de mayo de 1963 en el marco de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA)³⁷. La dificultad se planteó porque ambas disposiciones establecían la responsabilidad exclusiva del explotador de una instalación nuclear en caso de daños causados por un accidente nuclear.

Los dos artículos establecían una disposición según la cual el hecho de que sólo el explotador fuera considerado responsable de reparar un «daño nuclear» «no puede afectar a la aplicación de acuerdos internacionales en el campo del transporte que estén en vigor o abiertos a la firma, a la ratificación o adhesión, en la fecha de la presente Convención». El contenido de estas dos

³⁴ Tales como las restricciones impuestas por Estados Unidos a las importaciones de atún provenientes de México (sobre la base de los delfines muertos), que fueron objeto de consultas ante el mecanismo de solución de diferencias del GATT. Véase Informe del Panel del GATT del 16 de agosto de 1991, *ILM*, 1991, vol. 30, p. 1594, y el Informe del Panel del GATT de junio de 1994, *ILM*, 1994, vol. 33, p. 839.

³⁵ Véase, Cap. III, *infra*.

³⁶ *RTNU*, vol. 956, p. 291; *BOE* de 2 de febrero de 1967, modificado por Protocolo de 28 de enero de 1964 (*BOE* de 9 de julio de 1968) y Protocolo de 16 de noviembre de 1982 (*BOE* de 1 de noviembre de 1988).

³⁷ *RTNU*, vol. 1063, p. 302.

cláusulas entrañaba una superposición de normas sobre responsabilidad al permitir a las víctimas del accidente elegir entre una acción dirigida contra el explotador nuclear y una acción contra el transportista o el armador³⁸.

Esta situación condujo a los Estados partes y a las organizaciones internacionales en presencia a impulsar que expertos estatales en Derecho nuclear y los representantes de varias organizaciones internacionales realizaran un simposium en Mónaco del 7 al 11 de octubre de 1968³⁹. Los participantes estimaron que una modificación de los Convenios internacionales sería necesaria para obtener la primacía de la Convención de Viena de 1963 relativa a la responsabilidad civil en materia de daños nucleares, sobre la Convención de París de 1960, relativa a la responsabilidad civil en el campo de la energía nuclear.

Después de varios intentos infructuosos, realizados en julio y noviembre de 1969, y ante la decisión de retirarse del Comité Jurídico de la OMI en abril de 1970, el conjunto de expertos decidió elaborar un nuevo Convenio, que fue adoptado en 1971⁴⁰.

³⁸ La redacción del artículo 6.a) del Convenio de París sobre responsabilidad civil en materia de energía nuclear era la siguiente: «[e]l derecho de la reparación de un daño causado por un accidente nuclear únicamente podrá ejercitarse contra un explotador responsable del mismo conforme al presente Convenio; podrá ejercitarse igualmente contra el asegurador o contra cualquier otra persona que haya concedido una garantía financiera al explotador, conforme al artículo 10, si estuviere previsto por la ley nacional vigente del derecho de acción directa contra el asegurador o contra cualquier otra persona que haya concedido una garantía financiera».

Por su parte, el artículo 2.5 de la Convención de Viena sobre responsabilidad civil por daños nucleares disponía que: «[s]in perjuicio de lo dispuesto en la presente Convención, sólo podrá considerarse responsable de los daños nucleares al exportador. No obstante, esta disposición no afectará a la aplicación de ninguno de los acuerdos internacionales de transporte vigentes o abiertos a la firma, ratificación o adhesión en la fecha en que quede abierta a la firma de la presente Convención».

³⁹ La Agencia europea de la energía nuclear de la OCDE, la Agencia internacional de la energía atómica de las Naciones Unidas, la OMI, la EURATOM, el Comité Marítimo Internacional, la Sala internacional de la marina mercante, el Comité europeo de seguros y la Unión internacional de seguros de transportes. GASMI, *L'action normative...*, p. 550.

⁴⁰ Del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 1971 se celebró una conferencia internacional en Bruselas en la que se adoptó la Convención relativa a la responsabilidad civil en la esfera del transporte marítimo de materiales nucleares de 1971. Esta convención entró en vigor el 15 de julio de 1975. El artículo 1, que resolvió el problema, se basó en el proyecto que había elaborado el Comité Jurídico de la OMI; su texto dice:

«Toda persona que en virtud de un Convenio internacional o de normas de derecho nacional vigentes aplicables al transporte marítimo pudiere ser considerada responsable de los daños y perjuicios causados por un accidente nuclear, será exonerada de dicha responsabilidad:

b) Si el empresario de la instalación nuclear fuere responsable de dichos daños y perjuicios en virtud del Convenio de París o Viena, o

c) Si el empresario de la instalación nuclear fuere responsable de dichos daños y perjuicios en virtud de una norma de derecho nacional que rijan la responsabilidad por dichos daños y perjuicios,

Si pasáramos revista a la práctica en otros sectores del Derecho Internacional, se multiplicarían los ejemplos, pues tocamos un conjunto complejo de realidades y de tratados cuya armonización se vincula hoy día a la intervención de las organizaciones internacionales⁴¹. Por otro lado, al tratarse de una materia de creciente importancia en la actualidad, las técnicas propuestas por el PNUMA para armonizar los tratados ambientales han sido seriamente reconsideradas. Sólo a través de un programa exhaustivo que pueda facilitar los mecanismos, instituciones y medios esenciales se podrá garantizar su efectividad de forma continua⁴².

A la inversa, no existe conflicto de incompatibilidad directa, aunque un Estado parte pueda tener obligaciones diferentes con las partes contratantes bajo diferentes instrumentos si sus obligaciones pueden analizarse dentro de un conjunto de obligaciones bilaterales, donde cada una puede separarse de la otra y ejecutarse independientemente en relación con cada una de las otras partes⁴³. Sir Gerald Fitzmaurice ilustraba nítidamente esta situación que, con frecuencia, se produce entre convenios sucesivos sobre la misma materia, elaborados bajo el patrocinio de instituciones u organizaciones internacionales de cooperación técnica o científica: «El Estado A puede estar en condiciones de

siempre que dicha norma sea tan favorable en todos sus aspectos a quienes sufrieren los daños y perjuicios como el Convenio de París o el de Viena.»

Véase GASMI, *L'action normative...*, p. 551. El texto aparece en publications de la OMI, ed. de 1972, OMI-429 B (E/F); BOE núm. 199, de 20 de agosto de 1975; QUENEUDEC, J.-P., *Conventions maritimes internationales*, Pedone, 1979, p. 724; véase asimismo, STROL, P., «La convention de 1971 relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime de matières nucléaires», *AFDI*, 1972 p. 753.

⁴¹ Por citar algunos casos, recordemos que la antigua URSS denunció la incompatibilidad entre el Pacto Atlántico y la Carta de las Naciones Unidas, la incompatibilidad del Tratado de Manila de 1954 para crear la OTASE con los acuerdos de Ginebra del 21 de julio de 1954, así como la incompatibilidad del Tratado de Roma, que creó la Comunidad Económica Europea y el GATT, que fue sometido al examen del GATT en virtud de una disposición especial (art. 24) por seis Estados de la Comunidad. BASTID, S., *Les traités dans la vie internationale. Conclusion et effets*, París 1985, p. 164 y ss.; para otros ejemplos, JENKS, «The conflict...», pp. 410-424.

⁴² Los orígenes de esta técnica los encontramos en los trabajos realizados en la *Conference on Tanker Safety and Pollution Prevention*, celebrada en 1977 bajo el patrocinio de la OMI para desarrollar un sistema armonizado de inspección de buques, con el objetivo de resolver las dificultades causadas por las diferencias existentes entre la inspección y los requerimientos de los certificados establecidos en la Convención internacional para la salvaguardia de la vida humana en el mar (SOLAS 1948, 1960, 1974), en la Convención internacional sobre las líneas de carga (LOAD LINES Convention, 1966) y la Convención internacional para la prevención de la contaminación producida por buques, modificado por el protocolo de 1978 (MARPOL 73/78). Véase BRUBAKER, *Marine pollution...*, pp. 122 y ss., *IMO NEWS*, n.º 1, 2000, p. 7.

⁴³ JENKS, «The conflict...», p. 426.

aplicar un sistema en sus relaciones con el Estado B en virtud del tratado X y otro sistema en sus relaciones con el Estado C en virtud del tratado Y»⁴⁴. Desde luego, esto significa que puede suscitarse un «conflicto entre los dos tratados, pero sin que se produzca necesariamente un conflicto de obligaciones para una de las dos partes»⁴⁵. A menudo, durante el *treaty-making-process* de varios tratados sobre la misma materia intervienen las mismas partes, pero desde diferentes puntos de vista, bien para que uno de los tratados se aplique a diferentes circunstancias, bien para establecer en uno de ellos obligaciones de mayor alcance que en el otro, pero congruentes entre sí.

Tampoco se produce un conflicto cuando se frustra el objeto de uno o varios de los tratados incompatibles. Esta divergencia se suscita, por ejemplo, cuando las partes en los instrumentos incompatibles prevén y son conscientes de que las ventajas establecidas en ciertas disposiciones de uno de ellos implican la violación de las disposiciones del otro, es decir el incumplimiento de las obligaciones que éste establece.

Tras haber reconocido esto, podemos comprobar que no siempre existe un auténtico conflicto entre tratados. Es cierto que se presenta una concurrencia al menos aparente⁴⁶ o una simple colisión, que es, en definitiva, no saber con certeza cuál de los instrumentos será el aplicable.

De acuerdo con la regla general establecida en el artículo 30.2 de la Convención de Viena de 1969, el tratado posterior prevalece y es el que deberá aplicarse. Este es el criterio expresado en la máxima *lex posterior derogat legi priori*, regla que ha sido completada por el artículo 59, a cuyo tenor, el tratado anterior expira si las partes concluyen un nuevo tratado y se infiere de éste o «consta de otro modo» que excluye la aplicación del tratado anterior⁴⁷.

Una vez que el artículo 30 explica las reglas que determinan las condiciones de aplicación del principio *posterior derogat priori*, su última línea

⁴⁴ FITZMAURICE, G., 3e Rapport A/C.N. 4/115, p. 83. De acuerdo con VIERDAG, el primer tipo de conflicto es aquel que tradicionalmente se produce entre el tratado A y B, y más tarde entre A y C. Nos encontramos aquí ante un conflicto entre derechos y obligaciones, cuyo tratamiento está relacionado con la validez del segundo tratado. Es un hecho notable que el Estado A tiene capacidad para concluir de buena fe el tratado posterior con el Estado C. VIERDAG, «The time...», p. 93; véase a este respecto McNAIR, *The law...*, pp. 220 y ss.; cfr. BINDER, «The dialectic...», p. 388.

⁴⁵ FITZMAURICE, 3e Rapport..., p. 83.

⁴⁶ REMIRO BROTONS, A., *Derecho Internacional Público. Derecho de los tratados*, Tecnos, Madrid, 1982, p. 324.

⁴⁷ Kelsen, H., «Théorie du droit international public», *RCADI*, 1953, III, n.º 84, p. 165; REUTER, *Introduction...*, p. 130; BASTID, *Les traités...*, p. 161; CZAPLINSKI y DANILENKO, «Conflicts...», p. 19.

adopta una precaución: precisa que no prejuzgará «ninguna cuestión de responsabilidad en que pueda incurrir un Estado por la celebración o aplicación de un tratado, cuyas disposiciones sean incompatibles con las obligaciones contraídas con respecto a otro Estado, en virtud de otro tratado». Según P. M. Dupuy, «se trata de la aplicación particular de una reserva general del derecho de los tratados en consideración de la responsabilidad que se encuentra regulada en la parte VI de la Convención, en el artículo 73. Este último indica, en efecto, “que las disposiciones de la presente convención no prejuzgarán ninguna cuestión que con relación a un tratado pueda surgir como consecuencia (...) de la responsabilidad internacional de un Estado”»⁴⁸.

Por otra parte, si uno de los tratados incompatibles posee carácter especial respecto del otro(s), se debe reconocer la primacía de la *lex specialis*, en aplicación de la máxima *specialia generalibus derogant*, a menos que ello no se desprenda tácita o expresamente del tratado posterior o que las partes contratantes hayan decidido la solución inversa⁴⁹.

Estas fórmulas no cubren comprensiblemente todas las facetas del problema⁵⁰, aclaración que se impone, pues el Derecho internacional moderno rechaza la regla de «terminación» del anterior en caso de conflicto entre varios tratados sucesivos, ya que no trata el problema desde el punto de vista de la validez de los tratados. Este es el resultado de la aplicación incondicional de las reglas, de acuerdo con la libertad que gozan las partes para establecer y desarrollar sus relaciones mutuas⁵¹.

Como hemos visto, el problema de los tratados concurrentes ha sido estudiado; no obstante, decir que el sistema está completo es un postulado más teórico que real⁵², pues todavía existen algunas cuestiones sin resolver. Ahora bien, determinadas reglas ya se han establecido; ellas ponen su atención en la

⁴⁸ DUPUY, P. M. «Droit des traités, codification et responsabilité internationale», *AFDI*, XLIII, §997, p. 10; ID., «On the “doctrine” of approximate application of treaties in international law», *Libri Amicorum Professor Ignaz Seidl-Hohenveldern in honour of his 80th birthday* (ed.), Gerhard Hafner, Gerhard Loibl y otros, Kluwer Law International, The Hague/London/Boston, 1998, pp. 97-102.

⁴⁹ NGUYEN QUOC DINH, DALLIER, P., et PELLET, A., *Droit International Public*, 6e édition, LGDJ, Paris, 1999, p. 268; MARIÑO MENÉNDEZ, F., *Derecho Internacional Público*, Parte general, 3.ª edición, Trotta, Madrid, 1999, p. 390.

⁵⁰ WALDOCK, H., *ILC*, 858th Meeting, *ILC Yearbook*, 1966, vol. I, Part. II, p. 3; VIERDAG, «The time...», p. 95; MUS, «Conflicts...», p. 213.

⁵¹ CZAPLINSKI y DANILENKO, «Conflicts...», p. 21.

⁵² CZAPLINSKI y DANILENKO, «Conflicts...», p. 12.

delimitación de las esferas de aplicación de los respectivos acuerdos y la elección del Derecho aplicable⁵³.

c) El caso de los tratados aplicables al movimiento transfronterizo de desechos peligrosos: el transporte por mar y el transporte de productos químicos

La cuestión del conflicto entre disposiciones contenidas en diferentes Convenios sobre medio ambiente inquietó particularmente a la OMI durante la elaboración del proyecto del Convenio de Basilea de 1989, en la que participó como invitada. En el mismo intervalo, el Comité de Protección del Medio Marino de la OMI recordó al grupo de trabajo *ad hoc*, encargado de elaborar el Convenio de Basilea, que éste no se debía aplicar al vertimiento de desechos provenientes de buques, puesto que ya estaba regulado por la Convención MARPOL 73/78⁵⁴. Ante esta situación, la Conferencia encargada de elaborar el Convenio de Basilea decidió invitar a la OMI y al PNUMA a cooperar en la revisión de las reglas, reglamentos y prácticas existentes, referentes al transporte de desechos por mar.

Durante el transcurso de su 29 sesión (12 al 16 de marzo de 1990), el CPMM de la OMI pidió al Subcomité de productos químicos, al Subcomité de contenedores y cargamentos y al Subcomité de transporte por mar de mercancías peligrosas la elaboración de un proyecto de disposiciones para armonizar las reglas y prescripciones de la OMI con el Convenio de Basilea en lo referente al transporte de desechos peligrosos por mar⁵⁵.

La búsqueda de la neutralización preventiva de los posibles conflictos se completó con el descubrimiento de algunas incompatibilidades entre el proyecto de protocolo del Convenio de Basilea para la regulación de las cuestiones de responsabilidad y el régimen de la indemnización por los daños causados por el movimiento transfronterizo de desechos. Numerosas delegaciones pidieron a la OMI que participara directamente en la elaboración del futuro protocolo del Convenio de Basilea para evitar cualquier solapamiento entre las disposiciones de éste y la normativa en vigor sobre responsabilidad, y la indemnización en el contexto del transporte por mar de sustancias nocivas o

⁵³ CZAPLINSKI y DANILENKO, «Conflicts...», p. 4.

⁵⁴ Doc. OMI-MEPC 27/16, de 2 de mayo de 1989, p. 12.

⁵⁵ Doc. OMI-MEPC 29/22, de 18 de abril de 1990, párrafo 4, punto 22.

potencialmente peligrosas (Convención HNS), que se encontraban en proceso de elaboración por el Comité Jurídico de la OMI⁵⁶.

Bajo esta misma perspectiva, la Cuarta Conferencia de los Estados Partes en el Convenio de Basilea (celebrada en febrero de 1998 en la ciudad de Kuching, Malasia) adoptó varias decisiones referentes a la cooperación de la Secretaría del Convenio de Basilea y las actividades emprendidas a nivel mundial, orientadas a la elaboración de instrumentos jurídicamente vinculantes, referentes al comercio de sustancias químicas peligrosas (decisión: IV/17). Más concretamente, la Conferencia pidió a la Secretaría del Convenio de Basilea que, de acuerdo con las orientaciones del Grupo de Trabajo Técnico, continuara cooperando con el PNUMA, la FAO, la CEPE de las Naciones Unidas, la OMI y la OMS en la elaboración de instrumentos jurídicamente vinculantes para evitar cualquier superposición entre ellos y el Convenio de Basilea⁵⁷.

B) TÉCNICAS CONVENCIONALES DE ARMONIZACIÓN Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS

Después de comprobar la innumerable cantidad de supuestos de concurrencia entre tratados ambientales, nosotros queremos insistir en los riesgos que las posibles incompatibilidades entre ellos van a producir. Por tanto, resulta útil analizar los métodos que permiten evitarlos. A este respecto, la jurisdicción interna de los Estados es una de las instancias interesadas en el asunto; sin embargo, no es el mejor lugar para prevenir los conflictos. La técnica más común se articula a través de las llamadas cláusulas de compatibilidad⁵⁸, que, o bien se incluyen de forma concreta en un tratado (por ejemplo, el art. 23 del «Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimientos de desechos y otras materias de 1972» con el cometido de reemplazar el Convenio de 1972, derogándolo formalmente entre las partes en los dos instrumentos)⁵⁹, o bien se insertan a través de una disposi-

⁵⁶ Doc. OMI-C/ES.16/8-Annexe de 31 julio de 1991, p. 47, párrafo 268.

⁵⁷ Documentación disponible en: www.unep.ch/basel

⁵⁸ Véanse, por ejemplo, los artículos 3, 8.3, 11, 16 y 22 del Protocolo de Basilea sobre responsabilidad e indemnización por daños resultantes de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, un instrumento sin duda prolijo en cláusulas de compatibilidad. Texto del Protocolo en Apéndice 2.

⁵⁹ Texto en www.imo.org. Para más ejemplos véase el artículo 48.1 del Acuerdo internacional sobre las maderas tropicales de 1994, con la misión de suceder al Acuerdo

ción general que prescribe la aplicación de cualquier otra disposición que no contradiga alguno de los objetivos del tratado, sea cual sea el Convenio donde esté incluida. Esta última técnica es especialmente interesante como muestra, por ejemplo, la Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares (1986), que expresamente dispone en su artículo 10, que «[l]a presente Convención no afectará a las obligaciones ni a los derechos recíprocos que tengan los Estados parte en virtud de los acuerdos internacionales existentes que se relacionen con los asuntos que abarca la presente Convención, o en virtud de acuerdos internacionales concertados en conformidad con el objeto y la finalidad de la presente Convención»⁶⁰.

Las reglas más eficaces son aquellas que establecen una mención del conflicto de normas y que se incluyen en los tratados internacionales para ser aplicados antes que sea necesario agotar todos los medios necesarios para solucionar los conflictos. Por el momento, ninguna regla general se impone con absoluta claridad. En cada caso particular se deberán tener en cuenta las circunstancias de hecho que han ejercido una influencia determinante sobre la solución⁶¹. Separar simplemente los artículos de varios tratados, concluidos

internacional de 1983 sobre la misma materia (art. 48.1: «El presente Convenio será considerado como la continuación del Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 1983.»). Véase *BOE* núm. 281, de 21 de noviembre de 1996; rectificaciones: *BOE* núm. 301, de 14 de diciembre de 1996; el artículo 6.a del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974, con la misión de reemplazar entre las partes contratantes la Convención sobre la misma materia de 1960 (art. 6.a): «El presente Convenio reemplaza y deja sin efecto entre los Gobiernos Contratantes la Convención internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, firmada en Londres el 17 de junio de 1960»). Véase *BOE* núms. 144 a 146, de 16 a 18 de junio de 1980) La primera versión de esta convención (SOLAS) se adoptó el 20 de enero de 1914, por una conferencia internacional celebrada en Londres, a propuesta del Gobierno británico con motivo del hundimiento del «Titanic» en abril de 1912. Desde entonces se adoptaron varias convenciones SOLAS: en 1929, 1948, 1960 y en 1964, las dos últimas (1960 y 1974) bajo el patrocinio de la OMI. La evolución rápida de la tecnología obligó a la Conferencia de la OMI a introducir varias enmiendas técnicas en la Convención SOLAS-1960, realizadas en 1966, 1967, 1968, 1971 y 1973. GASMI, *L'Action normative...*, p. 492.

⁶⁰ La Convención se firmó en Viena el 26 de septiembre de 1986, *BOE* núm. 261, de 31 de octubre de 1989. Véase además el artículo 9.2 del Acuerdo Europeo sobre Transporte internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR), hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957, que establece que «en caso de que se concluyera un acuerdo mundial para reglamentar el transporte de mercancías peligrosas, toda disposición del presente acuerdo que fuera contraria a alguna de las disposiciones de dicho acuerdo mundial sería automáticamente derogada y sustituida *ipso facto* por las disposiciones correspondientes del acuerdo mundial en lo tocante a las relaciones entre las partes del presente Acuerdo que se convirtieran en partes del Acuerdo Mundial, y a partir de la entrada en vigor de éste». *BOE* núm. 163, de 9 de julio de 1973.

⁶¹ LECA, *Les techniques...*, p. 163.

tras arduas negociaciones, y reunirlos en un solo documento no es la solución más adecuada. Ante esta actitud pragmática, la tendencia actual está claramente orientada hacia el fortalecimiento de las técnicas de armonización, impulsadas y coordinadas por las secretarías de los convenios.

Una medida importante, como indicó Klaus Töpfer, director ejecutivo del PNUMA, es promover el intercambio de información detallada entre las secretarías que administran los convenios⁶². Esta iniciativa, aunque limitada, se ha visto privilegiada por el PNUMA y se inscribe en la gestión del Comité Administrativo de Coordinación de la ONU y sus agencias especializadas, que trabajan adoptando las precauciones necesarias durante la elaboración de los proyectos de los convenios, para evitar los conflictos potenciales y la duplicidad de trabajos entre convenios que regulan la misma materia o materias conexas, cuya negociación se realiza en foros distintos⁶³.

a) Las técnicas de armonización

No es extraño que para eliminar las causas de conflictos entre tratados ambientales, las partes decidan utilizar métodos o técnicas de armonización. Esta acción es particularmente efectiva si se realiza antes de la entrada en vigor de los tratados referidos. En este sentido, es preciso acudir a los trabajos realizados por las Secretarías de los Convenios y de las organizaciones internacionales.

1) *Anteriores a la entrada en vigor del tratado*

Los diferentes medios que existen para evitar los conflictos entre tratados ambientales no tienen la misma eficacia. Muchas veces las cláusulas de

⁶² Esta medida es el resultado de un estudio de viabilidad sobre la armonización de la gestión de la información entre los tratados encargados de regular la diversidad biológica de 1998, realizado por el Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación (WCMC) y auspiciado por cinco secretarías, encargadas de administrar los tratados y el PNMA. Disponible en www.wcmc.org.uk/convert/treaties.htm.

⁶³ The Administrative Committee on Co-ordination, informes disponibles en: <http://acc-unsystem.org/-about/>; WOLF, F., «Les activités normatives et quasi normatives (The normative and quasi-normative activities)», *Manuel sur les organisations internationales (A Handbook on international organizations)* (ed.); DUPUY, R. J., Académie de Droit International de la Haye (Hague Academy of International Law), Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/Lancaster, 1988, pp. 303; UMBRIGHT, V., «Joint activities of international organizations», *Manuel sur les organisations...*, p. 377; QUÉNEUDEC, J. P., *La contaminación del mar ante el derecho internacional*, Cuadernos de la Cátedra «J. B. Scott», traducción del francés por A. Herrero de la Fuente, Universidad de Valladolid, 1971, pp. 78-79; JENKS, «The conflict...», p. 429.

compatibilidad que operan *ex post facto* se agotan en una simple declaración general de compatibilidad: «Las disposiciones de la presente convención», dice, por ejemplo, el artículo XII, párr. 2, de la Convención sobre la conservación de especies migratorias, pertenecientes a la fauna salvaje (Bonn, 1979), «no afectan de ningún modo a los derechos y obligaciones procedentes de todo tratado, convención o acuerdo existente» de las partes contratantes.

Como el propio término indica, los métodos preventivos tienen como finalidad evitar que se produzca un problema de incompatibilidad entre tratados. Dicho en otros términos, éstos pretenden impedir que los Estados concluyan sucesivamente tratados contradictorios. Si los Estados se abstienen de realizar operaciones de armonización normativa, deberán entonces vigilar atentamente para evitar los conflictos de tratados en su orden interno y, desde luego, la posible responsabilidad internacional. Esta actitud pragmática no es ajena a otros ámbitos del Derecho Internacional. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que «los Estados partes están también obligados por otros tratados bilaterales, tales como los tratados de extradición. Un Estado parte en el Pacto (de Derechos Civiles y Políticos) debe velar por el cumplimiento de todas las otras obligaciones que haya asumido, de manera que sean compatibles con las obligaciones asumidas en virtud del Pacto»⁶⁴. De esta forma el juez nacional también podrá disponer de herramientas suficientes para reducir el riesgo de conflicto⁶⁵.

Es evidente que la armonización preventiva es operativa durante los trabajos de redacción de un tratado y exige, naturalmente, la instauración de una verdadera coordinación entre las diversas organizaciones internacionales y las secretarías de las convenciones para que los redactores de los tratados puedan penetrar en el ámbito de otros instrumentos internacionales ya existentes o en período de elaboración, de tal forma que se pueda salvar cualquier contraposición entre los contenidos respectivos de los textos internacionales sobre la misma materia. La función de las organizaciones internacionales, como ha dicho Virally, «es favorecer y promover la armonización y la coordinación de las políticas y de los comportamientos de los Estados miembros hasta, eventualmente (y hoy día en forma excepcional), la puesta en marcha de acciones

⁶⁴ N.º 469/1991, *Charles Chitat Ng c./ Canada*, 5 enero 1993. Al respecto, véase DHOMMEAUX, J., «Jurisprudence du Comité des droits de l'homme des Nations Unies (novembre 1993-juillet 1996)», *AFDI*, XLII, 1996, p. 681.

⁶⁵ SCIOTTI, *La concurrence...*, p. 44.

colectivas. Si ellas mismas pueden llevar a cabo diversas operaciones con sus propios medios, siempre es en cooperación con los gobiernos interesados»⁶⁶.

Dentro de la familia de la ONU, encontramos el trabajo ejemplar de armonización legislativa, realizado por la OIT en la elaboración de la mayor parte de los tratados sobre derechos humanos. Por ejemplo, representantes de esta organización participaron en reuniones del Consejo de Europa y apuntalaron con sus consejos y opiniones, durante la etapa de elaboración, las bases de la Carta Social Europea⁶⁷. Igualmente, en 1982/83 la OMS colaboró con el programa de la CEE para la armonización de aspectos técnicos de la reglamentación sobre construcción de viviendas, la seguridad de las rutas y la construcción de vehículos automotores; sobre la calidad del agua, la contaminación del aire; etc.⁶⁸. Luego, durante los preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo, expertos de la FAO fueron consultados en lo concerniente a la eliminación de pesticidas⁶⁹.

En verdad, la cooperación entre las instituciones y órganos de protección del medio ambiente para prevenir conflictos es un fenómeno habitual; sin embargo, aún hay que mejorar esta cooperación y el resultado del trabajo preventivo. El simple hecho de que una organización internacional, uno de sus órganos o una institución internacional esté informada de lo que pasa en otra no es suficiente para evitar la posterior antinomia entre los textos de dos o más instrumentos internacionales. Los Estados se ven obligados, por consiguiente, a vigilar las contradicciones posibles y a informar, cuando se lo soliciten, a una

⁶⁶ VIRALLY, M., *Le droit international en devenir. Essais écrits au fil des ans*, Publications de l'Institut Universitaire de Hautes Études Internationales - Genève, Presses Universitaires de France, 1990, pp. 230-1.

⁶⁷ WOLFF, F., «L'interdépendance des conventions internationales du travail», *RCADI*, 1967, t. II, vol. 121, p. 196; UMBRICH, «Joint activities...», pp. 362-376; véanse igualmente los trabajos de la OIT y de la OCDE en la armonización de los sistemas de clasificación y etiquetado para la utilización de sustancias químicas peligrosas en el trabajo. Informe del Comité préparatoire de la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, deuxième session, Genève, 18 mars-5 avril 1991, groupe de travail II, Point 3 b), sobre Gestion écologiquement rationnelle des déchets, surtout des déchets dangereux et des substances chimiques toxiques et prevention du trafic international illicite des produits et des déchets toxiques et dangereux: gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques toxiques, A/CONF.151/PC/35, 31 janvier 1991, p. 7.

⁶⁸ Véase Commission Économique pour l'Europe, Coopération avec d'autres organisations internationales, E/ECE/1051, 21 février 1983, p. 6.

⁶⁹ Comité Préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, première session, Nairobi, 6-31, août 1990, A/CONF.151/PC/6, 27 juin 1990, p. 41. Por otra parte, la Comisión de la OMS sobre la salud y el medioambiente debía colaborar en el examen de los riesgos creados a la salud por los desechos peligrosos y los productos químicos tóxicos, *ibid.*, p. 42.

base bilateral o multilateral con miras a la armonización de las «normas prácticas técnicas» para el manejo adecuado de los desechos peligrosos y otros desechos⁷⁰. Por otra parte, existe la posibilidad de hacer una reserva en el momento de ratificar el nuevo tratado siempre que éste lo permita.

2) *Posteriores a la entrada en vigor del tratado*

Varios instrumentos convencionales internacionales, referentes al transporte por mar de desechos peligrosos, adoptados bajo los auspicios de la OMI, fueron declarados incompatibles con el Convenio de Basilea de 1989 por el Secretario de dicha organización en 1991. Entre estos instrumentos destacan algunos códigos internacionales, y especialmente la Convención sobre la prevención de la contaminación de los mares resultante del vertimiento de desechos y otras materias (Convención de Londres sobre vertimiento, 1972)⁷¹.

En efecto, aunque la Convención de Londres de 1972 no prevé ninguna disposición sobre movimiento transfronterizo de desechos u otras materias, la resolución LDC.29(10) sobre exportación de desechos para ser evacuados en el mar invita a las partes contratantes a que exporten los desechos destinados a ser vertidos al mar⁷². Para evitar cualquier incompatibilidad o doble empleo entre los convenios, la Asamblea de la OMI encargó al Comité de protección del medio marino y al Comité de la seguridad marítima la realización de un examen de las reglas y prácticas, encargadas de regular el transporte de desechos peligrosos por mar⁷³. Los dos comités, en colaboración con la Secretaría interina del Convenio de Basilea, la Secretaría interina y la División de transportes de la CEE y el PNUE, recomendaron la armonización de todas las normas contrapuestas y la adopción de medidas suplementarias para ayudar a los Estados a cumplir con sus obligaciones al respecto⁷⁴. Estas propuestas se hicie-

⁷⁰ Artículos 10.2.a), 13.3.e), en relación con el 11.2. del Convenio de Basilea.

⁷¹ Entre los instrumentos incompatibles se encontraban además: a) la Convención Internacional de 1973 para la prevención de la contaminación por buques, que ha sido modificada; b) La Convención internacional de 1974 para la salvaguardia de la vida humana en el mar; y además dos instrumentos de naturaleza recomendatoria: a) el Código Internacional de mercancías peligrosas, y b) la Colección de reglas prácticas para la seguridad del transporte de cargas sólidas a granel. Véase el Informe del Secretario General (Asamblea General, cuarenta y seis sesión) sobre el tráfico, eliminación, control y movimiento transfronterizo de productos y desechos tóxicos y peligrosos, A/46/21A, E/1991/77, 4 de junio de 1991, p. 8, párrafo 27.

⁷² *Ibid.*, A/46/21A, E/1991/77, p. 10, párrafo 34.b); cfr. cap. IV, B, a), *infra*.

⁷³ Resolución A.676(16), Décimosexta sesión, octubre de 1989; véase también la Resolución 2, adoptada el 21 de marzo de 1989 por la Conferencia de Plenipotenciarios que adoptó el Convenio de Basilea, *ILM*, vol. XXVIII, núm. 3, 1989, p. 656.

⁷⁴ *Ibid.*, A/46/21A, E/1991/77, p. 10, párrafo 34.a)

ron extensivas a los instrumentos recomendatorios (específicamente al Código IMDG), pues, a pesar de que éstos no poseen carácter obligatorio, influyen en la práctica de los Estados de la OMI y a su vez otros Estados miembros los incorporan, en todo o en parte, a sus legislaciones internas. Para compatibilizarlos con el Convenio de Basilea se propuso su modificación ⁷⁵.

Simultáneamente, la decimotercera reunión consultiva de las partes contratantes en el Convenio de Londres, con ayuda de un grupo de expertos jurídicos sobre vertimiento, recomendó también la elaboración de normas compatibles con las disposiciones del Convenio de Basilea en lo referente a la exportación de desechos destinados a ser evacuados en el mar ⁷⁶. Esta medida se haría operativa durante la próxima reunión consultiva (noviembre de 1991), recomendando a las partes contratantes la inclusión de las normas que fueran convenidas en una modificación o en un anexo del Convenio de Londres sobre vertimiento ⁷⁷.

El asunto fue tenso, ya que en esa situación jurídica y política, el grupo de expertos se vio incapaz de superar las discrepancias entre algunas potencias industrializadas, como Estados Unidos y Japón, y algunas instituciones gubernamentales (PNUMA) y no gubernamentales (*Greenpeace international*). Ante la falta de acuerdo, el grupo de expertos jurídicos del Convenio de Londres adoptó una resolución sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos para su eliminación al mar ⁷⁸, apartándose de la idea de armonización, inicialmente planteada, y además consideró infrecuente el solapamiento entre los convenios, indicando incluso que tendería a disminuir en el futuro.

La significación de la resolución reside en considerar a la Convención de Londres de 1972, incluidos sus anexos y resoluciones, como el régimen mundial de gestión de desechos en lo relativo a su vertimiento al mar, lo que significa que la aplicación prevalente de la Convención de Londres estaría garantizada, aunque se trate de un régimen menos exigente que el establecido en el Convenio de Basilea ⁷⁹. Esta es una conclusión sorprendente si recordamos

⁷⁵ *Ibid.*, A/46/21A, E/1991/77, p. 9, párrafo 30.

⁷⁶ El grupo especial de expertos jurídicos y la decimotercera conferencia de los Estados partes en la Convención de Londres se reunieron en Londres del 22 de octubre al 2 de noviembre de 1992. *Ibid.*, A/46/21A, E/1991/77, p. 10, párrafo 34.

⁷⁷ *Ibid.*, A/46/21A, E/1991/77, p. 10, párrafo 35.

⁷⁸ Resolución LDC.45(14).

⁷⁹ Además, según ha explicado C. FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE, el Convenio de Londres «permite a los Estados partes la adopción de un régimen más estricto que el establecido con carácter general por el propio Convenio [art. IV.3]. Sin embargo, las enmiendas realizadas hasta la

que, de acuerdo con el Convenio de Viena sobre Derecho de los tratados, el tratado posterior deroga al anterior⁸⁰. En realidad, como afirma J. Juste Ruiz, «la armonización entre los dos Convenios se operará progresivamente mediante la limitación de los vertimientos autorizados por el Convenio de Londres, a través del desarrollo de las directrices técnicas para el manejo ambientalmente racional de los desechos objeto del Convenio de Basilea y mediante el progreso de la cooperación mutua»⁸¹. A primera vista, la ironía es tentadora. Los desacuerdos que puedan plantearse en esta materia se relacionan obligatoriamente con el ejercicio de competencias del Estado en el interior de su territorio o fuera de éste. A pesar de ello, la práctica muestra un ejemplo de coexistencia honrosa entre el Convenio de Basilea y las disposiciones aprobadas en ese ámbito material por la OCDE. Recientemente, el *Working Group on Waste Management Policy* (WGWMP) de dicha organización examinó los diferentes niveles de control previstos por el Convenio de Basilea y por las normas adoptadas por la OCDE para regular el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos. El grupo de trabajo simplemente concluyó que las normas duplicadas debían ser eliminadas⁸². Con claro interés en los motivos que animan esta medida, el Comité puso de manifiesto que la OCDE pretende ampliar la armonización de

fecha no parecen evidenciar una voluntad restrictiva de los Estados Partes. Prueba de ello es la permisión, gracias a la enmienda de 12 de octubre de 1978, de la eliminación de desechos u otras materias incluidas en los apartados 1 a 5 del Anexo I mediante su incineración en el mar, aunque se halle sujeta a la obtención previa de permisos especiales». FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANI, C., *La protección del medio ambiente en el derecho internacional, Derecho Comunitario Europeo y Derecho español*, Vitoria-Gasteiz, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 1991, p. 158.

⁸⁰ Cfr. No obstante, el Grupo de expertos jurídicos sobre vertimiento y la decimotercera reunión de las partes contratantes en el Convenio de Londres pusieron en duda la aplicabilidad del artículo 30 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (aplicación de tratados sucesivos sobre la misma materia) a las relaciones entre el Convenio de Basilea y la Convención de Londres de 1972. *Ibid.*, A/46/21A, E/1991/77, p. 10, párrafo 34.c).

⁸¹ JUSTE RUIZ, «La regulación...», p. 67; en este mismo sentido, CUBEL SANCHEZ, P., «La gestión racional de los desechos en el ámbito internacional», *Derecho internacional del medio ambiente*, José Juste Ruiz, McGraw-Hill, Madrid, 1998, p. 317; cfr. KUMMER, *International...*, p. 184 y ss.

⁸² Para ello propuso la adopción de tres medidas: a) reemplazar la listas (verde, ámbar y roja) de la Organización por los Anexos VIII y IX de la Convención de Basilea; b) retener los procesos de control (verde y ámbar) previstos en los anexos VIII y IX de la Convención de Basilea, y c) eliminar el actual mecanismo revisado de la OCDE, pero reteniendo la posibilidad de aplicar los diferentes niveles de control con el sistema adoptado por la OCDE según los criterios previstos en los anexos VIII y IX de la Convención de Basilea. Open-ended *Ad Hoc* Committee for the Implementation of the Basel Convention, Fourth Session, Geneva, 21-25 June 1999, UNEP/CHW/C.1/4/1, párrs. 1 y 2.

su régimen de control con el de otros sistemas internacionales hasta lograr una armonización global⁸³.

Este resultado corrobora las apreciaciones de J. Frowein cuando afirma que «la relación de fuerzas entre una convención regional y un tratado universal no es tan tensa como entre dos convenciones de vocación regional»⁸⁴.

b) El «rol» de la cooperación internacional en la armonización: pluralidad de órganos e instituciones

Durante mucho tiempo el movimiento transfronterizo de desechos ha estado al margen de las acciones ambientales de muchas organizaciones internacionales; en la actualidad, sin embargo, ocupa un lugar prioritario en la lista de objetivos de muchas de ellas, tales como el Programa de Naciones Unidas para el Medio ambiente (PNUMA); de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE); de la Organización de la Unidad Africana (OUA); de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA); de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO); de la Organización de Estados Americanos (OEA); de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas⁸⁵; de la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como de otras organizaciones, agencias especializadas y organizaciones no gubernamentales⁸⁶. Muchas de ellas han cooperado en la preparación de las

⁸³ *Ibid.*, párrafo 3.

⁸⁴ FROWEIN, J. y CANÇADO TRINDADE, A., *Analyse des répercussions juridiques pour les Etats qui ont l'intention de ratifier à la fois la Convention européenne des droits de l'homme et ses protocoles et la Convention des droits de l'homme de la Communauté des Etats indépendants*, document SG/INF(95) 14, p. 6, párrafo 14.

⁸⁵ FATMA-ZOHRA KSENTINI, «Efectos nocivos para el goce de los derechos humanos del traslado y vertimientos ilícitos de productos y desechos tóxicos y peligrosos», *Informe de la Relatora Especial*, Doc. E/CN.4/1999/46 de 20 de enero de 1990.

⁸⁶ Para una lista detallada, véanse los Documentos UNEP/CHW.2/30, 25 de marzo de 1994, pp. 4, 17, 20, 32 y 33; UNEP/CHW.3/34, 21 de septiembre de 1995, pp. 3-5, 10 y ss.; UNEP/CHW.4/35, 18 de marzo de 1998, pp. 13, 50-52; *The Basel Convention, A global solution for the controlling hazardous wastes*, UN, New York and Genveva, 1997, pp. 27-28; además, SCOTT YOUNG, S., *International law of environmental protection*, published bay Cahners Publishing Company, United States, 1995, pp. 92-93, 241-247; JUSTE RUIZ, J. «Derecho Internacional Público y medio ambiente», *Problemas internacionales del medio ambiente*, Universidad de Barcelona, 1984, pp. 25, 26 y 35; ID., «La evolución...», p. 400; NANDA, P., «Environment», *United Nations legal order* (ed.) Oscar Schachter & Christopher C. Joyner, American Society of international Law, Grotius Publications, Cambridge University Press, 1995, vol II, pp. 646-647; KISS, A., «L'harmonisation de l'action communautaire avec l'action d'organisations internationales plus vastes», *La protection de l'environnement par les communautés Européennes*, sous la direction de

guías técnicas para el manejo ambientalmente racional de los desechos, en la identificación y caracterización y, lo que es más importante, en la armonización de las disposiciones del Convenio de Basilea con otros instrumentos internacionales.

Si no se satisfacía esta condición, el Convenio de Basilea corría el riesgo de ser un instrumento más, en medio de una concurrencia normativa que proseguiría continuamente. La unificación o, al menos, la armonización de las reglas jurídicas constituye uno de los objetivos permanentes del derecho internacional del medio ambiente por la internacionalización de los problemas ambientales y, sobre todo, como ya indicó A. Kiss, para unificar el tratamiento legal en los casos de indemnización de las víctimas de la contaminación transfronteriza y para armonizar las legislaciones nacionales con el fin de impedir cambios desmedidos en los costes de producción y el ulterior falseamiento de la competencia en el comercio internacional y así evitar el fomento de la exportación de la contaminación⁸⁷.

Cuando los Estados se encuentran en una situación jurídica en la cual dos tratados ambientales en los que ambos son parte resultan incompatibles, no es suficiente realizar un análisis comparativo entre las disposiciones concernidas para comprobar si existe entre ellas una concurrencia o, en el peor de los casos, un conflicto que resolver. En realidad, la problemática del conflicto entre dos instrumentos internacionales ambientales es más compleja. Como ha señalado S. Maljean-Dubois, «el fenómeno de *treaty congestion* ha entrañado, en cierta medida, una *institution congestion*»⁸⁸. La solución pasa inevitablemente por tener en cuenta las nuevas funciones de las secretarías de las convenciones internacionales, entre las que destaca la de asegurar la coordinación necesaria con las secretarías de otras organizaciones internacionales competentes⁸⁹.

Jean Charpentier, Éditions A. Pedone-Paris 1988, pp. 155-159; ID., *Droit international de l'environnement*, Pedone, 1989, pp. 56-59, 307-336; BOER, B., «Le droit international de l'environnement dans les pays en développement du pacifique sud», *Annuaire de droit de la mer*, 1997, vol. II, pp. 243-247; BEER-GABEL, J., «Activités des organisations internationales», *Annuaire de Droit de la Mer*, 1997, vol. II, pp. 452-468.

⁸⁷ KISS, A., «L'état du droit de l'environnement en 1981: problèmes et solutions», *JDI*, 1981, p. 509.

⁸⁸ MALJEAN-DUBOIS, «Le foisonnement...», *L'effectivité...*, C. Imperiali éd., p. 56.

⁸⁹ DOUMBÉ-BILLÉ, S., «Les secrétariats des conventions internationales», *L'effectivité...*, C. Imperiali éd., p. 72.

Esta función no se contempló en las primeras convenciones ambientales encargadas de proteger la naturaleza⁹⁰. Tras haber reconocido esta carencia, la debilidad de los compromisos contenidos en los convenios debía ser equilibrada, como dice Kiss, «con la fuerza de las instituciones creadas»⁹¹.

Así, el PNUMA ha impulsado la creación de un mecanismo de encuentros regulares de secretarías de convenciones. En sus inicios estaba abierto únicamente a las secretarías administradas por el PNUMA. Poco a poco se fueron añadiendo las secretarías de la UNESCO⁹², OMI, FAO y UICN. La agenda de trabajo de las reuniones incluía el intercambio de información y experiencias, la armonización de reglas de procedimiento de los distintos órganos, la organización conjunta de reuniones de estos órganos para reducir los costes y favorecer la participación de países en vías de desarrollo, la armonización de la aproximación de las posturas en los mecanismos financieros y las modalidades de transferencia de tecnología.

Con más frecuencia, las secretarías están obligadas a realizar la tarea de cooperación-coordinación, tal como lo demuestra la Convención de Canberra sobre la conservación de la fauna y la flora marina de la Antártida (art. 23.3)⁹³; el acuerdo sobre la conservación de las aves acuáticas migratorias de África-Euroasia (art. 9)⁹⁴; la Convención de Ramsar sobre humedales de importancia internacional⁹⁵, y el programa 1994-1996 de la oficina de la Convención de

⁹⁰ En efecto, no se contempló en la Convención de Ramsar sobre las zonas húmedas (art. 8.2), ni en la Convención de París sobre el patrimonio cultural y natural (no obstante, el art. 14.1 se limita a instituir un secretariado), ni tampoco en la Convención de Washington relativo al comercio internacional de especies amenazadas (art. XII.2). Sin embargo, el secretariado y la función de coordinación que realiza aparecen regulados con la adopción de la Convención de Río de 1992 sobre la conservación de la diversidad biológica (art. 24.1); la Convención de Bonn sobre especies migratorias [art.IX.4.b)] y la Convención de Viena sobre protección de la capa de ozono [art. 7.1.e)], la segunda Convención de Río sobre el cambio climático [art. 8.2.e)], en la Convención sobre la desertificación [art. 23.2.d)] y otros más.

⁹¹ KISS, A., «La acción internacional de la Unión Europea», *Derecho medioambiental de la Unión Europea*, (ed.) Luciano Parejo, McGraw-Hill, p. 214.

⁹² Véase por ejemplo la Convención de Ramsar relativa a las zonas húmedas de importancia internacional, particularmente como hábitat de aves acuáticas; la Convención de París concerniente a la protección del patrimonio mundial, cultural y natural; la Convención de Berna relativa a la conservación de la vida salvaje y del medio natural de Europa; etc.

⁹³ BOE de 25 de mayo de 1985.

⁹⁴ Agreement on the Conservation of African-Euroasian Migratory Waterbirds (AEWA), texto disponible en: www.wcmc.org.uk/cms/

⁹⁵ Convenio de Ramsar de 2 de febrero de 1971 sobre humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas (BOE de 20 de agosto de 1982), enmendado mediante el Protocolo de 3 de diciembre de 1982 (BOE de 14 de julio de 1987).

Ramsar, que contempla una serie de actividades prioritarias de cooperación ⁹⁶; la Secretaría de la Convención sobre la Diversidad Biológica, que ha emprendido un estudio sobre la sinergia que consiste en examinar la relación entre los objetivos, las disposiciones y los programas de esa convención ⁹⁷; el Convenio sobre el comercio internacional de especies de fauna y de flora silvestres amenazadas de extinción ⁹⁸; la Convención para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural ⁹⁹; la Convención contra la desertización ¹⁰⁰; la Convención sobre el cambio climático ¹⁰¹; la Convención sobre derecho del mar de 1982 ¹⁰², y la Convención para la conservación de las especies migratorias de animales salvajes ¹⁰³.

Una segunda función ligada a la anterior se refiere al apoyo específico que las secretarías pueden aportar, previa petición a los países en vías de

Respecto a la regulación de los humedales españoles, véanse *BB OO* de 26 de marzo de 1993, 15 de noviembre de 1994 y 13 de diciembre de 1995.

⁹⁶ El programa contempla la celebración de reuniones anuales con varios secretariados, tales como el encargado de conservar la diversidad biológica, las especies migratorias, el patrimonio mundial, el cambio climático y Berna. Se incluyen también actividades de cooperación con organizaciones internacionales (UNESCO, PNUE, FAO, CEE, OCDE y el Consejo de Europa) y la celebración de consultas regulares con las principales organizaciones partes en los Convenios (UICN, BIROE, WWF, Bird Life International, etc). *Bulletin Ramsar*, n.º 3, abril de 1989, p. 1. Sobre la finalidad de la consulta, dentro de un marco de análisis general del problema, véase FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANI, *La protección...*, pp. 66-72.

⁹⁷ Convención sobre la Diversidad Biológica, adoptada en Nairobi el 22 de mayo de 1992 y abierta a la firma en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992 durante la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo (*BOE* del 1 de febrero de 1994).

⁹⁸ Convenio CITES, hecho en Washington el 3 de marzo de 1973 (*BB OO* de 30 de junio de 1986 y 24 de noviembre de 1987); para la sustitución y modificación de los Apéndices, véase *BOE* de 18 de enero de 1991 y *BOE* de 13 de abril de 1998.

⁹⁹ La convención se adoptó en París el 16 de noviembre de 1972 (*BOE* de 1 de julio de 1982).

¹⁰⁰ Convención de las Naciones Unidas para combatir la desertización (*BOE* de 11 de febrero de 1997).

¹⁰¹ Convención sobre el cambio climático adoptada por la Conferencia de Río de Janeiro el 5 de junio de 1992 (*BOE* de 1 de febrero de 1994).

¹⁰² *BOE* de 14 de febrero de 1997.

¹⁰³ El Convenio se adoptó en Bonn el 23 de junio de 1979 (*BOE* de octubre de 1985, última enmienda en *BOE* de 17 de mayo de 1995, anexos en *BOE* de 7 de enero de 1996). En esta dirección adquieren interés las iniciativas del Grupo intergubernamental sobre los bosques que en aplicación de su programa de trabajo ha elaborado un informe en el que describe, entre otras cosas, los instrumentos y las instituciones existentes, su función y su mandato en relación con las uniones institucionales, las lagunas existentes, los ámbitos en los que una intervención más intensa es necesaria y los ámbitos en los que existe una repetida utilización. Véase *Commission du développement durable, Groupe intergouvernemental spécial sur les forêts, dixième session, Organisations internationales et institutions et instruments multilatéraux, y compris les mécanismes juridiques appropriés*, doc. E/CN.17/IPF/1996/17/12, 21/2/1996, p. 2.

desarrollo y/o a los que tienen la intención de aplicar la convención para favorecer el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Se trata de una función de asistencia técnica que el protocolo de Montreal sobre las sustancias que empobrecen la capa de ozono ha contribuido a difundir.

Se les puede dotar de funciones nuevas tendentes a reforzar no sólo el control, sino también aquellas medidas necesarias para obtener el respeto de las disposiciones convencionales por todas las partes. En suma, van a desarrollar un papel importante tanto en prevención como en la corrección de conflictos entre tratados ambientales. Esto es ya evidente en las conclusiones y recomendaciones del *Trade and Environment Policy Committees de la OCDE*¹⁰⁴, de la Secretaría General de de UNCTAD¹⁰⁵ y de la Secretaría del Convenio de Basilea como hemos visto más arriba.

C) LAS TÉCNICAS GENERALES DE ARMONIZACIÓN ESTABLECIDAS POR LA CONVENCIÓN DE BASELEA

La singularidad de la materia del medio ambiente no impide la utilización de técnicas de armonización, perfectamente aplicable a otras materias del Derecho internacional. En efecto, como ha escrito el Prof. Virally, «[l]a armonización siempre puede ser buscada por los Estados sobre una base bilateral o por medio de encuentros *ad hoc*. Hasta puede ser objeto de compromisos convencionales que obligan a consultas previas antes de tomar ciertas decisiones»¹⁰⁶. Sin embargo, emerge el uso generalizado de la cláusula de «buena armonización» internacional, que en sus diferentes formas aparece en los Convenios ambientales y, concretamente, en los instrumentos dedicados a regular el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos. Aunque parece una solución ideal, la cláusula de «buena armonización» entraña serias dificultades operativas en el marco del movimiento transfronterizo de desechos peligrosos¹⁰⁷.

¹⁰⁴ Report on Trade and Environment to OECD Council at Ministerial Level, OCDE/GD(95) 63, 1995, p. 6.

¹⁰⁵ Trade, Environment and Sustainable Development, UN Doc. E/CN.17/1996/8, párrafo 13.

¹⁰⁶ VIRALLY, *Le droit...*, p. 276.

¹⁰⁷ La insuficiencia en la información suministrada por las partes, la ausencia total de ésta o su presentación tardía, junto a la falta de especialización del personal nacional encargado de realizarla, hacen imposible adquirir información fiable acerca de los datos exigidos a cada parte en el artículo 13. Por otra parte, la Secretaría del Convenio de Basilea está limitada en el cumplimiento de sus funciones en razón de falta de personal y de recursos financieros. Por último, el grado de complejidad técnica del sistema de Basilea dificulta que los mecanismos de control previstos

La Convención de Basilea no regula en solitario el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos. A su alrededor, un nutrido grupo de acuerdos bilaterales, multilaterales y regionales, resultantes de diferentes procedimientos de negociación, crean un entramado jurídico en el que es inevitable su concurrencia, al menos aparente, en la regulación de una misma relación o situación, dando lugar a problemas ante los que se ha avivado desde hace tiempo el interés de los Estados, de los órganos encargados de vigilar su aplicación y de la doctrina. Ahora bien, la multiplicidad de situaciones de concurrencia o conflicto que ofrece la práctica ha permitido advertir, desde hace mucho tiempo, la importancia de la cuestión; tal vez por eso son tratadas de forma esquemática y reiterada en la Convención de Basilea. Hay, con todo, que distinguir las distintas perspectivas desde las que se contemplan esos problemas y la variedad de cláusulas reguladoras de la concurrencia que dicha convención ofrece, entre las que encontramos las siguientes:

a) **El principio favorable a la vigencia de la norma más exigente**

En el ámbito de las fórmulas que han de regir las situaciones de concurrencia, el Convenio de Basilea también contempla una cláusula que permite deducir la aplicación preferente del tratado posterior, siempre que éste contenga disposiciones adicionales que tengan como finalidad proteger mejor el medio ambiente. En efecto, se trata de una modalidad de la conocida como regla de la eficacia máxima, a cuyo tenor, cuando exista concurrencia de normas, ha de optarse por aquella que permita el más alto grado de realización de los objetivos de los tratados sucesivos. El artículo 4, párrafo 11, del Convenio de Basilea afirma, inequívocamente, que «nada de lo dispuesto en el presente Convenio impedirá que una parte imponga *exigencias adicionales* que sean conforme a las disposiciones del presente Convenio y estén de acuerdo con las normas del derecho internacional a fin de proteger mejor la salud humana y el medio ambiente». En conexión con la cláusula anterior, puede ser de mucha

actualmente en el Convenio aseguren un seguimiento efectivo del respeto al Convenio. Véase Implementation of Decision II/10 of the second meeting of the conference of the parties on bilateral, multilateral and regional agreements or arrangements, Report of the Secretariat, UNEP/CHW/C.1/2/3, 30 september 1994; Evaluation of the effectiveness of the Basel Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal», Doc. UNEP/CHW.3/Info.7, Genève, juin 1995; Informe de los acuerdos o arreglos bilaterales, multilaterales y regionales concertados en el marco del artículo 11 del Convenio de Basilea, UNEP/CHW.5/16, 9 de agosto de 1999; PÉREZ MARTÍN, M. T., «Les mécanismes de contrôle de la mise en oeuvre et du respect de la Convention de Bâle», *EPL*, 27/3 1997, p. 209.

utilidad, cuando resulte difícil determinar la norma predominante, acudir a la parte final del párrafo 2 del citado artículo 11, según el cual las disposiciones del Convenio de Basilea «no afectarán a los movimientos transfronterizos que se efectúen en cumplimiento de tales acuerdos, siempre que estos acuerdos sean compatibles con la gestión ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros desechos que estipula el presente convenio».

Por otra parte, la cláusula de compatibilidad establecida en el artículo 4, párrafo 12, aunque siendo genérica, contiene las directrices para la aplicación de la disposición más exigente en la consecución de los objetivos de la Convención o simplemente la aplicación del régimen más especial, aludiendo a los derechos de soberanía y jurisdicción que los Estados ejercen sobre el mar territorial, la ZEE y la plataforma continental, de conformidad con el derecho internacional, así como el ejercicio por parte de los buques y aeronaves de los «derechos y las libertades de navegación previstos en el derecho internacional y reflejados en los instrumentos internacionales pertinentes». Aunque la cláusula se agota en una mera declaración de compatibilidad general, conduce a una prevalencia automática de las disposiciones de los tratados encargados de regular el régimen especial: contaminación marina y contaminación atmosférica.

Las cláusulas de compatibilidad, dice A. Remiro Brotons, «son, con frecuencia, una *soupe de sûreté* para negociadores que se adentran en un territorio donde no cuentan con una cartografía fiable»¹⁰⁸. La conferencia diplomática que elaboró la Convención de Basilea se dejó llevar por la inclusión de esta fórmula general, precisamente por haber tropezado con más de un conflicto específico entre normas sucesivas sobre el movimiento transfronterizo de desechos: la Convención de Londres de 1972 sobre vertimiento, las normas de la OCDE y los contactos realizados con varias organizaciones internacionales para prevenir la concurrencia de normas.

Con la cláusula de compatibilidad, establecida en el artículo 4.12, las partes negaron claramente el predominio en términos absolutos del tratado posterior, es decir, del Convenio de Basilea sobre los tratados anteriores, tales como el Tratado de Londres de 1972, la Convención de la Antártida y la Convención MARPOL 73/78¹⁰⁹, entre otras, aceptando la aplicación de normas convencionales procedentes de múltiples instrumentos y propiciando la aplicación de las disposiciones más especiales.

¹⁰⁸ REMIRO BROTONS, *Derecho...*, p. 328.

¹⁰⁹ *Ibid.*, Doc. OMI-MEPC 27/16, de 2 de mayo de 1989, p. 12.

b) La cláusula de armonización

Según el artículo 10.1.a) del Convenio de Basilea, «las partes cooperarán entre sí para mejorar o conseguir el manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos. Con este fin, las partes deberán... proporcionar información, ya sea a una «base» bilateral o multilateral, con miras a promover el manejo ambientalmente racional de los desechos, incluida la *armonización de normas prácticas técnicas* para el manejo adecuado de los desechos peligrosos y otros desechos». Este precepto, que en sus términos literales parece conducirnos demasiado lejos, no está exento de críticas. La armonización prioritaria de las disposiciones del tratado posterior o anterior está en la letra del artículo 11 del Convenio de Basilea, que cobra protagonismo cuando las partes concluyen *acuerdos o arreglos bilaterales, multilaterales o regionales*, a condición de que estos acuerdos no menoscaben el manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros requisitos que estipula la Convención¹¹⁰. Pero ¿cabe armonizar las normas una vez que el acuerdo posterior no es menos estricto? ¿Es procedente la armonización a toda costa, aunque se llegue al convencimiento de que ese acuerdo posterior es menos exigente que la Convención de Basilea?

Estos interrogantes producen un sobresalto mayor cuando se propone la obligación de informar a la Secretaría incluso de aquellos acuerdos bilaterales, multilaterales y regionales concluidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Convención de Basilea. A pesar de que esa información, como ya sabemos, es escasa, se elabora por personal estatal poco cualificado y a veces llega con demasiado retraso.

Como se sabe, la prohibición impuesta a los Estados parte por el artículo 4.5 del Convenio de Basilea de realizar toda importación o exportación de desechos a los Estados que no la hayan ratificado ha sido limitada por la excepción del artículo 11, a cuyo tenor las partes podrán concertar *acuerdos o arreglos bilaterales, multilaterales o regionales* sobre movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y otros desechos con Estados no partes. Los negociadores del artículo 11 introdujeron una intención legislativa diferente a la prohibición del artículo 4.5, ya que la adecuación de los acuerdos, concluidos al amparo del artículo 11, en la práctica depende de las circuns-

¹¹⁰ No deben contener disposiciones menos ambientalmente racionales que las previstas en el Convenio; y las partes deberán notificar a la Secretaría los acuerdos que concluyan o hayan concertado con anterioridad a la entrada en vigor del Convenio de Basilea (art. 11). A este respecto, véase CAMPINS ERITJA, «La práctica...», pp. 7-10.

tancias y de los intereses comerciales que motiven el movimiento transfronterizo de los desechos. Por ese motivo, la Conferencia de las partes estaba interesada en elaborar un instrumento que regulase los elementos orientativos para acuerdos o arreglos bilaterales, multilaterales y regionales, concluidos en el marco del artículo 11 ¹¹¹.

La primeras experiencias a este respecto muestran la excesiva simpleza con la que los Estados suministran la información respectiva. En estas condiciones, el órgano encargado de aplicar las normas concurrentes se ve inducido a canalizar en lo posible su coexistencia ¹¹².

Esta situación puede provocar riesgos insalvables. Ciertas industrias, que adquieren una parte de sus beneficios bajo la forma de desechos reciclables, serán o pueden ser afectadas por el Convenio de Basilea ¹¹³. De hecho, en los últimos años ha aumentado considerablemente el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos de los países industrializados hacia países en vías de desarrollo para su reciclaje o recuperación ¹¹⁴.

¹¹¹ Las partes contratantes podran utilizar como guía en la elaboración de los acuerdos o arreglos las siguientes preguntas: «1 ¿Trata el acuerdo del control del movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y otros desechos sujetos al Convenio de Basilea?; 2 ¿Si se toman todas las medidas prácticas, el manejo de los desechos peligrosos previsto en el acuerdo o en el arreglo permitirá proteger la salud humana y el medio ambiente contra efectos nocivos?; 3 ¿De qué manera se tienen en cuenta en el acuerdo o en el arreglo los intereses de los países en desarrollo?; 4 ¿Exige el acuerdo o el arreglo una notificación previa?; 5 ¿Prevé el acuerdo o el arreglo un consentimiento previo?; 6 ¿Prevé el acuerdo o el arreglo el seguimiento de los desechos?; 7 ¿Prevé el acuerdo o el arreglo otras medidas relativas a desechos que no se puedan manejar como estaba previsto?; 8 ¿Prevé el acuerdo o el arreglo la determinación de las autoridades responsables de su aplicación?; 9 ¿Se ajustan las obligaciones del acuerdo o del arreglo establecido de conformidad con el artículo 11 a las medidas de control relativas a los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos previstas por el Convenio de Basilea, y 10 ¿Entran los desechos comprendidos en el acuerdo o el arreglo pertinente concertado con arreglo al artículo 11 en el ámbito de aplicación del Convenio de Basilea?» Véase el Informe de la Segunda Reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea celebrada en Ginebra, del 21 al 25 de marzo de 1994, Documento UNEP/CHW.2/30, 25 de marzo de 1994, Decisión II/10, pp. 19-20. El proyecto se examinó durante los trabajos del primer período de sesiones de la reunión conjunta del Grupo de Trabajo Técnico y el Subgrupo consultivo de expertos jurídicos y técnicos, celebrada en Pretoria el 6 y 7 de noviembre de 1998. Véase Documento UNEP/CHN.5/17, pp. 1-6.

¹¹² *Ibid.*, UNEP/CHW/C.1/2/3 y UNEP/CHW.5/16.

¹¹³ Environnement, competitivité internationale et développement: enseignements tirés d'études empiriques, Le débat d'orientation sur le commerce, l'environnement et le développement, Rapport du Secrétaire de la CNUCED, TD/B/WG.6/10, 12 septembre 1995, p. 26, párrs. 101 y 105.

¹¹⁴ Según un informe reciente, el 95% de los desechos peligrosos fueron objeto de movimiento transfronterizo entre países de la OCDE y otros países. Document d'orientation sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux destinés à des opérations de récupération UNEP/CHW.3/17, avril 1995, párrafo 40.

El artículo 11 estipula que los acuerdos que regulen esas transacciones deben ser «compatibles con la gestión ecológicamente racional» que el Convenio de Basilea prescribe. La duda que subyace aquí es si los poderes públicos cuentan con los medios legislativos idóneos para obligar a una empresa privada a reimportar los desechos que puedan ser ilegalmente exportados hacia países en vías de desarrollo ¹¹⁵. Este análisis nos hace rehuir del *modus operandi* en la aplicación del tratado posterior, que será operativo aun cuando sea imposible determinar la voluntad de las partes. Puede suceder que un acuerdo bilateral regule un movimiento transfronterizo de desechos no deseable en interés de la utilización eficiente de los recursos; incluso puede ocurrir que el acuerdo aumente los riesgos ambientales.

El desequilibrio producido por el artículo 11 se ha trasladado hacia la prohibición total de transportar desechos peligrosos de los países industrializados hacia los países en vías de desarrollo. En efecto, la tercera Conferencia de las Partes decidió en 1995 enmendar el Convenio de Basilea insertando un nuevo artículo 4.A. Según este nuevo artículo, las partes incluidas en el Anexo VII (partes y otros Estados que son miembros de la OCDE, la CE y Liechtenstein) deben prohibir todos los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos a los Estados no incluidos en el Anexo VII con efecto inmediato si fueran destinados a su eliminación y reutilización

Aquí es oportuno señalar que el nuevo artículo 4.A, no contiene una referencia expresa a la posibilidad de concluir *acuerdos o arreglos bilaterales, multilaterales y regionales* ni al artículo 11. Por el contrario, cuando se adoptó la Decisión III/1, la enmienda se limitó a insertar el artículo 4.A y ninguna otra disposición fue adoptada o enmendada, incluido el artículo 11, para crear una excepción a la prohibición del artículo 4.A ¹¹⁶.

¹¹⁵ Obviamente, el Convenio de Basilea contempla esta posibilidad, por lo que obliga a los gobiernos a adoptar por la vía interna las medidas necesarias para que las empresas que participan en el movimiento transfronterizo de desechos cumplan con el Convenio. Esta medida se complementa con otra obligación: el exportador/productor de desechos será o puede ser obligado a contratar un seguro o a depositar una fianza, etc., para poder proceder a una operación transfronteriza. *Ibid.*, TD/B/WH.6/10, p. 31, párrafo 125.

¹¹⁶ De este modo, según los artículos 4 y 4.A, una parte en el Convenio de Basilea que ratifique el artículo 4.A estaría obligada a prohibir las exportaciones de desechos peligrosos a los Estados no partes en el Convenio y, en suma, a todos los Estados que no estén incluidos en el Anexo VII. Véase Draft guidance elements for bilateral, multilateral or regional agreements or arrangements, Legal Working Group of the Basel Convention, Second session, Geneva, 12-13 october 2000, UNEP/CHW/LWG/2/5/Rev.1, p. 2.

Partiendo de lo arriba indicado, es evidente que los *acuerdos o arreglos bilaterales, multilaterales y regionales* concluidos entre las partes incluidas en el Anexo VII y los Estados partes u otros Estados no incluidos en el Anexo VII, al permitir que los desechos peligrosos sean exportados eludirán la prohibición del artículo 4.A de una manera que no está prevista por el Convenio y que además resulta inaceptable desde un punto de vista jurídico. «En conclusión, dos Estados partes, la Comunidad Europea y Dinamarca, consideran que una derogación de la obligación general del artículo 4.A a través de un acuerdo o arreglo bilateral, multilateral o regional sería una violación del espíritu y de las disposiciones del Convenio»¹¹⁷.

Añadamos, por otra parte, que el Convenio de Basilea establece un falso estándar global y uniforme para la adopción de acuerdos bilaterales y multilaterales separados. Ciertamente, el artículo 11 determina las condiciones para que las partes puedan adherirse a esos tratados y articula la coexistencia entre ellos y el Convenio de Basilea, aplicando de forma subsidiaria el artículo 30 de la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados; sin embargo, lo cierto es que el artículo 11 entraña no sólo el peligro de atenuar la prohibición de realizar movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, sino que además pone en peligro el propósito de asegurar el sometimiento de esos acuerdos a los criterios (estándars) establecidos para todas las partes, en especial a partir de la dificultad de determinar la calidad de tales acuerdos. Esto permite otra consecuencia importante hacia la que debemos atraer la atención: el artículo 11 abre la posibilidad de adoptar, bajo el tratado marco (*umbrella convention*), acuerdos regionales más estrictos que el propio Convenio de Basilea¹¹⁸. Es decir, los Estados pueden asumir obligaciones más estrictas, natural-

¹¹⁷ *Ibid.*, UNEP/CHW/LWG/2/5/Rev.1, p. 3.

¹¹⁸ HANDL, G., «Environmental security and global change: the challenge to international law», *YBIEL*, 1990, vol. I, p. 13 y ss.; KUMMER, *International...*, pp. 83, 87, 96 y ss. Sobre los tratados-marco, véase DUPUY, P. M., con la colaboración de M. RÉMOND-GOUILLOU, «La préservation du milieu marin», *Traité du nouveau droit de la mer*, eds. René-Jean Dupuy & Daniel Vignes, Economica-Bruyland, Paris 1985, pp. 1010-1012; ID., «The preservation of the marine environment», *A handbook on the new law of the sea*, ed. René-Jean Dupuy & Daniel Vignes, Hague Academy of International Law, Martinus Nijhoff Publisher, Dordrecht/Boston/Lancaster, 1991; vol. II, p. 1193; CARRON, D., «La protection de la couche d' ozone stratosphérique et la structure de l'activité normative internationale en matière d'environnement», *AFDI*, 1990, pp. 722-724; JUSTE RUIZ, «La regulación...», p. 73; ID., *Derecho internacional...*, pp. 58-60; KISS, A., «Les traités-cadres: une technique juridique caractéristique du droit international de l'environnement», *AFDI*, vol. XXXIX, 1993, pp. 792-797; GUTIÉRREZ ESPADA, C., «La contribución del derecho internacional del medio ambiente al desarrollo del derecho internacional contemporáneo», *Anuario de Derecho*

mente, siempre y cuando no resulten incompatibles con el Convenio de Basilea¹¹⁹. Esto significa simplemente que se trata de un Convenio marco que establece las grandes líneas y los principios generales de actuación de los Estados y, al mismo tiempo, deja suficiente libertad para concluir acuerdos regionales con el fin de adoptar las medidas necesarias y regular las situaciones específicas de cada región¹²⁰.

Se explica así el eminente lugar que ocupan las cláusulas de armonización y las técnicas de cooperación internacional establecidas por los tratados ambientales. Unas y otras no constituyen más que el medio efectivo para evitar los problemas de concurrencia entre el Convenio de Basilea y los acuerdos regionales emergentes, que deberán adoptarse con base en los criterios y el régimen de control sobre movimiento transfronterizo de desechos establecido en el Convenio de Basilea.

c) Aplicación prioritaria de los usos internacionales en materia de embalaje, etiquetado y transporte

Según el artículo 4.4.b) del Convenio de Basilea, toda parte «exigirá que los desechos peligrosos y otros desechos, que sean objeto de un movimiento transfronterizo, se embalen, etiqueten y transporten de conformidad con los reglamentos y normas internacionales generalmente aceptados y reconocidos en materia de embalaje, etiquetado y transporte, teniendo debidamente en cuenta los usos internacionales admitidos al respecto». Esta disposición no conduce, en su misma literalidad, a una aplicación prioritaria de los usos internacionales sobre las *normas y reglamentos internacionales generalmente aceptados*. Ahora bien, la aplicación preferente de los usos internacionales podría estar en la naturaleza del movimiento transfronterizo de desechos peligrosos

Internacional, 1998, vol. XIV, pp. 170-176; CARREÑO GUALDE, V., *La protección internacional del medio marino mediterráneo*, Tecnos - Universidad de Alicante, Madrid, 1999, pp. 62-3; CHUECA SANCHO, A., *Cambio climático y derecho internacional*, Fundación Ecología y Desarrollo, Gobierno de Aragón, Departamento de Medio Ambiente, Zaragoza, 2000, pp. 46-47.

¹¹⁹ Es evidente que las disposiciones del Convenio de Basilea representan los requisitos mínimos que cualquier acuerdo o tratado debe cumplir. Por tanto, «en esos acuerdos o arreglos se estipularán disposiciones que no sean menos ambientalmente racionales que las establecidas en el Convenio de Basilea, tomando en cuenta en particular los intereses en desarrollo», artículo 11.1., UNEP/CHW.5/17, p. 5.

¹²⁰ KUMMER, *International...*, p. 123; WEISS, E. B., «Environmentally sustainable competitiveness: A comment», *The Yale Law Journal*, vol. 102, núm. 8, 1993, p. 2135; Cap. IV, A, a), cfr. PÉREZ MARTÍN, *Que fait le village...*, pp. 156-163.

cuando sean más favorables para satisfacer los objetivos de la convención de Basilea. Pero ¿cabe afirmar lo mismo cuando los usos internacionales no sean más favorables?, o ¿qué disposiciones prevalecerán en caso de conflicto entre usos y normas internacionales?

A menos que el mismo Convenio condicionara su aplicación a la compatibilidad de sus disposiciones con los usos internacionales, la aplicación preferente de éstos sobre los reglamentos y normas internacionales no opera de forma automática. No debemos olvidar que estamos ante una actividad en la que, de una forma u otra, las transacciones internacionales se rigen por los usos establecidos por los operadores económicos —empresas de carácter privado—, que establecen sus propias reglas de funcionamiento.

La OIT ofrece una experiencia a este respecto que bien puede servir para resolver los problemas de incompatibilidad a los que nos hemos referido. En 1989, la Conferencia general de esta organización adoptó una resolución para armonizar los sistemas de clasificación y etiquetaje en lo relativo a la utilización de sustancias químicas peligrosas en el trabajo con el propósito de ayudar a los Estados miembros en la adopción de un sistema nacional de seguridad en la materia ¹²¹. Un programa más ambicioso fue propuesto para armonizar los diversos métodos nacionales e internacionales existentes con vistas a la adopción de un sistema de etiquetaje más apropiado ¹²².

Para finalizar, no podemos dejar de mencionar aquí los trabajos realizados por el programa internacional OMS/OIT/PNUE sobre la seguridad de las sustancias químicas (IPCS); para la creación de un mecanismo intergubernamental de integración y armonización de la evaluación de los riesgos, y la gestión de productos químicos ¹²³.

d) La admisión de la adopción de medidas más rigurosas en el orden interno de los Estados parte

Aunque resulte impropio hablar de «conurrencia» entre tratado y normas de derecho interno, lo cierto es que las disposiciones de la Convención de

¹²¹ Con anterioridad, la OIT había adoptado la Convención n.º 170 y la Recomendación n.º 177 sobre la seguridad en la utilización de productos químicos en el trabajo adoptados por la Conferencia Internacional de Trabajo que constituye una base universal de acción tanto a nivel de los países como de las empresas. A/CONF.151/PC/35, 31 de enero de 1991, párrs. 20 y 21.

¹²² *Ibid.*, A/CONF.151/PC/35, párrafo 31, viii.

¹²³ *Ibid.*, A/CONF.151/PC/35, párrafo 10 y ss.

Basilea pueden entrar en conflicto, no sólo con las disposiciones de otros instrumentos internacionales, sino también con las normas internas. Este supuesto se sitúa, como es bien sabido, en el marco más amplio de la regulación de las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno. Nosotros no vamos a entrar aquí en los términos de la vieja dicotomía entre dualismo y monismo. Simplemente, nos apoyaremos en el favorable a la superioridad del Derecho internacional, tal como lo expresa el artículo 27 de la Convención de Viena, a cuyo tenor «una parte no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificante de la no ejecución de un tratado». Debemos tener presente que el juez internacional y el juez interno operan en medios sociales completamente diferentes, de tal suerte que lo que «constituye una violación de un tratado puede ser lícito en el derecho interno, y lo que es ilícito en el derecho interno puede no entrañar una violación de una disposición convencional»¹²⁴. Los negociadores del Convenio de Basilea fueron conscientes de esta realidad y de la necesidad «de que los Estados tomen las medidas necesarias para que el manejo de los desechos peligrosos y otros desechos, incluyendo su movimiento transfronterizo y su eliminación, sea compatible con la protección de la salud humana y el medio ambiente, cualquiera que sea su lugar de eliminación»¹²⁵. En este sentido, las soluciones adoptadas por el Convenio de Basilea son particularmente interesantes, toda vez que la relación entre normas internas e internacionales está regida por un amplio sistema de reglas que pretende evitar cualquier conflicto normativo, obligando a los Estados partes a la adopción de las medidas jurídicas y administrativas necesarias para aplicar y hacer cumplir las disposiciones del Convenio, así como de las medidas necesarias para prevenir y reprimir su incumplimiento¹²⁶; concluyendo con la obligación de proporcionar información a una base bilateral o multilateral con el propósito de armonizar las normas y prácticas relativas al manejo de desechos.

El hecho de que esta última medida se incluya en el artículo. 10, destinada a regular la «cooperación internacional», es el resultado inmediato de aplicar medidas preventivas de armonización tanto entre tratados como entre tratados y normas internas. Por ello, las partes intercambiarán información a través de la Secretaría sobre los cambios que realicen en su definición nacional de

¹²⁴ CIJ, arrêt del 20 de julio de 1989, *Electronica Sicula*, pp. 51 y 74.

¹²⁵ Preámbulo del Convenio de Basilea.

¹²⁶ Artículo 4.4. Para C. GUTIÉRREZ ESPADA («La contribución...», p. 172) los Estados partes en un convenio-marco pueden asumir obligaciones jurídicas más «duras» en su derecho interno, siempre y cuando no resulten incompatibles con el tratado marco.

desechos peligrosos¹²⁷ y se comprometen a «promulgar las disposiciones legislativas nacionales adecuadas para prevenir y castigar el tráfico ilícito»¹²⁸. En última instancia, como ha señalado el Prof. F. Mariño, «el derecho internacional del medio ambiente sólo es verdaderamente eficaz si se aplica por medio del *derecho interno* de los Estados; y, en efecto, al desarrollo y armonización de éste se orienta la mayor parte de los Convenios internacionales»¹²⁹.

La acción de esta medida no afecta, por supuesto, al ejercicio del derecho soberano que tienen los Estados de prohibir la entrada de desechos provenientes del extranjero o de aplicar los principios generales del derecho internacional y las disposiciones específicas de otros Convenios internacionales concernientes a desechos tóxicos, tales como el Convenio de Bamako, las disposiciones del Código de Buena Práctica internacional sobre el movimiento transfronterizo de desechos radioactivos y, por supuesto, el Convenio de Basilea¹³⁰.

¹²⁷ Artículos 3 y 13.b.

¹²⁸ Artículo 9.5.

¹²⁹ MARIÑO MENÉNDEZ, F. «La protección internacional del medioambiente», (I) (Régimen general), *Instituciones de derecho internacional público*, Manuel Díez de Velasco, duodécima ed. Tecnos, Madrid, 1999, p. 631; ID., «Relevancia del objeto de conservar y mejorar el medio ambiente en el derecho internacional contemporáneo», *Cuadernos de Derecho Internacional*, Universidad de Córdoba, 1983, n.º 1, p. 72.

¹³⁰ Artículo 4.1, en relación con el Preámbulo.

CAPÍTULO II: ARMONIZACIÓN DEL CONVENIO DE BASILEA CON LAS NORMAS DE LA OCDE Y CON EL DERECHO COMUNITARIO EUROPEO

A) OBSERVACIONES GENERALES

Al codificar el Derecho de los tratados concluidos por las Organizaciones Internacionales, el artículo 27 de la Convención de Viena de 1986 establece que éstas, al igual que los Estados, «no podrán invocar las reglas de la Organización como justificación del incumplimiento del tratado» que les vincule.

En el contexto del movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, la hipótesis del conflicto entre las normas de una Organización Internacional y la Convención de Basilea se plantea como una posibilidad remota, pero no imposible. En efecto, el artículo 2.20 de la Convención no sólo incluye una definición propia de lo que es una organización de integración política y/o económica, sino que exige que ésta «haya sido debidamente autorizada, de conformidad con sus procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar, aprobar o confirmar formalmente el Convenio o para adherirse a él». Con la entrada en vigor del Convenio de Basilea, los Estados miembros de la Comunidad Europea se encontraron con la dificultad de conciliar las reglas del tratado constitutivo y del derecho derivado de la CE, relativas a libre circulación de mercancías, con la serias limitaciones del movimiento transfronterizo de desechos y el régimen de control establecido por el Convenio de Basilea. De acuerdo con las exigencias del derecho comunitario, los desechos asimilados a las mercancías pueden

circular libremente de un Estado miembro a otro. Para evitar la transgresión del tratado CE, especialmente de sus artículos 28 y 29 (antiguos artículos 30 y 34), al vincularse por el Convenio de Basilea, algún sector de la doctrina indicó hace ya tiempo que el problema se podía resolver considerando que el Convenio de Basilea afectaba únicamente a la Comunidad considerada como una sola entidad o sujeto ¹³¹. Es decir, la solución que se proponía era la de limitar la aplicación del Convenio exclusivamente a los movimientos transfronterizos de desechos realizados desde la Comunidad hacia terceros países. Para adoptar esta solución de orientación eminentemente permisiva, los Estados podían acudir al artículo 22.2 del Convenio de Basilea que permite a las organizaciones de integración política o económica ser parte en él, sin que ninguno de los Estados miembros lo haya ratificado.

El recurso a esta disposición hubiera podido constituir un escape a la antinomia suscitada entre el régimen restrictivo del Convenio y el principio de libre circulación de mercancías consagrado en el tratado CE. Sin embargo, reducida a sus justos términos, esta posibilidad fue eliminada por el Reglamento 259/93, cuyas disposiciones prevén la aplicación entre los Estados miembros del Convenio de Basilea y de los diferentes principios enunciados en las decisiones de la OCDE ¹³². En definitiva, regula la vigilancia y control del movimiento de desechos en el sistema comunitario, según las disposiciones del Convenio de Basilea. El propio Convenio instruye a la Secretaría para que preste toda la coordinación necesaria a otros órganos y organizaciones internacionales con el fin de alcanzar los objetivos de la convención ¹³³. Atendiendo a este propósito, la Conferencia de las partes deberá promover la armonización de las políticas, estrategias y medidas apropiadas para reducir

¹³¹ Véase a SADELEER, *Le Droit...*, p. 468.

¹³² Tal como lo explican LONDON y LLAMAS, la Directiva 84/631 fue revocada y reemplazada por el Consejo de la CE a través del Reglamento 259/93, referente a la vigilancia y control del movimiento transfronterizo de desechos dentro y fuera de la Comunidad Europea. El Reglamento aplica a los Estados miembros de la CE el mecanismo de control establecido a nivel internacional, en particular, por la Decisión C(92)39/Final de 30 de marzo de 1992 sobre el control del movimiento transfronterizo de desechos peligrosos adoptada en el marco de la OCDE, y el propio Convenio de Basilea de 1989, ratificado tanto por la CE como por sus Estados miembros. LONDON y LLAMAS, *EC Law...*, pp. 62 y 135; PÉREZ MARTÍN, *Que fait le village...*, p. 26. A este respecto véase también la Decisión del Consejo 93/98/CE (cuarta consideración), 14 de febrero de 1993 relativa a la conclusión, en nombre de la Comunidad del Convenio de Basilea, DOCE, n.º L 39, de 16 febrero de 1993.

¹³³ Artículo 16.1.d) y j).

al mínimo los daños causados a la salud humana y al medio ambiente por los desechos peligrosos ¹³⁴.

El amplio esquema de cooperación que la Convención entroniza responde a las recomendaciones del Comité de expertos en el transporte de materias peligrosas (formuladas en 1957 y actualizadas cada dos años), y detalladamente a las numerosas recomendaciones, declaraciones, instrumentos y reglamentaciones adoptadas en el seno de la ONU y otras organizaciones regionales¹³⁵. La operatividad de la cooperación se articula reconociendo a la ONU y a sus organismos especializados, así como a los Estados que no sean partes en la Convención, el derecho a acudir como observadores a las reuniones de la Conferencia de las Partes ¹³⁶.

B) TÉCNICAS DE ARMONIZACIÓN NORMATIVA DE LA OCDE Y SU INFLUENCIA EN EL DERECHO COMUNITARIO

En 1974, el Comité del medio ambiente de la OCDE puso en marcha un grupo de altos funcionarios especializados en políticas de gestión de desechos a los que encomendó la elaboración de una serie de medidas tendentes a controlar el movimiento transfronterizo de desechos ¹³⁷. Con base en estos trabajos, el Consejo de la OCDE adoptó a partir de 1984 una serie de resoluciones y recomendaciones para reducir el movimiento de desechos entre los países de la OCDE ¹³⁸.

La atención prestada al problema se limitó al ámbito regional, lo que puso de manifiesto la necesidad de potenciar la uniformidad de las normas concurrentes y la adopción de un sistema de armonización capaz de atajar la aplicación desigual de las obligaciones al respecto. Consciente de estos problemas, el Consejo de la OCDE adoptó en 1985 un programa de acción que pre-

¹³⁴ Artículo 15.5.a).

¹³⁵ Preámbulo.

¹³⁶ Artículo 15.6.

¹³⁷ «Special Waste Management Policy Grup», creado en 1974; véase OCDE, Council Recommendation C (76) 155 y la Decisión-Recomendación del Consejo de la OCDE sobre el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos COM(83)180 (final) del 1 de febrero de 1984.

¹³⁸ OECD, Council Decision and Recommendation C (83) 180 (Final) adoptada el 1 de febrero de 1984. Esta decisión inspiró la primera Directiva comunitaria prevista para regular el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos: la Directiva 84/631/CEE. Posteriormente, fue adoptada otra decisión sobre el movimiento de desechos hacia países no miembros de la OCDE. Véase OECD, Council Decision and Recommendation C (86) 64 (Final).

tendía alcanzar tres objetivos: a) la formulación de principios generales a los que deberían responder las exportaciones de los desechos peligrosos al exterior de los países miembros de la OCDE; b) la armonización de las definiciones, y c) la elaboración de un acuerdo internacional sobre el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos ¹³⁹.

Los problemas de concurrencia de normas estaban asociados a las distintas definiciones de «desechos», razón por la cual es perfectamente explicable que el Consejo de la OCDE decidiera identificar los desechos peligrosos mediante una clasificación en tres categorías, facilitando con ello la armonización de las distintas definiciones ¹⁴⁰. La toma en consideración de una propuesta de estas características, esto es, de apertura a un proceso de armonización de las normas sucesivas sobre definición de desechos, influyó para que estas definiciones propuestas por la OCDE fueran repetidas casi íntegramente en el Convenio de Basilea ¹⁴¹ y, por consiguiente, en la Directiva 91/152/CEE sobre desechos y en la Directiva 91/689/CEE sobre desechos peligrosos ¹⁴².

Estas pocas indicaciones bastan para demostrar que las disposiciones de la OCDE han servido para cimentar las bases jurídicas de los trabajos de la CE en la materia, en lo que, sin duda, influyó también la conciencia nacida del episodio de los bidones de Seveso ¹⁴³. Todo el proceso del tráfico está sometido a obligaciones de autorización previa, notificación e identificación de los traslados, requiriéndose el acuerdo previo de los Estados no miembros cuando su territorio sea el destino de los residuos. Manifiestamente, el régimen de vigilancia y control del movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, establecido por la Directiva 84/631/CEE, del 8 de diciembre de 1984, obedece a los mismos principios establecidos por las decisiones-recomendaciones de la OCDE ¹⁴⁴.

¹³⁹ El programa se adoptó durante la conferencia de ministros del medio ambiente de los países de la OCDE, celebrado en Basilea el 26 y 27 de marzo de 1985. Véase resolución C (85) 100.

¹⁴⁰ Véase la decisión del Consejo del 27 de mayo de 1988, C (88) 90 (final).

¹⁴¹ Véase UNEP/IG.80/3; *BOE* de 22 de septiembre de 1994 y el Boletín de Derecho del Mar, n.º 14, diciembre de 1989, pp. 39-85.

¹⁴² *DOCE*, n.º L377/20, de 31 de diciembre de 1991.

¹⁴³ MARTÍN MATEO, R., *Tratado de derecho ambiental*, Editorial Trivium, Madrid, 1992, vol. II, p. 581; KISS, A., y SHELTON, D., *Traité de droit européen de l'environnement*, une publication de la Conférence Permanente des Recteurs, Présidents et Vice-Chanciers des Universités Européennes, Éditions Frison-Roche, Paris 1995, p. 529.

¹⁴⁴ La Decisión-Recomendación C(86)64 del 5 de junio de 1986 por la que los países miembros se ven obligados a que sus autoridades respectivas prohíban toda exportación de desechos peligrosos hacia países no miembros de la OCDE; y la Decisión-Recomendación C(88)90 del 27 de

Se impone una segunda reflexión en relación con lo que acabamos de explicar: conforme a las orientaciones establecidas por los dos primeros programas de acción en materia de medio ambiente, la Comisión presentó al Consejo, el 22 de julio de 1976, una proposición de Directiva relativa a los desechos tóxicos y peligrosos ¹⁴⁵. Tras dos años de discusiones, el Consejo adoptó, el 20 de marzo de 1978, la Directiva 78/319/CEE sobre desechos tóxicos y peligrosos ¹⁴⁶. Se intentaba de esta forma remediar las dificultades prácticas suscitadas por la definición incorrecta de «desecho», establecida en la Directiva 75/442/CEE, así como la concurrencia de normas dispares sobre la materia ¹⁴⁷. Conviene señalar que tanto la estructura como el contenido de la Directiva 78/319/CEE se inspiraron ampliamente en la Directiva 75/442/CEE, adoptada tres años antes.

De forma automática, la Directiva 78/319/CEE presentó las mismas carencias que la Directiva 75/442/CEE, que se resumen especialmente en la falta de precisión de sus disposiciones y la ausencia de definiciones uniformes ¹⁴⁸, lo que dio lugar a varias cuestiones prejudiciales, planteadas ante el Tribunal de Luxemburgo para la interpretación de algunos preceptos ambiguos ¹⁴⁹.

En el ámbito conceptual, debemos precisar: el artículo 1 de la Directiva 78/319/CEE considera peligroso todo desecho que contamina por las sus-

mayo de 1988, que tiene la singularidad de incorporar la definición de los términos *desechos* y *eliminación* aplicables a los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos. Además, esta Decisión-Recomendación incluye una lista de desechos peligrosos sometidos al control internacional. Véase MARTÍN MATEO, *Tratado...*, p. 581; BITAR, *Les mouvements...*, pp. 24-26; KISS, y SHELTON, *Traité...*, p. 450.

¹⁴⁵ DOCE, n.º C 149 de 19 de agosto de 1978, p. 2.

¹⁴⁶ DOCE, n.º L 84 de 31 de marzo de 1978, p. 43.

¹⁴⁷ Sobre la noción de desechos véase: MORRENS, P., y P. DE BRUYCKER, «Qu'est-ce qu'un déchet dans les Communautés européennes?», *Amén.-Env.*, 1993, vol. 3, pp. 154-9; LAVRYSEN, L., «La notion de "déchets" dans la législation existante», *Amén.-Env.*, n.º especial, «Les déchets», 1990, p. 5; VILLENEUVE, C. DE, «Les notions de "déchets" et de "déchets dangereux": les définitions proposées par la Commission des C.E.» *Amén.-Env.*, *Ibid.*, 1990, pp. 14-19; JADOT, B., «Le statut juridique des déchets au regard de la protection de la santé de l'homme et de l'environnement», *L'entreprise et la gestion des déchets*, ANDERSEN R., MALHERBE, J., y OST, F. (dirs.), Bruylant, 1993, p. 17; sobre la aproximación a la noción de residuo peligroso véase, CAMPINS ERITJA, M., *La gestión de los residuos peligrosos en la Comunidad Europea*, José María Bosch Editor, S. A., Barcelona, 1994, p. 32 y ss.

¹⁴⁸ DOCE, n.º L 84, de 31 de marzo de 1978, p. 43.

¹⁴⁹ S. 12 de mayo 1987. As. 372 a 374/85. *Ministerio Fiscal c. Oscar Traen*. Cuestión prejudicial planteada por un Tribunal belga para la interpretación de algunos preceptos de la directiva. Véase igualmente la S.13 de julio 1989. As. 380/87 *Enichem Base y otros c. Comuna de Cinisello Balsamo*. Cuestión prejudicial formulada por un Tribunal italiano para la interpretación del artículo 3 de la Directiva.

tancias o las materias que figuran en el Anexo I, en cantidad o en concentraciones tales que representan un riesgo para la salud o el medio ambiente. El Anexo en cuestión recoge 24 sustancias peligrosas a cuyo grado o nivel de concentración no se hace mención ¹⁵⁰. Esta tendencia se repitió, al menos en parte, en el Derecho interno de varios Estados que no establecieron ningún nivel mínimo de concentración de sustancias o materias para determinar la peligrosidad de un desecho ¹⁵¹, por lo que las autoridades encargadas de vigilar el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos encontraron dificultades prácticas, provenientes de una interpretación y aplicación divergentes de la Directiva ¹⁵²; ello justificó una revisión de la Directiva 78/319/CEE, en cuyos trabajos colaboró el grupo de política de gestión de los desechos de la OCDE. El Consejo de esta organización retuvo, en su decisión del 27 de mayo de 1988 sobre el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos [C 88 (90) final], una definición uniformizada de «desechos peligrosos», en la que además se hace referencia a tres anexos que contienen: una lista de tipos o categorías de desechos peligrosos, una lista de sustancias o de materias que se encuentran en esos desechos peligrosos y una lista que destalla las características de esa peligrosidad.

Dicha definición y los anexos fueron reproducidos en términos casi idénticos en la Directiva 91/156/CEE ¹⁵³, adoptada tras dos años y medio de trabajos para servir de complemento a la Directiva marco sobre desechos (75/442/CEE).

¹⁵⁰ DOCE, n.º C 30, de 7 de febrero de 1977, p. 28.

¹⁵¹ Véase, por ejemplo, la regulación Belga sobre la materia que no exigía a los transportistas la presentación de un documento para la identificación de los residuos transportados, tal y como lo impone la Directiva 75/319. Sentencia de 2 de diciembre de 1986 (Asunto 239/85. Comisión de las Comunidades Europeas contra el Reino de Bélgica). En el mismo sentido, el Tribunal de Justicia declaró que la República helénica había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 4 y 6 de la Directiva 75/442/CEE, y los artículos 5 y 12 de la Directiva 78/319/CEE al no haber adoptado las medidas necesarias para garantizar que en la región de la Canea los residuos y los residuos tóxicos y peligrosos fueran eliminados sin poner en peligro la salud humana ni perjudicar al medio ambiente, y al no establecer para esta región planes o programas para la eliminación de los residuos y los residuos tóxicos y peligrosos. Sentencia de 7 de abril de 1992, Asunto 45/91.

¹⁵² VILLENUEVE, DE C., «Les mouvements transfrontières des déchets dangereux (Convention de Bâle et droit communautaire)», *RMC*, 1990, n.º 340, pp. 568-577.

¹⁵³ DOCE, n.º L 377, de 31 de diciembre de 1991, p. 20. Sobre esto, véase ENRIGHT, D. K., «Hazardous Waste in the EC: Council Directive of 12 December 1991 on Hazardous Waste», *Eur. Env. L.R.* 1992, p. 147. El Consejo, en completo desacuerdo con la Comisión, adoptó el 22 de diciembre de 1994, por mayoría cualificada, una nueva lista de desechos peligrosos completamente distinta de la lista propuesta por la Comisión. Dicha lista entró en vigor el 27 de junio de 1995. Véase la decisión 94/904/CEE del Consejo del 22 de diciembre de 1994, que establece una lista de desechos peligrosos en aplicación del artículo 1, párrafo 4, de la Directiva 91/689/CEE.

Esa manera práctica de resolver un vacío normativo originó, no obstante, un problema complejo que comenzaba a despuntar. Basta con recordar que la lista de la OCDE estaba destinada a definir y a clasificar los desechos peligrosos que iban a ser controlados cuando fueran objeto de un movimiento transfronterizo ¹⁵⁴. Esta lista parece utilizarse para fines más amplios que los previstos en la Directiva 75/442/CEE, ya que fue concebida no sólo para identificar los desechos, sino también para legitimar todas las operaciones de eliminación y de valorización ¹⁵⁵.

Por tanto, si las listas indicadas tienden a cubrir exhaustivamente todas las operaciones de eliminación y de valorización, los Estados miembros no deberían gozar del poder de conceder autorización para realizar las operaciones enumeradas en los Anexos II.A y II.B de la Directiva 91/156/CEE. Con esto se pone de manifiesto que las disposiciones comunitarias sobre el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos necesitaban una armonización más precisa ¹⁵⁶.

En efecto, esta situación produjo un solapamiento entre ciertas disposiciones del Anexo II.A y el Anexo II.B de la Directiva 91/156, referentes a la distinción entre las operaciones de eliminación y las operaciones de valorización. Como se sabe, no es fácil establecer una línea divisoria clara entre estas dos operaciones; por ello, cuando comparamos el apartado R.10 del Anexo II.B, relativo al esparcimiento de desechos sobre el suelo en provecho de la agricultura o de la ecología, y el apartado D.2 del Anexo II.A, relativo al tratamiento de desechos líquidos o lodos biodegradables en el suelo, notamos que el destino de los desechos es similar, pero el impacto sobre el medio ambiente es diferente ¹⁵⁷.

¹⁵⁴ Preámbulo del anexo de la Decisión-Recomendación C(88) 90 de la OCDE del 27 de mayo de 1988. Véase «Le système de contrôle de l'OCDE pour les mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valoration», OCDE, *Monographie sur l'environnement*, n.º 34, OCDE/GD(93)151, 1993.

¹⁵⁵ Cfr. KUMMER, *International...*, p. 157; cfr. GREENPEACE, *Critique of the proposal for a council regulation on the supervision and control of shipments of wastes within, into and out of the European Community*, 1991, p. 19 y ss.; CAMPINS ERITJA, *La gestión...*, pp. 119, 131 y ss.; HANNEQUART, J. P., *El Derecho comunitario en materia de residuos*, versión cast. de M. Campins Eritja con la colaboración de L. Huici Sancho, PPU, Barcelona, 1996, pp. 142-148, Sentencia de 28 de junio de 1994 (Asunto 187/93. Parlamento Europeo contra Consejo de la Unión Europea), párrafo 8.22.

¹⁵⁶ En esta línea, PÉREZ MARTÍN, *Que fait le village...*, p. 27. Este estudio no puede pasar por alto las iniciativas que a este respecto impulsó la Federación Europea de la Industria Química (CEFIC) junto a otras sociedades de este sector, especialmente la firma Ciba-Geigy, que ha reclamado la armonización de las legislaciones relativas a la eliminación de desechos en particular, y de la protección medio ambiente en general. Véase, KISS y SHELTON, *Traité...*, p. 465.

¹⁵⁷ Para evitar toda confusión es preferible hablar de eliminación final o definitiva respecto a las operaciones reguladas en el Anexo II.A, en contraposición a las operaciones de reciclaje, de

Para remediar los problemas de la Directiva 75/442, de 15 de julio de 1975, y establecer una nueva definición de desechos, la Comisión Europea lanzó la solución en dos tiempos. En primer lugar, decidió elaborar un anexo con las principales categorías de desechos; y en segundo lugar, completó este anexo con una lista detallada de desechos, denominada *Catálogo Europeo de Desechos*¹⁵⁸.

Este Catálogo fue presentado por la Comisión Europea como una lista de desechos armonizada y no exhaustiva, que sería periódicamente revisada para adaptarla a los eventuales progresos científicos y técnicos.

Por otra parte, el Catálogo Europeo de Desechos está destinado a servir de nomenclatura de referencia y a suministrar una terminología común válida en toda la Comunidad para mejorar la eficacia de las actividades de gestión de desechos. Además, debe constituir la referencia de base para el programa comunitario de estadísticas sobre desechos, establecido conforme a la resolución del Consejo de 7 de mayo de 1990 sobre la política de gestión de desechos¹⁵⁹.

Los problemas originados por el término «desecho» han sido analizados por el Comité Europeo de Normalización (CEN) y la Organización Internacional de Normalización (ISO); ambas instituciones han trabajado en la elaboración de definiciones normalizadas, adaptadas a las evoluciones técnicas y reglamentarias¹⁶⁰. Debemos mencionar aquí igualmente el Comité Consultivo Económico e Industrial de la OCDE (BIAC, Business and Industry Advisory Committee to the OECE), que ha trabajado a nivel internacional en la búsqueda de una terminología sobre desechos que permita distinguir un producto de un desecho¹⁶¹.

Por último, el Tribunal de Justicia ha reaccionado con energía ante la posible desnaturalización del concepto legal de «residuo» por el hecho de que estos bienes tengan apreciación en el mercado¹⁶². Según jurisprudencia reite-

regeneración y de recuperación reguladas en el Anexo II.B. Véase, OUALLET, C., *Les déchets, Définitions juridiques et conséquences*, Afnor, París, 1997, p. 99.

¹⁵⁸ El Catálogo Europeo de Desechos se aplica al conjunto de desechos destinados a operaciones de eliminación u operaciones de valorización, exceptuándose por supuesto los desechos explícitamente excluidos del campo de aplicación de la Directiva de 15 de julio de 1975 en su artículo 2.1.

¹⁵⁹ Decisión de la Comisión de 20 de diciembre de 1993 por la que establece una lista de desechos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442 CE, nota preliminar, párrafo 5. Véase, *DOCE*, n.º L 005, de 7 de enero de 1994, p. 15.

¹⁶⁰ OUALLET, *Les déchets...*, p. 148.

¹⁶¹ OUALLET, *Les déchets...*, p. 149.

¹⁶² MARTÍN MATEO, *Tratado...*, p. 522.

rada de este Tribunal, «el concepto de residuo, con arreglo al artículo 1 de la Directiva 75/442, en su versión original, y de la Directiva 78/319, no debe entenderse en el sentido de que excluye las sustancias y objetos susceptibles de reutilización económica. Una normativa nacional que adopte una definición del concepto de residuo que excluya las sustancias y objetos susceptibles de reutilización económica no es compatible con la Directiva 75/442, en su versión original, y con la Directiva 78/319 (sentencias de 28 de marzo de 1990, Zanetti y otros, C-359/88, *Rec.* p. I-1509, apartados 12 y 13, y de 10 de mayo de 1995, Comisión/Alemania, C-422/92, *Rec.* p. I-1097, apartado 22).

Dicha interpretación no queda desvirtuada ni por las modificaciones introducidas en la primera de estas dos Directivas mediante la Directiva 91/156, ni por la derogación de la segunda mediante la Directiva 91/689 (véase la sentencia Comisión/Alemania, antes citada, apartado 23), ni por el Reglamento n. 259/93»¹⁶³.

C) ARMONIZACIÓN DEL CONVENIO CON LAS DISPOSICIONES DEL DERECHO COMUNITARIO EN EL MARCO DE ESTE ORDENAMIENTO

a) Cuestiones generales

Cada año más de dos millones de toneladas de desechos cruzan las fronteras internas y externas del territorio comunitario para su reciclaje o eliminación definitiva¹⁶⁴. Varias son las razones que explican esos movimientos. En primer lugar, la cantidad de desechos producidos en la Comunidad Europea supera ampliamente las cantidades que pueden ser recicladas o eliminadas en las instalaciones existentes. Como consecuencia, ciertos Estados se han visto obligados a exportar sus desechos para que sean tratados en otra parte. En segundo lugar, la diferencia de costes entre países, relativo al tratamiento de los desechos, ha producido un aumento de su comercialización internacional. Añádase a ello que el precio de las instalaciones de eliminación, la cuantía de

¹⁶³ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 25 de junio de 1997, Asunto C-342/94, 1997-06-25, párrs. 47 y 48.

¹⁶⁴ Para más detalles, KISS y SHELTON, *Traité...*, pp. 442-3; Comisión de Desarrollo Sostenible, Segunda Sesión, 16-27 de mayo, Étude des Groupes d'éléments sectoriels: première phase, substances chimiques toxiques et déchets dangereux, Rapport du Secrétaire général, E/CN.17/1994/7, 21 avril 1994, pp. 17-20.

los salarios, el coste de las tecnologías, etc., no constituyen los criterios prioritarios en la elección del sitio para la localización de las instalaciones; por el contrario, las disposiciones referentes a la protección del medio ambiente pueden influir decididamente en la localización de las inversiones y, por consiguiente, generar el movimiento transfronterizo de desechos. Cuando aparecen los conflictos normativos, los inversionistas caen en la tentación de buscar un nuevo sitio o el coste de eliminación más bajo ¹⁶⁵.

Por otra parte, el Derecho del medio ambiente no se aplica con la misma severidad en todos los Estados miembros de la comunidad europea, lo que incita a las industrias a exportar sus desechos a los Estados donde el ordenamiento jurídico funciona de forma más relajada en lo relativo a la protección del medio ambiente. En este sentido, resultan más atractivos los países en vías de desarrollo por las deficiencias normativas para regular el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o por la existencia de una administración incapaz de hacerla cumplir ¹⁶⁶.

El régimen comunitario, previsto para vigilar y controlar el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y su impacto en la mayor parte de los sectores del medio ambiente, se funda en la Convención de Basilea ¹⁶⁷, en otros tratados internacionales tales como la Convención ACP-CEE del 15 de diciembre de 1989 (art. 39) y en diversas decisiones adoptadas en el marco de la OCDE ¹⁶⁸.

Dentro de la regulación comunitaria, debemos destacar el reglamento n.º 259/93, relativo a la vigilancia y control de la transferencia, entrada y salida de desechos de la Comunidad, y la decisión de 30 de marzo de 1992 que organiza el control del movimiento transfronterizo de desechos, destinado a las operaciones de valorización, en función de su naturaleza, de acuerdo con la cual son repartidos en tres listas: verde, ámbar y roja ¹⁶⁹.

¹⁶⁵ SADELEER, *Le Droit...*, p. 447; RUMMEL-BULSKA, «The Basel...», p. 84 y ss.

¹⁶⁶ *Ibid.*, p. 448.

¹⁶⁷ Entró en vigor para la Comunidad el 7 de mayo de 1994 (DOCE, n.º C 211, de 2-8-1994).

¹⁶⁸ Decisión y Recomendación del Consejo de la OCDE sobre el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos COM(83)180 final del 1 febrero de 1984; «Conclusiones y Recomendaciones de la Conferencia de la OCDE», Basilea, 26-27 de marzo de 1985, Acta del Consejo de la OCDE(85)100; Decisión-Recomendación del Consejo del 1 de febrero de 1984 sobre los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos: C(83)180(Final); Decisión-Recomendación del Consejo de 31 de enero de 1991 relativa a la reducción de los movimientos transfronterizos de desechos: C(90)178/FINAL. SADELEER, *Le Droit...*, pp. 451, y ss.

¹⁶⁹ La lista «verde» comprende los desechos destinados a operaciones de valorización, que no presentan ningún peligro. Su movimiento transfronterizo debe ser objeto de un mínimo número de controles. Los desechos incluidos en la lista «ámbar» están sometidos a un procedimiento de

En caso de producirse un problema de incompatibilidad entre el Derecho derivado de la CE y el Convenio de Basilea, éste prevalece, por lo que debe enmendarse el derecho de la UE en aquellas partes en que resulte incompatible con el Convenio de Basilea¹⁷⁰.

Desde la perspectiva de la armonización entre uno y otro, debe tenerse en cuenta que, según los tratados comunitarios, uno de los *finés* de la comunidad es el de promover en el conjunto de la comunidad un desarrollo armónico, equilibrado y duradero de las actividades económicas¹⁷¹.

Otra finalidad, íntimamente relacionada con la anterior, consiste en promover en el conjunto de la comunidad un nivel elevado de protección y de mejora de la calidad del medio ambiente¹⁷². Esta finalidad se insertó en el tratado con el objetivo claro de excluir toda intención ambigua de los Estados miembros durante el proceso de elaboración de la política comunitaria del medio ambiente.

Dicho lo anterior, la revisión de la estrategia comunitaria en materia de gestión de desechos fue concebida para servir de guía en la elaboración de la legislación subsecuente sobre la materia¹⁷³. Como en otras áreas, las acciones futuras de la comunidad deben reposar totalmente sobre una misma obra y con una aplicación más adecuada de la legislación existente¹⁷⁴.

b) Armonización del Convenio con las disposiciones internas: la competencia concurrente de los Estados miembros

Al examinar la política comunitaria del medio ambiente se advierte que los Estados miembros conservan una competencia concurrente que les permite

notificación que permiten al país importador y al exportador oponerse a su movimiento durante un plazo de treinta días. Por otra parte, su movimiento debe estar precedido de un contrato entre los operadores comerciales, provisto de garantías financieras. Por último, el control aplicable a los desechos más peligrosos, los enumerados en la lista «roja», requieren una autorización escrita tanto de las autoridades del Estado importador como del Estado en tránsito antes de su transferencia. Decisión C (92) 39 final del 30 de marzo de 1992. Las categorías de desechos, adoptadas por el Consejo de la OCDE, fueron repetidas en el Reglamento 259/93 CEE.

¹⁷⁰ KUMMER, *International...*, p. 151.

¹⁷¹ Artículo 2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ Véase el Comunicado de la Comisión del 30 de julio de 1996, relativa al reexamen de la estrategia comunitaria para la gestión de los desechos, COM (96) 399, y resolución del Consejo de 24 de febrero de 1997 sobre una estrategia comunitaria para la gestión de desechos, DOCE, n.º C 76, de 11 de marzo de 1997.

¹⁷⁴ THIEFFRY, P., *Droit européen de l'environnement*, Éditions Dalloz, París 1998, p. 83.

adoptar ciertas medidas en aquellos supuestos en los que la Comunidad no haya intervenido. Pero además, los Estados gozan de una competencia para completar la legislación comunitaria en razón de su carácter parcial, o bien para descartar su aplicación porque se quiere dictar normas más protectoras ¹⁷⁵.

La primera formulación de esta competencia normativa concurrente se encuentra en la llamada *cláusula de protección reforzada* establecida por el artículo 176 (antiguo art. 130 T) del Tratado de Amsterdam, que permite a los Estados mantener o establecer de forma individual las medidas de protección, como su nombre lo indica, reforzadas para obtener una protección ambiental más rigurosa ¹⁷⁶. Estas cláusulas no deben constituir un obstáculo para el mantenimiento y adopción, por parte de cada Estado miembro, de medidas de mayor protección. Además, deben ser compatibles con el TCE y serán notificadas a la Comisión. De todo lo anterior se desprende que las *cláusulas de protección reforzada* deben confrontarse con las exigencias de necesidad y de proporcionalidad cuando puedan causar perjuicios al comercio intracomunitario.

Por su parte, el Convenio de Basilea autoriza la adopción por los Estados parte de «medidas jurídicas, administrativas y de otra índole» con el fin de prevenir y reprimir —si hace falta— los actos que contravengan el Convenio ¹⁷⁷. Ahora bien, como acabamos de indicar, el alcance y contenido de las cláusulas de protección reforzada debe ser compatible tanto con el Tratado de Amsterdam como con el Convenio de Basilea.

En segundo lugar, la competencia concurrente se manifiesta en la cláusula de salvaguardia, en cuya virtud los Estados miembros podrán ejercer la competencia residual que les permitirá introducir nuevas disposiciones en materia de medio ambiente, es decir, disposiciones adoptadas con posterioridad a la medida comunitaria de que se trate ¹⁷⁸. Conviene señalar que las exigencias ambientales, por importantes que sean, no son suficientes para justificar la adopción de nuevas medidas. Es preciso que la necesidad de su adopción se

¹⁷⁵ BLUMANN, C., «Compétence communautaire et compétence nationale», en *La communauté européenne et l'environnement*, Travaux du colloque d'Angers de la CEDECE, París, 1997, p. 87.

¹⁷⁶ El legislador comunitario ha concedido al legislador nacional la posibilidad de fijar las cantidades susceptibles de conferir a un desecho la calidad de tóxico o peligroso. Si bien esta libertad es plausible en sí, dio lugar a numerosas dificultades prácticas. Véase HANNEQUART, *El derecho comunitario...*, p. 277.

¹⁷⁷ Artículo 4.4: «Toda parte adoptará las medidas jurídicas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para aplicar y hacer cumplir las disposiciones del presente Convenio, incluyendo medidas para prevenir y reprimir los actos que contravengan el presente Convenio».

¹⁷⁸ Artículo 95.4, antiguo artículo 100.A.4, del Tratado de Amsterdam.

determine a través de pruebas científicas¹⁷⁹, efectuadas con posterioridad a la adopción de la medida comunitaria. Además, el estudio debe recaer sobre un problema ambiental planteado con posterioridad a la realización de la medida de armonización, pues el descubrimiento actual de un problema antiguo no autoriza la aplicación de una cláusula de salvaguardia¹⁸⁰.

La tercera manifestación de la competencia concurrente de los Estados es, en todo caso, la que se funda en una regla de habilitación reglamentaria. Por ello, las disposiciones nacionales cuya adopción resulte autorizada deberán presentar un carácter provisional. Con igual motivo, ha de señalarse que esta competencia está reservada exclusivamente para la adopción de medidas de armonización que respondan estrictamente a las exigencias relativas a la protección del medio ambiente¹⁸¹.

c) La armonización de las normas concurrentes dentro del ordenamiento comunitario

La gran variedad de organizaciones, órganos y normas relacionadas con el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos convierten las complejas relaciones normativas en un oscuro cuarteto en el que no sólo confluyen las normas convencionales, las normas internas de los Estados miembros y el derecho comunitario, sino en el que además emerge un nuevo polo porque la formación de nuevos sistemas de integración regional, preocupados por la protección del medio ambiente, ha introducido la perspectiva de que puede haber niveles subestatales de competencia. La Comunidad se percató rápidamente de este problema y pronto fue consciente de la necesidad de establecer una política de coordinación para evitar el conflicto de normas y decidió que «por cada categoría de contaminación era necesario definir el nivel de acción (local, regional, nacional, comunitario e internacional) que corresponde al tipo de contaminación y a la zona geográfica que deberá ser protegida»¹⁸².

¹⁷⁹ Artículo 95.5 del Tratado de Amsterdam.

¹⁸⁰ El ejercicio de la competencia concurrente de los Estados en presencia de una medida comunitaria, cuando resulte procedente, estará sometida a un proceso riguroso de control que obliga a los Estados a notificar a la Comisión las razones de su adopción. Artículo 95 (antiguo art. 100.A.4 y 7) del Tratado de Amsterdam. Véase KRÄMER, *Derecho ambiental...*, pp. 18-19.

¹⁸¹ BLUMANN, «Compétence communautaire...», p. 94.

¹⁸² Primer programa de acción sobre el medio ambiente, principio 10, DOCE, 1973, n.º C 112/1. Sobre la relación entre Derecho internacional, derecho de las Comunidades Europeas y derechos nacionales, véase KISS y SHELTON, *Traité...*, p. 318; KISS, «L'harmonisation...», pp. 153 y ss.

Por otra parte, de conformidad con el artículo 27 de la Convención de Viena de 1986, la Comunidad Europea no puede invocar sus normas internas para dejar de cumplir los compromisos internacionales que ha contraído, con lo que el Derecho comunitario se sitúa exactamente en la misma posición que el Derecho interno de los Estados cuando ambos están frente a un órgano internacional competente para determinar el (in)cumplimiento del Derecho internacional.

Verificar la conformidad entre el derecho comunitario y los tratados ambientales que la Comunidad confirme formalmente, compete al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Es más, el Tribunal está llamado a resolver el problema de la selección entre las diferentes disposiciones que puedan, en un supuesto concreto, regular la protección del medio ambiente¹⁸³. Aunque en las primeras sentencias referentes a la protección del medio ambiente el Tribunal no analizó supuestos de concurrencia de normas, estableció, sin embargo, una serie de criterios —aunque no suficientemente claros— para distinguir en qué proporción una medida tiene como objetivo principal la protección del medioambiente o la realización del mercado interior, y además trazó una línea de demarcación entre los viejos artículos 100.A y 130.S (ahora artículos 95 y 175) del tratado constitutivo de la CE.

En el *asunto del dióxido de titanio*, resuelto mediante fallo del 11 de junio de 1990¹⁸⁴, el Tribunal de Luxemburgo fue requerido para resolver el conflicto de competencia suscitado entre la Comisión y el Consejo sobre la elección de la base adecuada para la modificación de la Directiva relativa a la armonización de los programas de eliminación de la contaminación producida por desechos provenientes de la industria de dióxido de titanio. En esta oportunidad, el Tribunal debía pronunciarse sobre la primacía entre Directivas litigiosas.

Para prevenir y disminuir progresivamente la contaminación de los desechos producidos por la industria del titanio, el Consejo había adoptado en

¹⁸³ Cfr. SADELEER, *Le Droit...*, p. 43; véase a este respecto, KISS, *Droit...*, pp. 334-335; CASTILLO DAUDÍ, M., «La aportación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia a la política comunitaria del medio ambiente», *Hacia un nuevo orden internacional y europeo*. Homenaje al Profesor M. Díez de Velasco, Tecnos, Madrid, 1993, p. 831.

¹⁸⁴ Asunto 300/89, *Comisión c. Consejo*, Rec. I-2867 (1991); *CMLR*, vol. 3, (1993), pp. 359 y ss. El Tribunal ha inferido igualmente que el artículo 139 S (ahora art. 175) era la base jurídica apropiada de la Directiva 91/156 sobre residuos (Asunto C-155/91, *Comisión c. Consejo*, Rec. I-939), criterio mantenido en la sentencia relativa al Reglamento 259 sobre el transporte de residuos. Asunto C-187/93, *Parlamento c. Consejo*, Rec. I-2857 (1994); *CMLR*, vol. 2, pp. 309 y ss.

febrero de 1978 la Directiva 78/176/CEE ¹⁸⁵, que fue completada con dos Directivas más que tenían el propósito de articular su aplicación; por un lado, la Directiva 82/83/CEE, de 3 de diciembre de 1982, adoptada para fijar las modalidades de vigilancia y control ¹⁸⁶; y de otro lado, la Directiva 89/428/CEE del 21 de junio de 1989, que debía regular los criterios de *armonización* de los programas de reducción con vistas a la supresión de la contaminación de los desechos de la industria del dióxido de titanio ¹⁸⁷. Las disposiciones aplicables a otras categorías de desechos, tales como los desechos hospitalarios, los vehículos usados, los neumáticos, la electrónica, etc., fueron objeto de una armonización más precisa debido a la falta de claridad jurídica de las Directivas sectoriales ¹⁸⁸.

La necesidad de este modo de armonización por Directivas sucesivas ¹⁸⁹ se acentúa aun más, por una parte, porque el Tratado de Amsterdam ha dado probablemente el golpe de gracia a las esperanzas de introducir una jerarquía de normas de Derecho derivado en el orden jurídico comunitario ¹⁹⁰, y por otra, porque una jerarquía de normas puede ser determinante solamente para resolver ciertas antinomias: las limitadas a las relaciones entre el derecho primario (los tratados y los principios). A este respecto, Tizzano ha señalado, por ejemplo, «que el artículo 232 del TCE consagra la preeminencia, que se funda sobre el principio de especialidad más que sobre una primacía formal, de los Tratados CECA y Euratom con relación al Tratado CE. Es igualmente posible

¹⁸⁵ DOCE, n.º L 54, de 25 de febrero de 1978, p. 19. Esta Directiva fue parcialmente modificada el 24 de enero de 1983 por la Directiva 83/29/CEE; véase DOCE, n.º L 32, de 3 febrero de 1983, p. 28.

¹⁸⁶ DOCE, n.º L 379, de 31 de diciembre de 1982, p. 1. Esta Directiva da ejecución al artículo 9.4 de la Directiva 78/176/CEE

¹⁸⁷ DOCE, n.º L 201, de 14 de julio de 1989, p. 1. Esta Directiva fue anulada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas el 11 de junio de 1991 debido a la incongruencia de la base jurídica retenida por el Consejo (Sentencia de 11 de junio de 1991, Asunto 300/89). El 15 de diciembre de 1992 fue remplazada por la Directiva 92/112/CEE; que tiene como fundamento el artículo 100.A del tratado; véase DOCE, n.º L 409, de 31 de diciembre de 1992, p. 11; LONDON y LLAMAS, *EC law...*, pp. 31 y ss.; CASTILLO DAUDÍ, M., «La política de medio ambiente de la Comunidad Europea», *Derecho internacional del medio ambiente*, J. JUSTE RUIZ, 1998, pp. 451-454.

¹⁸⁸ SADELEER, *Le Droit...*, p. 365.

¹⁸⁹ USHER, J. A., «Harmonisation of legislation», *Les Communautés Européennes en Fonctionnement / The European Communities in Action*, (ed.) Dominik Lasok y Panayotis Soldatos, Bruylant, Bruxelles, 1981, pp. 174-178.

¹⁹⁰ A este respecto se ha señalado, incluso, que la idea de jerarquía es una ficción; véase MONJAL, P. Y., «La Conférence intergouvernementale de 1996 et la hiérarchie des normes communautaires», *RTD eur.* 32 (4), oct. déc. 1996, p. 683.

reconstruir una jerarquía, gracias sobre todo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, entre las normas mismas del Tratado CE»¹⁹¹.

Desde este punto de vista debe ser entendida la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto *International Fruit Company*, según la cual los actos de Derecho comunitario derivado son nulos cuando sean contrarios a las disposiciones de un acuerdo vinculante para la Comunidad que sea directamente aplicable¹⁹².

Por otro lado, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea reconoce en su artículo 307 (antiguo art. 234 del Tratado CE) que sus propias disposiciones «no afectarán a los derechos y obligaciones que resulten de Convenios celebrados con anterioridad al 1 de enero de 1958». A esto hay que añadir el segundo párrafo del artículo 307 que se refiere a este problema, aunque no de forma expresa o directa, sólo para señalar que «en la medida en que tales Convenios sean incompatibles con el presente Tratado, el Estado o Estados miembros de que se trate recurrirán a todos los medios apropiados para eliminar las incompatibilidades que se hayan observado». Esta fórmula permite entender, según Mengozzi, «una voluntad objetiva de las partes de considerar los efectos de los Convenios concluidos con anterioridad al Tratado CE como formalmente destinados a agotarse en las relaciones entre los Estados originariamente partes del Convenio, sin implicar o interesar en modo alguno a la CEE»¹⁹³. Con todo, debemos tener presente que el juego combinado de otras disposiciones del Tratado (art. 307 CE, antiguo 234 y 131 CE, antiguos 110 y 114 del Tratado CE) han impulsado al Tribunal de Justicia a considerar dichos Convenios, vinculantes para la propia comunidad (*International Fruit Co, Rec.*, 1972, pág. 1219)¹⁹⁴.

¹⁹¹ TIZZANO, A., «La hiérarchie des normes communautaires», *Reflexiones en torno al Tratado de Amsterdam y el futuro de la Unión Europea*. Coordinador J. M. de Faramián Gilbert, Editorial Comares, Granada, 2000, p. 230. Sobre la jurisprudencia del Tribunal de Justicia referente a acuerdos internacionales, cfr. RIDEAU, P., «Les accords internationaux dans la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes-Réflexions sur les relations entre les ordres juridiques international, communautaire et nationaux», *RGDIP*, 1990, pp. 289 y ss.; SCHUSTER, H., «Le droit des États membres de se prévaloir en justice d'un accord liant la communauté», *RGDIP*, 1995, pp. 367 y ss.

¹⁹² Tribunal del Justicia, 12 de diciembre de 1972 (asuntos acumulados 21 a 24/72), *Rec.*, 1972, pp. 1219 y ss.

¹⁹³ MENGOZZI, P., *Derecho comunitario y de la Unión Europea* (título original: *Il diritto comunitario e dell' Unione Europea*), traducción de J. FERNÁNDEZ PONS, SEPS-Tecnos, Madrid, 2000, p. 300. Sobre el asunto, LEWIS, C., *Remedies and the enforcement of European Community Law*, Litigation Library, London, Sweet y Maxwell, 1996, p. 12 y ss.

¹⁹⁴ MENGOZZI, *Derecho comunitario...*, p. 301.

Fiel reflejo del uso de cláusulas de compatibilidad es el artículo 308 CE (antiguo art. 235 del Tratado CE)¹⁹⁵, al que se ha hecho referencia para concluir el Convenio con Suiza para la protección del Rin contra la contaminación química (1977)¹⁹⁶; el Convenio de París para la prevención de la contaminación de origen telúrico (1975)¹⁹⁷, y el Convenio de Barcelona para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación (1977)¹⁹⁸. Todos estos instrumentos contienen cláusulas que los definen como Convenios marco, dejando abierta la posibilidad de concluir otros acuerdos ambientales directamente entre cada uno de los Estados miembros de la Comunidad y terceros Estados.

Por último, no es necesario insistir aquí, como ha indicado J. M. Sobrino, en el amplio abanico de posibilidades que abre el procedimiento consultivo del Tribunal para determinar la compatibilidad de un acuerdo con las disposiciones del TCEE, que puede referirse incluso a la competencia de la Comunidad o de una de sus instituciones para celebrarlo¹⁹⁹.

La presencia de normas diferentes y ciertos contrastes entre las políticas nacionales sobre la gestión de desechos llevaron a la Comisión a tomar verda-

¹⁹⁵ Las cláusulas previstas para prevenir las posibles incompatibilidades entre el Tratado CEE y los diferentes acuerdos internacionales que la CEE pretende concluir han sido sistematizadas por H. Pazarci en tres clases: 1) la inclusión en un acuerdo concluido por la CEE de una disposición que establezca para las partes la obligación de comunicar toda la información necesaria sobre los nuevos acuerdos que éstas pretendan concluir (por ej., el art. 88 de la Convención de Lomé); 2) la inclusión de una disposición que establece la obligación de realizar consultas entre las partes antes de concluir ciertos acuerdos (por ej., el art. 11, párrafo 2, de la Convención de Lomé), y 3) la inserción de disposiciones que admiten expresamente la superioridad de los acuerdos concluidos por las partes (por ej., art. 1, párrafo 2, del Acuerdo Comercial CEE-Brasil de 1973; el art. 1, párrafo 2, del Acuerdo Comercial CEE-Uruguay de 1973, y el art. 2 del Acuerdo de Cooperación Comercial CEE-India de 1973). Véase PAZARCI, H., «Problèmes d'incompatibilité des accords conclus par la CEE», *Mélanges offerts à Paul Reuter, Le droit international: unité et diversité*, Paris, Pedone, 1981, pp. 394-396.

¹⁹⁶ Convenio sobre la protección del Rin contra la contaminación química y el Acuerdo adicional del acuerdo firmado en Berna, el 29 de abril de 1963, sobre la Comisión Internacional para la protección del Rin contra la contaminación. *DOCE*, edición especial 15, 1985, vol. 2, p. 48.

¹⁹⁷ Convenio de París de 4 de junio de 1974 para la prevención de la contaminación de origen terrestre (arts. 5.2, 9 y 24); *BB OO* de 20 y 21 de enero de 1981.

¹⁹⁸ Convenio de Barcelona, de 16 de febrero de 1976, para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación, artículo 3, *DOCE*, edición especial 15, 1985, vol. 2, p. 32.

¹⁹⁹ SOBRINO HEREDIA, J. M., «El control de los acuerdos internacionales por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas», *Curso de Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz* de 1992, Bilbao, 1993, pp. 116-7; véase igualmente DÉ WALSCHE, A., «L'article 228 révisé par le traité d'Amsterdam», *L'Union Européenne et le monde après amsterdam*, Marianne Dony, Études Européennes, éditions de l'Université de Bruxelles, 1999, p. 73.

dero interés en el problema y a proponer, el 23 de abril de 1991, una Directiva para armonizar las normas aplicables al vertido de desechos²⁰⁰.

El Parlamento Europeo decidió diferir el asunto a través de una resolución del 28 de octubre de 1992, por la que una nueva propuesta, que modificaba la Directiva anterior, fue presentada por la Comisión el 10 de junio de 1993²⁰¹. Esta propuesta se fundamentó en el artículo 100.A del viejo Tratado, con la intención de armonizar las normas relativas al vertido de desechos en los Estados miembros y con el fin de reducir principalmente la contaminación de las aguas (subterráneas y de la superficie), de los suelos y del aire, así como para evitar los riesgos que resulten para la salud humana.

El examen de esta propuesta tiene interés desde dos puntos de vista: en primer lugar, porque los Estados miembros que habían promulgado disposiciones más estrictas, eligiendo el artículo 100.A como base jurídica, se vieron obligados a reducir considerablemente el nivel de sus exigencias; en segundo lugar, porque los Estados del sur de la Comunidad se vieron en la necesidad de realizar importantes inversiones para mejorar la calidad de sus vertederos.

Finalmente, el Consejo de medio ambiente concluyó un acuerdo político el 9 de junio de 1994, en el cual retuvo el artículo 130.S del Tratado como base jurídica de su posición común, en virtud del cual los Estados que lo deseen podrán mantener o introducir las disposiciones más restrictivas²⁰². Por su parte, el Parlamento Europeo demandó que el texto revisado del Tratado de Maastricht incorporara la posibilidad para los Estados miembros de adoptar, conforme al artículo 100.A.4 (ahora art. 95), medidas ambientales más rigurosas²⁰³.

En un sentido más estricto y atendiendo al transporte de desechos, incluida la importación y exportación hacia y desde la Comunidad, cabe señalar la

²⁰⁰ El 23 de abril de 1991, la Comisión sometió al Consejo una proposición de Directiva para armonizar las normas encargadas de proteger el medio ambiente. *DOCE*, n.º C 190, de 11 de julio de 1991, p. 1, en relación con *DOCE*, n.º C 190, de 20 de julio de 1987, p. 154. Por otro lado, la Comunidad Europea dispone de un régimen armonizado en materia de evaluación de incidentes, adoptado el 27 de junio de 1985; véase *RENAUDIÈRE*, P. H., «La directive 85/337/CEE du 27 juin concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement», *L'évaluation des incidences sur l'environnement: un progrès juridique?*, sous la direction du CEDRE, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1991, p. 15; *LONDON* y *LLAMAS*, *EC Law...*, p. 58 y ss.; *TIZZANO*, «La hiérarchie...», pp. 234-236.

²⁰¹ *DOCE*, n.º C 212, de 5 de agosto de 1993, p. 33.

²⁰² *SADELEER*, *Le Droit...*, p. 430; *KRÄMER*, *Derecho ambiental...*, págs.16-19, 48-52; *THIEFFRY*, *Droit...*, pp. 44 y 199; *KISS* y *SHELTON*, *Traité...*, pp. 51 y ss.; *OUALLET*, *Les déchets...*, p. 85.

²⁰³ Resolución de 13 de marzo de 1996, *DOCE*, C 96/77 (1996)

sustitución de la Directiva 84/631²⁰⁴ por el Reglamento 259/93²⁰⁵, que ha incorporado al Derecho comunitario las disposiciones del Convenio de Basilea sobre el transporte de desechos peligrosos. Aunque las directrices principales del Reglamento no se aplican al transporte de desechos en el interior de los Estados miembros, éstos, no obstante, deben adoptar disposiciones equivalentes. Ahora bien, según la Comisión, el Reglamento llevó a cabo una armonización completa de las normas relativas a los traslados de residuos entre los Estados miembros, de forma que, en principio, éstos sólo pueden oponerse a los traslados de residuos sobre la base del reglamento²⁰⁶.

En la práctica que acaba de ser descrita, al igual que en la política comunitaria del medio ambiente, la Comisión ha sido el motor de las Instituciones Comunitarias, impulsando, como ha indicado M. Castillo Daudí, «la acción de la Comunidad, sin contar para ello con el fundamento jurídico preciso de los tratados constitutivos. Las iniciativas de la Comisión encontraron el eco apropiado en el Consejo y el oportuno respaldo del Tribunal de Justicia, al optar todos ellos por una interpretación pragmática de los Tratados, que hicieron posible el nacimiento y el desarrollo de la política comunitaria del medio ambiente»²⁰⁷.

Como hemos señalado más arriba, la contraposición de intereses en algunos ámbitos de la actividad comercial ha traído consecuencias muy variadas en los campos normativos, enfrentándolos entre sí²⁰⁸. El caso de los envases daneses puso de manifiesto algunos problemas iniciales en la interacción de la protección del medio ambiente y las regulaciones comerciales²⁰⁹. Parte de estas dificultades se originaron porque el Tratado de Roma fue concebido desde una perspectiva más o menos devota del comercio. De hecho, el Tratado

²⁰⁴ Directiva 84/631, *DOCE*, L 326/31 (1984).

²⁰⁵ Reglamento 259, *DOCE*, L 30/1 (1993).

²⁰⁶ La Comisión y la empresa holandesa *Dusseldorp* señalaron además que el artículo 130.T del Tratado sólo autoriza a los Estados miembros a adoptar una normativa en el caso de que sea compatible con los artículos 30 y siguientes del tratado. Asunto C-203/96, párrafo 35.

²⁰⁷ CASTILLO DAUDÍ, «La aportación...», p. 827; ID., «La política...», pp. 455-6; QUÉNEUDEC, *La contaminación...*, pp. 68-70.

²⁰⁸ Véanse, por ejemplo, las disposiciones comunitarias que prohíben la importación de algunas pieles procedentes de países que permiten la utilización de trampas de cebo (Reglamento 3254/91, *DOCE*, L 308/1 (1991)); la utilización de etiquetas ecológicas [Reglamento 880/92, *DOCE*, L 99/1 (1992)]; las medidas relativas a tributos ecológicos, envases, etiquetado y reciclado; la prohibición de ciertas sustancias, de productos o métodos de producción así, como prohibición de exportar aquellas mercancías cuyo uso esté prohibido en la Comunidad.

²⁰⁹ Asunto 302/86, Comisión c. Dinamarca (Envases daneses), *Rec.*, 1988, p. 4607.

no hacía expresa mención al medio ambiente dentro de las áreas en las que la Comunidad tiene competencias legislativas, lo que significa que ante la falta de disposiciones adoptadas por la Comisión, la regulación del medio ambiente concernía enteramente a los Estados ²¹⁰.

Hasta ahora los métodos de coordinación y/o armonización para evitar los problemas de incompatibilidad, de los que estamos hablando, se han desarrollado poco. Como ha indicado Kramer, «[l]os debates internacionales están muy politizados y en consecuencia se llega a menudo a decisiones políticas» ²¹¹. Conviene señalar que este problema ya se ha planteado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, pero en conflictos estrictamente comerciales que poco tienen que ver con el movimiento transfronterizo de desechos ²¹². Ahora bien, debemos tener presente que la armonización que resulte de estas decisiones puede inclinarse hacia la supremacía de las reglas comerciales sobre las normas ambientales internacionales ²¹³. Para simplificar, se puede decir que las relaciones entre normas sobre comercio y normas sobre protección del medio ambiente, a nivel internacional, se rigen por la prohibición de restringir cuantitativamente las importaciones o las medidas de efecto equivalente —como ocurre entre los Estados de la CE (art. 30, actual art. 28 del Tratado CE)—. Debemos admitir que en la actualidad el comercio y los intereses económicos prevalece-

²¹⁰ DUNLEAVY, M. W., «The limits of free trade: Sovereignty, environmental protection, and NAFTA», *NAFTA and the environment* (eds.) RUBIN, S. J., y ALEXANDER, D. C., *NAFTA Law and Policy Series*, vol. 3, Kluwer Law International, The Hague/London/Boston, 1996, p. 308.

²¹¹ KRÄMER, *Derecho ambiental...*, p. 73.

²¹² Cfr. Sentencia de 7 de febrero de 1985 (Asunto 173/83. Comisión de las Comunidades Europeas contra la República Francesa); especialmente la Sentencia de 7 de febrero de 1985 (Asunto 240/83. Procurador de la República Francesa contra Asociación de defensa de fabricantes, comerciantes y usuarios de calefactores que utilizan como combustible fuel o aceites usados).

²¹³ Cfr. Sería imprudente apresurarnos a sacar conclusiones demasiado precisas sobre este aspecto. Aquí es oportuno recordar la Sentencia de 7 de febrero de 1985, en la que el Tribunal de Justicia se pronunció sobre la conformidad de la Directiva 75/439 sobre eliminación de aceites usados, con los principios de libre comercio, libre circulación de mercancías y libre concurrencia, instituidos por el Tratado de Roma. En su sentencia el Tribunal respondió que «[d]ebe observarse, en primer lugar, que el principio de libertad de comercio está sujeto a determinados límites impuestos por los objetivos de interés general perseguidos por la Comunidad, si bien estos límites deben respetar siempre el contenido esencial de aquellos derechos... Nada permite concluir que la Directiva [75/439] haya rebasado esos límites. Esta Directiva se encuadra en el marco de la protección del medio ambiente, que es uno de los objetivos esenciales de la Comunidad... Resulta de cuanto precede que las medidas previstas por la Directiva no pueden obstaculizar los cambios intracomunitarios y que estas medidas, y especialmente las autorizaciones previas, son susceptibles de tener un efecto restrictivo sobre el libre ejercicio del comercio y la libre competencia, no pueden resultar discriminatorias ni superar las restricciones inevitables [...] como es la protección del medio ambiente...». Tribunal del Justicia, asunto 240/83, párrs. 12, 13 y 15. Véase, Kiss, *Droit...*, p. 332.

rán sobre los ambientales, tal como lo ponen de manifiesto los debates internacionales sobre la materia²¹⁴. Ciertos elementos indican, por ejemplo, que en los países que comienzan a industrializarse la liberalización de los intercambios tiende a traducirse en una intensidad de la contaminación²¹⁵. Correlativamente, las medidas adoptadas por los Estados para proteger el medio ambiente influyen sobre las relaciones comerciales internacionales, alterando frecuentemente las condiciones de producción y el coste de comercialización de las mercancías²¹⁶.

Así, el devenir de la unificación de las reclamaciones ambientales en las reglas del comercio internacional concierne directamente al trabajo de armonización, que se irá logrando progresivamente a través de soluciones de compromiso y especialmente mediante las soluciones de ámbito regional, como el Área de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) o la Unión Europea²¹⁷. Por ello, el estudio de la incidencia de las técnicas de cooperación especializada en el fenómeno de la armonización de los Tratados internacionales cobra un especial interés.

Antes de seguir adelante, es obligada la referencia, aunque sea muy somera, al control previo de la conformidad con el Derecho Comunitario de los acuerdos internacionales que proyecta celebrar la Comunidad (art. 300 CE, antiguo art. 228.6 del TCE) y que constituye, según la jurisprudencia relativa a ese artículo, «un procedimiento especial de colaboración entre el Tribunal de Justicia, por una parte, las demás Instituciones comunitarias y los Estados miembros por otra, en el cual el papel del Tribunal de Justicia consiste en garantizar, conforme al artículo 164 del Tratado, el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación del Tratado en una fase anterior a la celebración de

²¹⁴ Como se sabe, la propia CE es proclive a tolerar la prevalencia de los intereses comerciales sobre la protección del medio ambiente. Véase la Resolución del Parlamento Europeo de 24 de mayo de 1996, *DOCE*, C 166/260 (1996).

²¹⁵ BIRSALL, N., y D. WHEELER, «Trade Policy and Industrial Pollution in Latin America: Where are the Pollutions Havens?», *Journal of Environment and Development*, vol. 2, n.º 1.

²¹⁶ El Órgano de apelación de la OMC determinó en un informe emitido en 1998 que la normativa de Estados Unidos establecida para prohibir la comercialización de camarones, capturados con métodos de pesca diferentes a los aplicados en Estados Unidos, era incompatible con el artículo XI del GATT. O.M.C., Informe del Órgano de apelación en el asunto Estados Unidos-Prohibición de las importaciones de determinados camarones y productos del camarón, distribuido el 12 de octubre de 1998, *WT/DS58*.

²¹⁷ KRÄMER, *Derecho ambiental...*, p. 73; CHARNOVITZ, «Multilateral...», *EPL*, 26/4 (1996) p. 167; ID., «The NAAEC and its implications for environmental cooperation, trade policy, and American treaty-making», *NAFTA and the environment*, pp. 43-4; DUNLEAVY, «The limits of free trade...», p. 378 y ss.

un acuerdo que pueda dar lugar a litigios sobre la legalidad de un acto comunitario de celebración, de ejecución o de aplicación»²¹⁸. De este modo, cuando el Tribunal de Justicia emita un dictamen negativo, el acuerdo solamente podrá entrar en vigor con la previa aplicación del procedimiento de modificación de los Tratados señalados en el artículo 48 UE (antiguo art. N del Tratado de la Unión Europea)²¹⁹.

Se trata, en definitiva, de un mecanismo idóneo desde el punto de vista jurídico-internacional para asegurar la conformidad de las obligaciones convencionales al TCE²²⁰, que contribuye a evitar los inconvenientes de un control *a posteriori* no sólo en el plano comunitario, sino también en el de las relaciones internacionales, incluidos los países terceros²²¹, tal como lo demuestran varios fallos del Tribunal²²², entre los que se incluye el célebre

²¹⁸ Dictamen 2/94, de 28 de marzo de 1996, *Rec.*, p. I-1760.

²¹⁹ KOVAR, R., «La compétence consultive de la Cour de justice et la procédure de conclusion des accords internationaux par la Communauté», *Le Droit International: unité et diversité, Mélanges offerts à P. Reuter*, Paris, pp. 357-377; SØRENSEN, M., «Juridictions spéciales», *Manuel sur les organisations internationales (A Handbook on international organizations)*, p. 174; REMIRO BROTONS, A., «Las relaciones exteriores de las comunidades europeas», *Tratado de Derecho Comunitario Europeo*, dirigido por E. García de Enterría, J. D. González Campos y S. Muñoz Machado, Civitas, Madrid, 1986, vol. III, p. 674 y ss.; MENGÖZZI, *Derecho comunitario...*, p. 419; PAZARCI, «Problèmes...», p. 404; CHUECA SANCHO, A., «La aplicación de los acuerdos internacionales en el orden jurídico comunitario», F. Mariño (ed.) *Acción exterior de la Unión Europea y comunidad internacional*, Madrid, BOE, Universidad Carlos III, 1998, p. 302 y ss.; Díez-Hochleitner, J., y MARTÍNEZ CAPDEVILA, C., *Derecho de la Unión Europea. Textos y comentarios*, McGraw Hill, Madrid, 2001, pp. 424-431.

²²⁰ Díez-Hochleitner, J., *La posición del Derecho Internacional en el Ordenamiento Comunitario*, McGraw Hill, Madrid 1998, p. 99. Entre los medios apropiados para evitar conflictos, este autor señala cuatro posibilidades: la negociación con el tercero con vistas a introducir enmiendas en el acuerdo; su denuncia por el Estado miembro; su sustitución por otro acuerdo celebrado por la Comunidad, y la adhesión de la Comunidad al acuerdo anterior.

²²¹ Por ejemplo, en el Dictamen 1/91 sobre la compatibilidad del Proyecto de Acuerdo para la creación de un Espacio Económico Europeo (EEE) entre la Comunidad y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, el Tribunal subrayó los problemas generales que resultarían de la aplicación del sistema jurisdiccional previsto en el Proyecto de Acuerdo. Concretamente, recordó que «el Tribunal EEE debe garantizar el buen funcionamiento de un régimen de libre comercio y de competencia en el marco de un Tratado internacional que sólo crea obligaciones entre las partes contratantes. En cambio, el Tribunal de Justicia debe garantizar el respeto de un ordenamiento jurídico particular y contribuir a su desarrollo con el fin de alcanzar los objetivos enunciados en los artículos 2, 8.A y 102.A del Tratado CEE y de realizar entre los Estados miembros una unión europea».

²²² Dictamen 1/75, de 11 de noviembre de 1975, Proyecto de acuerdo relativo a una norma para los gastos locales, *Rec.*, pp. 1355 y ss.; Dictamen 1/76, de 26 de abril de 1977, Proyecto de acuerdo para el establecimiento de un Fondo Europeo de inmovilización de la navegación interior, *Rec.* 741 y ss.; Dictamen 1/78, de 4 de octubre de 1979, Acuerdo internacional sobre el caucho

dictamen 1/94, de 15 de noviembre de 1994, sobre el Acuerdo constitutivo de la OMC²²³.

Debe resaltarse además que el control de consulta previo ofrece la ventaja de sustanciarse a través de un procedimiento más simple que el recurso contencioso, al tiempo que permite al Tribunal poner de manifiesto ciertas incertidumbres de los textos convencionales precisos y claros adoptados a través del proceso de negociación y conclusión de los acuerdos internacionales, evitando los discursos políticos que ellas engendran²²⁴. Por supuesto, de un razonamiento de estas características no han de sacarse conclusiones definitivas. Cuantitativamente, la práctica de este mecanismo aún es limitada —no supera la docena de casos—, y aunque sugiere una tendencia creciente en cuanto a su uso, todavía son muchos los aspectos carentes de una regulación expresa; entre ellos, hay que subrayar que el texto (art. 300) no diferencia de manera precisa los casos de figuras que requieren de reglas diferentes, en particular el carácter mixto de ciertos acuerdos²²⁵.

Un aspecto central viene determinado por los efectos del control de compatibilidad con el Tratado de un acuerdo ya celebrado, especialmente por el

natural, *Rec.*, pp. 2871 y ss.; Dictamen 1/91 de 14 de diciembre de 1991, Proyecto de acuerdo sobre la creación del Espacio Económico Europeo, *Rec.*, pp. I-6079 y ss.; Dictamen 2/91, de 19 de marzo de 1993, Convenio núm. 170 de la OIT sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo, *Rec.*, pp. I-1061 y ss.; Dictamen 1/92, de 10 de abril de 1992, Proyecto de acuerdo sobre creación del Espacio Económico Europeo, *Rec.*, pp. I-2821 y ss.; Dictamen 2/92, de 24 de marzo de 1995, Participación de la Comunidad en la Tercera Decisión revisada del Consejo de la OCDE relativa al trato nacional, *Rec.*, pp. I-525 y ss.; Dictamen 1/94, de 15 de noviembre de 1994; Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, *Rec.*, pp. I-5267 y ss.; Dictamen 2/94, de 28 de marzo de 1996, Adhesión al Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, *Rec.*, pp. I-1759 y ss.; y Dictamen 3/94, de 13 de diciembre de 1995, Acuerdo marco sobre los plátanos, *Rec.*, pp. I-4579 y ss.

²²³ Dictamen 1/94; la Sentencia del 23 de noviembre de 1999, C-149/96, párrs. 47 y 48; Decisión del Consejo 96/412, del 25-6-1996, referente a la celebración en nombre de la Comunidad de los acuerdos producidos tras las negociaciones de la OMC, relativas a servicios financieros y movimiento de personas físicas (*DOCE*, L 167, de 6-7-1996). BERMEJO GARCÍA, R., y L. SAN MARTÍN SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, «Del GATT a la Organización Mundial del Comercio: Análisis y perspectivas de futuro», *An.HLADI*, vol. XII, 1996, pp. 147-200; SMITS, C., «Vers une extension de la politique commerciale commune au commerce des services ?», *L'Union Européenne et le monde apres amsterdam*, Marianne Dony, Études Europeennes, éditions de l'Université de Bruxelles, 1999, p. 193 y ss.

²²⁴ DE WALSCHÉ, «L' article 228...» pp. 73 y ss.

²²⁵ Añadamos aquí la aplicación provisional de los Acuerdos, pues el texto no tiene en cuenta el hecho de que la firma de ciertos instrumentos se realiza antes de su conclusión; en cambio, en otros la firma viene solamente a autenticar el texto del acuerdo antes de su conclusión posterior. Otro aspecto aún sin clarificar atañe directamente a la falta de regulación sobre la suspensión parcial de la aplicación de los acuerdos internacionales o de su denuncia. DE WALSCHÉ, «L' article 228...» p. 74.

riesgo de que un dictamen negativo afecte a la observancia de los Tratados constitutivos si son declarados incompatibles²²⁶. No debe extrañar, por tanto, que el propio Tribunal vea con cierto recelo la adopción de decisiones sobre este aspecto y prefiera, por tanto, que el Estado o la Institución comunitaria que haya solicitado el dictamen disponga del recurso de anulación contra la decisión del Consejo de concluir el acuerdo o solicite medidas cautelares mediante una demanda de medidas provisionales²²⁷.

Por último, el recurso se encuentra aún limitado a los Acuerdos internacionales que celebra la Comunidad, omitiéndose por ahora la solicitud de un dictamen relacionado directamente con un acto obligatorio de una organización internacional de la que sea miembro la CE, o de un órgano creado por un acuerdo concluido con terceros Estados²²⁸.

²²⁶ REMIRO BROTONS, «Las relaciones exteriores... », p. 578; MONJAL, «La Conférence...», p. 683.

²²⁷ Dictamen 1/91, párrafo 22.

²²⁸ Díez-HOCHLEITNER, *La posición...*, p. 108.

CAPÍTULO III: LA ARMONIZACIÓN DEL CONVENIO DE BASILEA CON LOS PRINCIPALES CONVENIOS INTERNACIONALES RELATIVOS AL RÉGIMEN DEL COMERCIO INTERNACIONAL

A) CUESTIONES GENERALES

El crecimiento de una actividad económica a escala mundial normalmente suele saldarse con un aumento del daño al medio ambiente (por ejemplo, porque aumenta la emisión de gases nocivos a la atmósfera)²²⁹. A medida que la globalización económica se consolida, aumenta la necesidad de instaurar la convergencia de su regulación con la de los problemas ambientales. Lo cierto es que surge la necesidad de desarrollar acciones concretas, pues están en vigor disposiciones sobre el trato al medio ambiente que podrían ser impugnadas en razón de su incompatibilidad con las reglas de la OMC, que es la Organización fundamental en la perspectiva de afrontar la elaboración de reglas relativas a procesos económicos globales. En un intento por subsanar este problema, el Consejo General de esta organización creó a comienzos de 1995 el «Comité sobre comercio y medio ambiente»²³⁰.

²²⁹ *Mundialisatión et environnement...*, p. 26.

²³⁰ En 1996 el Comité elaboró el primer informe de sus actividades, pero sin analizar los aspectos más importantes sobre la concurrencia entre el derecho ambiental y el comercio internacional. Véase, *Organización Mundial del Comercio, Informe del Comité sobre Comercio y*

El resultado de los dos primeros años de trabajo del Comité ha sido exiguo, al no proponer ninguna medida concreta para resolver las incongruencias normativas que se desprenden de la vinculación entre comercio internacional y la protección del medio ambiente²³¹. El Comité se ha limitado a recordar las clásicas soluciones multilaterales, basadas en la cooperación internacional y el consenso, resaltando la importancia de una mayor coordinación entre Estados en el ámbito del comercio y la protección del medio ambiente.

El análisis y armonización de los tratados más relevantes, entre los que surge la concurrencia o el conflicto de normas, aún no han sido abordados por el Comité; no obstante, podemos señalar algunos instrumentos que, en aras de proteger el medio ambiente, establecen importantes restricciones al comercio y que afectan incluso a aquellos Estados no partes en los mismos, tales como el Protocolo de Montreal sobre las sustancias que destruyen la capa de ozono, el Tratado CITES sobre comercio de especies amenazadas de extinción, ciertas normas del derecho comunitario ambiental²³² y, por supuesto, el Convenio de Basilea sobre el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos. La cuestión importante aquí es resolver el conflicto que subyace entre las restricciones comerciales establecidas por los tratados indicados, y la normativa comercial de la OMC.

B) SOLUCIÓN DE CONFLICTOS NORMATIVOS EL MARCO DE LA OMC

El sistema jurídico de la OMC necesita varias modificaciones para adaptarlo a la búsqueda de soluciones a los problemas medioambientales que se

Medio Ambiente, Nueva York, 1996; véase a este respecto la Decisión sobre comercio y medioambiente, *ILM*, núm. 33, 1994, pp. 1267-1269. Para un análisis, véase SCHULTZ, J., «The GATT/WTO Committee on trade and environment-Toward environmental reform», *AJIL*, 1995, vol. 89, núm. 2, pp. 423-439; LONDON y LLAMAS, *EC law...*, pp. 168-172; VAN CALSTER, G., «The World Trade Organisation Committee on trade and environment: Exploring the challenges of the greening of free trade», *Eur. Env. L.R.*, vol. 5, núm. 2, febrero 1996, pp. 44-51; SAN MARTÍN SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, *La Organización...*, pp. 55-60.

²³¹ Véase también la síntesis de los trabajos realizados en el OIMT, la OCDE y la OMC sobre la vinculación entre comercio internacional y medio ambiente. Documento COM(97)260 final, de 2 de junio de 1997.

²³² En general, véase Comisión Europea, Documento Com (96) 54, del 28 de febrero de 1996. Junto a las disposiciones comunitarias que se han señalado para ejecutar tratados, nos encontramos también las disposiciones promulgadas para prohibir la importación de ciertas pieles procedentes de aquellos países que permiten el uso de trampas de cebo, el empleo de etiquetas ecológicas, la prohibición de ciertas sustancias, etc. Véase Reglamento 3254/91, *DOCE*, L 308/1 (1991), y Reglamento 880/92, *DOCE*, L 99/1 (1992).

están planteado en el marco de las relaciones comerciales, y por ello a la adopción de medidas destinadas a la protección del medio ambiente. Las restricciones capaces de impedir o interferir en las transacciones internacionales de mercancías y servicios son numerosas y heterogéneas. Sin entrar en ninguna de las abundantes sistematizaciones doctrinales sobre la materia —no es éste el lugar para hacerlo—, nos referiremos especialmente a las restricciones al comercio internacional producidas por los llamados *obstáculos técnicos* resultantes de las divergencias entre las normas internas de diferentes Estados, relativas a la comercialización de ciertas mercancías «peligrosas». Estas normas nacionales se adoptan para proteger intereses sociales fundamentales, como la salud pública y la integridad del medio ambiente, que pueden sufrir algún perjuicio en un contexto de plena libertad de comercio. La adopción de estas restricciones en algunos casos proviene de la obligatoriedad para el Estado o Estados de un tratado internacional determinado. Un ejemplo muy citado de obstáculo técnico lo constituye la prohibición de importar carne tratada con hormonas a la Comunidad Europea, prohibición que no aplican otros países como Estados Unidos. La normativa comunitaria que establece la prohibición ha sido considerada incompatible con el sistema jurídico de la OMC por el órgano de apelación²³³.

Con razón, los acuerdos comerciales multilaterales, que conforman el sistema jurídico de la OMC, recogen una serie de principios básicos destinados a eliminar o a reducir el impacto de los obstáculos al comercio internacional de mercancías²³⁴. Entre ellos conviene destacar el llamado *least trade-distorting regulation principle*, mediante el cual se exige a los Estados que ejerzan sus competencias soberanas en materia económica de tal forma que afecten lo menos posible al comercio internacional. Este principio que no se recoge en el GATT de 1994, pero que sí aparece en el artículo VI del GATS, y el Acuerdo sobre los Obstáculos Técnicos al Comercio utiliza, entre las técnicas idóneas

²³³ OMC, Informe del Órgano de apelación en el asunto Comunidades Europeas-Medidas que afectan a la carne y a los productos cárnicos tratados con hormonas, distribuido el 16 de enero de 1998, *WT/DS26* y *WT/DS48*).

²³⁴ a) El principio de protección aduanera exclusiva; b) el principio de no discriminación entre los productos y servicios nacionales y los extranjeros, y c) el principio que establece la obligación de transparencia en relación con las normas internas referentes a la producción y comercialización de mercancías y servicios. Para una aproximación a los principios de actuación del GATT, DÍAZ MIER, M. A., *Del GATT a la Organización Mundial del Comercio*, Síntesis, Madrid, 1996, pp. 55 y ss; MONTAÑA MORA, M., *La OMC y el reforzamiento del sistema GATT*, McGraw Hill, Madrid, 1997, pp. 42-46.

para su aplicación, la armonización de las normas nacionales divergentes y el reconocimiento mutuo.

Por otra parte, la aplicación de los principios liberalizadores propios del sistema jurídico de la OMC requieren, por la complejidad del comercio internacional, que su aplicación se realice de forma dúctil ²³⁵. Esto constituye el fundamento de muchas excepciones, derogaciones y cláusulas de salvaguardia del régimen jurídico de la OMC. Por ejemplo, el artículo XX del GATT en sus letras *a)*, *b)* y *d)* contiene las excepciones generales que facultan a los Estados para adoptar medidas contrarias a los principios liberalizadores del sistema de la OMC con el fin de proteger determinados intereses esenciales, tales como la moral pública, la salud y la vida de las personas, animales, la preservación de los vegetales, etc. ²³⁶. El Órgano de apelación de la OMC puntualizó el alcance y la aplicación de estas excepciones, señalando que es preciso demostrar la necesidad de la reglamentación nacional restrictiva para proteger alguno de los intereses contemplados en el artículo XX y, además, que se debe verificar que dicha reglamentación no entraña una discriminación encubierta o una restricción arbitraria del comercio internacional ²³⁷.

En lo referente a las fórmulas previstas para eliminar los conflictos entre las disposiciones de los propios tratados que configuran el régimen jurídico de la OMC, cabe señalar en primer lugar los anexos 1, 2 y 3 que recogen los llamados

²³⁵ Tal como ha observado L. SAN MARTÍN SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, «... hoy en día, la armonización no debe entenderse como la adopción de normas idénticas y uniformes para los distintos países, sino como un instrumento más sutil, más flexible....». SAN MARTÍN SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, *La Organización...*, p. 145.

²³⁶ El texto del artículo XX del GATT, encargado de regular las *excepciones generales*, establece:

«A reserva de que no se apliquen las medidas enumeradas a continuación en forma que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los países en que prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción encubierta al comercio internacional, ninguna disposición del presente Acuerdo será interpretada en el sentido de impedir que toda parte contratante adopte o aplique las medidas: *a)* necesarias para proteger la moral pública; *b)* necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales; *c)* relativas a la importación o a la exportación de oro o plata; *d)* necesarias para lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, tales como las leyes y reglamentos relativos a la aplicación de las medidas aduaneras, al mantenimiento en vigor de los monopolios administrados de conformidad con el párrafo 4 del artículo II y con el artículo XVII, a la protección de patentes, marcas de fábrica y derechos de autor y de reproducción, y a la prevención de prácticas que puedan inducir a error; *e)*...».

²³⁷ OMC, Informe del Órgano de apelación en el asunto Estados Unidos-Pautas para la gasolina reformulada y convencional, distribuido el 22 de abril de 1996, *WT/DS2* y *WT/DS4*; *ILM*, 1996, vol. 35, p. 274.

«Acuerdos Comerciales Multilaterales» (ACM), los cuales forman parte integrante del Acuerdo constitutivo de la OMC y son vinculantes para todos los Estados miembros (art. II.2 del Acuerdo OMC). En caso de conflicto entre una disposición del Acuerdo de la OMC y una disposición de cualquiera de los ACM prevalecerá, en el grado en que haya conflicto, la disposición del Acuerdo de la OMC (art. XVI.3). En segundo lugar, el Anexo 4 del Acuerdo OMC se refiere a los llamados «Acuerdos Comerciales Plurilaterales», que constituyen, al igual que los Acuerdos Comerciales Multilaterales, *lex specialis* respecto del GATT de 1994; por ello, en caso de conflicto entre ambos, las disposiciones de los primeros prevalecerán sobre el segundo²³⁸. Por último, el «entendimiento» confiere facultades al Órgano de Solución de Diferencias para dirimir los conflictos entre normas y procedimientos de más de un tratado «cuando las partes en la controversia no se hayan puesto de acuerdo sobre las normas y el procedimiento dentro de los veinte días siguientes al establecimiento de un grupo especial»²³⁹. El Presidente del OSD se guiará, siempre que sea posible, por el principio que establece la aplicación prioritaria de las normas y procedimientos especiales o adicionales²⁴⁰.

Lo cierto es que las contradicciones y tensiones normativas se revelaron ante la Organización del Comercio Internacional en 1991, especialmente en el asunto de las restricciones impuestas por Estados Unidos a las importaciones de atún provenientes de México²⁴¹, y, más tarde, en el asunto de las normas

²³⁸ En efecto, según lo dispuesto en la nota interpretativa general al Anexo 1A (Acuerdos multilaterales sobre el comercio de mercancías), «en caso de conflicto entre una disposición del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y una disposición de otro acuerdo, incluido en el Anexo 1A del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (denominado en los Acuerdos del Anexo 1A "Acuerdo sobre la OMC"), prevalecerá, en el grado en que haya conflicto, la disposición del otro acuerdo». Véase, MONTAÑA MORA, *La OMC...*, p. 20.

²³⁹ Anexo 2, Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que se Rige la Solución de Diferencias, artículo 1.2. Conviene advertir a este respecto, siguiendo al profesor A. Remiro Brotons, «que el conjunto de acuerdos que tienen en la OMC su guardián son susceptibles de originar otras diferencias que no parecen incluidas dentro del sistema articulado en el *Entendimiento*. Ese es el caso, por ejemplo, de las diferencias que puede originar la interpretación misma del Acuerdo sobre la OMC y de los Acuerdos Comerciales Multilaterales, sobre las que han de pronunciarse en primer término las Conferencia Ministerial y el Consejo General en atención a la *facultad exclusiva* de interpretación que se les ha conferido [art. IX.2 del acuerdo por el que se establece la OMC]». REMIRO BROTONS, A., «Pelagattos y aristogattos de la Comunidad Europea ante el reino de la OMC», *Gaceta Jurídica de la CE*, D-26, 1996, p. 31.

²⁴⁰ *Ibid.*, Anexo 2, Entendimiento..., artículo 1.2.

²⁴¹ Las autoridades americanas adujeron que la práctica pesquera mexicana no era conforme con la legislación de Estados Unidos en lo relativo a los límites establecidos a las artes de pesca para evitar la mortalidad de los delfines durante la pesca del atún. Las medidas unilaterales adoptadas por Estados Unidos fueron objeto de severas críticas por un grupo especial del GATT en 1991 y de nuevo en 1994. Véase: Asunto relativo a las restricciones americanas sobre la importación de atún,

norteamericanas sobre gasolinas de 1996²⁴². Ambos asuntos mostraron que, en el caso de ejercicio de medidas unilaterales de restricción para proteger el medio ambiente, los grupos especiales de la OMC/GATT privilegian la filosofía del libre comercio sobre las consideraciones ambientales.

En estas condiciones se impone un esfuerzo de coordinación mayor, ya que en el veredicto de los árbitros de la OMC acerca de la compatibilidad del nuevo régimen de la CE para el comercio del banano con el Acuerdo de la OMC²⁴³, la Comisión arbitral decidió en la misma línea marcada anteriormente por el OSD en la solución del asunto *Comunidades Europeas - Régimen para importación, venta y distribución de bananos*, es decir, como una instancia orientada a favorecer la eficacia de las políticas comerciales y con potestad suficiente para obligar a la UE a adoptar las directrices establecidas en los acuerdos e instrumentos conexos de la OMC²⁴⁴. Debemos tener presente que la principal función del OSD es jurídica y no económica. Admitida esta óptica, la solución de conflictos entre normas ambientales y comerciales implica la adopción obligada o anticipada de normas y políticas de ambas materias en un nuevo marco institucional, más coordinado y equilibrado²⁴⁵.

C) ARMONIZACIÓN ENTRE LAS NORMAS DE LA OMC Y EL CONVENIO DE BASILEA

En un plano más específico, los conflictos normativos que pueden suscitarse entre las normas del Convenio de Basilea y las disposiciones comerciales

Panel del GATT, Informe del 16 de agosto de 1991, reproducido en *ILM*, 1991, vol. 30, p. 1594; Panel de GATT, Informe de junio de 1994, reproducido en *ILM*, 1994, vol. 34, p. 839.

²⁴² El OSD de la OMC señaló que una reglamentación adoptada por la *Environmental Protection Agency* de los Estados Unidos sobre importación de petróleo y calidad de refinerías locales, cuyo objeto era reducir la contaminación atmosférica producida por los vehículos, violaba el principio de tratamiento nacional aplicable a las «mercancías» provenientes de terceros países. El transcurso de la reglamentación residía en favorecer la producción y consumo del petróleo producido por Estados Unidos y Canadá. *Ibid.*, *WT/DS2* y *WT/DS4*; *ILM*, 1996, vol. 35, p. 274.

²⁴³ *Comunidades Europeas - Régimen para la importación, venta, distribución de bananos* y Recurso de las Comunidades Europeas al arbitraje previsto en el párrafo 6 del artículo 22 del ESD. Véase OMC, *WT/DS27/ARB*, 9 de abril de 1999.

²⁴⁴ *Ibid.*, *WT/DS27/ARB*, p. 37, párrafos 5.78, 5.79, 5.80.

²⁴⁵ COMPÉS LOPEZ, R.; GARCÍA ALVAREZ-COQUE, J. M., y ALDANONDO OCHOA, A. M., «La OMC y la solución de diferencias comerciales: el caso del plátano», *Revista española de economía agraria*, 1998, n.º 181, p. 152 y la bibliografía ahí citada. A este respecto véase también, REMIRO BROTONS, «Pelagattos...», p. 55.

del GATT pueden sintetizarse, según ha indicado P. Cubel, en tres categorías: en primer lugar, la ejecución de la obligación de no autorizar exportaciones ni importaciones de desechos peligrosos a Estados no parte en el Convenio de Basilea (art. 4.5) puede colisionar con el principio de la nación más favorecida, contenido en el artículo I²⁴⁶, y con el principio de prohibición de las restricciones cuantitativas, regulado en el artículo XI del GATT²⁴⁷; en segundo lugar, la posibilidad de adoptar prohibiciones nacionales de importaciones de desechos peligrosos, a la luz de los artículos 4.1.a) y 13 del Convenio de Basilea, puede entrar en conflicto con dos principios fundamentales del Acuerdo GATT, nuevamente el principio de la nación más favorecida del artículo I, y con el principio de prohibición de las restricciones cuantitativas, regulado en el artículo XI. Por último, el nuevo artículo 4.A²⁴⁸ del Convenio de Basilea puede colisionar con los principios ya mencionados de la nación más favorecida y eliminación de restricciones cuantitativas²⁴⁹.

²⁴⁶ El artículo I del GATT establece que «cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedido por una parte contratante a un producto originario de otro país o destinado a él, será concedido inmediata e incondicionalmente a todo producto similar originario de los territorios de todas las demás partes contratantes». Hay que hacer notar que el Convenio de Basilea prohíbe el comercio de desechos peligrosos con algunos países (de Estados parte a Estados no parte en el Convenio, y de países de la OCDE a países no pertenecientes a la OCDE), en cambio lo permite con otros, por lo que estas obligaciones violan manifiestamente el principio antes mencionado de la OMC.

²⁴⁷ De acuerdo con el artículo XI, «[n]inguna parte contratante impondrá ni mantendrá —aparte de los derechos de aduana, impuestos u otras cargas— prohibiciones ni restricciones a la importación de un producto del territorio de otra parte contratante o a la exportación o a la venta para la exportación de un producto destinado al territorio de otra parte contratante...». En otras palabras, la adopción de prohibiciones a la importación y exportación están denegadas por el artículo XI. En este contexto, el consentimiento previo de informar sobre los requerimientos administrativos establecidos en el Convenio de Basilea pueden considerarse cuantitativamente restrictivos al comercio. Esta colisión normativa es perfectamente visible, por ejemplo, en la Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent (PIC) Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade, adoptada en Rotterdam (traducir) el 10 de Septiembre de 1998.

²⁴⁸ De conformidad con la enmienda introducida al Convenio de Basilea en 1995, a través de la Decisión III/1, «1. Cada parte incluida en la lista que figura en el el Anexo VII (partes y otros Estados que son miembros de la OCDE, la CE y Liechtenstein) prohibirá todos los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos destinados a operaciones previstas en el Anexo IV.A (operaciones que no puedan conducir a la recuperación de recursos, el reciclado, la regeneración, la reutilización directa y otros usos) hacia Estados no incluidos en la lista que figura en el Anexo VII». Sobre este punto véase el «Draft guidance elements for bilateral, multilateral or regional agreements or arrangements», Legal Working Group of the Basel Convention, Second Session, Geneva, 12-13 october 2000, UNEP/CHW/LWG/2/5Rev.1.

²⁴⁹ CUBEL SÁNCHEZ, P., «El comercio internacional de desechos y la protección del medio ambiente: la organización mundial del comercio y el Convenio de Basilea sobre movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación», *Anuario de Derecho Internacional*, 1998, vol. 14, pp. 686-7.

La cuarta posibilidad de colisión atañe al principio del trato nacional prescrito en el artículo III del GATT²⁵⁰ y, finalmente, a las excepciones generales contempladas en el artículo XX del GATT²⁵¹.

Con este análisis se comprueba la presencia de exigencias contradictorias entre ambos tratados. Además, se pone de manifiesto la posibilidad de que los desechos tóxicos susceptibles de ser reciclados puedan catalogarse como «productos» bajo el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Y a la inversa, emerge la posibilidad de que éstos no reciban la consideración de «productos», con lo que el análisis de las disposiciones sobre comercio de desechos puede llegar a considerarse como un servicio, de acuerdo con las disposiciones del GATS, que establecen virtualmente idénticos principios que el GATT. Por tanto, las esferas del Convenio de Basilea y la OMC estarían verdaderamente entrecruzadas al colisionar las prohibiciones del Convenio de Basilea con los principios y cláusulas de la OMC²⁵².

Para resolver estos problemas los Estados podrán acogerse al régimen general de solución de controversias de la OMC y, alternativamente, al procedimiento de arbitraje o a cualquier otro de los contemplados en el artículo 20 del Convenio de Basilea.

²⁵⁰ Este principio establece que «[l]os productos del territorio de toda parte contratante importados en el territorio de cualquier otra parte contratante no deberán recibir un trato menos favorable que el concedido a los productos similares de origen nacional...». Este principio fundamental del GATT parece contradecir directamente un principio fundamental del Convenio de Basilea que establece la autosuficiencia en la gestión de los desechos peligrosos. Por ejemplo, un país no perteneciente a la OCDE tendrá que ocuparse de sus propios desechos a través de sus servicios nacionales; por el contrario, un país no miembro de esta organización fácilmente podría cuestionar la prohibición para exportar o importar el mismo servicio. Por otra parte, la afirmación del principio de trato nacional garantizaría que ningún país será capaz de cumplir una prohibición de importación nacional, un derecho que ha sido ejercido en la práctica por más de cien países y que esta garantizado por el Convenio de Basilea. PUCKETT, *When trade...*, p. 23; SAN MARTÍN SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, *La organización...*, pp. 173 y ss.; LOIBL, G., «Trade and environment – a difficult relationship new approaches and trends: the Kyoto Protocol and beyond», *Liber Amicorum Professor Ignaz Seidl-Hohenveldern*, pp. 421-424.

²⁵¹ Bien llevado, este análisis debería permitirnos apreciar mejor las posibilidades de conflicto entre las disposiciones de la OMC (art. XX) y las prohibiciones establecidas en el Convenio de Basilea. Entre ellas podemos citar las siguientes: a) el Convenio de Basilea expresamente garantiza el derecho de los Estados de prohibir la importación de desechos (art. 4.1); b) el Convenio de Basilea prohíbe el comercio entre Estados parte y no parte (art. 4.5), y, c) las partes decidieron modificar el Convenio para prohibir el comercio de desechos entre la OCDE y los Estados no miembros de la OCDE (Decisión III/1 1995, texto en Basel Action Network website: www.ban.org).

²⁵² PUCKETT, *When trade...*, p. 23; SMITS, «Vers une extension...», p. 197.

Probablemente, esta afirmación no será refutada por nadie. Sin embargo, todas sus implicaciones aún distan mucho de ser exploradas. Nos limitaremos aquí, por tanto, a exponer algunos criterios que nos ayuden a determinar el régimen sustantivo predominante y, lo que es más importante, el órgano internacional competente para conocer de esos conflictos.

La solución parece simple en razón del criterio de especialidad recibido de forma favorable por el propio Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC, pues recomendó a los Estados miembros de esa organización, que a su vez sean parte en tratados ambientales, que recurran de forma preferente a los mecanismos de solución de controversias previstos en esos instrumentos ambientales²⁵³. Ello conduce inevitablemente a la aplicación del procedimiento de arbitraje (o mediación), regulado en el artículo 20 del Convenio de Basilea, asegurando además el recurso a un mecanismo que gozaría de todas las garantías de imparcialidad frente a las presiones de los intereses comerciales.

Su infortunio, al menos por ahora, parte de que solamente un número muy limitado de Estados se muestra interesado en su instauración²⁵⁴. Además, la aplicación preferente de este procedimiento conlleva un obstáculo insalvable para articular la aplicación armonizada de las normas comerciales y ambientales, derivado de la insistencia en exigir por encima de todo el respeto del Convenio de Basilea y la primacía de su *lex specialis*.

Desde un punto de vista práctico, aumentarían las dificultades operativas que plantea la solución específica del caso concreto en la armonización de regímenes incompatibles, ya que esta solución «pecaría siempre de particularidad e impediría realizar una interpretación general válida para distintas situaciones que garantice a los operadores comerciales la previsibilidad y seguridad jurídica que proporcionaría una interpretación institucionalizada procedente del OSD de la OMC»²⁵⁵.

²⁵³ Informe del Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC, Conferencia Ministerial de Singapur de 1996, Doc. WT/CTE/W/40.

²⁵⁴ La Secretaría del Convenio de Basilea hizo circular entre las partes (8 de febrero del 2000 y 27 de abril del 2000) un cuestionario sobre el sistema de solución de controversias (art. 20) con la intención de facilitar el progreso en esta materia. El informe muestra que solamente seis Estados opinaron al respecto: Australia, Dinamarca, Comisión Europea, Islandia, Israel y el Reino Unido. Cuatro de estos países contestaron que el mecanismo del artículo 20 era suficiente para cubrir las necesidades de los Estados partes y no requería ninguna modificación. Véase el «Analysis of the dispute settlements mechanism under article 20 of the Basel Convention», Legal Working Group of the Basel Convention, Second Session, Geneva, 12-13 october 2000, UNEP/CHW/LWG/2/6, 24 august 2000.

²⁵⁵ CUBEL SÁNCHEZ, «El comercio...», p. 691.

La tarea de clarificación, reservada al sistema de solución de diferencias de la OMC, contempla aspectos relativos a la articulación de normas incompatibles desde un punto de vista técnico. H. Ruiz sitúa la articulación en tres registros principales: los problemas de articulación temporal entre el Derecho del GATT y el Derecho de la OMC; la articulación normativa entre las disposiciones del Derecho de la OMC, y la articulación entre el Derecho de la OMC y las disposiciones del Derecho internacional ²⁵⁶.

El Órgano de Apelación ha mostrado en el *informe Crevetts* que no puede ignorar el principio de precaución medioambiental. Es casi un desafío para el OSD mostrar su capacidad de tener en cuenta las preocupaciones externas del orden comercial internacional del OMC, tales como el comercio internacional de desechos y otros regímenes en los que late la colisión normativa, tales como el comercio/salud, comercio/cultura y comercio/desarrollo.

Estos problemas no parecen zanjarse de manera satisfactoria en el sistema de solución de controversias de la OMC. La dificultad se debe a que el balance de la jurisprudencia aún es limitado. Sin embargo, el Órgano de Apelación ha mostrado su voluntad de situarse en una lógica de conciliación y complementariedad, por lo que ha insistido en que las preocupaciones ambientales son integradas por la OMC en el Preámbulo de la Carta de la OMC (párrs. 129 y 152) y en la creación de un Comité permanente del comercio y medio ambiente (párr. 154) ²⁵⁷.

D) ARMONIZACIÓN ENTRE EL CONVENIO DE BASILEA Y LA CONVENCION DE LOMÉ IV

El volumen del tráfico de desechos puede estar influido por el coste de las instalaciones de eliminación o reciclado, una parte del cual varía en función de la severidad de las normas y de las políticas administrativas aplicables. La amortización del coste es directamente proporcional al valor de los desechos que son tratados en las instalaciones, de ahí que las divergencias reglamentarias entre los Estados aumenten o disminuyan el movimiento transfronterizo de los desechos.

²⁵⁶ RUIZ FABRI, H., «L'appel dans le règlement des différends de l'OMC: trois ans après, quinze rapports plus tard», *RGDIP*, vol 103, 1999, 1, pp. 95-103.

²⁵⁷ RUIZ FABRI, «L'appel...», p. 91.

El riesgo de que grandes cantidades de desechos sean exportados hacia regiones del mundo totalmente desprovistas del equipamiento adecuado para garantizar su gestión adecuada se contempla en la letra del artículo 39 del Convenio de Lomé IV ²⁵⁸, que prohibía cualquier exportación, directa o indirecta, de residuos de la Comunidad Europea a los Estados ACP, al tiempo que éstos se comprometían a prohibir la importación de desechos provenientes de la Comunidad o de cualquier otro país. Esta prohibición abarcaba los desechos incluidos en los anexos del Convenio de Basilea y los desechos radioactivos ²⁵⁹.

A primera vista, esta medida dejaba bien claro el régimen de las relaciones norte-sur en lo relativo al movimiento transfronterizo de desechos. Sin embargo, este esfuerzo convencional de la CEE y de los países ACP, aunque institucionalizaba mejor sus relaciones comerciales, introdujo una excepción que concedía a los Estados partes una enorme libertad para concluir compromisos sobre movimiento transfronterizo de desechos.

En efecto, no debemos olvidar que las reglas previstas en el artículo 39 de la Convención de Lomé IV se aplicaban «sin perjuicio de los compromisos internacionales específicos que las partes contratantes hayan contraído o puedan contraer en el futuro». Este matiz nos ofrece la imagen de un mundo en el que la división norte-sur resulta incongruente con la unidad sustancial de su soporte ambiental ²⁶⁰.

²⁵⁸ La Convención se adoptó el 15 de diciembre de 1989 y estuvo en vigor durante diez años contados a partir del 1 marzo de 1990, finalizando en febrero del 2000 (*DOCE*, n.º L 229/3, 17 de agosto de 1989; *BOE* de 10 de diciembre de 1991, suplemento del núm. 295). Cabe precisar que la Convención de Lomé IV fue sustituida completamente por el Acuerdo de Asociación entre los Estados ACP y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, firmado en *Cotonou* el 23 de junio de 2000 (*DOCE* L 317, 43º, 15 de diciembre de 2000). Este nuevo Convenio, que ha sido celebrado por un período de veinte años contados a partir del 1 de marzo de 2000, no ha prestado la menor atención a la prohibición de exportar desechos peligrosos de la Unión Europea hacia los países ACP; tan sólo establece en su artículo 32.d), que en el «[á]mbito de la protección del medio ambiente..., la cooperación tenderá a... tener en cuenta las cuestiones vinculadas al transporte y a la eliminación de los productos peligrosos».

²⁵⁹ M. CAMPINS ERITJA ha señalado a este respecto, que «... los textos remitidos a la Comisión no hacen referencia alguna al hecho de que la lista verde no se corresponde a la definición de residuos adoptada en el Convenio de Lomé, que equivale a los anexos I y II del Convenio de Basilea, ni a que los procedimientos de control de los residuos de las listas roja y naranja sean distintos». «La práctica...», pp. 12 y 13

²⁶⁰ Estudios comunitarios han demostrado que en la aplicación del Convenio de Lomé IV, tan sólo un número limitado de Estados ACP han integrado la protección del medio ambiente en sus programas de cooperación con la Unión Europea. Véase MARTÍN-ARRIBAS, J. J., «El envite del Derecho internacional en favor de una simbiosis entre el desarrollo y el medio ambiente», *El desarrollo y la cooperación internacional* (eds.) F. Mariño y C. Fernández Liesa, Instituto de Estudios Internacionales y Europeos «Francisco de Vitoria», Universidad Carlos III de Madrid, *BOE* Madrid, 1997, p. 254.

Volvemos a encontrar aquí —bajo la misma perspectiva— la excepción del artículo 11 del Convenio de Basilea, reproducida de forma exacta por el artículo 11 del Convenio de Bamako. Es evidente que se trata del reconocimiento de una prerrogativa soberana que atañe a la celebración de acuerdos sobre movimiento transfronterizo de desechos. Ahora bien, no se trata de una libertad absolutamente discrecional reconocida a los Estados partes, pues, como ha explicado el Prof. Kiss, «un objetivo del Convenio es hacer que los movimientos de los desechos peligrosos sean tan costosos y dificultosos que la industria encuentre más beneficioso reducir su producción»²⁶¹. La dimensión internacional de este problema no se agota con lo dicho hasta ahora. Se trata de un conjunto de instrumentos que además se encuentran en completa armonía con los principios y criterios establecidos por el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Africana, referentes a la prohibición de importar desechos al interior de sus Estados miembros (art. 59)²⁶², y a las medidas previstas para armonizar y coordinar las políticas comerciales con otras organizaciones internacionales económicas, así como las políticas para la protección del medio ambiente (artículos. 3.c, 4.2.b y o)²⁶³.

Por supuesto, la coexistencia de estos instrumentos debe apreciarse con referencia a sus cláusulas expresas y de acuerdo con los criterios de armonización que, en todo caso, determinen los órganos comunitarios instituidos en el Convenio de Abuja, sobre todo los Comités Técnicos especializados y el Tribunal de Justicia de la CEA (artículos. 14 y 87).

E) ARMONIZACIÓN ENTE EL CONVENIO DE BASILEA Y EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) —North American Free Trade Agreement (NAFTA)— se enmarca en una nueva dimensión del regionalismo, proporcionando un modelo de cooperación económica entre Estados desarrollados y en desarrollo, vinculando el comercio regional a

²⁶¹ Kiss, A., «La acción internacional de la Unión Europea», *Derecho medioambiental de la Unión Europea* (ed.) Luciano Parejo Alfonso, McGraw-Hill, Madrid 1996, p. 207.

²⁶² Organization of African Unity Member States: Treaty establishing the African Economic Community, adoptado en Abuja, Nigeria, el 3 de junio de 1991, véase *ILM*, 1991, p. 1241.

²⁶³ Traité instituant la Communauté économique africaine (extraits), BOISSON DE CHAZOURNES, DESGAGNÉ y ROMANO, *Recueil d' instruments juridiques*, p. 849.

la protección del medio ambiente y de los aspectos laborales ²⁶⁴. Desde esta perspectiva, el proceso de integración ha sido criticado por prestar poca atención a la forma en que los países poderosos, fundamentalmente Estados Unidos, se desarrollan de forma desproporcionada y se benefician de la utilidad pública que el régimen establece ²⁶⁵.

Entre sus objetivos principales se encuentran la promoción del empleo y el crecimiento económico de los tres Estados partes, mediante la expansión del comercio y de las oportunidades de inversión ²⁶⁶. Tres instrumentos colaterales, concluidos en 1993 a instancias de la Administración Clinton, se encargan de completar el TLCAN: el Acuerdo Norteamericano de Cooperación Ambiental, el Acuerdo Norteamericano de Cooperación Laboral y el Acuerdo sobre las oscilaciones excesivas de las importaciones (*import surges*) ²⁶⁷. Entre los Estados que configuran la zona de libre comercio se aplican, además, varios instrumentos en materia de conservación y protección del medio ambiente, entre los que figura el Convenio de Basilea y dos Acuerdos bilaterales encargados igualmente de regular el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos ²⁶⁸.

²⁶⁴ PÉREZ GONZÁLEZ, M., «Las organizaciones regionales en América (III)», *Las organizaciones internacionales*, Manuel Díez de Velasco, undécima edición, Tecnos, Madrid, 1999, p. 750.

²⁶⁵ RUGMAN, A.; KIRTON, J., y SOLOWAY, J., *Environmental regulations and corporate strategy: A NAFTA perspective*, Oxford University Press, New York, 1999, p.78; ZAGARIS, B., «The transformation of environmental enforcement cooperation between Mexico and the United States in the wake of NAFTA», *NAFTA and the environment*, p. 157; DUNLEAVY, «The limits of free trade...», pp. 293 y ss.

²⁶⁶ Se establecen como objetivos del Tratado, los siguientes: a) eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios entre los territorios de las partes; b) promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio; c) aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las partes; d) proteger y hacer valer, de una manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en el territorio de cada una de las partes; e) crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del Tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias, y f) establecer directrices para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral, encaminada a ampliar y mejorar los beneficios del Tratado. Reproducido en *ILM*, 1993, vol. 32, p. 289 y ss., p. 605 y ss; *Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Texto Oficial*, Secofi, ed. Porrúa, México, 1994, artículo 102; ALDECOA LUZARRAGA, F., «Hacia la formalización de la “integración silenciosa” de México en los Estados Unidos: El Tratado de Libre Comercio de América del Norte», *Hacia un nuevo orden internacional y europeo*, pp. 46, 48-49.

²⁶⁷ Textos en: www.since.oas.org/trade/nafta y www.cec.org/pubs

²⁶⁸ El acuerdo entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de Estados Unidos de América, concerniente al movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, firmado en Ottawa el 28 de octubre de 1986; el acuerdo entre Estados Unidos de Norteamérica y los Estados Unidos Mexicanos para la protección y mejora del medio ambiente en el área fronteriza, firmado en La Paz, Baja California Sur, el 14 de agosto de 1983; la Convención sobre el comercio internacional de especies

Es evidente que la aplicación material de estos Tratados se superpone, haciendo inevitable la concurrencia y/o conflicto entre ellos. Para hacer frente a esta engorrosa situación, el artículo 103 determina la relación del TLCAN con aquellos Tratados internacionales de los que sean parte los Estados del TLCAN. Puede destacarse, en primer lugar, que éste confirma la prevalencia de los derechos y obligaciones establecidos en los Tratados bilaterales y multilaterales, incluido el GATT, quedando explícitamente establecido que en caso de incompatibilidad entre tales acuerdos y el TLCAN, «éste prevalecerá en la medida de la incompatibilidad, salvo que en él se disponga otra cosa».

El artículo 104, por su parte, reconoce la prevalencia de las disposiciones comerciales de los tratados ambientales siempre que se elija la fórmula más compatible con las demás disposiciones del TLCAN²⁶⁹. Esta cláusula de compatibilidad conduce a la aplicación mecánica del régimen más especial, que en lo relativo al movimiento transfronterizo de desechos peligrosos instituye el Convenio de Basilea de 1989²⁷⁰. No puede decirse lo mismo de la cláusula del Acuerdo de cooperación ambiental de América del Norte, prevista para regular la relación con otros tratados ambientales que no incluye ningún criterio de subordinación y se agota en una simple declaración general de compatibilidad: «Ninguna disposición de este Acuerdo se interpretará en el sentido de afectar los derechos y las obligaciones existentes de las partes conforme a otros acuer-

de fauna y de flora salvaje amenazadas de extinción, firmado en Washington el 3 de marzo de 1973, modificada el 22 de junio de 1979; el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que empobrecen la capa de ozono, hecho en Montreal el 16 de septiembre de 1987 y modificado el 29 de junio de 1990; y los demás acuerdos que aparecen en el anexo 104.1, del *TLCAN*; para un análisis, KUMMER, *International...*, pp. 113-115; LUDWISZEWSKI, R. B., y SELEY, P. E. «“Green” Language in the NAFTA: Reconciling free trade and environmental protection», *NAFTA and the environment*, pp. 10-12; RANGER, E. M., «Environmental aspects of building a facility in Northern Mexico», *NAFTA and the environment*, pp. 338-339.

²⁶⁹ El artículo 104 del TLCAN dice: «1. En caso de incompatibilidad entre este Tratado y las obligaciones específicas en materia comercial contenidas en: a) la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres..., estas obligaciones prevalecerán en la medida de la incompatibilidad siempre que, cuando una parte tenga la opción entre medios igualmente eficaces y razonablemente a su alcance para cumplir con tales obligaciones, elija la que presente mejor grado de incompatibilidad con las disposiciones del Tratado». Véase a este respecto: JEFFERY, M. I., «The Legal framework for environmental regulation under the North American Free Trade Agreement», *NAFTA and the environment*, pp. 210-1.

²⁷⁰ Cfr. In a NAFTA arbitration under the UNCITRAL arbitration rules, S. D. Mayers, Inc. (Claimant) and Government of Canadá (Respondent), Partial Award, november 13, 2000, Document 742416:01, párrafo 214. El Tribunal de Arbitraje señaló que «[t]he drafters of the NAFTA evidently considered which earlier environmental treaties would prevail over the specific rules of the NAFTA in case of conflict. Annex 104 provided that the Basel Convention would have priority if and when it was ratified by the NAFTA Parties». (Disponible en www.ban.org).

dos internacionales ambientales, incluso acuerdos de conservación, del que tales partes sean parte» (art. 40) ²⁷¹.

Ahora bien, este vacío se puede mitigar, en parte, si se tiene en cuenta que la Comisión para la Cooperación Ambiental se configura como un órgano de coordinación al que se le ha encomendado la misión de «elaborar recomendaciones sobre una mayor compatibilidad» de las «reglamentaciones» y de las «normas» de manera congruente con el TLC ²⁷². Por ahora, sin embargo, no está claro qué estándares ambientales estarán incluidos bajo su mandato, ya que los tres Estados partes no atribuyeron a la Comisión de Cooperación Ambiental mayor competencia que al Comité de Medidas Relativas a la Normalización ²⁷³ en la tarea de coordinar la armonización ambiental. En caso contrario, probablemente, éstas habrían usado un lenguaje menos ambiguo, como ha ocurrido, por ejemplo, con el Acuerdo de cooperación ambiental concluido entre Estados Unidos y la República Federal Alemana en 1974, a cuyo tenor, ambas partes se comprometen a «use their best efforts to harmonize to the maximun extent practicable their environmental policies and practices, and to promote broad international harmonization of effective measures to prevent and control environmental pollution» ²⁷⁴.

Pese a todo, se ha subrayado, la contribución que en todo caso puede realizar el Comité de Medidas Relativas a la Normalización, al que se le han asignado las funciones de dar seguimiento a la aplicación y administración de las disposiciones sobre medioambiente, facilitar el proceso de compatibilización, fortalecer la cooperación multilateral y tomar en consideración otras medidas relativas a normalización adoptadas a nivel no gubernamental, regional y multilateral, incluidas las disposiciones del GATT. A este respecto, el Comité podrá crear, si lo considera apropiado, subcomités y grupos de trabajo ²⁷⁵ con el fin de tratar los problemas específicos, pudiendo consultar, si es preciso, a

²⁷¹ Observemos, de paso, que ha sido incorporado al TLCAN «y forman parte integrante del mismo el artículo XX del GATT y sus notas interpretativas, o cualquier disposición equivalente de un acuerdo sucesor del cual todas las partes sean parte», incluidas las medidas en materia ambiental necesarias para proteger la vida y la salud humana, animal o vegetal (art. 2101.1).

²⁷² Artículos 8 y 10.3, b) del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, *ILM*, vol. 32, p. 1480.

²⁷³ TLCAN, artículo 913.

²⁷⁴ CHARNOVITZ, «The NAAEC...», p. 43; Federal Republic of Germany-United States: Agreement on cooperation in environmental affairs artículo IV, done at Bonn, may 9, 1974, *ILM*, vol.13, p. 598.

²⁷⁵ ABBOT, F., «Integration without institutions. The NAFTA mutation of the E.C. model and the future of the GATT regime», *The American Journal of Comparative Law*, vol. 40, 1992, p. 934.

científicos y representantes de organismos no gubernamentales de los tres países (art. 913).

Por ahora esta vía, sin embargo, tampoco es capaz de eliminar las profundas diferencias que existen entre los estándares mexicanos y los estándares establecidos en Canadá y los Estados Unidos ²⁷⁶. Aunque el texto enuncia el objeto de armonizarlos, es una pequeña guía para que el Panel pueda resolver los conflictos que envuelvan disparidades significativas ²⁷⁷. Algún sector de la doctrina ha señalado que, en la actualidad, el sistema de solución de controversias posiblemente es el mecanismo menos sensitivo y efectivo para reconciliar la disparidad en los estándares medioambientales ²⁷⁸.

²⁷⁶ Es sabido que los ambientalistas no están de acuerdo con la armonización prevista en el TLCAN. Éstos arguyen que las disposiciones establecidas con varios niveles y varios estándares son armonizadas con el último común denominador. Así, la armonización reduce el nivel de protección en aquellas Partes que tienen el deseo de sobrepasar los estándares mínimos armonizados, aumentando en el orden interno la protección del medio ambiente. En el caso del TLCAN, las restricciones, especialmente las sanitarias y fitosanitarias, son significativas. Los delegados mexicanos sostuvieron que la armonización de los estándares «intermedios» tenía pocas posibilidades de reducir la protección establecida en las leyes canadienses y americanas. Véase JEFFERY, «The Legal...», p. 215.

²⁷⁷ ALONSO GARCÍA, R., *Tratado de Libre Comercio, Mercosur y Comunidad Europea. Solución de controversias e interpretación uniforme*, Madrid, 1997, p. 143.

²⁷⁸ JEFFERY, «The Legal...», p. 217; DUNLEAVY, «The limits of free trade...», p. 313.

CAPÍTULO IV: LA ARMONIZACIÓN NORMATIVA DEL CONVENIO DE BASILEA CON OTROS CONVENIOS E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

A) INSTRUMENTOS PARTICULARES SOBRE MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO DE DESECHOS

a) Los tratados regionales sobre movimiento transfronterizo de desechos

Para mantenernos dentro de los límites razonables, el presente epígrafe no se propone examinar en conjunto la experiencia acumulada en cuanto a la armonización de los Convenios internacionales, encargados de regular el movimiento transfronterizo de desechos, adoptados en el marco del artículo 11 del Convenio de Basilea. Un examen más atento de los acuerdos clasificados en este ámbito, especialmente los bilaterales, obligaría a ahondar más en esta investigación, lo que desborda sus propósitos.

La consulta de los informes de la Secretaría del Convenio para el año 1998-1999 nos indica la concertación de 36 acuerdos bilaterales, ocho acuerdos multilaterales y la existencia de dos instrumentos en fase de preparación ²⁷⁹.

²⁷⁹ Informe sobre los acuerdos o arreglos bilaterales, multilaterales y regionales concertados en el marco del artículo 11 del Convenio de Basilea, UNEP/CHW.5/16, 9 de agosto de 1999.

El análisis de «conformidad» entre estos acuerdos y el Convenio de Basilea pone de manifiesto no sólo la gran variedad de instrumentos que la Secretaría del Convenio tiene que controlar²⁸⁰, sino que además, demuestra que estos acuerdos guardan una relación de compatibilidad óptima con el Convenio de Basilea, con independencia del campo de aplicación *ratione temporis*²⁸¹. Parece que, en efecto, se puede discernir un campo operativo de la Secretaría del Convenio en el que la armonización de los tratados es considerada por los Estados como un instrumento verdaderamente útil para solucionar las desavenencias normativas.

Una posible explicación a esta actitud de los Estados se refleja en la autorización que han concedido a la Secretaría del Convenio de Basilea para que se involucrara directamente en la preparación e instauración de acuerdos regionales relativos al movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y otros desechos, especialmente en la región del Mediterráneo, del Continente Africano, del Pacífico Sur y en la Región del Caribe, entre otras²⁸².

²⁸⁰ Estos acuerdos regulan desplazamientos de naturaleza muy diversa: líquido porifórico, baterías de litio, compuestos orgánicos halogenados o contaminados con esta sustancia, aceites, baterías y desechos domésticos, etc. UNEP/CHW.5/16, p. 2 y ss.

²⁸¹ El Informe pone de manifiesto que el proceso de armonización resultó operativo tanto con los instrumentos anteriores al Convenio de Basilea, como con los posteriores. Alemania, por ejemplo, presentó un informe detallado sobre todos los acuerdos conexos con el artículo 11, teniendo en cuenta la lista de preguntas adjunta a la decisión II/10, y señaló que los acuerdos bilaterales con Sudáfrica, Croacia y Namibia se habían vuelto superfluos debido a la adhesión de estos Estados al Convenio de Basilea. Informe... UNEP/CHW.5/16, p. 3, párrafo 9.

²⁸² UNEP, *The Basel convention: a global solution for controlling hazardous wastes*, United Nations, New York, 1997, p. 29. Hasta el 6 de agosto de 1999 se comunicaron, con arreglo al artículo 11 del Convenio de Basilea, los siguientes acuerdos o arreglos multilaterales y regionales: 1) Acuerdo sobre la vigilancia de los traslados transfronterizos de desechos peligrosos y otros desechos entre los Estados miembros de la Comunidad de Estados Independientes, adoptado en Moscú el 12-4-1996, entró en vigor el 16-5-1997; 2) Convención de Bamako sobre la prohibición de la importación a África y el control de los movimientos transfronterizos dentro de África de desechos peligrosos, adoptado el 30-1-1991, entró en vigor el 22-4-1998, 15 países la habían ratificado hasta el 2-12-1998; 3) Acuerdo regional de América Central sobre el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, adoptado en Panamá el 11-12-1992, entró en vigor el 17-11-1995; 4) Convenio sobre la protección del mar Negro contra la contaminación y sus Protocolos (el Protocolo sobre los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos de conformidad con el artículo 14 del Convenio aún no se ha elaborado), adoptado el 21-4-1992, entró en vigor el 15-1-1994; 5) Protocolo sobre prevención de la contaminación del mar Mediterráneo por los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, adoptado en Izmir el 1-10-1996, aún no ha entrado en vigor; 6) Artículo 39 de la Cuarta Convención de Lomé, Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (Grupo ACP) - Comunidad Europea; adoptado el 15-12-1998, en vigor; 7) Decisión C(92) 39/ final de la OCDE, adoptada el 30-3-1992, en vigor; Protocolo sobre el control de los movimientos transfronterizos marinos y la eliminación de desechos peligrosos y otros desechos del Convenio Regional de Kuwait sobre cooperación para la protección del medio marino contra la contaminación,

Por este motivo, la Convención de Bamako sobre la prohibición de importar desechos peligrosos a África sigue de cerca las disposiciones del Convenio de Basilea; incluso agrega un régimen complementario para prohibir la importación de desechos radioactivos a la región. Pero lo más importante, sin duda, es que los países africanos han ratificado también el Convenio de Basilea²⁸³.

De igual modo, el Convenio de Waigani de 1995 para la región del Pacífico Sur establece en su artículo 11 la posibilidad de que los Estados parte concluyan acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales con Estados no parte en materia de movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, siempre que éstos no derogen las reglas del propio Convenio o las disposiciones sobre gestión ambientalmente racional²⁸⁴.

A su vez, el Protocolo de Esmirna sobre la prevención de la contaminación del mar Mediterráneo, causada por el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, sigue la senda marcada por el Convenio de Basilea, del que además constituye una especie de proyección regional y al que se remite en varios puntos concretos²⁸⁵.

Esta multiplicación de convenciones ha creado, como ha indicado Pérez Martín, una suerte de «telarañas» que tienden a impedir el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos²⁸⁶. Sin embargo, esta proliferación de instrumentos podría crear situaciones complejas en la práctica, especialmente para aquellos Estados que sean parte contratante en varios de estos Convenios. «El resultado podría traducirse en una escena internacional confusa que convendría evitar en la medida de lo posible»²⁸⁷.

adoptado el 17-9-1995, aún no ha entrado en vigor; y 8) Convención sobre la prohibición de importar a los países del Foro Insular de desechos peligrosos y radioactivos y el control de los movimientos transfronterizos y la gestión de los desechos peligrosos en la Región del Pacífico Meridional, adoptado en Waigani el 16-9-1995, aún no ha entrado en vigor. Véase el anexo II del Informe sobre los acuerdos o arreglos bilaterales, multilaterales y regionales concertados en el marco del artículo 11 del Convenio de Basilea, UNEP/CHW.5/16, 9 de agosto de 1999, pp. 10 y 11.

²⁸³ Dicha información se puede consultar en la dirección de correo electrónico ban.org. Véase, OUGERGOUZ, F., «La Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique», *AFDI*, XXXVIII, 1992, p. 882.

²⁸⁴ BOER, «Le droit...», pp. 262-263.

²⁸⁵ Preámbulo, artículo 6, párrs. 4 y 5. Véase, RODRÍGUEZ LUCAS, «La protección del medio ambiente marino en el ámbito regional», *Derecho internacional del medio ambiente*, José Juste Ruiz, p. 233. El Acuerdo regional centroamericano sobre movimiento transfronterizo de desechos peligrosos constituye también la concreción regional del Convenio de Basilea (Preámbulo).

²⁸⁶ PÉREZ MARTÍN, *Que fait le village...*, p. 33.

²⁸⁷ *Ibid.*, p. 34.

b) El Código de Buena Práctica sobre el movimiento transfronterizo internacional de desechos radioactivos

Los desechos radioactivos que estén sometidos a sistemas de control internacional vigentes y los «instrumentos internacionales que se apliquen específicamente a los materiales radioactivos» están excluidos del Convenio de Basilea de 1989 (art. 1.3). Es comprensible que las potencias nucleares eludieran la aventura de negociar sobre esta materia con los países en vías de desarrollo, claramente interesados en la instauración de un régimen estricto, y prefirieran, por la propia naturaleza de las cosas, acudir a foros más controlados (como la OMI) o menos radicalizados (como el OIEA) ²⁸⁸.

Ante esta situación y debido al vertimiento ilícito de desechos radioactivos e industriales en el Continente Africano, la Conferencia General de la AIEA adoptó, el 21 de septiembre de 1990, un Código de Buena Práctica sobre el movimiento transfronterizo internacional de desechos radioactivos ²⁸⁹. Se trata de un instrumento de carácter recomendatorio que reproduce los principios generales y los objetivos del Convenio de Basilea, es decir, cada Estado tiene el derecho soberano de prohibir el movimiento de desechos radioactivos dentro su territorio o a través de éste; el movimiento transfronterizo de desechos radiactivos se podrá realizar solamente de acuerdo con los estándares internacionales de seguridad aceptados internacionalmente, con la previa notificación y el consentimiento del Estado que los recibe y los Estados de tránsito; finalmente, los Estados afectados por el movimiento transfronterizo de desechos radioactivos deberán disponer de una autoridad reglamentaria competente, la capacidad técnica necesaria y adoptar los procedimientos requeridos para regular ese movimiento.

En un intento por transformar el Código en un verdadero instrumento vinculante, la delegación de Zambia propuso que los procedimientos del Convenio y los del Código fueran armonizados en lo relativo a políticas y disposiciones referentes al movimiento transfronterizo ²⁹⁰. El recurso a este método,

²⁸⁸ CUBEL SÁNCHEZ, «La gestión...», p. 332.

²⁸⁹ Resolución (GC/XXXIV)/RES/530, 34 sesión ordinaria de la Conferencia General de la AIEA. Este Código fue la respuesta a las peticiones africanas formuladas en septiembre de 1988 a la AIEA, a través de un proyecto de resolución titulada «Déversement de déchets nucléaires». BITAR, *Les mouvements...* p. 49; RUMMEL-BULSKA, «The Basel...», pp. 104-106.

²⁹⁰ Resolución n.º 5 adoptada por la Conferencia de Basilea el 22 de marzo de 1989. El grupo de expertos que elaboró el Código decidió que éste haría las veces de principio rector a los Estados, especialmente para la elaboración y armonización de sus políticas y de leyes relativas al

sin embargo, no suele ser necesario para compatibilizar las disposiciones de un tratado y la resolución, justamente debido al carácter recomendatorio de esta última²⁹¹. Pero si así fuera, el criterio a utilizar no puede ser más que una variable del principio de armonización normativa. Su aplicación en este supuesto tropezó, no obstante, con la extrema dificultad de encontrar el apoyo de las potencias nucleares.

Finalmente, ese problema se superó con la adopción del Convenio conjunto sobre la seguridad de la gestión de combustible irradiado y sobre la gestión de desechos radioactivos de 5 de septiembre de 1997²⁹².

Considerado desde la perspectiva de su aplicación paralela con otros tratados, el artículo 27.2 prohíbe, al igual que el artículo 4.6 del Convenio de Basilea, los movimientos transfronterizos que tengan por destino la Antártida. A su vez, el artículo 27.3 reproduce la cláusula de compatibilidad, establecida en el artículo 4.12 del Convenio de Basilea, a cuyo tenor nada de lo dispuesto en él afectará al ejercicio por buques y aeronaves de las libertades de navegación y sobrevuelo reconocidas en el derecho internacional.

B) CONVENIOS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO

a) El Convenio de Londres de 1972 sobre vertimiento de desechos en el mar

Ante el estancamiento de negociaciones entre la OMI y la Conferencia de los Estados partes en el Convenio de Basilea para armonizar ambos instrumentos, la XIV Reunión Consultiva (25 a 29 de noviembre de 1991) de la OMI adoptó una sorprendente resolución sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos para su eliminación en el mar²⁹³, que minimizó

movimiento de desechos radioactivos. *Vid.* Code de bonne pratique sur le mouvement transfrontière international de déchets radioactifs, Vienne, 27 juin 1990, Conferencia générale de l'AIEA, Doc. AIEA GOV/2445, Annexe I; el Grupo de Expertos se estableció en aplicación de la Resolución de la GC(XXXII)/RES/490 de la Conferencia general.

²⁹¹ Ahora bien, debemos tener presente que el Código de Buena Práctica fue adoptado por consenso, lo que demuestra que los 112 Estados de la AIEA se obligaron políticamente a prevenir los movimientos ilícitos de desechos radioactivos. BITAR, *Les mouvements...*, p. 50; KWIATKOWSKA, B., y SOONS, A. H. H., «Transboundary movements of hazardous wastes and their disposal: Emerging global and regional regulation, *Annuaire de La Haya de Droit International*, 1992, pp. 68 y ss.

²⁹² Texto en www.iaea.org

²⁹³ Resolución LDC.45(14).

los puntos de solapamiento entre ambos Convenios, reconciliando incluso su relación futura, pero poniendo de manifiesto la primacía del Convenio de Londres de 1972²⁹⁴. En efecto, la resolución considera que el régimen de eliminación de desechos en el mar, previsto en el Convenio de Londres de 1972 y sus anexos, incluidas las resoluciones, reglas y directrices adoptadas por las Partes contratantes para su aplicación, garantizan el control y la prevención de los vertidos de desechos peligrosos en el mar, al tiempo que constituyen el régimen mundial en la materia²⁹⁵.

Es verdad que la solución no contraviene el artículo 30 de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, pero ¿puede el Convenio anterior (Convenio de Londres) dejar sin efecto al tratado posterior (Convenio de Basilea) solamente porque aquél contiene un régimen más permisivo sobre el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y su vertimiento al mar? Por sorprendente que parezca, la respuesta que se dio es afirmativa y a los hechos nos remitimos.

Sin embargo, el Convenio de Basilea no descarta la posibilidad de que en el futuro ambos tratados se puedan armonizar de forma gradual, pues las partes contratantes en el Convenio de Basilea tienen el deber de cooperar en la armonización de las normas y prácticas técnicas, con el objeto de encontrar la gestión ecológicamente más racional de los desechos peligrosos²⁹⁶. Cabe apuntar a este respecto que la Secretaría del Convenio de Basilea recibió el mandato de cooperar con el Convenio de Londres de 1972, durante el proceso preparatorio para la enmienda de este último Convenio, con el fin de lograr la armonización de los dos instrumentos²⁹⁷.

El interés de esta cooperación destaca, en primer lugar, por el compromiso alcanzado durante la decimocuarta reunión consultiva de los Estados partes en el Convenio de Londres de 1972, en cuanto a que la aplicación del presente Convenio a la Antártida no es competencia exclusiva de los Estados partes en

²⁹⁴ *ILM*, 1972, vol. 11, p. 1294; *BOE* de 10 de noviembre de 1975, enmiendas en *BOE* de 6 de agosto de 1990.

²⁹⁵ Doc. OMI, LDC 14/16, Informe correspondiente a la decimocuarta reunión consultiva, Anexo IV. En lo referente a los debates, véase pp. 18-19.

²⁹⁶ Artículo 10, párrafo 2, letra a). Sobre esto véase BITAR, *Les mouvements...*, p. 72.

²⁹⁷ Decisión II/7, UNEP/CHW.2/30, p. 17; y el Twenty-first consultative meeting of contracting parties to the convention on the prevention of marine pollution by dumping of wastes and other matter, 4 – 8 October 1999, Agenda item 13, LC 21/13, 1 November 1999, párrafo 5.28; véase además el Twenty-second consultative meeting of contracting parties to the Convention on the prevention of marine pollution by dumping of wastes and other matter 1972, 18-22 September 2000, Agenda item 8, doc. LC22/14, 25 October 2000.

el Tratado Antártico²⁹⁸. *A priori*, la coexistencia del Tratado Antártico y el Convenio de Londres de 1972 no parece presentar problemas particulares para los Estados que simultáneamente sean parte en ambos tratados, pues estos instrumentos responden perfectamente a esta exigencia. En primer lugar, porque el Convenio de Londres de 1972 prevé la posibilidad de concluir acuerdos regionales para regular la misma materia (art. 8), al tiempo que el Protocolo del Tratado sobre la Antártida, relativo a la protección del medio ambiente, adoptado en Madrid el 4 de octubre de 1991, regula las relaciones con otros tratados componentes del «Sistema del Tratado Antártico» (art. 4), articulando un sistema de consulta y cooperación con las partes contratantes en otros instrumentos internacionales en vigor en el marco del «Sistema del Tratado Antártico» y con sus instituciones respectivas, para evitar toda incompatibilidad entre esos instrumentos y el protocolo (art. 5)²⁹⁹.

Por otra parte, durante la XV reunión consultiva de los Estados partes en el Tratado Antártico celebrada en París en octubre de 1989³⁰⁰, los participantes adoptaron la Recomendación XV-4, mediante la cual requirieron a los Estados partes en el Tratado Antártico asegurar, en la zona cubierta por el Tratado, el respeto de las disposiciones de varios Convenios internacionales relativos a la prevención de la contaminación marina desde buques, entre ellos el Convenio de Londres de 1972 para la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias, y además invitó a los Estados a adherirse a esos Convenios y, lo que es más interesante, invitó a los Estados a cumplir en el océano Antártico con los tratados elaborados por la Organización Marítima Internacional, especialmente con la Convención MARPOL de 1973³⁰¹.

²⁹⁸ IMO, Docs. LDC/LG5/10, 7 de agosto de 1991, pp. 4-6.

²⁹⁹ El artículo 5 del Protocolo de Madrid dispone: «Las partes consultarán y cooperarán con las Partes contratantes de otros instrumentos internacionales en vigor dentro del sistema del Tratado Antártico y sus respectivas instituciones, con el fin de asegurar la realización de los objetivos y principios de este Protocolo y de evitar cualquier impedimento para el logro de los objetivos y principios de aquellos instrumentos o cualquier incoherencia entre la aplicación de esos instrumentos y del presente Protocolo», *RGDIP*, vol. 96, 1992, p. 207; *BOE* núm. 42, de 18 de febrero de 1998.

³⁰⁰ Antarctic Treaty System, Decisions of the XVth ATCP Meeting, 9-20 October 1989, reproducido en *Environmental Policy and Law*, 1990, vol. 20, numbers, 1,2, pp. 51-56.

³⁰¹ GAUTIER, F., «The Maritime Area of the Antarctic and the new law of the sea», *The Antarctic Environment and International Law* (eds.) VERHOEVEN, J.; SANDS, P., y BRUCE, M., Graham y Trotman/Martinus Nijhoff, London/Dordrecht/Boston, 1992, pp. 128-9; BOU, V., «Waste disposal and waste management in Antarctica and the Southern Ocean», *International law for Antarctica* (eds.) FRACIONI, F., y SCOVAZZI, T., Second Edition, Kluwer Law International, The Hague/London/Boston, 1997, p. 369; KUMMER, *International...*, p. 204; ODIER, F., «MARPOL ANNEXE VI», *Anuaire du Droit de la Mer*, 1997, vol. II, pp. 199-200; GABALDÓN GARCÍA, J. L.,

En definitiva, la coexistencia del Tratado de Washington de 1959 con otros tratados internacionales aplicables en la región de la Antártida ha sido prevista, como hemos señalado antes, en el marco de las reuniones periódicas contempladas en el artículo IX, en varias decisiones³⁰², y especialmente en el llamado «Sistema del Tratado Antártico», expresión que aparece por primera vez en el artículo 2.1 de la Convención de Wellington de 20 de mayo de 1988 para la reglamentación de las actividades sobre recursos minerales antárticos. Según este artículo, el «Sistema Antártico» comprende el Tratado de Washington de 1958, las medidas adoptadas bajo este Tratado y los instrumentos asociados: el Convenio de Londres de 1 de junio de 1972 para la conservación de las focas antárticas, y la Convención de Cambera de 20 de mayo de 1980 para la conservación de los recursos vivos marinos³⁰³.

b) La Convención de Montego Bay

El naufragio del *Torrey Canyon* en 1967, del *Amoco Cadiz* en 1978³⁰⁴ y los graves daños producidos a la salud humana causados por la inmersión de

«Protección del medio ambiente y evolución del derecho marítimo», *Anuario de Derecho Marítimo*, vol. XV, pp. 305-312. Conviene señalar aquí la articulación en términos de compatibilidad entre el Anexo I del Protocolo de 1996 de la Convención de Londres de 1972, titulado *Déchets ou autres matières dont l'immersion peut être envisagée*, que dispone en su punto 3 que ciertos desechos y materias radioactivas pueden ser sumergidos cumpliendo ciertas condiciones (que gocen de autorización y no superen la concentración mínima autorizada por la AIEA). Por el contrario, la Convención OSPAR de 1992 prohíbe la inmersión de desechos o sustancias radioactivas en el Atlántico nordeste (art. 3.3 del Anexo II). Los problemas de concurrencia entre ambos instrumentos están contemplados en el artículo 12 del Protocolo de 1996 «Cooperación regional», que prevé expresamente la posibilidad de que las partes contratantes celebren acuerdos regionales compatibles con el Protocolo, como la Convención OSPAR. Véase, KAGENECK, A., et PINEL, C., «Développements récents du régime juridique applicable à la protection des mers et aux substances radioactives: prévention et réparation des dommages», *Annuaire du Droit de la Mer*, 1997, vol. II, pp. 215 y 217; BRUBAKER, *Marine pollution...*, pp. 249-256; DE LA FAYETTE, L., «The OSPAR Convention comes into force: Continuity and progress», *The International Journal of Marine and Coastal Law*, vol. 14, núm. 2, mayo de 1999, pp. 279, 289, 294-295.

³⁰² Para los textos, véase *Environmental Policy and Law*, 1990, vol. 20, numbers, 1,2.

³⁰³ GAUTIER, «The Maritime...», p. 130; FRANCKX, E., «Environmental protection: An Arctic-Antarctic comparison», *The Antarctic Environment...*, pp. 110-112; LHOEST, O., «The European Community and Antarctica competences of and Extra-territorial nature?», *The Antarctic Environment...*, pp. 147-152; KISS y SHELTON, *International...*, pp. 257 y 311.

³⁰⁴ LUCCHINI, L., «A propos de l'Amoco Cadiz, la lutte contre la pollution des mers: évolution ou révolution du droit international» («Concerning the Amoco Cadiz the fight against marine pollution: evolution of international law»), *AFDI*, 1979, p. 721 y ss.; QUÉNEUDEC, J. P., «Les incidences de l'affaire du *Torrey Canyon* sur le droit de la mer», *AFDI*, 1968, pp. 701-718 y 1969,

mercurio en una central de Minamata (Japón), a comienzos de los años cincuenta, revelaron que la contaminación marina no estaba limitada a las operaciones de los buques, sino que comprende muchas otras fuentes, incluidas las de origen terrestre.

La Convención de Montego Bay regula en su Parte XII (Secciones V, VI y VII) las diversas fuentes de contaminación marina y atribuye a los Estados partes competencias concretas en materia de legislación y ejecución de la normas aplicables a cada una de ellas. La Convención de 1982, con buen criterio, como ha indicado el Prof. Mariño, «ha puesto un especial énfasis en la utilización de los ordenamientos estatales internos considerados como el medio “fundamental” para lograr la prevención, reducción y control de la contaminación»³⁰⁵. Observemos a este respecto que extensas áreas de los mares del mundo escapan a toda jurisdicción nacional y no están regidas más que por las normas del Derecho Internacional, según las cuales los buques que se encuentran en alta mar son regidos por la ley del Estado de su nacionalidad³⁰⁶.

Desde esta perspectiva, la Convención de 1982 centra su atención en la contaminación procedente de buques, materia en el que coexiste con una amplia gama de tratados internacionales, muchos de ellos concluidos con anterioridad a la adopción de la propia Convención de Montego Bay³⁰⁷. En este punto debemos tener en cuenta la vigencia sincrónica de otros instrumentos y sus protocolos respectivos, destinados a regular la contaminación de sectores específicos, tales como la contaminación de origen telúrico, la contaminación de origen atmosférico, la contaminación de origen industrial, la contaminación

p. 733: ID., *La contaminación...*, pp. 42-44; DUPUY, «The preservation...», p. 1153 y ss.; DUPUY, «La préservation...», p. 981-984, 988-991; WU, C. *La Pollution du fait du transport maritime des hydrocarbures, Responsabilité et indemnisation des dommages*, INDEMER, Monaco, Pedone, 1994, pp. 13, 23 y ss.; JUSTE RUIZ, *Derecho Internacional...* pp. 133, 145; BRUBAKER, *Marine pollution...*, pp. 20, 26, 119, 127 y 252.

³⁰⁵ MARIÑO MENÉNDEZ, F., «El objeto de las obligaciones establecidas por la Parte XII del Convenio de Montego Bay», *La responsabilidad internacional internacional. Aspectos de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado*, XIII Jornadas de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Jiménez Piernas, C. (ed.), Alicante, 1989, p. 184.

³⁰⁶ KISS y SHELTON, *Traite de...*, p. 318; LANGAVANT, E., *Droit de la mer, Le droit des communications maritimes*, Éditions Cujas, Paris, 1981, p.131.

³⁰⁷ STRACE, V., «La protezione dell' ambiente marino nella Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare», Starce, V. (ed.), *Diritto Internazionale e protezione dell' ambiente marino*, Milano, 1983, pp. 405-407.

por vertimientos y la contaminación originada por la explotación de los fondos marinos interoceánicos³⁰⁸.

Al examinar el paralelismo normativo que existe entre los acuerdos regionales y la Convención de Montego Bay de 1982, parece improbable la existencia efectiva de conflictos. El artículo 237.2 de esta Convención establece que «las obligaciones específicas contraídas por los Estados en virtud de convenciones especiales con respecto a la protección y preservación del medio ambiente marino deben cumplirse de manera compatible con los principios y objetivos generales de esta Convención». Al mismo tiempo, los instrumentos regionales y sus protocolos desarrollan un régimen jurídico que se integra en el marco convencional general de protección del medio marino, configurado por la Convención de Montego Bay de 1982, y en otros instrumentos sectoriales dedicados a la regulación de fuentes y formas específicas de contaminación, que también tienen aplicación regional. Debe tenerse en cuenta, a este respecto, que en 1972 el PUNE formuló el *Regional Seas Programme*, en el que inclu-

³⁰⁸ Entre otros podemos señalar el Convenio de 2 de noviembre de 1973 sobre prevención de la contaminación por buques (MARPOL), *BOE* de 17 de octubre de 1984, o el Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de residuos y otras materias, de Londres, México, Moscú y Washington, de 29 de diciembre de 1972, *BOE* núm. 269, de 10 de noviembre de 1975; incluidos varios tratados regionales que reafirman la necesidad de controlar la inmersión de desechos en el mar, tales como la Convención de Barcelona de 16 de febrero de 1976, para la protección del Mediterráneo contra la contaminación, *DOCE*, edición especial 15, vol. 2, p. 32; completada por un Protocolo de 16 de febrero de 1976 sobre la prevención de la contaminación causada por vertidos desde buques y aeronaves, *DOCE*, edición especial 15, vol. 2, p. 39; el Convenio para la protección del medio ambiente marino del Atlántico nordeste, adoptado en París el 22 de septiembre de 1992, *Boletín de Derecho del Mar*, 23, 1993, pp. 27 y ss., que prohíbe toda incineración de desechos en el mar, pero que admite ciertas inmersiones, normalmente materias inertes y materias provenientes del mismo mar (lodos de dragaje y desechos de pescado). Paradójicamente, la Convención de Helsinki del 9 de marzo de 1992 para la protección del medio marino en la zona del Mar Báltico, *DOCE*, n.º L 073, de 16-3-1994, p. 2045, no admite la inmersión de materiales provenientes del dragado, salvo que los interesados en realizar esta operación obtengan un permiso especial. Véase KISS, *Droit...*, p. 158 y ss; YTURRIAGA BARBERAN, J. A., «Regional conventions on the protection of the marine environment», *RECADI*, 1979-I, pp. 319-444; ID., Aspectos jurídicos de la eliminación de residuos radiactivos en el mar», *Problemas internacionales del medio ambiente*, Universidad Autónoma de Barcelona, VII Jornadas de la Asociación de Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, 1984; pp. 123-126; ID., «Evolución de los Convenios europeos de Oslo y París sobre contaminación marina», *RIE*, 1990, p. 885 y ss.; LANGAVANT, E., *Droit de la Mer I, Cadre institutionnel et milieu marin (océanologie-pollution)*, Éditions Cujas, París, 1979, pp. 140-144; ID., *Droit de la mer II...*, p. 132 y ss.; CHURCHILL, R., y LOEWE, A. V., *The law of the sea*, tercera ed., Manchester University Press, Manchester, 1988, p. 242 y ss.; JUSTE RUIZ, J., «La convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique Nord-Est», *RGDIP*, 1993, pp. 365-393; RODRÍGUEZ LUCAS, «La protección...», p. 197 y ss.

ye una lista de once regiones alrededor del mundo (la región del Mediterráneo³⁰⁹, África occidental y central, África oriental, Asia suroriental, el Mar Rojo, la región del Golfo de Aden, el Golfo Pérsico, la región sur y suroriental del Pacífico, el Caribe y la región del Mar Negro, incluida la región del Pacífico noroeste) en las que estaba prevista la adopción de numerosos acuerdos regionales y sus protocolos adicionales para combatir la contaminación marina³¹⁰.

Por tanto, la analogía en el objeto y fin de los instrumentos convencionales generales y regionales no plantea temibles problemas de armonización o de interpretación. A causa de la naturaleza específica de los problemas del mar, es inevitable un tratamiento especializado que intente responder a las distintas causas de contaminación marina. Por ello, se debe tener en cuenta el principio que establece que la ley especial deroga la ley general. En este punto debe reiterarse que la relación general/especial está fundada sobre el objeto de los tratados (*ratione materiae*) o sobre su esfera de aplicación territorial (*relatione loci*).

El Convenio de Basilea sobre movimiento transfronterizo de desechos peligrosos es un ejemplo de un tratado universal concerniente a un tipo especial de contaminación que además tiene aplicación regional. Consciente de toda esta problemática, la Conferencia de Basilea adoptó en el artículo 1.4. una fórmula práctica, utilizada en otros tratados³¹¹, que ayuda

³⁰⁹ Los tratados regionales contra la contaminación marina incluyen sus propias cláusulas de compatibilidad, véase por ejemplo, el artículo 3 del Convenio para la Protección del mar Mediterráneo contra la contaminación y sus protocolos anejos, Barcelona, 16 de febrero de 1976 (BOE núm. 44, de 21 de febrero de 1978); el artículo 13 del protocolo sobre prevención de la contaminación del mar Mediterráneo causada por vertidos desde buques y aeronaves; los artículos 8 y 13 del Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias. Para un análisis doctrinal, LEANZA, U., «Protection du milieu marin: point de vue italien», *The Continental shelf and the exclusive economic zone / Le plateau continental et la zone économique exclusive* (ed.), Donat Pharand y Umberto Leanza, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/London, 1993, pp. 342-348; BOU FRANCH, V., «Hacia la integración del medio ambiente y el desarrollo sostenible en la región mediterránea», *Anuario de Derecho Internacional*, XII, 1996, pp. 201-251; CARREÑO GUALDE, *La protección...*, pp. 103-130, especialmente la p. 110.

³¹⁰ *Directory of organizations and organizational units co-ordinating or contributing to the co-ordination of Action Plans related to the Regional Seas Programme*, Nairobi, 1989, Rev. 2; Doc. OMI-LDC, 14/7/5, de 24 de octubre de 1991; *Status of regional agreements negotiated in the framework of the Regional Seas Programme*, Nairobi, 1988, Rev. I.

³¹¹ Véase, por ejemplo, el artículo 19.1.a) del Convenio para la prevención de la contaminación marina provocada por vertidos desde buques y aeronaves, Oslo, 15 de febrero de 1972 (BOE núm. 99, de 25 de abril de 1974); el artículo 3.1.b) i) del Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias, Londres, México, D.F., Moscú y Washington, 29 de diciembre de 1972; el artículo 2.3 del Acuerdo regional centroamericano sobre movimiento transfronterizo de desechos peligrosos.

a resolver las dudas sobre concurrencia de normas y según la cual «los desechos derivados de las operaciones normales de los buques, cuya descarga esté regulada por otro instrumento internacional, quedarán excluidos del ámbito del presente Convenio». Para reforzar los efectos de esta medida, debemos recordar que nada de lo dispuesto en el Convenio de Basilea afectará a los derechos de soberanía y jurisdicción de los Estados sobre su mar territorial, ZEE y plataforma continental, ni al ejercicio por parte de los buques y las aeronaves de todos los Estados de los derechos y libertades de navegación, reflejados en los instrumentos internacionales pertinentes (art.4.12)³¹².

Las anteriores incongruencias no son nuevas en el derecho del mar. La Convención de Montego Bay nos ofrece una respuesta precisa, fuera de casos muy concretos, para los supuestos de incompatibilidad de normas que se resuelven expresamente o se deducen con nitidez de la redacción del artículo 311³¹³, en relación con la Parte XII³¹⁴, y el artículo 30 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

³¹² RUMMEL-BULSKA, «The Basel...», pp.106-107.

³¹³ De acuerdo con el Artículo 311: «1. Esta Convención prevalecerá, en las relaciones entre los Estados partes, sobre las Convenciones de Ginebra sobre el Derecho del Mar de 29 de abril de 1958. 2. Esta Convención no modificará los derechos ni las obligaciones de los Estados partes dimanantes de otros acuerdos compatibles con ella y que no afecten al disfrute de los derechos ni al cumplimiento de las obligaciones que a los demás Estados partes correspondan en virtud de la Convención. 3. Dos o más Estados partes podrán celebrar acuerdos, aplicables únicamente en sus relaciones mutuas, por los que se modifiquen disposiciones de esta Convención o se suspenda su aplicación, siempre que tales acuerdos no se refieran a ninguna disposición cuya modificación sea incompatible con la consecución efectiva de su objeto y de su fin, y siempre que tales acuerdos no afecten a la aplicación de los principios básicos enunciados en la Convención y que las disposiciones de tales acuerdos no afecten al disfrute de los derechos ni al cumplimiento de las obligaciones que a los demás Estados partes correspondan en virtud de la Convención. 4. Los Estados partes que se propongan celebrar un acuerdo de los mencionados en el párrafo 3 notificarán a los demás Estados partes, por medio del depositario de la Convención, su intención de celebrar el acuerdo y la modificación o suspensión que en él se disponga. 5. Este artículo no afectará a los acuerdos internacionales expresamente autorizados o salvaguardados por otros artículos de esta Convención...».

³¹⁴ Con vistas a dar una idea más precisa de lo que significa la Parte XII de la Convención de Montego Bay, debemos subrayar que sus disposiciones constituye una «umbrella law», ya que son normas generales que dejan la definición precisa de los contenidos técnicos a convenios especiales. Véase, DUPUY avec la collaboration de RÉMOND-GOUILLOUD, «La préservation...», pp. 1010-1012; DUPUY, «The preservation...», p. 1193; en este mismo sentido, JUSTE RUIZ, «La regulación...», pp. 91-96; Id., *Derecho Internacional...*, pp. 159-161; SCOVAZZI, T., «Le droit international et la protection de l'environnement marin», *Traite de droit européen de l'environnement*, Alexander Kiss y Dinah Shelton, p., 336; MARIÑO MENÉNDEZ, «El objeto...», p. 182.

c) El Tratado Antártico

Para examinar los puntos de solapamiento entre el Convenio Antártico y el Convenio de Basilea, basta con echar un vistazo a sus respectivos ámbitos espaciales de aplicación. Para empezar, hay que poner de manifiesto que el Convenio de Basilea no define su campo de aplicación *ratione loci*. Esta omisión nos remite ineludiblemente a las normas supletorias del Derecho Internacional General codificadas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que en su artículo 29 zanja los problemas de aplicación en el espacio cuando un tratado prescinde de tal regulación³¹⁵. Es evidente que esta disposición no surte efectos en este caso porque los redactores del Convenio de Basilea, hábilmente, dispusieron en su artículo 2, párrafo 9, que éste se aplica a toda «zona de competencia nacional de un Estado». El término alude a «toda zona terrestre, marítima o aérea en las que el Estado ejerce, conforme al Derecho Internacional, las competencias administrativas y reglamentarias en materia de protección de la salud humana o del medio ambiente». Así pues, no sin motivo, el Convenio de Basilea establece un criterio de mayor amplitud que el establecido por el artículo 29 de la Convención de Viena, antes citado. Ciertos espacios de jurisdicción estatal quedan sometidos al régimen del Convenio de Basilea: por ejemplo, la ZEE no es parte del territorio del Estado, pero éste ejerce competencias en materia de protección del medio ambiente³¹⁶. Igualmente, el Convenio tendrá aplicación a los movimientos y al vertimiento de desechos en alta mar y en la Antártida. Ésta es la respuesta favorable del Convenio a los Estados y a las ONGs, que han luchado para prohibir la exportación de desechos a la Antártida, con el fin de proteger aquel patrimonio ecológico de la humanidad.

En efecto: el avance en la lucha contra el vertimiento incontrolado de desechos peligrosos tiene su continuidad en el artículo 2, párrafo 3 del mismo Convenio de Basilea, que establece una definición amplísima de «movimiento transfronterizo» de desechos, abarcando incluso los movimientos iniciados en una zona sometida a la jurisdicción del Estado de exportación y dirigidos hacia una zona que no está sometida a la competencia de ningún Estado, tal como el alta mar o las zonas situadas al sur del paralelo 60° del

³¹⁵ Según el artículo 29 de la Convención de Viena: «[u]n tratado será obligatorio para cada una de las partes por lo que respecta a la totalidad de su territorio, salvo que una intención diferente se desprenda de él o conste de otro modo».

³¹⁶ Véase Cap. IV, B, b).

hemisferio sur³¹⁷. Se trata de una prohibición absoluta que obliga incluso a los Estados que reivindican derechos de soberanía en la zona³¹⁸.

Por otra parte, el movimiento transfronterizo de desechos provenientes de la Antártida se encuentra regulado en el Anexo III del Tratado Antártico³¹⁹, cuyo artículo 1.1.4 nos recuerda que «[e]n la mayor medida posible, los residuos removidos del área del Tratado Antártico serán devueltos al país desde donde se organizaron las actividades que generaron los residuos o a cualquier otro país donde se haya alcanzado entendimiento para la eliminación de dichos residuos, de conformidad con los acuerdos internacionales pertinentes». El núcleo central del Anexo III afecta al régimen de los movimientos de desechos de una zona a otra de la Antártida. Esta disposición tiene aplicación en un ámbito espacial cubierto también por el Convenio de Basilea, dejando al descubierto algunas incongruencias normativas entre ambos instrumentos. En efecto, el Tratado Antártico (art. 4) y su Protocolo sobre Protección del Medio ambiente (artículos. 2 y 3) configuran un sistema autocontenido de protección ambiental, que podría excluir al Convenio de Basilea³²⁰.

Esta posibilidad es real, mas sólo relativa. El Protocolo consagra una cláusula para compatibilizar las contradicciones que puedan suscitarse entre él y cualquier otro instrumento internacional en vigor en el marco del Sistema del Tratado Antártico (art. 4.2). La búsqueda de esta conformidad ofrece la posibilidad de realizar consultas y cooperar «con las partes contratantes en los otros instrumentos internacionales en vigor en el marco del sistema del Tratado Antártico y sus instituciones respectivas, con vistas a asegurar la realización de los objetivos del... Protocolo» (art. 5)³²¹.

³¹⁷ BITAR, *Les mouvements...*, pp. 40 y 57; BOU, «Waste disposal...», pp. 366-367; KISS y SHELTON, *International...*, pp. 119, 252-254; LUCCHINI, L. y VÖLCKEL, *Droit de la mer, Tome 1, La mer et son droit, Les espaces maritimes*, Pedone, Paris, 1990, p. 468.

³¹⁸ Artículo 4, párrafo 6.

³¹⁹ Tras haber finalizado la reunión especial que el Grupo Consultivo del Tratado Antártico celebró en Madrid en 1991, se firmó el 4 de octubre de ese mismo año el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, completado por cuatro anexos: I) evaluación del impacto sobre el medio ambiente; II) conservación de la fauna y flora antárticas; III) eliminación y tratamiento de residuos, y IV) prevención de la contaminación marina. A esta lista fue añadido un quinto Anexo sobre especies protegidas el 17 octubre de 1991 durante la Reunión Consultiva celebrada en Bonn.

³²⁰ CUBEL SÁNCHEZ, «La gestión...», p. 319.

³²¹ BUSH, W., «The 1988 Wellington convention: How much environmental protection?», *The Antarctic Environment...*, p. 81; respecto a la compatibilidad del Tratado Antártico y la Convención de Montego Bay de 1982, véase OXMAN, B. H., «Antartica and the new law of the sea», *Cornell international law journal*, 1986, vol. 19(2), pp. 211-247.

Por último, el Protocolo proporciona una base mucho más amplia de armonización normativa con la creación del Comité para la protección del medio ambiente (art. 11 del Protocolo), que puede, con la aprobación de la Reunión Consultiva del Tratado Antártico, «invitar a todas las organizaciones científicas, medioambientales y técnicas apropiadas que puedan contribuir con sus trabajos a participar en sus secciones en calidad de observadores» (art. 11.4). Asimismo podrá formular recomendaciones a las partes para garantizar una mejor aplicación del Protocolo y de sus anexos, y cualquier «otra función que le pueda ser conferida por la Reunión Consultiva del Tratado» (art. 12).

Con todo, el análisis de la coexistencia de los tratados ambientales aplicables en la Antártida y su armonización, sólo se puede conseguir incorporando el régimen sectorial relativo al control de la contaminación marina³²².

³²² KUMMER, *International...*, pp. 200-207.

CONSIDERACIONES FINALES

Las posibilidades de conflicto o concurrencia entre los tratados referentes al movimiento transfronterizo de desechos peligrosos tiende a disminuir a medida que se desarrolla la coordinación de la acción normativa de las organizaciones internacionales. Esta técnica cuenta en la hora actual con resultados muy importantes y con pocas dificultades de aplicación en la práctica, por lo que puede ser considerada como una solución válida frente al aumento y a la diversidad de tratados internacionales sobre la misma materia o materias conexas, con posibilidades de colisionar. Dicho de otro modo, esta cooperación especializada evita los problemas de compatibilidad entre aquellos tratados que regulan una misma forma de contaminación cuando dicha contaminación es susceptible de quedar regulada, al mismo tiempo, por dos o más tratados.

Por esta última razón, las cláusulas de compatibilidad y las técnicas de armonización de tratados constituyen a primera vista dos opciones jurídicas compatibles. De tal suerte que puede afirmarse, desde esta perspectiva, que es muy difícil una separación total entre ellas; estamos más bien ante una cuestión de predominio de una u otra vía, pero que en la mayoría de los casos se complementan.

Aun cuando el efecto de la armonización descrito en este trabajo se limita a materias reguladas por los tratados que regulan el movimiento transfronterizo de desechos, debemos señalar que posiblemente el mayor número de medidas de armonización se adoptan para disminuir las barreras técnicas al

comercio. En este punto se pueden destacar los diferentes propósitos para los que se usa en la Comunidad Europea, en cuyo ámbito el grado de armonización requerido está directamente relacionado con la materia en un contexto determinado, más que con la cuestión de si una disposición del tratado requiere «aproximación» o «armonización». La variedad de perspectivas que hemos descubierto no debe sorprender. Lo cierto es que aunque se trate de una técnica polivalente, su significado exacto no tiende a producir desconcierto, pues se trata de un principio simple cuya utilización siempre tiene mucho en común. De ahí la necesidad de no delimitar con demasiada precisión los contornos de la armonización a fin de preservar la valiosa pluralidad de sus utilidades.

Cuantitativamente, son más los textos que se armonizan a través de la coordinación de las organizaciones internacionales que aquellos que recurren a la aplicación del artículo 30 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. La razón es, sin embargo, cualitativa: el acuerdo de diferentes organizaciones internacionales acerca de una situación conflictiva es más fácil de obtener que si se trata de solucionar el conflicto con la intervención de un tercero, que siempre exige más renunciaciones o incluso modificaciones sustanciales de los tratados vigentes.

La primacía de las medidas preventivas de armonización sobre la aplicación de las normas subsidiarias del artículo 30 de la Convención de Viena revela que en el ámbito particular del movimiento transfronterizo de desechos los Estados han mostrado su preferencia por la gestión anticipada de la Secretaría del Convenio, que dispone de gran libertad de maniobra en el ejercicio de su función de prevención de conflictos o concurrencia de normas, pero está, por el contrario, mucho más limitada en lo que concierne a la solución de conflictos surgidos con posterioridad a la entrada en vigor de los tratados concurrentes. En este aspecto, y en el mejor de los casos, el papel de la Secretaría se limita a la elaboración de un informe técnico, aunque la solución final está reservada a una decisión discrecional de la Conferencia de las partes.

La práctica actual confirma que la Secretaría no podrá cumplir con validez la función de control más que si tiene ante sí la documentación y realiza un análisis de toda la información necesaria para controlar la compatibilidad de los acuerdos bilaterales concluidos por los Estados en el marco del artículo 11 del Convenio de Basilea.

Esta pobreza funcional de la Secretaría debe ser relativizada, pues puede efectivamente explotar útilmente su función de prevención de conflictos normativos, como ya hemos visto, colaborando en la elaboración de los acuerdos multilaterales universales o regionales relacionados con el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos. Por tanto, el análisis riguroso de las cláusulas de armonización, previstas por el Convenio de Basilea, permite una complementariedad fértil entre los tratados universales y regionales.

No es necesario insistir en el lugar que ocupan las organizaciones internacionales en este proceso. Es difícil prescindir de sus servicios cuando se les confiere poder para evitar la duplicidad de trabajos y los problemas de concurrencia entre sus respectivas funciones normativas. La armonización de los tratados se transforma de esta manera en una verdadera coordinación cuando los Estados deciden tomar en cuenta los intereses y las opiniones de los demás para elaborar sus propios convenios, sometiendo la protección del medio ambiente a reglas comunes. Por tanto, la armonización de los convenios es tributaria de la coordinación especializada y su punto de partida es la comparación entre los proyectos de tratados que se elaboran en el seno de las organizaciones internacionales.

Por supuesto, la reticencia de los Estados a abdicar de cuotas de soberanía sigue constituyendo un obstáculo importante en la realización de la armonización. La dificultad de llevarla a cabo depende del número de Estados partes en los tratados en cuestión y de sus distintos niveles de desarrollo. Los acuerdos en materia de comercio responden a esta dificultad. La vía para armonizar en esa materia las disposiciones incompatibles sigue siendo la negociación entre las partes o la acción de una organización internacional investida con autoridad suficiente para ello. Esta armonización cuenta en la actualidad con resultados importantes en el TLCAN y en la UE. Debemos resaltar, no obstante, que enfrenta dificultades en la práctica todavía sin resolver, pues la armonización abarca todos los niveles de las disposiciones que deben ser armonizados con el mismo común denominador, restringiendo así las posibilidades de aumentar la protección del medio ambiente en aquellos Estados que desean exceder el mínimo de los estándares armonizados a través de su legislación interna.

Un análisis de la práctica internacional demuestra que aún no se da la confluencia de los factores económicos, tecnológicos, ambientales y propiamente jurídicos para que la OMC tenga que hacer frente a reclamaciones de terceros Estados u organizaciones internacionales por no acudir a técnicas de

armonización entre el Convenio de Basilea y las propias disposiciones de la OMC. En el estado actual del derecho de esa organización internacional, el no recurso a la armonización no provocaría ninguna contramedida. Más aún, es difícil percibir de qué manera se podrían adoptar medidas internacionales en contra de la OMC, ni contra las Secretarías de los Convenios o de los consejos ejecutivos de las instituciones especializadas.

BIBLIOGRAFIA

- ABBOT, F., «Integration without institutions. The NAFTA mutation of the E. C. model and the future of the GATT regime», *The American Journal of Comparative Law*, vol. 40, 1992, pp. 917-933.
- ALDECOA LUZARRAGA, F., «Hacia la formalización de la “integración silenciosa” de México en los Estados Unidos: El Tratado de Libre Comercio de América del Norte», *Hacia un nuevo orden internacional y europeo*. Homenaje al Profesor M. Díez de Velasco, Tecnos, Madrid, 1993, pp. 43-55.
- ALONSO GARCÍA, R., *Tratado de libre Comercio, Mercosur y Comunidad Europea. Solución de controversias e interpretación uniforme*, Madrid, 1997.
- ANDERSEN R.; MALHERBE, J., y OST, F. (dirs.), *L'entreprise et la gestion des déchets*, Bruylant, 1993.
- BASTID, S., *Les traités dans la vie internationale. Conclusion et effets*, Paris, 1985.
- BEN ACHOUR, R., «La Souveraineté des états: harmonie et contradictions», *Harmonie et contradictions en droit international*, Rencontres internationales de la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis, Colloque des 11/12/13 avril 1996 sous la direction de Rafâa Ben Achour et Slim Laghmani, Éditions A. Pedone, Paris 1996, pp. 97-124.
- BEER-GABEL, J., «Activités des organisations internationales», *Annuaire de Droit de la Mer*, 1997, vol. II, pp. 422-468.
- BERMEJO GARCÍA, R., y L. SAN MARTÍN SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, «Del GATT a la Organización Mundial del Comercio: Análisis y perspectivas de futuro», *An.HLADI*, vol. XII, 1996, pp. 147-200.
- BINDER, G., «The dialectic of duplicity: Treaty conflict and political contradiction», *Buffalo Law Review*, 1985, vol 34, n.º 2, pp. 329-549.

- BIRSALL, N., y D. WHEELER, «Trade Policy and Industrial Pollution in Latin America: Where are the Pollutions Havens?», *Journal of Environment and Development*, vol. 2, n.º 1.
- BITAR, F., *Les mouvements transfrontières de déchets dangereux selon la convention de Bâle, étude des régimes de responsabilité*, Pedone, Paris, 1997.
- BLUMANN, C., «Compétence communautaire et compétence nationale», en *La communauté européenne et l'environnement*, Travaux du colloque d'Angers de la CEDECE, Paris, 1997.
- BOER, B., «Le droit international de l'environnement dans les pays en développement du pacifique sud», *Annuaire de droit de la mer*, 1997, vol. II, pp. 237-264.
- BOTHE, M., «International regulation of transboundary movement of hazardous wastes», *GYIL*, 1990, vol. 33, pp. 422-431.
- BOU FRANCH, V., «Hacia la integración del medio ambiente y el desarrollo sostenible en la región mediterránea», *Anuario de Derecho Internacional*, XII, 1996, pp. 201-251.
- BOU, V., «Waste disposal and waste management in Antartica and the Sourthern Ocean», *International law for Antartica* (eds.) Francioni, F., y Scovazzi, T., Second Edition, Kluwer Law International, The Hague/London/Boston, 1997, pp. 319-374.
- BRUBAKER, D., *Marine polution and international law: principles and practice*, Belhaven Press, London and Florida, 1993.
- BUSH, W., «The 1988 Wellington convention: How much environmental protection?», *The Antartic Environment...*, pp. 69-83.
- CAMPINS ERITJA, M., *La gestión de los residuos peligrosos en la Comunidad Europea*, José María Bosch Editor, S. A., Barcelona, 1994.
- «La práctica de la Comunidad Europea en relación al artículo 11 del Convenio de Basilea sobre el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y su eliminación», *GJ*, B-123, mayo 97, pp. 5-16.
- CAPOTORTI, F., «Interférences dans l'ordre juridique interne entre la Convention et d'autres accords internationaux», *Les droits de l'homme en droit interne et en droit international*, 1968.
- CARREÑO GUALDE, V., *La protección internacional del medio marino mediterráneo*, Tecnos-Universidad de Alicante, Madrid, 1999.
- CASANOVAS Y LA ROSA, O., «Unidad y pluralismo en Derecho Internacional Público», *CEBDI*, vol. II, 1998, pp. 35-267.
- CASTILLO DAUDÍ, M., «La aportación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia a la política comunitaria del medio ambiente», *Hacia un nuevo orden internacional y europeo*. Homenaje al Profesor M. Díez de Velasco, Tecnos, Madrid, 1993, pp. 827-837.
- «La política de medio ambiente de la Comunidad Europea», *Derecho internacional del medio ambiente*, J. Juste Ruiz, 1998, pp. 427-458.
- CHARNOVITZ, S., «The NAAEC and its implications for environmental cooperation, trade policy, and American treaty-making», *NAFTA and the environment*, pp. 25-76.

- CHARNOVITZ, S., «Multilateral environmental Agreements and trade rules», *EPL*, 26/4, 1996, pp. 163-169.
- «The World Trade Organization and the Environment», *Yearbook of international environmental law*, vol. 8, 1997, pp. 98-116.
- CHUECA SANCHO, A., *Cambio climático y derecho internacional*, Fundación Ecología y Desarrollo, Gobierno de Aragón, Departamento de Medio Ambiente, Zaragoza, 2000.
- COMPÉS LÓPEZ, R.; GARCÍA ALVARÉZ-COQUE, J. M., y ALDANONDO OCHOA, A. M., «La OMC y la solución de diferencias comerciales: el caso del plátano», *Revista española de economía agraria*, 1998, n.º 181, pp. 121-155.
- CUBEL SÁNCHEZ, P., «El comercio internacional de desechos y la protección del medio ambiente: La organización mundial del comercio y el convenio de Basilea sobre movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación», *Anuario de Derecho Internacional*, 1998, vol. 14, pp. 651-694.
- «La gestión racional de los desechos en el ámbito internacional», *Derecho internacional del medio ambiente*, Juste Ruiz, J., McGraw-Hill, Madrid 1999, pp. 303-359.
- CZAPLINSKI, W., y G. DANILENKO, «Conflicts of norms in international law», *NYIL*, vol. XXI, 1990, pp. 3-42.
- DÍEZ-HOCHLEITNER, J., *La posición del derecho internacional en el ordenamiento comunitario*, McGraw-Hill, Madrid, 1998.
- DÍEZ-HOCHLEITNER, J. y MARTÍNEZ CAPDEVILA, C., *Derecho de la Unión Europea, Textos y comentarios*, McGraw Hill, Madrid, 2001.
- DE LA FAYETTE, L., «The OSPAR Convention comes into force: Continuity and progress», *The International Journal of Marine and Coastal Law*, vol. 14, n.º 2, mayo de 1999, pp. 247-297.
- DE WALSCHE, A., «L'article 228 révisé par le traité d'Amsterdam», *L'Union Européenne et le monde apres amsterdam*, Marianne Dony, études Europeennes, éditions de l'Université de Bruxelles, 1999, pp. 61-76.
- DHOMMEAUX, J., «Jurisprudence du Comité des droits de l'homme des Nations Unies (novembre 1993 - juillet 1996)», *AFDI*, XLII, 1996, pp. 679-714.
- DÍAZ MIER, M. A., *Del GATT a la Organización Mundial del Comercio*, Síntesis, Madrid, 1996.
- DO NASCIMENTO E SILVA, G. E., «Le facteur temps et les traites», *RCADI*, 1978, vol. 154, pp. 215-298.
- DOUMBÉ-BILLÉ, S., «Les secrétariats des conventions internationales», *L'effectivité du droit international de l'environnement, contrôle de la mise en oeuvre des conventions internationales*, Claude Imperiali éd., Centre d'Études et de Recherches Internationales et Communautaires Université d'Aix-Marseille III, Economica, 1998, pp. 57-78.
- DUPUY, P. M., con la colaboración de M. RÉMOND-GUILLOUD, «La préservation du milieu marin», *Traité du nouveau droit de la mer*, eds. René-Jean, Dupuy & Daniel Vignes, Economica-Bruyland, Paris, 1985, p. 979-1045.

- DUPUY, P. M., «The preservation of the marine environment», *A handbook on the new law of the sea*, ed. René-Jean Dupuy & Daniel Vignes, Hague Academy of International Law, Martinus Nijhoff Publisher, Dordrecht/Boston/Lancaster, 1991; vol. II, pp. 1151-1232.
- «Droit des traités, codification et responsabilité internationale», *AFDI*, XLIII, 1997, pp. 7-30.
- «On the “doctrine” of approximate application of treaties in international law», *Liber Amicorum Professor Ignaz Seidl-Hohenveldern in honour of his 80th birthday*, (ed.) Gerhard Hafner, Gerhard Loibl y otros, Kluwer Law International, The Hague/London/Boston, 1998, pp. 97-102.
- *Droit international public*, 5e édition, Dalloz, Paris, 2000.
- FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANI, C., *La protección del medio ambiente en el derecho internacional. Derecho Comunitario y Derecho español*, Vitoria-Gasteiz, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 1991.
- FROWEIN J., y CANÇADO TRINDADE A., Analyse des répercussions juridiques pour les Etats qui ont l'intention de ratifier à la fois la Convention européenne des droits de l'homme de la Communauté des Etats indépendants, *Document SG/INF(95) 14*.
- GABALDÓN GARCÍA, J. L., «Protección del medio ambiente y evolución del derecho marítimo», *Anuario de Derecho Marítimo*, vol. XV, 1998, pp. 303-345.
- GASMI HÉDI, M., *L'Action normative de l'Organisation Maritime International (OMI)*, Septentrion, Presses Universitaires, Thèse a la Carte, 1995.
- GAUTIER, F., «The Maritime Area of the Antarctic and the new law of the sea», *The Antarctic Environment and International Law* (eds.) Verhoeven, J.; Sands, P.; Bruce, M.; Graham & Trotman/Martinus Nijhoff, London/Dordrecht/Boston, 1992, pp. 121-137.
- GUTIÉRREZ ESPADA, C., «La contribución del derecho internacional del medio ambiente al desarrollo del derecho internacional contemporáneo», *Anuario de Derecho Internacional*, 1998, vol. XIV, pp. 113-195.
- HANDL, G., «Environmental security and global change: the challenge to international law», *YBIL*, 1990, vol. I, pp. 3-33.
- HANNEQUART, J. P., *El Derecho comunitario en materia de residuos*, versión cast. de M. Campins Eritja, con la colaboración de L. Huici Sancho, PPU, Barcelona, 1996.
- HART, H. L. A., *The Concept of law*, Oxford, Clarendon Press 1961.
- HONNOLD, J. O., «International Unification of Private Law», *United Nations Legal Order* (ed.) Oscar Schachter & Christopher C. J. Joyner, American Society of International Law, Cambridge University Press, 1995, vol. II, pp. 1025-1056.
- JADOT, B., «Le statut juridique des déchets au regard de la protection de la santé de l'homme et de l'environnement», *L'entreprise et la gestion des déchets*, Bruylant, 1993, pp. 17-61.
- JENKS, C.W., «The conflict of law making treaties», *BYBIL*, 1953, pp. 401-453.
- JUSTE RUIZ, J., «Derecho Internacional Público y medio ambiente», *Problemas internacionales del medio ambiente*, Universidad de Barcelona, 1984, pp. 9-54.

- JUSTE RUIZ, J., «La evolución del derecho internacional del medio ambiente», *Hacia un nuevo orden internacional y europeo*. Homenaje al Profesor M. Díez de Velasco, Tecnos, Madrid, 1993, pp. 397-413.
- «La convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique Nord-Est», *RGDIP*, 1993, pp. 365-393.
 - *Derecho internacional del medio ambiente*, McGraw-Hill, Madrid, 1999.
 - «La regulación internacional de los movimientos transfronterizos de desechos y otras materias peligrosas», *An.HLADI*, 1995, vol. XII, pp. 57-98.
- KAGENECK, A., et PINEL, C., «Développements récents du régime juridique applicable à la protection des mers et aux substances radioactives: prévention et réparation des dommages», *Annuaire du droit de la mer*, 1997, vol. II, pp. 206-236.
- KELSEN, H., «Théorie du droit international public», *RCADI*, 1953, III, n.º 84, pp. 5-203.
- «Derogation» R. A. Newman (ed.), *Essays in Jurisprudence in Honor of Roscoe Pound*, American Society of Legal History, Indianapolis, 1962, pp. 339-361.
- KISS, A. Ch., «L'état du droit de l'environnement en 1981: problèmes et solutions», *JDI*, 1981, pp. 599-543.
- KISS, A. Ch., *Droit international de l'environnement*, Pedone, Paris, 1989.
- «La acción internacional de la Unión Europea», *Derecho medioambiental de la Unión Europea*, Ed. Luciano Parejo Alfonso, Ludwing Kramer y otros, McGraw-Hill, Madrid 1996, pp. 199-228.
 - «L'harmonisation de l'action communautaire avec l'action d'organisations internationales plus vastes», *La protection de l'environnement par les communautés Européennes*, sous la direction de Jean Charpentier, Éditions A. Pedone, Paris 1988, pp. 153-160.
- KISS, A., y SHELTON, D., *International environmental law*, Transnational Publishers, Inc. Ardsley-on-Hudson, New York Graham & Trotman Limited, London, England, 1991.
- *Traité de droit européen de l'environnement*, une publication de la Conférence Permanente des Recteurs, Présidents et Vice-Chanceliers des Universités Européennes, Éditions Frison-Roche, Paris 1995.
 - «Les traités-cadres: une technique juridique caractéristique du droit international de l'environnement», *AFDI*, vol. XXXIX, 1993, pp. 792-797.
- KRÄMER, L., *Derecho ambiental y tratado de la Comunidad Europea*. Traducción de la tercera edición de la obra *E.C. Treaty and environmental law* (1998), realizada por Luciano Parejo Alfonso y Angel M. Moreno Molina, Instituto «Pascual Madoz del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente» de la Universidad Carlos III de Madrid, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 1999.
- KSENTINI, FATMA-ZOHRA «Efectos nocivos para el goce de los derechos humanos del traslado y vertimientos ilícitos de productos y desechos tóxicos y peligrosos», *Informe de la Relatora Especial*, Doc. E/CN.4/1999/46, de 20 de enero de 1990.

- KWIATKOWSKA, B., y SOONS, A. H. H., «Transboundary movements of hazardous wastes and their disposal: Emerging global and regional regulation, *Annuaire de la Haya de Droit International*, 1992, pp. 68-136.
- KUMMER, K., «The international regulation of transboundary traffic in hazardous wastes: The 1989 Basel Convention», *ICLQ*, 1992, vol. 41, pp. 530-562.
- *International management of hazardous wastes, the Basel convention and related legal rules*, Clarendon Press - Oxford, 1995.
- LANGAVANT, E., *Droit de la mer I, Cuadre institutionnel et milieu marin (océanologie-pollution)*, Éditions Cujas, Paris, 1979.
- *Droit de la mer II, Le droit des communications maritimes*, Éditions Cujas, Paris, 1981.
- LAVRYSEN, L., «La notion de “déchets” dans la législation existante», *Amén.-Env.*, n.º spécial, «Les déchets», 1990, pp. 5-13.
- LEANZA, U., «Protection du milieu marin: point de vue italien», *The Continental shelf and the exclusive economic zone / Le plateau continental et la zone économique exclusive* (ed.) Donat Pharand & Umberto Leanza, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/London, 1993, pp. 333-348.
- LECA, J., *Les techniques de revision des conventions internationales*, Paris, LGDJ, 1961.
- LOIBL, G., «Trade and environment — a difficult relationship new approaches and trends: the Kyoto Protocol and beyond», *Liber Amicorum Professor Ignaz Seidl-Hohenveldern in honour of his 80th birthday*, (ed.) Gerhard Hafner, Gerhard Loibl y otros, Kluwer Law International, The Hague/London/Boston, 1998, pp. 419-443.
- LONDON, C., y M. LLAMAS, *EC law on protection of the environment and the free movement of goods*, Butterworths, London, Dublin, Edinburgh, 1995.
- LUCCHINI, L., y VÖLCKEL, *Droit de la mer, Tome 1, La mer et son droit, Les espaces maritimes*, Pedone, Paris, 1990.
- LUDWISZEWSKI, R. B., y SELEY, P. E., «“Green” Language in the NAFTA: Reconciling free trade and environmental protection», *NAFTA and the environment* (eds.) Rubin, S. J. & Alexander, D. C., *NAFTA Law and Policy Series*, vol. 3, Kluwer Law International, The Hague/London/Boston, 1996, pp. 1-23.
- MCNAIR, A. D., *The law of treaties*, Oxford, 1961 (reimpresión, Oxford University Press Inc. New York, 1998).
- MARINO MENÉNDEZ, F., «Relevancia del objeto de conservar y mejorar el medio ambiente en el derecho internacional contemporáneo», *Cuadernos de Derecho Internacional*, Universidad de Córdoba, 1983, n.º 1, pp. 63-83.
- «El objeto de las obligaciones establecidas por la Parte XII del Convenio de Montego Bay», *La responsabilidad internacional internacional. Aspectos de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado*, XIII Jornadas de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Jiménez Piernas, C. (ed.), Alicante, 1989, pp. 179-188.
- *Derecho Internacional Público*, Parte general, 3.ª edición, Trota, Madrid, 1999.

- MARTÍN-ARRIBAS, J. J., «El envite del derecho internacional en favor de una simbiosis entre el desarrollo y el medio ambiente», *El desarrollo y la cooperación internacional*, eds. F. Mariño y C. Fernández Liesa, Instituto de Estudios Internacionales y Europeos «Francisco de Vitoria», Universidad Carlos III de Madrid, BOE Madrid, 1997, pp. 233-271.
- MARTÍN MATEO, R., *Tratado de derecho ambiental*, Editorial Trivium, Madrid, 1992, vol. II.
- MALJEAN-DUBOIS, S., «Le foisonnement des institutions conventionnelles», *L'effectivité...*, C. Imperiali éd., pp. 25-56.
- MONJAL, P. Y., «La Conférence intergouvernementale de 1996 et la hiérarchie des normes communautaires», *RTD eur.* 32 (4), oct. – déc. 1996, pp. 681-716.
- MONTAÑA MORA, M., *La OMC y el reforzamiento del sistema GATT*, McGraw Hill, Madrid, 1997.
- JEFFERY, M. I., «The Legal framework for environmental regulation under the North American Free Trade Agreement», *NAFTA and the environment* (eds.) Rubin, S. J. y Alexander, D. C., *NAFTA Law and Policy Series*, vol. 3, Kluwer Law International, The Hague/London/Boston, 1996, pp. 207-228.
- MOÏSE, E., «La convention de Bâle sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux», *RGDIP*, 1989, vol. 93, pp. 899-906.
- Morrens, P., y P. DE BRUYCKER, «Qu'est-ce qu'un déchet dans les Communautés européennes?», *Ameén.-Env.*, 1993, vol. 3, pp. 154-9.
- MURPHY, S. D., «Prospective liability regimes for the transboundary movement of hazardous wastes», *AJIL*, 1994, vol. 88, pp. 24-75.
- MUS, J. B., «Conflicts between treaties in international law», *NILR*, 1998, pp. 208-232.
- NANDA, P., «Environment», *United Nations legal order*, ed. Oscar Schachter & Christopher C. Joyner, American Society of international Law, Grotius Publications, Cambridge University Press, 1995, vol II, pp. 631-669.
- NGUYEN QUOC DINH; DALLIER, P., et PELLET, A., *Droit International Public*, 6^e édition, LGDJ, Paris, 1999.
- OCDE, *Mondialisation Économique et environnement*, 1997.
- ODIER, F., «MARPOL ANNEXE VI», *Anuaire du droit de la mer*, 1997, vol. II, pp. 193-205.
- OUALLET, C., *Les déchets, Définitions juridiques et consequences*, Afnor, Paris, 1997.
- OUGUERGOUZ, F., «La Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique», *AFDI*, XXXVIII, 1992, pp. 871-884.
- OXMAN, B. H., «Antartica and the new law of the sea», *Cornell intenational law journal*, 1986, vol. 19(2) pp. 211-247.
- PAOLILLO, F., *Annuaire de l'institut de Droit International*, Session de Strasbourg, vol. 67-1, 1977, pp. 357-385.

- PAZARCI, H., «Problèmes d'incompatibilité des accords conclus par la CEE», *Mélanges offerts à Paul Reuter, Le droit international: unité et diversité*, Paris, Pedone, 1981, pp. 391-405.
- PÉREZ GONZÁLEZ, M., «Las organizaciones regionales en América (III)», *Las organizaciones internacionales*, Manuel Díez de Velasco, undécima edición, Tecnos, Madrid, 1999, pp. 721-761.
- PÉREZ MARTÍN, M. T., *Que fait le village planétaire de ses déchets dangereux? La mise en œuvre de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination*, Bruylant, Bruxelles, 2001.
- QUÉNEUDEC, J. P., «Les incidences de l'affaire du *Torrey Canyon* sur le droit de la mer», *AFDI*, 1968, pp. 701-718.
- *La contaminación del mar ante el derecho internacional*, Cuadernos de la Cátedra «J.B. Scott», traducción del francés por A. Herrero de la Fuente, Universidad de Valladolid, 1971.
- *Conventions maritimes internationales*, ed. Pedone, 1979.
- RANGER, E. M., «Environmental aspects of building a facility in Northern Mexico», *NAFTA and the environment*, pp. 321-350.
- REMIRO BROTONS, A., *Derecho internacional público, 2 Derecho de los tratados*, Tecnos, Madrid, 1982.
- «Las relaciones exteriores de las comunidades europeas», *Tratado de Derecho Comunitario Europeo*, Dirigido por E. García de Enterría, J. D. González Campos y S. Muñoz Machado, Civitas, Madrid, 1986, vol. III, pp. 637-708.
- «Pelagattos y aristogattos de la Comunidad Europea ante el reino de la OMC», *Gaceta Jurídica de la CE*, D-26, 1996, pp. 7-82.
- REUTER, P., *Introduction au droit des traités*, 3^e édition revue et augmentée par Philippe Cahier, Press Universitaires de France, 1995.
- RODRÍGUEZ LUCAS, M. L., «La protección del medio ambiente marino en el ámbito regional», *Derecho internacional del medio ambiente*, Juste Ruiz, J., McGraw-Hill, Madrid 1999, pp. 197-259.
- ROUCOUNAS, R., «Engagements parallèles et contradictoires», *RCADI*, 1987, vol. 206, pp. 9-228.
- RUIZ FABRI, H., «L'appel dans le règlement des différends de l'OMC: trois ans après, quinze rapports plus tard», *RGDIP*, vol 103, 1999, 1, pp. 47-127.
- RUMMEL-BULSKA, I., «The Basel convention and the UN Convention on the law of the sea», *Competing norms in the law of marine environmental protection*, (ed.) Henrik Ringbom, *International Environmental Law & Policy Series*, Kluwer Law International, London-The Hague-Boston, 1997, pp. 83-108.
- «Les aspects juridiques et institutionnels de la mise en œuvre de la convention de Bâle», *L'effectivité du droit international de l'environnement, contrôle de la mise en œuvre des conventions internationales*, Claude Imperiali éd., Centre d'Études et de Recherches Internationales et Communautaires Université d'Aix-Marseille III, Economica, 1998, pp. 201-224.

- RUGMAN, A.; KIRTON, J. y SOLOWAY, J., *Environmental Regulations and corporate strategy: A NAFTA perspective*, Oxford University Press, New York, 1999.
- SADELEER, NICOLAS DE, *Le droit communautaire et les déchets*, LGDJ et Bruylant 1995.
- SANCY, M., «Droit international de l'environnement et déchets industriels et radioactifs», *Traite de droit européen de l'environnement*, Alexander Kiss & Dinah Shelton, pp. 454-462.
- SAN MARTÍN SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, L., *La Organización Mundial del Comercio (OMC) y la protección del medio ambiente*, Aspectos jurídicos, Universidad Pública de Navarra, *Nafarroako Unibertsitate Publikoa*, 2000.
- SCIOTTI, C., *La concurrence des traités relatifs aux droits de l'homme devant le juge national*, Université Robert Schuman, Institut des Hautes Études Européennes, Bruylant, Bruxelles, 1997.
- SCHMIDT, A., «Transboundary movements of waste under EC law: the emerging regulatory framework», *JEL*, 1992/1, pp. 57-80.
- SCHULTZ, J., «The GATT/WTO Committee on trade and environment - Toward environmental reform», *AJIL*, 1995, vol. 89, n.º 2, pp. 423-439.
- SCOTT YOUNG, S., *International law of environmental protection*, published by Cahners Publishing Company, United States, 1995.
- SCOVAZZI, T., «Le droit international et la protection de l'environnement marin», *Traite de droit européen de l'environnement*, Alexander Kiss & Dinah Shelton, pp. 331-339.
- SINCLAIR, I. M., *The Vienna Convention on the Law of Treaties*, Dover, Manchester, 1984.
- SMITS, C., «Vers une extension de la politique commerciale commune au commerce des services?», *L'Union Européenne et le monde après amsterdam*, Marianne Dony, Études Européennes, éditions de l'Université de Bruxelles, 1999, pp. 193-216.
- SOBRINO HEREDIA, J. M., «El control de los acuerdos internacionales por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas», *Curso de Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz de 1992*, Bilbao, 1993, pp. 83-156.
- STARACE, V., «La protezione dell' ambiente marino nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare», Starace, V. (ed.) *Diritto Internazionale e protezione dell' ambiente marino*, Milano, 1983, pp. 401-419.
- THIEFFRY, P., *Droit européen de l'environnement*, Éditions Dalloz, Paris 1998.
- TIZZANO, A., «La hiérarchie des normes communautaires», *Reflexiones en torno al Tratado de Amsterdam y el futuro de la Unión Europea*. Coordinador J. M. de Faramiñan Gilbert, Editorial Comares, Granada, 2000, pp. 227-243.
- USHER, J. A., «Harmonisation of legislation», *Les Communautés Européennes en Fonctionnement / The European Communities in Action*, (ed.) Dominik Lasok & Panayotis Soldatos, Bruylant, Bruxelles, 1981, pp. 171-189.
- VAN CALSTER, G., «The World Trade Organisation Committee on trade and environment: Exploring the challenges of the greening of free trade», *Eur. Env. L.R.*, vol. 5, n.º 2, febrero 1996, pp. 44-51.

- VIERDAG, E. W., «The time of the Conclusion of a Multilateral Treaty: Article 30 of the Vienna convention on the law of Treaties and Related Provisions», *BYIL*, 1988, pp. 92-111.
- VILLENEUVE, C. DE, «Les notions de “déchets” et de “déchets dangereux”: les définitions proposées par la Commission des C.E.» *Amén.-Env.*, n.º spécial, «Les déchets», 1990, pp. 14-19.
- «Les mouvements transfrontières des déchets dangereux (Convention de Bâle et droit communautaire)», *RMC*, 1990, n.º 340, pp. 568-577.
- VIRALLY, M., *Le droit international en devenir. Essais écrits au fil des ans*. Publications de l'Institut Universitaire de Hautes Études Internationales - Genève, Presses Universitaires de France, 1990.
- UMBRICHT, V., «Joint activities of international organizations», *Manuel sur les organisations internationales (A Handbook on international organizations)*, pp. 362-378.
- WEISS, E. B., «Environment and trade as partners in sustainable development; a comentary», *AJIL*, 1992, vol. 86, n.º 4, pp. 728-735.
- «Environmentally sustainable competitiveness: A comment», *The Yale Law Journal*, vol. 102, n.º 8, 1993, pp. 2123-2142.
- WOLF, F., «L'interdépendance des conventions internationales du travail», *RCADI*, 1967, t. II, vol. 121, pp. 117-219.
- WU, C., *La Pollution du fait du transport maritime des hydrocarbures, Responsabilité et indemnisation des dommages*, INDEMER, Monaco, Pedone, 1994.
- YTURRIAGA BARBERÁN, J. A., «Convenio de Londres de 1972 sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias», *An.HLADI*, vol. 4, 1973, pp. 343-434.

APÉNDICES

APÉNDICE I

Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, adoptado por la Conferencia de Plenipotenciarios del 22 de marzo 1989

Entró en vigor el 5 de mayo de 1992
148 Partes en agosto de 2001

PREÁMBULO

Las Partes en el presente Convenio,

Conscientes de que los desechos peligrosos y otros desechos y sus movimientos transfronterizos pueden causar daños a la salud y al medio ambiente,

Teniendo presente el peligro creciente que para la salud humana y el medio ambiente representan la generación y la complejidad cada vez mayores de los desechos peligrosos y otros desechos, así como sus movimientos transfronterizos,

Teniendo presente también que la manera más eficaz de proteger la salud humana y el medio ambiente contra los daños que entrañan tales desechos consiste en reducir su generación al mínimo desde el punto de vista de la cantidad y de los peligros potenciales,

Convencidas de que los Estados deben tomar las medidas necesarias para que el manejo de los desechos peligrosos y otros desechos, incluyendo sus movimientos transfronterizos y su eliminación sea, compatible con protección de la salud humana y el medio ambiente cualquiera que sea el lugar de su eliminación,

Tomando nota de que los Estados tienen la obligación de velar porque el generador cumpla sus funciones con respecto al transporte y la eliminación de los desechos peligrosos y otros desechos de forma compatible con la protección de la salud humana y el medio ambiente, sea cual fuere el lugar en que se efectúe la eliminación,

Reconociendo plenamente que todo Estado tiene el derecho soberano de prohibir la entrada o eliminación de desechos peligrosos y otros desechos ajenos a su territorio.

Reconociendo también el creciente deseo de que se prohíban los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación en otros Estados en particular en los países en desarrollo.

Convencida de que, en la medida en que ello sea compatible con un manejo ambientalmente racional y eficiente, los desechos peligrosos y otros desechos deben eliminarse en el Estado en que se hayan generado.

Teniendo presente asimismo que los movimientos transfronterizos de tales desechos desde el Estado en que se hayan generados hasta cualquier otro Estado deben permitirse solamente cuando se realicen en condiciones que no representen peligro para la salud humana y el medio ambiente, y en condiciones que se ajusten a lo dispuesto en el presente convenio.

Considerando que un mejor control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y otros desechos actuará como incentivo para su manejo ambientalmente racional y para la reducción del volumen de tales movimientos transfronterizos,

Convencida de que los Estados deben adoptar medidas para el adecuado intercambio de información sobre los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y otros desechos que salen de esos Estados o entran en ellos, y para el adecuado control de tales movimientos,

Tomando nota de que varios acuerdos internacionales y regionales han abordado la cuestión de la protección y conservación del medio ambiente en lo que concierne al tránsito de mercancías peligrosas,

Teniendo en cuenta la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972), las Directrices y principios de El Cairo para el manejo ambientalmente racional de desechos peligrosos, aprobados por el Consejo de Administración del Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente por su decisión 14/30, de 17 de junio de 1987, las recomendaciones del Comité de Expertos en el Transporte de Mercaderías Peligrosas, de las Naciones Unidas (formuladas en 1957 y actualizadas cada dos años), las recomendaciones, declaraciones, instrumentos y reglamentaciones pertinentes adoptadas dentro del sistema de las Nacio-

nes Unidas y la labor y los estudios realizados por otras organizaciones internacionales y regionales.

Teniendo presente el espíritu, los principios, los objetivos y las funciones de la Carta Mundial de la Naturaleza aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimoséptimo período de sesiones (1982) como norma ética con respecto a la protección del medio humano y a la conservación de los recursos naturales,

Afirmando que los Estados han de cumplir sus obligaciones internacionales relativas a la protección y conservación del medio ambiente, y son responsables de los daños de conformidad con el Derecho Internacional,

Reconociendo que, de producirse una violación grave de las disposiciones del presente convenio o de cualquiera de sus protocolos, se aplicarán las normas pertinentes del derecho internacional de los tratados,

Conscientes de que es preciso seguir desarrollando y aplicando tecnologías ambientalmente racionales que generen escasos desechos, medidas de reciclado y buenos sistemas de administración y de manejo que permitan reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos y otros desechos,

Conscientes también de la creciente preocupación internacional por la necesidad de controlar rigurosamente los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y otros desechos, así como de la necesidad de reducir, en la medida de lo posible, esos movimientos al mínimo,

Preocupadas por el problema del tráfico ilícito transfronterizo de desechos peligrosos, y otros desechos,

Teniendo en cuenta también que los países en desarrollo tienen una capacidad limitada para manejar los desechos peligrosos y otros desechos,

Reconociendo que es preciso promover la transferencia de tecnología para el manejo racional de los desechos peligrosos y otros desechos de producción local, particularmente a los países en desarrollo, de conformidad con las Directrices de El Cairo y la Decisión 14/16 del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre la promoción de la transferencia de tecnología de protección ambiental,

Reconociendo también que los desechos peligrosos y otros desechos deben transportarse de conformidad con los convenios y las recomendaciones internacionales pertinentes,

Convencidas asimismo de que los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y otros desechos deben permitirse sólo cuando el transporte y la eliminación final de tales desechos sean ambientalmente racionales, y

Decididas a proteger, mediante un estricto control, la salud humana y el medio ambiental contra los efectos nocivos que pueden derivarse de la generación y el manejo de los desechos peligrosos y otros desechos,

Han acordado lo siguiente:

Artículo 1. Alcance del Convenio

1. Serán «desechos peligrosos» a los efectos del presente Convenio los siguientes desechos que sean objeto de movimientos transfronterizos:

- a) Los desechos que pertenezcan a cualquiera de las categorías enumeradas en el Anexo I, a menos que no tengan ninguna de las características descritas en el Anexo III;
- b) Los desechos no incluidos en el apartado a), pero definidos o considerados peligrosos por la legislación interna de la Parte que sea Estado de exportación, de importación o de tránsito.

2. Los desechos que pertenezcan a cualesquiera de las categorías contenidas en el Anexo II y que sean objeto de movimientos transfronterizos serán considerados «otros desechos» a los efectos del presente Convenio.

3. Los desechos que, por ser radiactivos, estén sometidos a otros sistemas de control internacional, incluidos instrumentos internacionales, que se apliquen específicamente a los materiales radiactivos, quedarán excluidos del ámbito del presente Convenio.

4. Los desechos derivados de las operaciones normales de los buques, cuya descarga esté regulada por otro instrumento internacional, quedarán excluidos del ámbito del presente Convenio.

Artículo 2. Definiciones

A los efectos del presente Convenio:

1. Por «desechos» se entienden las sustancias u objetos a cuya eliminación se procede, se propone proceder o se está obligado a proceder en virtud de lo dispuesto en la legislación nacional.

2. Por «manejo» se entiende la recolección, el transporte y la eliminación de los desechos peligrosos o de otros desechos, incluida la vigilancia de los lugares de eliminación.

3. Por «movimiento transfronterizo» se entiende todo movimiento de desechos peligrosos o de otros desechos procedente de una zona sometida a la jurisdicción nacional de un Estado y destinado a una zona sometida a la jurisdicción nacional de otro Estado, a través de esta zona, o a una zona no sometida a la jurisdicción nacional de ningún Estado, o a través de esta zona, siempre que el movimiento afecte a dos Estados por lo menos.

4. Por «eliminación» se entiende cualquiera de las operaciones especificadas en el Anexo IV del presente Convenio.

5. Por «lugar o instalación aprobado» se entiende un lugar o una instalación de eliminación de desechos peligrosos o de otros desechos que haya recibido una autorización o un permiso de explotación a tal efecto una autoridad competente del Estado en que esté situado el lugar o la instalación.

6. Por «autoridad competente» se entiende la autoridad gubernamental designada por una Parte para recibir, en la zona geográfica que la Parte considere conveniente, la notificación de un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos, así como cualquier información al respecto, y para responder a esa notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.

7. Por «punto de contacto» se entiende el organismo de una Parte a que se refiere el artículo 5 encargado de recibir y proporcionar información de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 15.

8. Por «manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos o de otros desechos» se entiende la adopción de todas las medidas posibles para garantizar que los desechos peligrosos y otros desechos se manejen de manera que queden protegidos en el medio ambiente y la salud humana contra los efectos nocivos que pueden derivarse de tales desechos.

9. Por «zona sometida a la jurisdicción nacional de un Estado» se entiende toda zona terrestre, marítima o del espacio aéreo en que un Estado ejerce, conforme al derecho internacional, competencias administrativas y normativas en relación con la protección de la salud humana o del medio ambiente.

10. Por «Estado de exportación» se entiende toda Parte desde la cual se proyecte iniciar o se inicie un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos.

11. Por «Estado de importación» se entiende toda Parte hacia la cual se proyecte efectuar o se efectúe un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos con el propósito de eliminarlos en él o de proceder a su carga para su eliminación en una zona no sometida a la jurisdicción nacional de ningún Estado.

12. Por «Estado de tránsito» se entiende todo Estado, distinto del Estado de exportación o del Estado de importación, a través del cual se proyecte efectuar o se efectúe un movimiento de desechos peligrosos o de otros desechos.

13. Por «Estados interesados» se entienden las Partes que sean Estados de exportación o Estados de importación y los Estados de tránsito, sean o no partes.

14. Por «persona» se entiende toda persona natural o jurídica.

15. Por «exportador» se entiende toda persona que organice la exportación de desechos peligrosos o de otros desechos y esté sometida a la jurisdicción del Estado de exportación.

16. Por «importador» se entiende toda persona que organice la importación de desechos peligrosos o de otros desechos y esté sometida a la jurisdicción del Estado de importación.

17. Por «transportista» se entiende toda persona que ejecute el transporte de desechos peligrosos o de otros desechos.

18. Por «generador» se entiende toda persona cuya actividad produzca desechos peligrosos u otros desechos que sean objeto de un movimiento transfronterizo o, si esa persona es desconocida, la persona que éste en posesión de esos desechos y/o los controle.

19. Por «eliminador» se entiende toda persona a la que se expidan desechos peligrosos u otros desechos y que ejecute la eliminación de tales desechos.

20. Por «organización de integración política y/o económica» se entiende toda organización constituida por Estados soberanos a la que sus Estados miembros le hayan transferido competencias en las esferas regidas por el presente Convenio y que haya sido debidamente autorizada, de conformidad con sus procedimientos internos, para firmar, ratifica, aceptar, aprobar o confirmar formalmente el Convenio, o para adherirse a él.

21. Por «tráfico ilícito» se entiende cualquier movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos efectuado conforme a lo especificado en el artículo 9.

Artículo 3. Definiciones nacionales de desechos peligrosos

1. Toda Parte enviará a la Secretaría del Convenio, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se haga Parte en el presente Convenio, información sobre desechos, salvo los enumerados en los Anexos I y II, considerados o definidos como peligrosos en virtud de su legislación nacional y sobre cualquier requisito relativo a los procedimientos de movimiento transfronterizo aplicables a tales desechos.

2. Posteriormente, toda Parte comunicará a la Secretaría cualquier modificación importante de la información que haya proporcionado en cumplimiento del párrafo 1.

3. La Secretaría transmitirá inmediatamente a todas las partes la información que haya recibido en cumplimiento de los párrafos 1 y 2.

4. Las Partes estarán obligadas a poner a la disposición de sus exportadores la información que les transmita la Secretaría en cumplimiento del párrafo 3.

Artículo 4. Obligaciones generales

1. a) Las Partes que ejerzan su derecho a prohibir la importación de desechos peligrosos y otros desechos para su eliminación, comunicarán a las demás Partes su decisión de conformidad con el artículo 13;

b) Las Partes prohibirán o no permitirán la exportación de desechos peligrosos o otros desechos a las Partes que hayan prohibido la importación de esos desechos, cuando dicha prohibición se les haya comunicado de conformidad con el apartado a) del presente artículo;

c) Las Partes prohibirán o no permitirán la exportación de desechos peligrosos y otros desechos si el Estado de importación no da su consentimiento por escrito a la importación de que se trate, siempre que dicho Estado de importación no haya prohibido la importación de tales desechos.

2. Cada Parte tomará la medidas apropiadas para:

a) Reducir al mínimo la generación de desechos en ella, teniendo en cuenta los aspectos sociales, tecnológicos y económicos;

b) Establecer instalaciones adecuadas de eliminación para el manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros desechos, cualquiera que sea el lugar donde se efectúa su eliminación que, en la medida de lo posible, estará situado dentro de ella.

c) Velar porque las personas que participan en el manejo de los desechos peligrosos y otros desechos dentro de ella adopten las medidas necesarias para impedir que ese manejo dé lugar a una contaminación y, en caso de que se produzca ésta, para reducir al mínimo sus consecuencias sobre la salud humana y el medio ambiente;

d) Velar porque el movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos y otros desechos se reduzca al mínimo compatible con un manejo ambientalmente racional y eficiente de esos desechos, y que se lleve a cabo de forma que protejan la salud humana y el medio ambiente de los efectos nocivos que puedan derivarse de ese movimiento;

e) No permitir la exportación de desechos peligrosos y otros desechos a un Estado o grupo de Estados pertenecientes a una organización de integración económica y/o política que sean Partes, particularmente a países en desarrollo, que hayan prohibido en su legislación todas la importaciones, o si tiene razones para creer que tales desechos no serán sometidos a un manejo ambientalmente racional, de conformidad con los criterios que adopten las Partes en su primera reunión.

f) Exigir que se proporcione información a los Estados interesados sobre el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y otros desechos propuesto, con arreglo a lo dispuesto en el Anexo V.A, para que se declaren abiertamente los efectos del movimiento propuesto, sobre la salud humana y el medio ambiente;

g) Impedir la importación de desechos peligrosos y otros desechos si tiene razones para creer que tales desechos no serán sometidos a un manejo ambientalmente racional;

h) Cooperar con otras Partes y organizaciones interesadas directamente y por conducto de la Secretaría en actividades como la difusión de información sobre los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y otros desechos, a fin de mejorar el manejo ambientalmente racional de esos desechos e impedir su tráfico ilícito;

3. Las Partes considerarán que el tráfico ilícito de desechos peligrosos y otros desechos es delictivo.

4. Toda Parte adoptará las medidas jurídicas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para aplicar y hacer cumplir las disposiciones del presente Convenio, incluyendo medidas para prevenir y reprimir los actos que contravengan el presente Convenio.

5. Ninguna Parte permitirá que los desechos peligrosos y otros desechos se exporten a un Estado que no sea Parte o se importen de un Estado que no sea Parte.

6. Las Partes acuerdan no permitir la exportación de desechos peligrosos y otros desechos para su eliminación en la zona situada al sur de los 60° de latitud sur, sean o no esos desechos objeto de un movimiento transfronterizo.

7. Además, toda Parte:

a) Prohibirá a todas las personas sometidas a su jurisdicción nacional, el transporte o la eliminación de desechos peligrosos y otros desechos, a menos que esas personas estén habilitadas o autorizadas para realizar ese tipo de operaciones;

b) Exigirá que los desechos peligrosos y otros desechos que sean objeto de un movimiento transfronterizo se embalen, etiqueten y transporten de conformidad con los reglamentos y normas internacionales generalmente aceptados y reconocidos en materia de embalaje, etiquetado y transporte y teniendo debidamente en cuenta los usos internacionalmente admitidos al respecto;

c) Exigirá que los desechos peligrosos y otros desechos vayan acompañados de un documento sobre el movimiento desde el punto en que se inicie el movimiento transfronterizo hasta el punto en que se eliminen los desechos.

8. Toda Parte exigirá que los desechos peligrosos y otros desechos, que se vayan a exportar, sean manejados de manera ambientalmente racional en el Estado de importación y en los demás lugares. En su primera Reunión las partes adoptarán directrices técnicas para el manejo ambientalmente racional de los desechos sometidos a este convenio.

9. Las partes tomarán las medidas apropiadas para que sólo se permita el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y otros desechos si:

a) El Estado de exportación no dispone de la capacidad técnica ni de los servicios requeridos o de lugares de eliminación adecuados a fin de eliminar los desechos de que se trate de manera ambientalmente racional y eficiente;

b) Los desechos de que se trate son necesarios como materias primas para las industrias de reciclado o recuperación en el Estado de importación; o

c) El movimiento transfronterizo de que se trate se efectúa de conformidad con los otros criterios que puedan decidir las Partes, a condición de que esos criterios no contradigan los objetivos de ese Convenio.

10. En ninguna circunstancia podrá transferirse a los Estados de importación o de tránsito la obligación que incumbe, con arreglo a este Convenio, a los Estados en los cuales se generan desechos peligrosos y otros desechos de exigir que tales desechos sean manejados en forma ambientalmente racional.

11. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio impedirá que una Parte imponga exigencias adicionales que sean conformes a las disposiciones del presente Convenio y estén de acuerdo con las normas del derecho internacional, a fin de proteger mejor la salud humana y el medio ambiente.

12. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio afectará de manera alguna la soberanía de los Estados sobre su mar territorial establecida de conformidad con el derecho internacional, ni a los derechos soberanos y la jurisdicción que poseen los Estados en sus zonas económicas exclusivas y en sus plataformas continentales de confor-

midad con el derecho internacional, ni al ejercicio, por parte de los buques y las aeronaves de todos los Estados, de los derechos y libertades de navegación previstos en el derecho internacional y reflejados en los instrumentos internacionales pertinentes.

13. Las Partes se comprometen a estudiar periódicamente las posibilidades de reducir la cuantía y/o el potencial de contaminación de los desechos peligrosos y otros desechos que se exporten a otros Estados, en particular a países en desarrollo.

Artículo 5. Designación de las autoridades competentes y el punto de contacto

Para facilitar la aplicación del presente Convenio, las Partes:

1. Designarán o establecerán una o varias autoridades competentes y un punto de contacto. Se designará una autoridad competente para que reciba las notificaciones en el caso de un Estado de tránsito.

2. Comunicarán a la Secretaría, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente Convenio para ellas, cuáles son los órganos que han designado como punto de contacto y cuáles son sus autoridades competentes.

3. Comunicarán a la Secretaría, dentro del mes siguiente a la fecha de la decisión, cualquier cambio relativo a la designación hecha por ellas en cumplimiento del párrafo 2 de este artículo.

Artículo 6. Movimientos transfronterizos entre Partes

1. El Estado de exportación notificará por escrito, o exigirá al generador o al exportador que notifique por escrito, por conducto de la autoridad competente de los Estados interesados cualquier movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos. Tal notificación contendrá las declaraciones y la información requeridas en el Anexo V.A, escritas en el idioma del Estado de importación. Sólo será necesario enviar una notificación a cada Estado interesado.

2. El Estado de importación responderá por escrito al notificador, consintiendo en el movimiento con o sin condiciones, rechazando el movimiento o pidiendo más información. Se enviará copia de la respuesta definitiva del Estado de importación a las autoridades competentes de los Estados interesados que sean Partes.

3. El Estado de exportación no permitirá que el generador o el exportador inicie el movimiento transfronterizo hasta que haya recibido confirmación por escrito de que:

a) El notificador ha recibido el consentimiento escrito del Estado de importación, y

b) El notificador ha recibido del Estado de importación confirmación de la existencia de un contrato entre el exportador y el eliminador en el que se estipule que se deberá proceder a un manejo ambientalmente racional de los desechos en cuestión.

4. Todo Estado de tránsito acusará prontamente recibo de la notificación al notificador, dentro de un plazo de 60 días consintiendo en el movimiento con o sin

condiciones, rechazando el movimiento o pidiendo más información. El Estado de exportación no permitirá que comience el movimiento transfronterizo hasta que haya recibido el consentimiento escrito del Estado de tránsito. No obstante, si una Parte decide en cualquier momento renunciar a pedir el consentimiento previo por escrito de manera general o bajo determinadas condiciones, para los movimientos transfronterizos de tránsito de desechos, o bien modifica sus condiciones a este respecto, informará sin demora de su decisión a las demás Partes de conformidad con el artículo 13. En este último caso, si el Estado de la exportación no recibiera respuesta alguna en el plazo de 60 días a partir de la recepción de una notificación del Estado de tránsito, el Estado de exportación podrá permitir que se proceda a la exportación a través del Estado de tránsito.

5. Cuando, en un movimiento transfronterizo de desechos, los desechos no hayan sido definidos legalmente o no estén considerados como desechos peligrosos más que:

a) en el Estado de importación, las disposiciones del párrafo 9 de este artículo aplicables al importador o al eliminador y al Estado de importación serán aplicables *mutatis mutandis* al exportador y al Estado de exportación, respectivamente, o

b) en el Estado de importación o en los Estados de importación y de tránsito que sean Partes, las disposiciones de los párrafos 1, 3, 4 y 6 de este artículo, aplicables al exportador y al Estado de importación, respectivamente, o

c) en cualquier Estado de tránsito que sea Parte, serán aplicables las disposiciones del párrafo 4.

6. El Estado de exportación podrá, siempre que obtenga el permiso escrito de los Estados interesados, permitir que el generador o el exportador hagan una notificación general cuando unos desechos peligrosos u otros desechos que tengan las mismas características físicas y químicas se envíen regularmente al mismo eliminador por la misma oficina de aduanas de salida del Estado de exportación, por la misma oficina de aduanas de entrada del mismo Estado de importación y, en caso de tránsito, por las mismas oficinas de aduanas de entrada y de salida del Estado o los Estados de tránsito.

7. Los Estados interesados podrán hacer que su consentimiento escrito para la utilización de notificación general a que se refiere el párrafo 6 dependa de que se proporcione cierta información, tal como las cantidades exactas de los desechos peligrosos u otros desechos que vayan a enviar o unas listas periódicas de esos desechos.

8. La notificación general y el consentimiento escrito a que se refieren los párrafos 6 y 7 podrán abarcar múltiples envíos de desechos peligrosos o de otros desechos durante un plazo máximo de 12 meses.

9. Las Partes exigirán que toda persona que participe en un envío transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos firme el documento relativo a ese movimiento en el momento de la entrega o de la recepción de los desechos que se trate. Exigirán también que el eliminador informe tanto al exportador como a la autoridad competente del Estado de exportación de que ha recibido los desechos en cuestión y, a su debido tiempo, de que se ha concluido la eliminación de conformidad con lo indicado en la notificación. Si el Estado de exportación no recibe esa información, la

autoridad competente del Estado de exportación o el exportador lo comunicarán al Estado de importación.

10. La notificación y la respuesta exigidas en este artículo se transmitirán a la autoridad competente de las Partes interesadas o a la autoridad gubernamental que corresponda en el caso de los Estados que no sean Partes.

11. El Estado de importación o cualquier Estado de tránsito que sea Parte podrá exigir que todo movimiento transfronterizo de desechos peligrosos esté cubierto por un seguro, una fianza u otra garantía.

Artículo 7. Movimiento transfronterizo de una parte a través de Estados que no sean Partes

El párrafo 1 del artículo 6 del presente Convenio se aplicará *mutatis mutandis* al movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos o de otros desechos de una Parte a través de un Estado o Estados que no sean Partes.

Artículo 8. Obligación de reimportar

Cuando un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos para el que los Estados interesados hayan dado su consentimiento con arreglo a las disposiciones del presente Convenio no se pueda llevar a término de conformidad con las condiciones del contrato, el Estado de exportación velará porque los desechos peligrosos en cuestión sean devueltos al Estado de exportación por el exportador, si no se pueden adoptar otras disposiciones para eliminarlos de manera ambientalmente racional dentro de un plazo de 90 días a partir del momento que el Estado de importación haya informado al Estado de exportación y a la Secretaría, o dentro del plazo en que convengan los Estados interesados. Con este fin, ninguna Parte que sea Estado de tránsito ni el Estado de exportación se opondrán a la devolución de tales desechos al Estado de exportación, ni la obstaculizarán o impedirán.

Artículo 9. Tráfico ilícito

1. A los efectos del presente Convenio, todo movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos realizado:

- a) sin notificación a todos los Estados interesados conforme a las disposiciones del presente Convenio; o
- b) sin el consentimiento de un estado interesado conforme a las disposiciones del presente Convenio; o
- c) con consentimiento obtenido de los Estados interesados mediante falsificación, falsas declaraciones o fraude; o
- d) de manera que no corresponda a los documentos en un aspecto esencial; o

e) que entrañe la eliminación deliberada (por ejemplo, vertimiento) de los desechos peligrosos o de otros desechos de contravención de este Convenio y de los principios generales del derecho internacional.

2. En el caso de un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos considerado tráfico ilícito como consecuencia de la conducta del exportador o el generador, el Estado de exportación velará porque dichos desechos sean:

a) Devueltos por el exportador o el generador o, si fuera necesario por el mismo Estado de exportación o, si esto no fuese posible,

b) eliminados de otro modo de conformidad con las disposiciones de este Convenio, en el plazo de 30 días desde el momento en que el Estado de exportación haya sido informado del tráfico ilícito, o dentro de cualquier otro período de tiempo que convengan los Estados interesados. A tal efecto, las Partes interesadas no se opondrán a la devolución de dichos desechos al Estado de exportación, ni la obstaculizarán o impedirán.

3. Cuando un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos sea considerado tráfico ilícito como consecuencia de la conducta del importador o el eliminador, el Estado de importación velará porque los desechos peligrosos de que se trate sean eliminados de manera ambientalmente racional por el importador o el eliminador, o en caso necesario, por el mismo en el plazo de 30 días a contar del momento que el Estado de importación ha tenido conocimiento del tráfico ilícito, o en cualquier otro plazo que convengan los Estados interesados. A tal efecto, las Partes interesadas cooperarán según sea necesario, para la eliminación de los desechos en forma ambientalmente racional.

4. Cuando la responsabilidad por el tráfico ilícito no pueda atribuirse al exportador generador ni al importador o eliminador, las Partes interesadas u otras partes, según proceda, cooperarán para garantizar que los desechos de que se trate se eliminen lo antes posible de manera ambientalmente racional en el Estado de exportación, en el Estado de importación o en cualquier otro lugar que sea conveniente.

5. Cada Parte promulgará las disposiciones legislativas nacionales adecuadas para prevenir y castigar el tráfico ilícito. Las Partes contratantes cooperarán con miras a alcanzar los objetivos de este artículo.

Artículo 10. Cooperación internacional

1. Las Partes cooperarán entre sí para mejorar o conseguir el manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros desechos.

2. Con este fin las Partes deberán:

a) Cuando se solicite, proporcionar información, ya sea una base bilateral o multilateral, con miras a promover el manejo ambientalmente racional de los desechos, incluida la armonización de normas prácticas técnicas para el manejo adecuado de los desechos peligrosos y otros desechos;

b) Cooperar en la vigilancia de los efectos del manejo de los desechos peligrosos sobre la salud humana y el medio ambiente;

c) Cooperar con sujeción a sus leyes, reglamentos y políticas nacionales, en el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías ambientalmente racionales y que generen escasos desechos y en el mejoramiento de las tecnologías actuales con miras a eliminar, en la mayor medida posible, la generación de desechos peligrosos y otros desechos y a lograr métodos más eficaces y eficientes para su manejo ambientalmente racional, incluido el estudio de los efectos económicos, sociales y ambientales de la adopción de tales tecnologías nuevas o mejoradas;

d) Cooperar activamente, con sujeción a sus leyes, reglamentos y políticas nacionales, en la transferencia de tecnología y los sistemas de administración relacionados con el manejo ambientalmente racional de los desechos. Asimismo, deberán cooperar para desarrollar la capacidad técnica entre las Partes, especialmente las que necesiten y soliciten asistencia en esta esfera;

e) Cooperar en la elaboración de las directrices técnicas o los códigos de práctica apropiados, o ambas cosas.

3. Las Partes utilizarán medios adecuados de cooperación para el fin de prestar asistencia a los países en desarrollo en lo que concierne a la aplicación de los apartados a), b) y c) del párrafo 2 del artículo 4.

4. Habida cuenta de las necesidades de los países en desarrollo, la cooperación entre las Partes y las organizaciones internacionales pertinentes debe promover, entre otras cosas, la toma de conciencia pública, y el desarrollo del manejo racional de los desechos peligrosos y otros desechos y la adopción de nuevas tecnologías que generen escasos desechos.

Artículo 11. Acuerdos bilaterales, multilaterales y regionales

1. No obstante lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 4, las Partes podrán concertar acuerdos o arreglos bilaterales, multilaterales o regionales sobre el movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos y otros desechos, con Partes o con Estados que no sean Partes siempre que dichos acuerdos o arreglos no menoscaben el manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros desechos que estipula el presente Convenio. Estos acuerdos o arreglos estipularán disposiciones que no sean menos ambientalmente racionales que las previstas en el presente Convenio, tomando en cuenta en particular los intereses de los países en desarrollo.

2. Las Partes notificarán a la Secretaría todos los acuerdos o arreglos bilaterales, multilaterales y regionales a que se refiere el párrafo 1, así como los que hayan concertado con anterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio para ellos, con el fin de controlar los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y otros desechos que se llevan a cabo enteramente entre las partes en tales acuerdos. Las disposiciones de este Convenio no afectarán a los movimientos transfronterizos que se efectúan en cumplimiento de tales acuerdos, siempre que estos acuerdos sean compati-

bles con la gestión ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros desechos que estipula el presente Convenio.

Artículo 12. Consultas sobre la responsabilidad

Las Partes cooperarán con miras a adoptar cuanto antes un protocolo que establezca las normas y procedimientos apropiados en lo que refiere a la responsabilidad y la indemnización de los daños resultantes del movimiento transfronterizo y la eliminación de los desechos peligrosos y otros desechos.

Artículo 13. Transmisión de información

1. Las Partes velarán porque, cuando llegue a su conocimiento, se informe inmediatamente a los Estados interesados en el caso de un accidente ocurrido durante los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos o de otros desechos o su eliminación que pueda presentar riesgos para la salud humana y el medio ambiente en otros Estados.

2. Las Partes se informarán entre sí, por conducto de la Secretaría, acerca de:

a) Los cambios relativos a la designación de las autoridades competentes y/o los puntos de contacto, de conformidad con el artículo 5;

b) Los cambios en su definición nacional de desechos peligrosos, con arreglo al artículo 3; y lo antes posible, acerca de:

c) Las decisiones que hayan tomado de no autorizar, total o parcialmente, la importación de desechos peligrosos u otros desechos para su eliminación dentro de la zona bajo su jurisdicción nacional;

d) Las decisiones que hayan tomado de limitar o prohibir la exportación de desechos peligrosos u otros desechos;

e) Toda otra información que se requiera con arreglo al párrafo 4 de este artículo.

3. Las Partes, en consonancia con las leyes y reglamentos nacionales, transmitirán, por conducto de la Secretaría, a la Conferencia de las Partes establecida en cumplimiento del artículo 15, antes del final de cada año civil, un informe sobre el año civil precedente que contenga la siguiente información:

a) Las autoridades competentes y los puntos de contacto que hayan designado con arreglo al artículo 5;

b) Información sobre los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos o de otros desechos en los que hayan participado, incluidas:

i) la cantidad de desechos peligrosos y otros desechos exportados, su categoría, sus características, su destino, el país de tránsito y el método de eliminación, tal como constan en la respuesta a la notificación;

- ii) la cantidad de desechos peligrosos importados, su categoría, características, origen y el método de eliminación;
 - iii) las operaciones de eliminación a las que no procedieron en la forma prevista;
 - iv) los esfuerzos realizados para obtener una reducción de la cantidad de desechos peligrosos y otros desechos sujetos a movimiento transfronterizo;
- c) Información sobre las medidas que hayan adoptado en cumplimiento de presente Convenio;
 - d) Información sobre las estadísticas calificadas que hayan compilado acerca de los efectos que tengan sobre la salud humana y el medio ambiente la generación, el transporte y la eliminación de los desechos peligrosos;
 - e) Información sobre los acuerdos y arreglos bilaterales, unilaterales y regionales concertados de conformidad con el artículo 11 del presente Convenio;
 - f) Información sobre accidentes ocurridos durante los movimientos transfronterizos y la eliminación de desechos peligrosos y otros desechos y sobre las medidas tomadas para subsanarlos;
 - g) Información sobre los diversos métodos de eliminación utilizados dentro de las zonas bajo su jurisdicción nacional;
 - h) Información sobre las medidas adoptadas a fin de desarrollar tecnologías para la reducción y/o eliminación de la generación de desechos peligrosos y otros desechos; y
 - i) Las demás cuestiones que la conferencia de las partes considere pertinentes.

4. Las Partes, de conformidad con las leyes y los reglamentos nacionales, velarán porque se envíen a la Secretaría copias de cada notificación relativa a cualquier movimiento transfronterizo determinado de desechos peligrosos o de otros desechos, y de la respuesta a esa notificación, cuando una Parte que considere que ese movimiento transfronterizo puede afectar a su medio ambiente haya solicitado que así se haga.

Artículo 14. Aspectos financieros

1. Las Partes convienen que, en función de las necesidades específicas de las diferentes regiones y subregiones, deben establecerse centros regionales de capacitación y transferencia de tecnología con respecto al manejo de desechos peligrosos y otros desechos y la reducción al mínimo de su generación. Las Partes Contratantes adoptarán una decisión sobre el establecimiento de mecanismos de financiación apropiados de carácter voluntario.

2. Las Partes examinarán la conveniencia de establecer un fondo rotatorio para prestar asistencia provisional, en situaciones de emergencia, con el fin de reducir al mínimo los daños debidos a accidentes causados por el movimiento transfronterizo y la eliminación de desechos peligrosos y otros desechos.

Artículo 15. Conferencia de las Partes

1. Queda establecida una conferencia de las Partes. El Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente convocará la primera reunión de la Conferencia de las Partes a más tardar un año después de la entrada en vigor del presente Convenio. Ulteriormente, se celebrarán reuniones ordinarias de la Conferencia de las Partes a los intervalos regulares que determine la Conferencia en su primera reunión.

2. Las reuniones extraordinarias de la Conferencia de las Partes se celebrarán cuando la Conferencia lo estime necesario o cuando cualquiera de las Partes lo solicite por escrito, siempre que, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que la solicitud les sea comunicada por la Secretaría, un tercio de las Partes, como mínimo, apoye esa solicitud.

3. La Conferencia de las Partes acordará y adoptará por consenso su reglamento interno y de cualesquiera órganos subsidiarios que establezca, así como las normas financieras para determinar, en particular, la participación financiera de las Partes con arreglo al presente Convenio.

4. En su primera reunión, las Partes considerarán las medidas adicionales necesarias para facilitar el cumplimiento de sus responsabilidades con respecto a la protección y conservación del medio ambiente marino en el contexto del presente Convenio.

5. La Conferencia de las Partes examinará y evaluará permanentemente la aplicación efectiva del presente Convenio, y además:

a) Promoverá la armonización de políticas, estrategias y medidas apropiadas para reducir al mínimo los daños causados a la salud humana y el medio ambiente por los desechos peligrosos y otros desechos;

b) Examinará y adoptará, según proceda, las enmiendas al presente Convenio y sus anexos, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la información científica, técnica, económica y ambiental disponible,

c) Examinará y tomará todas las demás medidas necesarias para la consecución de los fines del presente Convenio a la luz de la experiencia adquirida durante su aplicación y en la de los acuerdos y arreglos a que se refiere el artículo 11;

d) Examinará y adoptará protocolos según proceda; y

e) Creará los órganos subsidiarios que estimen necesarios para la aplicación del presente Convenio.

6. Las Naciones Unidas y sus organismos especializados, así como todo Estado que no sea Parte en el presente Convenio, podrán estar representados como observadores en las reuniones de la Conferencia de las Partes. Cualquier otro órgano u organismo nacional o internacional, gubernamental o no gubernamental, con competencia en las esferas relacionadas con los desechos peligrosos y otros desechos que haya informado a la Secretaría de su deseo de estar representado en una reunión de la Conferencia de las Partes como observador podrá ser admitido a participar a menos que un tercio por lo menos de las Partes presentes se opongan a ello. La admisión y participa-

ción de observadores estarán sujetas al reglamento aprobado por la Conferencia de las Partes.

7. La Conferencia de las Partes procederá, tres años después de la entrada en vigor del Convenio, y ulteriormente por lo menos cada seis años, a evaluar su eficacia y, si fuera necesario, a estudiar la posibilidad de establecer una prohibición completa o parcial de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y otros desechos a la luz de la información científica, ambiental, técnica y económica más reciente.

Artículo 16. Secretaría

1. La Secretaría tenderá las siguientes funciones:

a) Organizar las reuniones a que se refieren los artículos 15 y 17 y prestarles servicios;

b) Preparar y transmitir informes basados en la información de conformidad con los artículos 3, 4, 6, 11, y 13, así como la información obtenida con ocasión de las reuniones de los órganos subsidiarios creados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15 y también, cuando proceda, en la información proporcionada por las entidades intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes;

c) Preparar informes acerca de las actividades que realice en el desempeño de sus funciones con arreglo al presente Convenio y presentarlos a la conferencia de las Partes;

d) Velar por la coordinación necesaria con otros órganos internacionales pertinentes y, en particular, concertar los arreglos administrativos y contractuales que puedan ser necesarios para el desempeño eficaz de sus funciones;

e) Comunicarse con autoridades competentes y los puntos de contacto establecidos por las Partes de conformidad con el artículo 5 del presente Convenio;

f) Recabar información sobre los lugares e instalaciones nacionales autorizados de las Partes, disponibles para la eliminación de sus desechos peligrosos y otros desechos, y distribuir de esa información entre las Partes;

g) Recibir y transmitir información de y a las partes sobre:

— fuentes de asistencia y capacitación técnicas;

— conocimientos técnicos y científicos disponibles;

— fuentes de asesoramiento y conocimiento prácticos; y

— disponibilidad de recursos, con miras a prestar asistencia a las Partes que lo soliciten en sectores como:

— el funcionamiento del sistema de notificación establecido en el presente Convenio;

— el manejo de desechos peligrosos y otros desechos;

— las tecnologías ambientalmente racionales relacionadas con los desechos peligrosos y otros desechos, como las tecnologías que generan pocos o ningún desecho;

— la evaluación de las capacidades y los lugares de eliminación;

- la vigilancia de los desechos peligrosos y otros desechos;
- las medidas de emergencia;

h) Proporcionar a las Partes que lo soliciten información sobre consultores o entidades consultivas que posean la competencia técnica necesaria en esta esfera y puedan prestarles asistencia para examinar la notificación de un movimiento transfronterizo, la conformidad de un envío de desechos peligrosos o de otros desechos con la notificación pertinente y/o la idoneidad de las instalaciones propuestas para la eliminación ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros desechos, cuando tengan razones para creer que tales desechos no se manejarán de manera ambientalmente racional. Ninguno de estos exámenes debería correr a cargo de la Secretaría;

i) Prestar asistencia a las Partes que lo soliciten para determinar los casos de tráfico ilícito y distribuir de inmediato a las Partes interesadas toda información que haya recibido en relación con el tráfico ilícito;

j) Cooperar con las Partes, las organizaciones y los organismos internacionales pertinentes y competentes en el suministro de expertos y equipo a fin de prestar rápidamente asistencia a los Estados en caso de situaciones de emergencia; y

k) Desempeñar las demás funciones relacionadas con los fines del presente Convenio que determine la Conferencia de las Partes.

2. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente desempeñará con carácter provisional las funciones de Secretaría hasta que termine la primera reunión de la Conferencia de las Partes celebrada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.

3. En su primera reunión, la Conferencia de las Partes designará la secretaría de entre las organizaciones intergubernamentales competentes existentes que hayan declarado que están dispuestas a desempeñar las funciones de Secretaría establecidas en el presente Convenio. En esa reunión, la Conferencia de las Partes también evaluará la ejecución por la Secretaría interina de las funciones que le hubiesen sido encomendadas, particularmente en virtud del párrafo 1 de este artículo, y decidirá las estructuras apropiadas para el desempeño de esas funciones.

Artículo 17. Enmiendas al Convenio

1. Cualquiera de la Partes podrá proponer enmiendas al presente Convenio y cualquier Parte en un protocolo podrá proponer enmiendas a dicho protocolo. En esas enmiendas se tendrán debidamente en cuenta, entre otras cosas, las consideraciones científicas y técnicas pertinentes.

2. Las enmiendas al presente Convenio se adoptarán en una reunión de la Conferencia de las Partes. Las enmiendas a cualquier protocolo se aprobarán en una reunión de las Partes en el protocolo de que se trate. El texto de cualquier enmienda propuesta al presente Convenio o a cualquier protocolo, salvo si en tal protocolo se dispone otra cosa, será comunicado a las Partes por la Secretaría por lo menos seis meses antes de la reunión en que se proponga su adopción. La Secretaría comunicará también las enmiendas propuestas a los signatarios del presente Convenio para su información.

3. Las Partes harán todo lo posible por llegar a un acuerdo por consenso sobre cualquier propuesta de enmienda al presente Convenio. Una vez adoptados todos los esfuerzos por lograr un consenso sin que se haya llegado a un acuerdo, la enmienda se adoptará, como ultimo recurso, por mayoría de tres cuartos de las Partes presentes y votantes en la reunión, y será presentada a todas las Partes por el Depositario para su ratificación, aprobación, confirmación formal o aceptación.

4. El procedimiento mencionado en el párrafo 3 se aplicará a las enmiendas de cualquier protocolo, con la salvedad de que para su adopción bastará una mayoría de dos tercios de las Partes en dicho protocolo presentes y votantes en la reunión.

5. Los instrumentos de ratificación, aprobación, confirmación formal o aceptación de las enmiendas se depositarán con el Depositario. Las enmiendas adoptadas de conformidad con los párrafos 3 ó 4 de este artículo entrarán en vigor, respecto de las Partes que las hayan aceptado, el nonagésimo día después de la fecha en que el Depositario haya recibido el instrumento de su ratificación, aprobación, confirmación formal o aceptación por tres cuartos, como mínimo, de las Partes que hayan aceptado las enmiendas al protocolo de que se trate, salvo si en éste se ha dispuesto otra cosa. Las enmiendas entrarán en vigor respecto de cualquier otra parte del nonagésimo día después de la fecha en que esa Parte haya depositado su instrumento de ratificación, aprobación confirmación formal o aceptación de las enmiendas.

6. A los efectos de este artículo por «Partes presentes y votantes» se entiende las Partes que estén presentes y emitan un voto afirmativo o negativo.

Artículo 18. Adopción y enmienda de anexos

1. Los anexos del presente Convenio o cualquier protocolo formarán parte integrante del presente Convenio o de cualquier protocolo de que se trate, según proceda y, a menos que se disponga expresamente otra cosa, se entenderá que toda referencia al presente Convenio o a sus protocolos se refiere al mismo tiempo a cualquiera de los anexos. Esos anexos estarán limitados a cuestiones científicas, técnicas y administrativas.

2. Salvo si se dispone otra cosa en cualquiera de los protocolos respecto de sus anexos, para la propuesta, adopción y entrada en vigor de anexos adicionales del presente Convenio o de anexos de un protocolo, se seguirá el siguiente procedimiento:

a) Los anexos del presente Convenio y de sus protocolos serán propuestos y adoptados según el procedimiento prescrito en los párrafos 2, 3 y 4 del artículo 17;

b) Cualquiera de las Partes que no pueda aceptar un anexo adicional del presente Convenio o un anexo de cualquiera de los protocolos en que sea parte, lo notificará por escrito al depositario dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la comunicación de la adopción por el Depositario. El Depositario comunicará sin demora a todas las Partes cualquier notificación recibida. Una Parte podrá en cualquier momento sustituir una declaración anterior de objeción por una aceptación y, en tal caso, los anexos entrarán en vigor respecto de dicha Parte;

c) Al vencer el plazo de seis meses desde la fecha de la distribución de la comunicación por el Depositario, el anexo surtirá efecto para todas las Partes en el pre-

sente Convenio o en el protocolo de que se trate que no hayan hecho una notificación de conformidad con lo dispuesto en el apartado b) de este párrafo.

3. Para la propuesta, adopción y entrada en vigor de enmiendas a los anexos del presente Convenio o del cualquier protocolo se aplicará el mismo procedimiento que para la propuesta, adopción y entrada en vigor de anexos del Convenio o anexos de un protocolo. En los anexos y sus enmiendas se deberán tener debidamente en cuenta, entre otras cosas, las consideraciones científicas y técnicas pertinentes.

4. Cuando un nuevo anexo o una enmienda a un anexo entrañe una enmienda al presente Convenio o cualquier protocolo, el nuevo anexo o el anexo modificado no entrará en vigor hasta que entre en vigor la enmienda al presente convenio o al protocolo.

Artículo 19. Verificación

Toda Parte que tenga razones para creer que otra Parte está actuando o ha actuado en violación de sus obligaciones con arreglo al presente Convenio podrá informar de ello a la Secretaría y, en ese caso, informará simultánea e inmediatamente, directamente o por conducto de la Secretaría, a la Parte contra la que ha presentado la alegación. La Secretaría facilitará toda la información pertinente a las Partes.

Artículo 20. Solución de controversias

1. Si se suscita una controversia entre Partes en relación con la interpretación, aplicación o cumplimiento del presente Convenio o de cualquiera de sus protocolos, las Partes tratarán de resolverla mediante la negociación o por cualquier otro medio pacífico de su elección.

2. Si las Partes interesadas no pueden resolver su controversia por los medios mencionados en el párrafo anterior, la controversia se someterá, si las Partes en la controversia así lo acuerdan, a la Corte Internacional de Justicia o arbitraje en las condiciones establecidas en el anexo VI sobre arbitraje. No obstante, si no existe común acuerdo para someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia o a arbitraje, las Partes no quedarán exentas de la obligación de seguir tratando de resolverla por los medios mencionados en el párrafo 1.

3. Al ratificar, aceptar, aprobar o confirmar formalmente el presente Convenio, o al adherirse a él, o en cualquier momento posterior, un Estado u organización de integración política y/o económica podrá declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin acuerdo especial, respecto de cualquier otra Parte que acepte la misma obligación, la sumisión de la controversia:

- a) a la Corte Internacional de Justicia y/o
 - b) al arbitraje de conformidad con los procedimientos establecidos en anexo VI.
- Esa declaración se notificará por escrito a la Secretaría, la cual la comunicará a las Partes.

Artículo 21. Firma

El presente Convenio estará abierto a la firma de los Estados: Namibia, representada por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, y de las organizaciones

de integración política y/o económica, en Basilea el 22 de marzo de 1989, en el Departamento Federal de Relaciones Exteriores de Suiza, en Berna, desde el 23 de marzo hasta el 30 de junio de 1989 y en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York desde el 1 de julio de 1989 hasta el 22 de marzo de 1990.

Artículo 22. Ratificación, aceptación, confirmación formal o aprobación

1. El presente Convenio estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados y por Namibia, representada por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, y la confirmación formal o aprobación por las organizaciones de integración política y/o económica. Los instrumentos de ratificación, aceptación, confirmación formal o aprobación se depositarán en poder del depositario

2. Toda organización de la índole a que se refiere el párrafo 1 de este artículo que llegue a ser Parte en el presente Convenio sin que sea Parte en él ninguno de sus Estados miembros, estará sujeta a todas las obligaciones enunciadas en el Convenio. Cuando uno o varios Estados miembros de esas organizaciones sean Partes en el Convenio, la organización y sus Estados miembros decidirán acerca de sus responsabilidades respectivas en lo que concierne a la ejecución de las obligaciones que les incumben en virtud del Convenio. En tales casos, la organización y los Estados miembros no estarán facultados para ejercer simultáneamente los derechos que establezca el Convenio.

3. En sus instrumentos de confirmación formal o aprobación, las organizaciones a que se refiere el párrafo 1 de este artículo especificarán el alcance de sus competencia en las materias regidas por el Convenio. Esas organizaciones informarán asimismo al Depositario, quién informará a las Partes Contratantes, de cualquier modificación importante del alcance de sus competencias.

Artículo 23. Adhesión

1. El presente Convenio estará abierto a la adhesión de los Estados, de Namibia, representada por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, y de las organizaciones de integración política y/o económica desde el día siguiente a la fecha en que el Convenio haya quedado cerrado a la firma. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Depositario.

2. En sus instrumentos de adhesión, las organizaciones a que se refiere el párrafo 1 de este artículo especificarán el alcance de sus competencias en las materias regidas por el Convenio. Esas organizaciones informarán asimismo al Depositario de cualquier modificación importante del alcance de sus competencias.

3. Las disposiciones del párrafo 2 del artículo 22 se aplicarán a las organizaciones de integración política y/o económica que se adhieran al presente Convenio.

Artículo 24. Derecho de voto

1. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2 de este artículo, cada parte en el presente Convenio tendrá un voto.

2. Las organizaciones de integración política y/o económica ejercerán su derecho de voto, en asuntos de su competencia, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 22 y el párrafo 2 del artículo 23, con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en el Convenio o en los protocolos pertinentes. Esas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.

Artículo 25. Entrada en vigor

1. El presente Convenio entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación, confirmación formal, aprobación o adhesión.

2. Respecto de cada Estado u organización de integración política y/o económica que ratifique, acepte, apruebe o confirme formalmente el presente Convenio o se adhiera a él después de la fecha de depósito del vigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación, confirmación formal o adhesión al Convenio entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha en que ese Estado u organización de integración política y/o económica haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación, confirmación formal o adhesión.

3. A los efectos de los párrafos 1 y 2 de este artículo, los instrumentos depositados por una organización de integración política y/o económica no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal organización.

Artículo 26. Reservas y declaraciones

1. No se podrán formular reservas ni excepciones al presente Convenio.

2. El párrafo 1 del presente artículo no impedirá que, al firmar, ratificar, aceptar, aprobar o confirmar formalmente este Convenio, o al adherirse a él, un Estado o una organización de integración política y/o económica formule declaraciones o manifestaciones, cualesquiera que sean su redacción y título, con miras, entre otras cosas, a la armonización de sus leyes y reglamentos con las disposiciones del Convenio, a condición de que no se interprete que esas declaraciones o manifestaciones excluyen o modifican los efectos jurídicos de las disposiciones del Convenio y su aplicación a ese Estado.

Artículo 27. Denuncia

1. En cualquier momento después de la expiración de un plazo de tres años contado desde la fecha de la entrada en vigor del presente Convenio respecto de una Parte, esa Parte podrá denunciar el Convenio mediante notificación hecha por escrito al Depositario.

2. La denuncia será efectiva un año después de la fecha en que el Depositario haya recibido la notificación o en cualquier fecha posterior que en ésta se señale.

Artículo 28. Depositario

El Secretario General de las Naciones Unidas será depositario del presente Convenio y de todos sus Protocolos.

Artículo 29. Textos auténticos

Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso del presente Convenio son igualmente auténticos. En testimonio de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados para ello, han firmado el presente Convenio.

Hecho en Basilea el día 22 de marzo de 1989

ANEXO I

CATEGORIAS DE DESECHOS QUE HAY QUE CONTROLAR

Corrientes de desechos

- Y1 Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros médicos y clínicas
- Y2 Desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos
- Y3 Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos
- Y4 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmacéuticos
- Y5 Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos químicos para la preservación de la madera
- Y6 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de disolventes orgánicos
- Y7 Desechos que contengan cianuros, resultantes del tratamiento térmico y las operaciones de temple
- Y8 Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados
- Y9 Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua
- Y10 Sustancias y artículos de desecho que contengan o estén contaminados por bifenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB)
- Y11 Residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro tratamiento pirolítico

- Y12 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices
- Y13 Desechos resultantes de la producción y utilización de resinas, látex, plastificantes, colas y adhesivos
- Y14 Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de la investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el medio ambiente no se conozcan
- Y15 Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación diferente
- Y16 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos químicos y materiales para fines fotográficos
- Y17 Desechos resultantes del tratamiento de superficie de metales y plásticos
- Y18 Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales

Desechos que tengan como constituyentes:

- Y19 Metales carbonilos
- Y20 Berilio, compuestos de berilio
- Y21 Compuestos de cromo hexavalente
- Y22 Compuestos de cobre
- Y23 Compuestos de zinc
- Y24 Arsénico, compuestos de arsénico
- Y25 Selenio, compuestos de selenio
- Y26 Cadmio, compuestos de cadmio
- Y27 Antimonio, compuestos de antimonio
- Y28 Telurio, compuestos de telurio
- Y29 Mercurio, compuestos de mercurio
- Y30 Talio, compuestos de talio
- Y31 Plomo, compuestos de plomo
- Y32 Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión del fluoruro cálcico
- Y33 Cianuros inorgánicos
- Y34 Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida
- Y35 Soluciones básicas o bases en forma sólida
- Y36 Asbesto (polvo y fibras)
- Y37 Compuestos orgánicos de fósforo
- Y38 Cianuros orgánicos
- Y39 Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles
- Y40 Éteres
- Y41 Solventes orgánicos halogenados
- Y42 Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes halogenados
- Y43 Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados
- Y44 Cualquier sustancia del grupo de las dibenzoparadioxinas policloradas
- Y45 Compuestos organohalogenados, que no sean las sustancias mencionadas en el presente anexo (por ejemplo, Y39, Y41, Y42, Y43, Y44).

(a) Para facilitar la aplicación del presente Convenio, y con sujeción a lo estipulado en los párrafos b) y c), los desechos enumerados en el anexo VIII se caracterizan como peligrosos de conformidad con el apartado a) del párrafo 1 del artículo 1 del presente Convenio, y los desechos enumerados en el anexo IX no están sujetos al apartado a) del párrafo 1 del artículo 1 del presente Convenio;

(b) La inclusión de un desecho en el anexo VIII no obsta, en un caso particular, para que se use el anexo III para demostrar que un desecho no es peligroso de conformidad con el apartado a) del párrafo 1 del artículo 1 del presente Convenio;

(c) La inclusión de un desecho en el anexo IX no excluye, en un caso particular, la caracterización de ese desecho como peligroso de conformidad con el apartado a) del párrafo 1 del artículo 1 del presente Convenio si contiene materiales incluidos en el anexo I en una cantidad tal que le confiera una de las características del anexo III;

(d) Los anexos VIII y IX no afectan a la aplicación del apartado a) del párrafo 1 del artículo 1 del presente Convenio a efectos de caracterización de desechos¹.

ANEXO II

CATEGORÍAS DE DESECHOS QUE REQUIEREN UNA CONSIDERACIÓN ESPECIAL

Y46 Desechos recogidos de los hogares

Y47 Residuos resultantes de la incineración de desechos de los hogares

ANEXO III

LISTA DE CARACTERÍSTICAS PELIGROSAS

Clase de las Naciones Unidas ²	Código	Características
1	H1	Explosivos Por sustancia explosiva o desecho se entiende toda sustancia o desecho sólido o líquido (o mezcla de sustancias o desechos) que por sí misma es capaz, mediante reacción química, de emitir un gas a una temperatura, presión y velocidad tales que puedan ocasionar daño a la zona circundante.

¹ La Decisión IV/9 adoptada por la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes en 1998 enmendó el anexo I agregando estos cuatro párrafos (a, b, c y d) al final del anexo I, y anexos adicionales al Convenio: anexo VIII y anexo IX.

² Corresponde al sistema de numeración de clases de peligros de las recomendaciones de las Naciones Unidas sobre el transporte de mercaderías peligrosas (ST/SG/AC.10/1/Rev.5, Naciones Unidas, Nueva York, 1988).

Clase de las Naciones Unidas	Código	Características
3	H3	<p>Líquidos inflamables</p> <p>Por líquidos inflamables se entiende aquellos líquidos, o mezclas de líquidos, o líquidos con sólidos en solución o suspensión (por ejemplo, pinturas, barnices, lacas, etc., pero sin incluir sustancias o desechos clasificados de otra manera debido a sus características peligrosas) que emiten vapores inflamables a temperaturas no mayores de 60.5°C, en ensayos con cubeta abierta. (Como los resultados de los ensayos con cubeta abierta y con cubeta cerrada no son estrictamente comparables, e incluso los resultados obtenidos mediante un mismo ensayo a menudo difieren entre sí, la reglamentación que se apartara de las cifras antes mencionadas para tener en cuenta tales diferencias sería compatible con el espíritu de esta definición.)</p>
4.1	H4.1	<p>Sólidos inflamables</p> <p>Se trata de los sólidos, o desechos sólidos, distintos a los clasificados como explosivos, que en las condiciones prevalecientes durante el transporte son fácilmente combustibles o pueden causar un incendio o contribuir al mismo debido a la fricción.</p>
4.2	H4.2	<p>Sustancias o desechos susceptibles de combustión espontánea</p> <p>Se trata de sustancias o desechos susceptibles de calentamiento espontáneo en las condiciones normales del transporte, o de calentamiento en contacto con el aire, y que pueden entonces encenderse.</p>
5.1	H5.1	<p>Oxidantes</p> <p>Sustancias o desechos que, sin ser necesariamente combustibles, pueden, en general, al ceder oxígeno, causar o favorecer la combustión de otros materiales.</p>
5.2	H5.2	<p>Peróxidos orgánicos</p> <p>Las sustancias o los desechos orgánicos que contienen la estructura bivalente -O-O- son sustancias inestables térmicamente que pueden sufrir una descomposición autoacelerada exotérmica.</p>
6.1	H6.1	<p>Tóxicos (venenos) agudos</p> <p>Sustancias o desechos que pueden causar la muerte o lesiones graves o daños a la salud humana si se ingieren o inhalan o entran en contacto con la piel.</p>

Clase de las Naciones Unidas	Código	Características
6.2	H6.2	Sustancias infecciosas Sustancias o desechos que contienen microorganismos viables o sus toxinas, agentes conocidos o supuestos de enfermedades en los animales o en el hombre.
8	H8	Corrosivos Sustancias o desechos que, por acción química, causan daños graves en los tejidos vivos que tocan, o que en caso de fuga, pueden dañar gravemente, o hasta destruir, otras mercaderías o los medios de transporte; o pueden también provocar otros peligros.
9	H10	Liberación de gases tóxicos en contacto con el aire o el agua. Sustancias o desechos que, por reacción con el aire o el agua, pueden emitir gases tóxicos en cantidades peligrosas.
9	H11	Sustancias tóxicas (con efectos retardados o crónicos) Sustancias o desechos que, de ser aspirados o ingeridos, o de penetrar en la piel, pueden entrañar efectos retardados o crónicos, incluso la carcinogenia.
9	H12	Ecotóxicos Sustancias o desechos que, si se liberan, tienen o pueden tener efectos adversos inmediatos o retardados en el medio ambiente debido a la bioacumulación o los efectos tóxicos en los sistemas bióticos.
9	H13	Sustancias que pueden, por algún medio, después de su eliminación, dar origen a otra sustancia, por ejemplo, un producto de lixiviación, que posee alguna de las características arriba expuestas.

ANEXO IV

OPERACIONES DE ELIMINACIÓN

A) *Operaciones que no pueden conducir a la recuperación de recursos, el reciclado, la regeneración, la reutilización directa u otros usos*

La sección A abarca todas las operaciones de eliminación que se realizan en la práctica.

- D1 Depósito dentro o sobre la tierra (por ejemplo, rellenos, etc.)
- D2 Tratamiento de la tierra (por ejemplo, biodegradación de desperdicios líquidos o fangosos en suelos, etc.)
- D3 Inyección profunda (por ejemplo, inyección de desperdicios bombeables en pozos, domos de sal, fallas geológicas naturales, etc.)
- D4 Embalse superficial (por ejemplo, vertido de desperdicios líquidos o fangosos en pozos, estanques, lagunas, etc.)
- D5 Rellenos especialmente diseñados (por ejemplo, vertido en compartimientos estancos separados, recubiertos y aislados unos de otros y del ambiente, etc.)
- D6 Vertidos en una extensión de agua, con excepción de mares y océanos
- D7 Vertido en mares y océanos, inclusive la inserción en el lecho marino
- D8 Tratamiento biológico no especificado en otra parte de este anexo que dé lugar a compuestos o mezclas finales que se eliminen mediante cualquiera de las operaciones indicadas en la sección A
- D9 Tratamiento fisicoquímico no especificado en otra parte de este anexo que dé lugar a compuestos o mezclas finales que se eliminen mediante cualquiera de las operaciones indicadas en la sección A (por ejemplo, evaporación, secado calcinación, neutralización, precipitación, etc.)
- D10 Incineración en la tierra
- D11 Incineración en el mar
- D12 Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, etc.)
- D13 Combinación o mezcla con anterioridad a cualquiera de las operaciones indicadas en la sección A
- D14 Reempaque con anterioridad a cualquiera de las operaciones indicadas en la sección A
- D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones indicadas en la sección A

B) *Operaciones que pueden conducir a la recuperación de recursos, el reciclado, la regeneración, la reutilización directa y otros usos*

La sección B comprende todas las operaciones con respecto a materiales que son considerados o definidos jurídicamente como desechos peligrosos y que

de otro modo habrían sido destinados a una de las operaciones indicadas en la sección A.

- R1 Utilización como combustible (que no sea en la incineración directa) u otros medios de generar energía
- R2 Recuperación o regeneración de disolventes
- R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes
- R4 Reciclado o recuperación de metales y compuestos metálicos
- R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas
- R6 Regeneración de ácidos o bases
- R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación
- R8 Recuperación de componentes provenientes de catalizadores
- R9 Regeneración u otra reutilización de aceites usados
- R10 Tratamiento de suelos en beneficio de la agricultura o el mejoramiento ecológico
- R11 Utilización de materiales residuales resultantes de cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R10
- R12 Intercambio de desechos para someterlos a cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R11
- R13 Acumulación de materiales destinados a cualquiera de las operaciones indicadas en la sección B

ANEXO V-A

INFORMACIÓN QUE HAY QUE PROPORCIONAR CON LA NOTIFICACIÓN PREVIA

1. Razones de exportación de desechos
2. Exportador de los desechos³
3. Generador(es) de los desechos y lugar de generación³
4. Eliminador de los desechos y lugar efectivo de eliminación³
5. Transportista(s) previsto(s) de los desechos o sus agentes, de ser conocido(s)³
6. Estado de exportación de los desechos
Autoridad competente⁴
7. Estados de tránsito previstos
Autoridad competente⁴
8. Estado de importación de los desechos
Autoridad competente⁴

³ Nombre y apellidos y dirección, número de teléfono, de télex o de telefax de la persona con quien haya que comunicarse.

⁴ Nombre y apellidos y dirección, número de teléfono, de télex o de telefax.

9. Notificación general o singular
10. Fecha(s) prevista(s) del (de los) embarque(s), período de tiempo durante el cual se exportarán los desechos e itinerario propuesto (incluidos los puntos de entrada y salida)⁵
11. Medios de transporte previstos (transporte por carretera, ferrocarril, marítimo, aéreo, vía de navegación interior)
12. Información relativa al seguro⁶
13. Designación y descripción física de los desechos, incluidos su número y su número de las Naciones Unidas, y de su composición⁷ e información sobre los requisitos especiales de manipulación, incluidas las disposiciones de emergencia en caso de accidente.
14. Tipo de empaque previsto (por ejemplo, carga a granel, bidones, tanques)
15. Cantidad estimada en peso/volumen⁸
16. Proceso por el que se generaron los desechos⁹
17. Para los desechos enumerados en el anexo I, las clasificaciones de anexo II: Características peligrosas, número H y clase de las Naciones Unidas.
18. Método de eliminación según el anexo III
19. Declaración del generador y el exportador de que la información es correcta.
20. Información (incluida la descripción técnica de la planta) comunicada al exportador o al generador por el eliminador de los desechos y en la que éste ha basado su suposición de que no hay razón para creer que los desechos no serán manejados en forma ambientalmente racional de conformidad con las leyes y reglamentos del Estado de importación.
21. Información relativa al contrato entre el exportador y el eliminador.

ANEXO V-B

INFORMACIÓN QUE HAY QUE PROPORCIONAR EN EL DOCUMENTO RELATIVO AL MOVIMIENTO

1. Exportador de los desechos¹⁰
2. Generador(es) de los desechos y lugar de generación¹⁰

⁵ En caso de notificación general que comprenda varios embarques, indíquense las fechas previstas de cada embarque o, de no conocerse éstas, la frecuencia prevista de los embarques.

⁶ Información que hay que proporcionar sobre los requisitos pertinentes en materia de seguro y la forma en que los cumple el exportador, el transportista y el eliminador.

⁷ Indíquese la naturaleza y la concentración de los componentes más peligrosos, en función de la toxicidad y otros peligros que presentan los desechos, tanto en su manipulación como en relación con el método de eliminación propuesto.

⁸ En caso de notificación general que comprenda varios embarques, indíquese tanto la cantidad total estimada como las cantidades estimadas para cada uno de los embarques.

⁹ En la medida en que ello sea necesario para evaluar el riesgo y determinar la idoneidad de la operación de eliminación propuesta.

¹⁰ La información que debe constar en el documento sobre el movimiento debe integrarse, cuando sea posible, en un documento junto con la que se requiera en las normas de transporte. Cuando ello no sea

3. Eliminador de los desechos y lugar efectivo de la eliminación ¹⁰
4. Transportista(s) de los desechos ¹⁰ o su(s) agente(s)
5. Sujeto a notificación general o singular
6. Fecha en que se inició el movimiento transfronterizo y fecha(s) y acuse de recibo de cada persona que maneja los desechos
7. Medios de transporte (por carretera, ferrocarril, vía de navegación interior, marítimo, aéreo), incluidos los Estados de exportación, tránsito e importación, así como puntos de entrada y salida cuando se han indicado.
8. Descripción general de los desechos (estado físico, nombre distintivo y clase de las Naciones Unidas con el que se embarca, número de las Naciones Unidas, número Y y número H cuando proceda)
9. Información sobre los requisitos especiales de manipulación incluidas las disposiciones de emergencia en caso de accidente
10. Tipo y número de bultos
11. Cantidad en peso/volumen
12. Declaración del generador o el exportador de que la información es correcta
13. Declaración del generador o el exportador de que no hay objeciones por parte de las autoridades competentes de todos los Estados interesados que sean Partes
14. Certificación por el eliminador de la recepción de los desechos en la instalación designada e indicación del método de eliminación y la fecha aproximada de eliminación.

ANEXO VI

ARBITRAJE

Artículo 1

Salvo que el compromiso que se refiere el artículo 20 del Convenio disponga otra cosa, el procedimiento de arbitraje se regirá por los artículos 2 al 10 del presente anexo.

Artículo 2

La Parte demandante notificará a la Secretaría que las Partes han convenido en someter la controversia a arbitraje de conformidad con el párrafo 2 o el párrafo 3 del

posible, la información complementará, no repetirá, los datos que se faciliten de conformidad con las normas de transporte. El documento sobre el movimiento debe contener instrucciones sobre las personas que deban proporcionar información y llenar los formularios del caso.

Nombre y apellidos y dirección, número de teléfono, de télex o de telefax de la persona con quien haya que comunicarse en caso de emergencia.

artículo 20 del Convenio, indicando en particular, los artículos del Convenio cuya interpretación o aplicación sean objeto de la controversia. La Secretaría comunicará las informaciones recibidas a todas las Partes del Convenio.

Artículo 3

El tribunal arbitral estará compuesto de tres miembros. Cada una de las Partes en la controversia nombrará un árbitro y los dos árbitros así nombrados designarán de común acuerdo al tercer árbitro, quien asumirá la presidencia del tribunal. Ese último árbitro no deberá ser nacional de ninguna de las Partes, ni estar al servicio de ninguna de ellas, ni haberse ocupado ya del asunto en ningún otro concepto.

Artículo 4

1. Si dos meses después de haberse nombrado el segundo árbitro no se ha designado al presidente del tribunal arbitral, el Secretario General de las Naciones Unidas, a petición de cualquiera de las Partes, procederá a su designación en un nuevo plazo de dos meses.

2. Si dos meses después de la recepción de la demanda una de las Partes en la controversia no ha procedido al nombramiento de un árbitro, la otra Parte podrá dirigirse al Secretario General de las Naciones Unidas, quien designará al presidente del tribunal arbitral en un nuevo plazo de dos meses. Una vez designado el presidente del tribunal arbitral pedirá a la Parte que aún no haya nombrado un árbitro que lo haga en un plazo de dos meses. Transcurrido ese plazo, el presidente del tribunal arbitral se dirigirá al Secretario General de las Naciones Unidas, quien procederá a dicho nombramiento en un nuevo plazo de dos meses.

Artículo 5

1. El tribunal arbitral dictará su laudo de conformidad con el derecho internacional y con las disposiciones del presente Convenio.

2. Cualquier tribunal arbitral que se constituya de conformidad con el presente anexo adoptará su propio reglamento.

Artículo 6

1. Las decisiones del tribunal arbitral, tanto en materia de procedimientos como sobre el fondo, serán adoptadas por mayoría de sus miembros.

2. El tribunal podrá adoptar las medidas apropiadas para determinar los hechos. A petición de una de las Partes, podrá recomendar las medidas cautelares indispensables.

3. Las Partes en la controversia darán todas las facilidades necesarias para el desarrollo eficaz del procedimiento.

4. La ausencia o incomparecencia de una Parte en la controversia no interrumpirá el procedimiento.

Artículo 7

El tribunal podrá conocer de las reconversiones directamente basadas en el objeto de la controversia y resolver sobre ellas.

Artículo 8

Salvo que el tribunal arbitral decida otra cosa en razón de las circunstancias particulares del caso, los gastos del tribunal, incluida la remuneración de sus miembros, serán sufragados, a partes iguales, por las Partes en la controversia. El tribunal llevará una relación de todos sus gastos y presentará a las Partes un estado final de los mismos.

Artículo 9

Toda Parte que tenga en el objeto de la controversia un interés de carácter jurídico que pueda resultar afectado por el laudo podrá intervenir en el proceso con el consentimiento del tribunal.

Artículo 10

1. El tribunal dictará su laudo en un plazo de cinco meses contando desde la fecha en que se haya constituido, a menos que juzgue necesario prolongar ese plazo por un período que no debería exceder de cinco meses.

2. El laudo del tribunal arbitral será motivado. Será firme y obligatorio para las Partes en la controversia.

3. Cualquier controversia que surja entre las Partes relativa a la interpretación o la ejecución del laudo podrá ser sometida por cualquiera de las Partes al tribunal arbitral que lo haya dictado o, si no fuere posible someterla a éste, a otro tribunal constituido al efecto de la misma manera que el primero.

ANEXO VII

El anexo VII no está todavía en vigor. El anexo VII es una parte integral de la enmienda. Fue adoptado en 1995 por Decisión III/1 que enmendó al Convenio de Basilea ¹¹.

ANEXO VIII

LISTA A

Los desechos enumerados en este anexo están caracterizados como peligrosos de conformidad con el apartado a) del párrafo 1 del presente Convenio, y su inclusión en este anexo no obsta para que se use el anexo III para demostrar que un desecho no es peligroso.

A1 Desechos metálicos o que contengan metales

A1010 Desechos metálicos y desechos que contengan aleaciones de cualquiera de las sustancias siguientes:

- Antimonio
- Arsénico
- Berilio

¹¹ Decisión III/1 (ENMIENDA AL CONVENIO DE BASILEA)

La Conferencia,

Decide aprobar la siguiente enmienda al Convenio:

«Insértese el siguiente nuevo párrafo 7 bis en el preámbulo:

Reconociendo que los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos, en particular hacia países en desarrollo, presentan un elevado riesgo de no ser compatibles con el manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos que prescribe el Convenio;

Insértese el siguiente nuevo artículo 4 A:

1. Cada Parte incluida en la lista que figura en el anexo VII prohibirá todos los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos destinados a operaciones previstas en el anexo IV A, hacia Estados no incluidos en la lista que figura en el anexo VII;

2. Cada Parte incluida en la lista que figura en el anexo VII reducirá gradualmente y prohibirá a partir del 31 de diciembre de 1997, todos los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos descritos en el inciso a) del apartado I9 del párrafo 1 del Convenio destinados a operaciones previstas en el anexo IV B, hacia Estados no incluidos en la lista que figura en el anexo VII. Sólo se prohibirán esos movimientos transfronterizos de desechos si presentan características peligrosas con arreglo a las disposiciones del Convenio.

Anexo VII

Partes y otros Estados que son miembros de la OCDE, la CE, Liechtenstein.»

- Cadmio
- Plomo
- Mercurio
- Selenio
- Telurio
- Talio

pero excluidos los desechos que figuran específicamente en la lista B.

A1020 Desechos que tengan como constituyentes o contaminantes, excluidos los desechos de metal en forma masiva, cualquiera de las sustancias siguientes:

- Antimonio; compuestos de antimonio
- Berilio; compuestos de berilio
- Cadmio; compuestos de cadmio
- Plomo; compuestos de plomo
- Selenio; compuestos de selenio
- Telurio; compuestos de telurio

A1030 Desechos que tengan como constituyentes o contaminantes cualquiera de las sustancias siguientes:

- Arsénico; compuestos de arsénico
- Mercurio; compuestos de mercurio
- Talio; compuestos de talio

A1040 Desechos que tengan como constituyentes:

- Carbonilos de metal
- Compuestos de cromo hexavalente

A1050 Lodos galvánicos

A1060 Líquidos de desecho del decapaje de metales

A1070 Residuos de lixiviación del tratamiento del zinc, polvos y lodos como jarosita, hematites, etc.

A1080 Residuos de desechos de zinc no incluidos en la lista B, que contengan plomo y cadmio en concentraciones tales que presenten características del anexo III

A1090 Cenizas de la incineración de cables de cobre recubiertos

A1100 Polvos y residuos de los sistemas de depuración de gases de las fundiciones de cobre

A1110 Soluciones electrolíticas usadas de las operaciones de refinación y extracción electrolítica del cobre

A1120 Lodos residuales, excluidos los fangos anódicos, de los sistemas de depuración electrolítica de las operaciones de refinación y extracción electrolítica del cobre

A1130 Soluciones de ácidos para grabar usadas que contengan cobre disuelto

A1140 Desechos de catalizadores de cloruro cúprico y cianuro de cobre

A1150 Cenizas de metales preciosos procedentes de la incineración de circuitos impresos no incluidos en la lista B ¹²

A1160 Acumuladores de plomo de desecho, enteros o triturados

A1170 Acumuladores de desecho sin seleccionar excluidas mezclas de acumuladores sólo de la lista B. Los acumuladores de desecho no incluidos en la lista B que contengan constituyentes del anexo I en tal grado que los conviertan en peligrosos

A1180 Montajes eléctricos y electrónicos de desecho o restos de éstos ¹³ que contengan componentes como acumuladores y otras baterías incluidos en la lista A, interruptores de mercurio, vidrios de tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados y capacitadores de PCB, o contaminados con constituyentes del anexo I (por ejemplo, cadmio, mercurio, plomo, bifenilo policlorado) en tal grado que posean alguna de las características del anexo III (véase la entrada correspondiente en la lista B B1110) ¹⁴

A2 Desechos que contengan principalmente constituyentes orgánicos, que puedan contener metales o materia orgánica

A2010 Desechos de vidrio de tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados

A2020 Desechos de compuestos inorgánicos de flúor en forma de líquidos o lodos, pero excluidos los desechos de ese tipo especificados en la lista B

A2030 Desechos de catalizadores, pero excluidos los desechos de este tipo especificados en la lista B

A2040 Yeso de desecho procedente de procesos de la industria química, si contiene constituyentes del anexo I en tal grado que presenten una característica peligrosa del anexo III

(véase la entrada correspondiente en la lista B B2080)

A2050 Desechos de amianto (polvo y fibras)

A2060 Cenizas volantes de centrales eléctricas de carbón que contengan sustancias del anexo I en concentraciones tales que presenten características del anexo III (véase la entrada correspondiente en la lista B B2050)

A3 Desechos que contengan principalmente constituyentes orgánicos, que puedan contener metales y materia inorgánica

A3010 Desechos resultantes de la producción o el tratamiento de coque de petróleo y asfalto

A3020 Aceites minerales de desecho no aptos para el uso al que estaban destinados

¹² Obsérvese que en el apartado correspondiente de la lista B ([B1160]) no se especifican excepciones.

¹³ En esta entrada no se incluyen restos de montajes de generación de energía eléctrica.

¹⁴ El nivel de concentración de los bifenilos policlorados de 50 mg/kg o más.

A3030 Desechos que contengan, estén integrados o estén contaminados por lodos de compuestos antidetonantes con plomo

A3040 Desechos de líquidos térmicos (transferencia de calor)

A3050 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, látex, plastificantes o colas/adhesivos excepto los desechos especificados en la lista B (véase el apartado correspondiente en la lista B B4020)

A3060 Nitrocelulosa de desecho

A3070 Desechos de fenoles, compuestos fenólicos, incluido el clorofenol en forma de líquido o de lodo

A3080 Desechos de éteres excepto los especificados en la lista B

A3090 Desechos de cuero en forma de polvo, cenizas, lodos y harinas que contengan compuestos de plomo hexavalente o biocidas (véase el apartado correspondiente en la lista B B3100)

A3100 Raeduras y otros desechos del cuero o de cuero regenerado que no sirvan para la fabricación de artículos de cuero, que contengan compuestos de cromo hexavalente o biocidas (véase el apartado correspondiente en la lista B B3090)

A3110 Desechos del curtido de pieles que contengan compuestos de cromo hexavalente o biocidas o sustancias infecciosas (véase el apartado correspondiente en la lista B B3110)

A3120 Pelusas - fragmentos ligeros resultantes del desmenuzamiento

A3130 Desechos de compuestos de fósforo orgánicos

A3140 Desechos de disolventes orgánicos no halogenados pero con exclusión de los desechos especificados en la lista B

A3150 Desechos de disolventes orgánicos halogenados

A3160 Desechos resultantes de residuos no acuosos de destilación halogenados o no halogenados derivados de operaciones de recuperación de disolventes orgánicos

A3170 Desechos resultantes de la producción de hidrocarburos halogenados alifáticos (tales como clorometano, dicloroetano, cloruro de vinilo, cloruro de alilo y epícloridrina)

A3180 Desechos, sustancias y artículos que contienen, consisten o están contaminados con bifenilo policlorado (PCB), terfenilo policlorado (PCT), naftaleno policlorado (PCN) o bifenilo polibromado (PBB), o cualquier otro compuesto polibromado análogo, con una concentración de igual o superior a 50 mg/kg¹⁵

A3190 Desechos de residuos alquitranados (con exclusión de los cementos asfálticos) resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro tratamiento pirolítico de materiales orgánicos

¹⁵ Se considera que el nivel de 50 mg/kg es un nivel práctico internacional para todos los desechos. Sin embargo, muchos países han establecido en sus normas niveles más bajos (por ejemplo, 20 mg/kg) para determinados desechos.

A4 Desechos que pueden contener constituyentes inorgánicos u orgánicos

A4010 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos farmacéuticos, pero con exclusión de los desechos especificados en la lista B

A4020 Desechos clínicos y afines; es decir desechos resultantes de prácticas médicas, de enfermería, dentales, veterinarias o actividades similares, y desechos generados en hospitales u otras instalaciones durante actividades de investigación o el tratamiento de pacientes, o de proyectos de investigación

A4030 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmacéuticos, con inclusión de desechos de plaguicidas y herbicidas que no respondan a las especificaciones, caducados ¹⁶, o no aptos para el uso previsto originalmente

A4040 Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos químicos para la preservación de la madera ¹⁷

A4050 Desechos que contienen, consisten o están contaminados con algunos de los productos siguientes:

- Cianuros inorgánicos, con excepción de residuos que contienen metales preciosos, en forma sólida, con trazas de cianuros inorgánicos
- Cianuros orgánicos

A4060 Desechos de mezclas y emulsiones de aceite y agua o de hidrocarburos y agua

A4070 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices, con exclusión de los desechos especificados en la lista B (véase el apartado correspondiente de la lista B B4010)

A4080 Desechos de carácter explosivo (pero con exclusión de los desechos especificados en la lista B)

A4090 Desechos de soluciones ácidas o básicas, distintas de las especificadas en el apartado correspondiente de la lista B (véase el apartado correspondiente de la lista B B2120)

A4100 Desechos resultantes de la utilización de dispositivos de control de la contaminación industrial para la depuración de los gases industriales, pero con exclusión de los desechos especificados en la lista B

A4110 Desechos que contienen, consisten o están contaminados con algunos de los productos siguientes:

- Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados
- Cualquier sustancia del grupo de las dibenzodioxinas policloradas

A4120 Desechos que contienen, consisten o están contaminados con peróxidos

¹⁶ «Caducados» significa no utilizados durante el período recomendado por el fabricante.

¹⁷ Este apartado no incluye la madera tratada con preservadores químicos.

A4130 Envases y contenedores de desechos que contienen sustancias incluidas en el anexo I, en concentraciones suficientes como para mostrar las características peligrosas del anexo III

A4140 Desechos consistentes o que contienen productos químicos que no responden a las especificaciones o caducados¹⁸ correspondientes a las categorías del anexo I, y que muestran las características peligrosas del anexo III

A4150 Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de la investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el medio ambiente no se conozcan

A4160 Carbono activado consumido no incluido en la lista B (véase el correspondiente apartado de la lista B B2060).

ANEXO IX

LISTA B

Desechos que no estarán sujetos a lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 1 del artículo 1 del Convenio de Basilea, a menos que contengan materiales incluidos en el anexo I en una cantidad tal que les confiera una de las características del anexo III.

B1 *Desechos de metales y desechos que contengan metales*

B1010 Desechos de metales y de aleaciones de metales, en forma metálica y no dispersable:

- Metales preciosos (oro, plata, el grupo del platino, pero no el mercurio)
- Chatarra de hierro y acero
- Chatarra de cobre
- Chatarra de níquel
- Chatarra de aluminio
- Chatarra de zinc
- Chatarra de estaño
- Chatarra de tungsteno
- Chatarra de molibdeno
- Chatarra de tántalo
- Chatarra de magnesio
- Desechos de cobalto
- Desechos de bismuto
- Desechos de titanio
- Desechos de zirconio
- Desechos de manganeso

¹⁸ «Caducados» significa no utilizados durante el período recomendado por el fabricante.

- Desechos de germanio
- Desechos de vanadio
- Desechos de hafnio, indio, niobio, renio y galio
- Desechos de torio
- Desechos de tierras raras

B1020 Chatarra de metal limpia, no contaminada, incluidas las aleaciones, en forma acabada en bruto (láminas, chapas, vigas, barras, etc), de:

- Desechos de antimonio
- Desechos de berilio
- Desechos de cadmio
- Desechos de plomo (pero con exclusión de los acumuladores de plomo)
- Desechos de selenio
- Desechos de telurio

B1030 Metales refractarios que contengan residuos

B1040 Chatarra resultante de la generación de energía eléctrica, no contaminada con aceite lubricante, PBC o PCT en una cantidad que la haga peligrosa

B1050 Fracción pesada de la chatarra de mezcla de metales no ferrosos que no contenga materiales del anexo I en una concentración suficiente como para mostrar las características del anexo III ¹⁹

B1060 Desechos de selenio y telurio en forma metálica elemental, incluido el polvo de estos elementos

B1070 Desechos de cobre y de aleaciones de cobre en forma dispersable, a menos que contengan constituyentes del anexo I en una cantidad tal que les confiera alguna de las características del anexo III

B1080 Ceniza y residuos de zinc, incluidos los residuos de aleaciones de zinc en forma dispersable, que contengan constituyentes del anexo I en una concentración tal que les confiera alguna de las características del anexo III ²⁰ o características peligrosas de la clase H4.3

B1090 Baterías de desecho que se ajusten a una especificación, con exclusión de los fabricados con plomo, cadmio o mercurio

B1100 Desechos que contienen metales resultantes de la fusión, refundición y refinación de metales:

- Peltre de zinc duro
- Escorias que contengan zinc:
- Escorias de la superficie de planchas de zinc para galvanización (>90% Zn)
- Escorias del fondo de planchas de zinc para galvanización (>92% Zn)

¹⁹ Obsérvese que aun cuando inicialmente exista una contaminación de bajo nivel con materiales del anexo I, los procesos subsiguientes, incluidos los de reciclado, pueden dar como resultado fracciones separadas que contengan una concentración considerablemente mayor de esos materiales del anexo I.

²⁰ La situación de la ceniza de zinc está siendo objeto de examen y hay una recomendación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en el sentido de que las cenizas de zinc no deberían considerarse mercancías peligrosas.

- Escorias de zinc de la fundición en coquilla (>85% Zn)
- Escorias de planchas de zinc de galvanización por inmersión en caliente (carga) (>92% Zn)
- Espumados de zinc
- Espumados de aluminio (o espumas) con exclusión de la escoria de sal
- Escorias de la elaboración del cobre destinado a una elaboración o refinación posteriores que no contengan arsénico, plomo o cadmio en cantidad tal que les confiera las características peligrosas del anexo III
- Desechos de revestimientos refractarios, con inclusión de crisoles, derivados de la fundición del cobre
- Escorias de la elaboración de metales preciosos destinados a una refinación posterior
- Escorias de estaño que contengan tántalo, con menos del 0,5% de estaño

B1110 Montajes eléctricos y electrónicos:

- Montajes electrónicos que consistan sólo en metales o aleaciones
- Desechos o chatarra de montajes eléctricos o electrónicos²¹ (incluidos los circuitos impresos) que no contengan componentes tales como acumuladores y otras baterías incluidas en la lista A, interruptores de mercurio, vidrio procedente de tubos de rayos catódicos u otros vidrios activados ni condensadores de PCB, o no estén contaminados con elementos del anexo I (por ejemplo, cadmio, mercurio, plomo, bifenilo policlorado) o de los que esos componentes se hayan extraído hasta el punto de que no muestren ninguna de las características enumeradas en el anexo III (véase el apartado correspondiente de la lista A A1180)
- Montajes eléctricos o electrónicos (incluidos los circuitos impresos, componentes electrónicos y cables) destinados a una reutilización directa²², y no al reciclado o a la eliminación final²³

B1120 Catalizadores agotados, con exclusión de líquidos utilizados como catalizadores, que contengan alguno de los siguientes elementos:

Metales de transición, con exclusión de catalizadores de desecho (catalizadores agotados, catalizadores líquidos usados u otros catalizadores) de la lista A:	escandio	titanio
	vanadio	cromo
	manganeso	hierro
	cobalto	níquel
	cobre	zinc
	itrio	circonio
	niobio	molibdeno
	hafnio	tántalo
	tungsteno	renio

²¹ Este apartado no incluye la chatarra resultante de la generación de energía eléctrica.

²² Pueden considerarse como reutilización la reparación, la reconstrucción o el perfeccionamiento, pero no un nuevo montaje importante.

²³ En algunos países estos materiales destinados a la reutilización directa no se consideran desechos.

Lantánidos (metales del grupo de las tierras raras):

lantanio	cerio
praseodimio	neodimio
samario	europio
gadolinio	terbio
disprosio	holmio
terbio	tulio
iterbio	lutecio

B1130 Catalizadores agotados limpios que contengan metales preciosos

B1140 Residuos que contengan metales preciosos en forma sólida, con trazas de cianuros inorgánicos

B1150 Desechos de metales preciosos y sus aleaciones (oro, plata, el grupo de platino, pero no el mercurio) en forma dispersable, no líquida, con un embalaje y etiquetado adecuados

B1160 Cenizas de metales preciosos resultantes de la incineración de circuitos impresos (véase el correspondiente apartado de la lista A A1150)

B1170 Cenizas de metales preciosos resultantes de la incineración de películas fotográficas

B1180 Desechos de películas fotográficas que contengan haluros de plata y plata metálica

B1190 Desechos de papel para fotografía que contengan haluros de plata y plata metálica

B1200 Escoria granulada resultante de la fabricación de hierro y acero

B1210 Escoria resultante de la fabricación de hierro y acero, con inclusión de escorias que sean una fuente de TiO_2 y vanadio

B1220 Escoria de la producción de zinc, químicamente estabilizada, con un elevado contenido de hierro (más de 20%) y elaborado de conformidad con especificaciones industriales (por ejemplo, DIN 4301) sobre todo con fines de construcción

B1230 Escamas de laminado resultantes de la fabricación de hierro y acero

B1240 Escamas de laminado del óxido de cobre.

B2 Desechos que contengan principalmente constituyentes inorgánicos, que a su vez puedan contener metales y materiales orgánicos

B2010 Desechos resultantes de actividades mineras, en forma no dispersable:

- Desechos de grafito natural
- Desechos de pizarra, estén o no recortados en forma basta o simplemente cortados, mediante aserrado o de otra manera
- Desechos de mica
- Desechos de leucita, nefelina y sienita nefelínica

- Desechos de feldespatos
- Desecho de espato flúor
- Desechos de sílice en forma sólida, con exclusión de los utilizados en operaciones de fundición

B2020 Desechos de vidrios en forma no dispersable:

- Desperdicios de vidrios rotos y otros desechos y escorias de vidrios, con excepción del vidrio de los tubos rayos catódicos y otros vidrios activados

B2030 Desechos de cerámica en forma no dispersable:

- Desechos y escorias de cerametal (compuestos metalocerámicos)
- Fibras de base cerámica no especificadas o incluidas en otro lugar

B2040 Otros desperdicios que contengan principalmente constituyentes inorgánicos:

- Sulfato de calcio parcialmente refinado resultante de la desulfurización del gas de combustión
- Desechos de tablas o planchas de yeso resultantes de la demolición de edificios
- Escorias de la producción de cobre, químicamente estabilizadas, con un elevado contenido de hierro (más de 20%) y elaboradas de conformidad con especificaciones industriales (por ejemplo DIN 4301 y DIN 8201) principalmente con fines de construcción y de abrasión
 - Azufre en forma sólida
 - Piedra caliza resultante de la producción de cianamida de calcio (con un Ph inferior a 9)
 - Cloruros de sodio, potasio, calcio
 - Carborundo (carburo de silicio)
 - Hormigón en cascotes
 - Escorias de vidrio que contengan litio-tántalo y litio-niobio

B2050 Cenizas volantes de centrales eléctricas a carbón, no incluidas en la lista A (véase el apartado correspondiente de la lista A A2060)

B2060 Carbón activado consumido resultante del tratamiento del agua potable y de procesos de la industria alimentaria y de la producción de vitaminas (véase el apartado correspondiente de la lista A A4160)

B2070 Fango de fluoruro de calcio

B2080 Desechos de yeso resultante de procesos de la industria química no incluidos en la lista A (véase el apartado correspondiente de la lista A A2040)

B2090 Residuos de ánodos resultantes de la producción de acero o aluminio, hechos de coque o alquitrán de petróleo y limpiados con arreglo a las especificaciones normales de la industria (con exclusión de los residuos de ánodos resultantes de la electrolisis de álcalis de cloro y de la industria metalúrgica)

B2100 Desechos de hidratos de aluminio y desechos de alúmina, y residuos de la producción de alúmina, con exclusión de los materiales utilizados para la depuración de gases, o para los procesos de floculación o filtrado

B2110 Residuos de bauxita («barro rojo») (Ph moderado a menos de 11,5)

B2120 Desechos de soluciones ácidas o básicas con un Ph superior a 2 o inferior a 11,5, que no muestren otras características corrosivas o peligrosas (véase el apartado correspondiente de la lista A A4090).

*B3 Desechos que contengan principalmente constituyentes orgánicos,
que pueden contener metales y materiales inorgánicos*

B3010 Desechos sólidos de material plástico:

Los siguientes materiales plásticos o sus mezclas, siempre que no estén mezclados con otros desechos y estén preparados con arreglo a una especificación:

• Desechos de material plástico de polímeros y copolímeros no halogenados, con inclusión de los siguientes, pero sin limitarse a ellos ²⁴:

- etileno
- estireno
- polipropileno
- tereftalato de polietileno
- acrilonitrilo
- butadieno
- poliacetálicos
- poliamidas
- tereftalato de polibutileno
- policarbonatos
- poliéteres
- sulfuros de polifenilenos
- polímeros acrílicos
- alcanos C10-C13 (plastificantes)
- poliuretano (que no contenga CFC)
- polisiloxanos
- metacrilato de polimetilo
- alcohol polivinílico
- butiral de polivinilo
- acetato de polivinilo

²⁴ Se entiende que estos desechos están completamente polimerizados.

• Desechos de resinas curadas o productos de condensación, con inclusión de los siguientes:

- resinas de formaldehídos de urea
- resinas de formaldehídos de fenol
- resinas de formaldehído de melamina
- resinas epoxy
- resinas alquídicas
- poliamidas

Los siguientes desechos de polímeros fluorados ²⁵

- Perfluoroetileno/propileno (FEP)
- Perfluoroalkoxi-alkano (PFA)
- Perfluoroalkoxi-alkano (MFA)
- Fluoruro de polivinilo (PVF)
- Fluoruro de polivinilideno (PVDF)

B3020 Desechos de papel, cartón y productos del papel

Los materiales siguientes, siempre que no estén mezclados con desechos peligrosos:

Desechos y desperdicios de papel o cartón de:

- papel o cartón no blanqueado o papel o cartón ondulado
- otros papeles o cartones, hechos principalmente de pasta química blanqueada, no coloreada en la masa
- papel o cartón hecho principalmente de pasta mecánica (por ejemplo, periódicos, revistas y materiales impresos similares)
- otros, con inclusión, pero sin limitarse a: 1) cartón laminado, 2) desperdicios sin triar

B3030 Desechos de textiles

Los siguientes materiales, siempre que no estén mezclados con otros desechos y estén preparados con arreglo a una especificación:

- Desechos de seda (con inclusión de cocuyos inadecuados para el devanado, desechos de hilados y de materiales en hilachas)
- que no estén cardados ni peinados
- otros
- Desechos de lana o de pelo animal, fino o basto, con inclusión de desechos de hilados pero con exclusión del material en hilachas

²⁵ Los desechos posteriores al consumo están excluidos de este apartado.— Los desechos no deberán estar mezclados.— Deben tenerse en cuenta los problemas planteados por la práctica de la quema al aire libre

- borras de lana o de pelo animal fino
- otros desechos de lana o de pelo animal fino
- desechos de pelo animal
- Desechos de algodón, (con inclusión de los desechos de hilados y material en hilachas)
 - desechos de hilados (con inclusión de desechos de hilos)
 - material deshilachado
 - otros
 - Estopa y desechos de lino
 - Estopa y desechos (con inclusión de desechos de hilados y de material deshilachado) de cáñamo verdadero (*Cannabis sativa* L.)
 - Estopa y desechos (con inclusión de desechos de hilados y de material deshilachado) de yute y otras fibras textiles bastas (con exclusión del lino, el cáñamo verdadero y el ramio)
 - Estopa y desechos (con inclusión de desechos de hilados y de material deshilachado) de sisal y de otras fibras textiles del género *Agave*
 - Estopa, borras y desechos (con inclusión de desechos de hilados y de material deshilachado) de coco
 - Estopa, borras y desechos (con inclusión de desechos de hilados y de material deshilachado) de abaca (cáñamo de Manila o *Musa textilis* Nee)
 - Estopa, borras y desechos (con inclusión de desechos de hilados y material deshilachado) de ramio y otras fibras textiles vegetales, no especificadas o incluidas en otra parte
 - Desechos (con inclusión de borras, desechos de hilados y de material deshilachado) de fibras no naturales
 - de fibras sintéticas
 - de fibras artificiales
 - Ropa usada y otros artículos textiles usados
 - Trapos usados, bramantes, cordelería y cables de desecho y artículos usados de bramante, cordelería o cables de materiales textiles
 - triados
 - otros

B3040 Desechos de caucho

Los siguientes materiales, siempre que no estén mezclados con otros desechos:

- Desechos y residuos de caucho duro (por ejemplo, ebonita)
- Otros desechos de caucho (con exclusión de los desechos especificados en otro lugar)

B3050 Desechos de corcho y de madera no elaborados:

- Desechos y residuos de madera, estén o no aglomerados en troncos, briquetas, bolas o formas similares
- Desechos de corcho: corcho triturado, granulado o molido

B3060 Desechos resultantes de las industrias agroalimentarias siempre que no sean infecciosos:

- Borra de vino
- Desechos, residuos y subproductos vegetales secos y esterilizados, estén o no en forma de bols, de un tipo utilizado como pienso, no especificados o incluidos en otro lugar
- Productos desgrasados: residuos resultantes del tratamiento de sustancias grasas o de ceras animales o vegetales
- Desechos de huesos y de médula de cuernos, no elaborados, desgrasados, o simplemente preparados (pero sin que se les haya dado forma), tratados con ácido o desgelatinizados
- Desechos de pescado
- Cáscaras, cortezas, pieles y otros desechos del cacao
- Otros desechos de la industria agroalimentaria, con exclusión de subproductos que satisfagan los requisitos y normas nacionales e internacionales para el consumo humano o animal

B3070 Los siguientes desechos:

- Desechos de pelo humano
- Paja de desecho
- Micelios de hongos desactivados resultantes de la producción de penicilina para su utilización como piensos

B3080 Desechos y recortes de caucho

B3090 Recortes y otros desechos de cuero o de cuero aglomerado, no aptos para la fabricación de artículos de cuero, con exclusión de los fangos de cuero que no contengan biocidas o compuestos de cromo hexavalente (véase el apartado correspondiente de la lista A A3100)

B3100 Polvo, cenizas, lodos o harinas de cueros que no contengan compuestos de cromo hexavalente ni biocidas (véase el apartado correspondiente en la lista A A3090)

B3110 Desechos de curtido de pieles que no contengan compuestos de cromo hexavalente ni biocidas ni sustancias infecciosas (véase el apartado correspondiente de la lista A A3110)

B3120 Desechos consistentes en colorantes alimentarios

B3130 Éteres polímeros de desecho y éteres monómeros inoocuos de desecho que no puedan formar peróxidos

B3140 Cubiertas neumáticas de desecho, excluidas las destinadas a las operaciones del anexo IV.A.

B4 Desechos que puedan contener componentes inorgánicos u orgánicos

B4010 Desechos integrados principalmente por pinturas de látex/o con base de agua, tintas y barnices endurecidos que no contengan disolventes orgánicos, metales pesados ni biocidas en tal grado que los convierta en peligrosos (véase el apartado correspondiente en la lista A A4070)

B4020 Desechos procedentes de la producción, formulación y uso de resinas, látex, plastificantes, colas/adhesivos, que no figuren en la lista A, sin disolventes ni otros contaminantes en tal grado que no presenten características del anexo III, por ejemplo, con base de agua, o colas con base de almidón de caseína, dextrina, éteres de celulosa, alcoholes de polivinilo (véase el apartado correspondiente en la lista A A3050)

B4030 Cámaras de un solo uso usadas, con baterías no incluidas en la lista A.

APÉNDICE II

Decisión V/[...]. Protocolo de Basilea sobre responsabilidad e indemnización por daños resultantes de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación

La Conferencia

Adopta el Protocolo de Basilea sobre responsabilidad e indemnización por daños resultantes de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación.

PROTOCOLO SOBRE RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS RESULTANTES DE LOS MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE DESECHOS PELIGROSOS Y SU ELIMINACIÓN

Las Partes en el Protocolo,

Habiendo tomado en cuenta las disposiciones pertinentes del Principio 13 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, por la que los Estados deberán elaborar los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales relativos a la responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales,

Siendo Partes en el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación,

Teniendo presentes sus obligaciones contraídas en virtud del Convenio,

Conscientes del riesgo del daño para la salud humana, la propiedad y el medio ambiente causado por los desechos peligrosos y otros desechos y su movimiento transfronterizo y eliminación,

Preocupadas por el problema del tráfico ilícito transfronterizo de desechos peligrosos y otros desechos,

Comprometidas con el artículo 12 del Convenio, y destacando la necesidad de que se establezcan reglas y procedimientos apropiados en la esfera de la responsabilidad e indemnización por daños resultantes del movimiento transfronterizo y la eliminación de los desechos peligrosos y otros desechos,

Convencidas de la necesidad de que se establezca un régimen de compensación a terceros y de compensación ambiental para garantizar que existe una compensación adecuada y pronta por daños resultantes del movimiento transfronterizo y la eliminación de desechos peligrosos y otros desechos,

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1. Objetivo

El objetivo del Protocolo es establecer un régimen global de responsabilidad e indemnización pronta y adecuada por daños resultantes de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y otros desechos y su eliminación, incluido el tráfico ilícito de esos desechos.

Artículo 2. Definiciones

1. Las definiciones de los términos que figuran en el Convenio se aplican al Protocolo, salvo que en él se disponga expresamente lo contrario.

2. A los efectos del presente Protocolo:

a) Por «el Convenio» se entiende el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación;

b) Por «desechos peligrosos y otros desechos» se entiende los desechos peligrosos y otros desechos contemplados en el artículo 1 del Convenio;

c) Por «daño» se entiende:

i) Muerte o lesiones corporales;

ii) Daños o perjuicios materiales, salvo a los bienes de propiedad de la persona responsable de los daños de conformidad con el presente Protocolo;

iii) Pérdidas de ingresos directamente derivadas de un interés económico en el uso del medio ambiente incurridas como resultado de un deterioro significativo del medio ambiente, teniendo en cuenta los ahorros y los costos;

iv) Costo de las medidas de restablecimiento del medio ambiente deteriorado, limitado al costo de las medidas efectivamente adoptadas o que vayan a adoptarse; y

v) Costo de las medidas preventivas, incluidas cualesquiera pérdidas o daños causados por esas medidas, en la medida en que los daños deriven o resulten de propiedades peligrosas de los desechos objeto de movimientos transfronterizos y eliminación de desechos peligrosos y otros desechos sujetos al Convenio;

d) Por «medidas de restablecimiento» se entiende cualquier medida razonable encaminada a evaluar, restablecer o restaurar componentes dañados o destruidos del medio ambiente. En la legislación nacional se podrá establecer quién tiene derecho a tomar esas medidas;

e) Por «medidas preventivas» se entiende cualquier medida razonable tomada por cualquier persona en respuesta a un incidente con objeto de prevenir, reducir al mínimo o mitigar pérdidas o daños o sanear el medio ambiente;

f) Por «Parte Contratante» se entiende una Parte en el Protocolo;

g) Por «Protocolo» se entiende el presente Protocolo;

h) Por «incidente» se entiende cualquier suceso o serie de sucesos que tengan el mismo origen que cause daño o plantee una amenaza grave e inminente de causarlo;

i) Por «organización de integración económica regional» se entiende una organización constituida por Estados soberanos a la que sus Estados miembros han transferido su competencia respecto de las cuestiones regidas por el Protocolo y que ha sido debidamente autorizada, de conformidad con sus procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar, aprobar, confirmar oficialmente el Protocolo o adherirse a él.

j) Por «unidad contable» se entiende los derechos especiales de giro en su forma definida por el Fondo Monetario Internacional.

Artículo 3. Ámbito de aplicación

1. El presente Protocolo se aplica a los daños resultantes de un incidente ocurrido durante un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y otros desechos y su eliminación, incluido el tráfico ilícito, desde el punto en que los desechos son cargados en el medio de transporte en una zona bajo la jurisdicción nacional de un Estado de exportación. Toda Parte Contratante puede, mediante notificación al Depositario, excluir la aplicación del Protocolo, respecto de todos los movimientos transfronterizos de los cuales es el Estado de exportación, en cuanto a los incidentes que se produzcan en zona bajo su jurisdicción nacional, en lo que respecta a los daños en su zona de jurisdicción nacional. La secretaría informará a todas las Partes Contratantes de las notificaciones recibidas de conformidad con el presente artículo.

2. El Protocolo se aplicará:

a) En relación con movimientos destinados a una de las operaciones especificadas en el anexo IV del Convenio distintas de las operaciones D13, D14, D15, R12 o R13, hasta el momento en que se haya hecho notificación de la finalización de la eliminación de conformidad con el párrafo 9 del artículo 6 del Convenio, o en el caso en que no se hubiese hecho esa notificación, hasta que se haya finalizado la eliminación; y

b) En relación con los movimientos destinados a las operaciones especificadas en D13, D14, D15, R12 o R13 del anexo IV del Convenio, hasta la finalización de la operación de eliminación subsiguiente especificada en D1 a D12 y R1 a R11 del anexo IV del Convenio.

3. a) El Protocolo se aplicará sólo a los daños sufridos en una zona bajo la jurisdicción nacional de una Parte Contratante como resultado de un incidente tal como se indica en el párrafo 1;

b) Cuando el Estado de importación, pero no el Estado de exportación, es una Parte Contratante, el Protocolo se aplicará solamente respecto de los daños causados por un incidente tal como se indica en el párrafo 1, que se produce después del momento en que el eliminador ha tomado posesión de los desechos peligrosos y otros desechos. Cuando el Estado de exportación, pero no el Estado de importación, es una Parte Contratante, el Protocolo se aplicará solamente respecto de los daños causados por un incidente tal como se indica en el párrafo 1, que se produce antes del momento en que el eliminador toma posesión de los desechos peligrosos y otros desechos. Cuando ni el Estado de exportación ni el Estado de importación es una Parte Contratante, el Protocolo no se aplicará.

c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso a), el Protocolo se aplicará también a los daños especificados en los apartados i), ii) y v) del inciso c) del párrafo 2 del artículo 2 del presente Protocolo que se produzcan en zonas fuera de una jurisdicción nacional;

d) Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso a), el Protocolo se aplicará también, en relación con los derechos previstos por el Protocolo, a los daños sufridos en una zona bajo jurisdicción nacional de un Estado de tránsito que no sea Parte Contratante, siempre que dicho Estado figure en el anexo A y haya accedido a un acuerdo multilateral o regional que esté en vigor relativo a los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos. El inciso b) se aplicará *mutatis mutandis*.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del Protocolo, en caso de reimportaciones con arreglo al artículo 8, o al inciso a) del párrafo 2 del artículo 9 y al párrafo 4 del artículo 9 del Convenio, las disposiciones del Protocolo se aplicarán hasta que los desechos peligrosos y otros desechos hayan llegado al Estado de exportación original.

5. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo afectará en modo alguno a la soberanía de los Estados sobre sus mares territoriales y ni su jurisdicción ni el derecho en sus zonas económicas exclusivas respectivas y plataformas continentales de conformidad con el derecho internacional.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 y con sujeción al párrafo 2 del presente artículo:

a) El Protocolo no se aplicará a los daños derivados de un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y otros desechos iniciado antes de la entrada en vigor del Protocolo para la Parte Contratante de que se trate;

b) El Protocolo no se aplicará a los daños resultantes de un incidente ocurrido durante un movimiento transfronterizo de desechos contemplados en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 1 del Convenio salvo que los desechos hayan sido notificados por el Estado de exportación o importación, o ambos, de conformidad con el artículo 3 del Convenio y el daño causado se haya producido en una zona bajo la jurisdicción nacional de un Estado, incluido el Estado de tránsito, que haya definido esos desechos como peligrosos o así los considere siempre que se hayan cumplido los requisitos del artículo 3 del Convenio. En ese caso, la responsabilidad objetiva se canalizará de conformidad con el artículo 4 del Protocolo.

7. a) El Protocolo no se aplicará al daño causado por un incidente que se produzca durante un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y otros desechos y su eliminación, en cumplimiento de un acuerdo o arreglo bilateral, multilateral, o regional concertado y notificado de conformidad con el artículo 11 del Convenio, si:

i) El daño se ha producido en una zona bajo la jurisdicción nacional de cualquiera de las Partes en el acuerdo o arreglo;

ii) Existe un régimen de responsabilidad e indemnización, que esté en vigor y sea aplicable al daño resultante de los movimientos antes mencionados o la eliminación, siempre que cumpla plenamente o trascienda las finalidades del presente Protocolo al ofrecer un alto grado de protección a las personas que han sufrido el daño;

iii) La Parte en un acuerdo o arreglo previsto en el artículo 11 en la que el daño ha ocurrido, ha notificado previamente al Depositario que el Protocolo no será aplicable a los daños que ocurran en una zona bajo su jurisdicción nacional debido a un incidente que se produzca a causa de los movimientos o las eliminaciones a que se hace referencia en el presente apartado; y

iv) Las Partes en un acuerdo o arreglo previsto en el artículo 11 no han declarado que el Protocolo será aplicable.

b) A fin de fomentar la transparencia, una Parte Contratante que haya notificado al Depositario que el Protocolo no es aplicable notificará a la Secretaría los regímenes aplicables de responsabilidad e indemnización a que se hace referencia en el apartado ii) del inciso a) e incluirá una descripción del régimen. La Secretaría presentará a la Conferencia de las Partes en el Convenio, periódicamente, informes resumidos sobre las notificaciones recibidas;

c) Después de una notificación efectuada con arreglo al apartado iii) del inciso a) no podrán incoarse acciones con arreglo al Protocolo en relación con la compensación por daños a los que se aplica el apartado i) del inciso a).

8. La exclusión establecida en el párrafo 7 del presente artículo no afectará ninguno de los derechos u obligaciones con arreglo al presente Protocolo de una Parte Contratante que no sea Parte en el acuerdo o el arreglo antes mencionado, ni tampoco afectará los derechos de los Estados de tránsito que no sean Partes Contratantes.

9. El párrafo 2 del artículo 3 no afectará la aplicación del artículo 16 a todas las Partes Contratantes.

Artículo 4. Responsabilidad objetiva

1. La persona que notifica de conformidad con el artículo 6 del Convenio, será responsable por daños hasta que el eliminador haya tomado posesión de los desechos peligrosos y otros desechos. A partir de ese momento el eliminador será responsable por los daños. Si el Estado de exportación es el notificador o si no se ha hecho notificación, el exportador será responsable por los daños hasta que el eliminador haya tomado posesión de los desechos peligrosos y otros desechos. En lo que respecta al inciso b) del párrafo 6, del artículo 3 del Protocolo, el párrafo 5 del artículo 6 del Convenio se aplicará *mutatis mutandis*. A partir de ese momento el eliminador será responsable por daños.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 y en relación con los desechos sujetos al inciso b) del párrafo 1 del artículo 1 del Convenio que hayan sido notificados como peligrosos por el Estado de importación de conformidad con el artículo 3 del Convenio, pero no han sido notificadas como tales por el Estado de exportación, si el Estado de importación es el notificador, o no se ha efectuado la notificación, el importador será responsable hasta el momento en que el eliminador haya tomado posesión de los desechos. A partir de ese momento el eliminador será responsable por daños.

3. Si los desechos peligrosos y otros desechos fueran reimportados de conformidad con el artículo 8 del Convenio, la persona que haya notificado será responsable por daños desde el momento en que los desechos peligrosos abandonan el sitio de eli-

minación, hasta el momento en que los desechos entran en posesión del exportador, si esto fuera aplicable, o del eliminador alternativo.

4. Si los desechos peligrosos y otros desechos fueran reimportados de conformidad con el inciso *a)* del párrafo 2 del artículo 9 o el párrafo 4 del artículo 9 del Convenio, con sujeción al artículo 3 del Protocolo, la persona que reimporta será responsable por daños hasta que los desechos entren en posesión del exportador, si esto es aplicable, o del eliminador alternativo.

5. No será responsable la persona a que se hace referencia en los párrafos 1 y 2 del presente artículo si esa persona prueba que el daño ha sido resultado:

- a)* De un acto de conflicto armado, hostilidades, guerra civil o insurrección;
- b)* De un fenómeno natural de carácter excepcional, inevitable, imprevisible e irresistible;
- c)* Exclusivamente del cumplimiento de una disposición obligatoria de una autoridad pública del Estado donde se haya producido el daño; o
- d)* Exclusivamente de la conducta ilícita intencional de un tercero, incluida la persona que sufre el daño.

6. Si dos o más personas son responsables de conformidad con el presente artículo, el demandante tendrá derecho a pedir indemnización completa por los daños a cualquiera de las personas responsables o a todas ellas.

Artículo 5. Responsabilidad culposa

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, toda persona será responsable por daños causados por el incumplimiento de las disposiciones para la aplicación del Convenio o por sus actos u omisiones voluntarios, imprudentes o negligentes o a los que hayan contribuido ese incumplimiento o esos actos u omisiones. El presente artículo no afectará la legislación nacional de las Partes Contratantes que rige la responsabilidad de los servidores y agentes.

Artículo 6. Medidas preventivas

1. Con sujeción a cualesquiera disposición de legislación nacional toda persona que tenga control operacional de desechos peligrosos y otros desechos en el momento de un incidente tomará todas las medidas razonables para mitigar los daños derivados de ese incidente.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en cualquiera otra disposición del Protocolo, toda persona que esté en posesión y/o tenga el control de desechos peligrosos y otros desechos al solo efecto de tomar medidas preventivas, siempre que esa persona haya actuado razonablemente y de conformidad con cualquier ley nacional que regule las medidas preventivas, no será responsable en virtud del Protocolo.

Artículo 7. Causa combinada de los daños

1. Cuando el daño sea causado por desechos regulados por el presente Protocolo y desechos no regulados por el Protocolo, toda persona de otra manera responsable sólo será responsable en virtud del Protocolo en proporción a la contribución a los daños provocados por los desechos regulados por el Protocolo.

2. La proporción de la contribución de los desechos a los daños a que se hace referencia en el párrafo 1 se determinará en relación con el volumen y las propiedades de los desechos de que se trate y el tipo de daño ocurrido.

3. En caso de daños en que no sea posible diferenciar entre la contribución hecha por los desechos regulados por el Protocolo y los desechos no regulados por él, se considerará que todos los daños resultantes están regulados por el Protocolo.

Artículo 8. Derecho para interponer recurso

1. Toda persona responsable con arreglo al Protocolo tendrá derecho a interponer recurso de conformidad con el reglamento del tribunal competente:

a) Contra cualquier otra persona que sea también responsable con arreglo al Protocolo; y

b) Conforme se prevé expresamente en arreglos contractuales;

2. Nada de lo dispuesto en el Protocolo afectará cualesquiera otros derechos para interponer recursos de los que la persona responsable pueda disfrutar de conformidad con la ley del tribunal competente.

Artículo 9. Culpa concurrente

La indemnización podrá reducirse o denegarse si la persona que sufrió los daños, o una persona de la que es responsable con arreglo a la legislación nacional ha causado, o contribuido a causar, por su propia culpa, el daño, habida cuenta de todas las circunstancias.

Artículo 10. Aplicación

1. Las Partes Contratantes adoptarán las medidas legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para aplicar el Protocolo.

2. Para promover la transparencia, las Partes Contratantes informarán a la Secretaría acerca de las medidas adoptadas para aplicar el Protocolo, incluidos los límites de responsabilidad establecidos de conformidad con el párrafo 1 del anexo B.

3. Las disposiciones del Protocolo se aplicarán sin discriminación basada en la nacionalidad, el domicilio o la residencia.

Artículo 11. Conflictos con otros acuerdos de responsabilidad e indemnización

Cuando las disposiciones del Protocolo y las disposiciones de un acuerdo bilateral, multilateral o regional se apliquen a la responsabilidad e indemnización por daños

causados por un incidente ocurrido durante la misma porción de un movimiento transfronterizo, el Protocolo no se aplicará siempre que el otro acuerdo esté en vigor entre las Partes de que se trate y haya sido abierto a la firma cuando el presente Protocolo fue abierto a la firma, incluso si el acuerdo fue enmendado posteriormente.

Artículo 12. Límites financieros

1. Los límites financieros por concepto de responsabilidad en virtud del artículo 4 del Protocolo, se especifican en el anexo B del Protocolo. Esos límites no incluirán ni los intereses ni las costas adjudicadas por el tribunal competente.

2. No se establecerá un límite financiero a la responsabilidad con arreglo al artículo 5.

Artículo 13. Límite temporal de la responsabilidad

1. Sólo se admitirán reclamaciones por indemnización con arreglo al Protocolo cuando se presenten en un plazo de 10 años desde la fecha del incidente.

2. Sólo se admitirán reclamaciones por indemnización con arreglo al Protocolo cuando se presenten en un plazo de cinco años desde la fecha en que el demandante conoció, o debió razonablemente haber conocido, el daño, siempre que no se superen los límites temporales establecidos de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo.

3. Cuando el incidente consista en una serie de sucesos que tengan el mismo origen, los plazos establecidos de conformidad con el presente artículo empezarán a correr desde la fecha del último de esos sucesos. Cuando el incidente consista en un suceso continuo, el plazo empezará a correr desde el final de ese suceso continuo.

Artículo 14. Seguro y otras garantías financieras

1. Las personas responsables con arreglo al artículo 4 establecerán y conservarán durante el período del límite temporal de la responsabilidad un seguro, bonos u otras garantías financieras que cubran su responsabilidad con arreglo al artículo 4 del Protocolo por un monto que no sea inferior a los límites mínimos especificados en el párrafo 2 del anexo B. Los Estados podrán cumplir sus obligaciones con arreglo al presente párrafo mediante una declaración de autoseguro. Nada de lo previsto en este párrafo impedirá el uso de franquicias o copagos entre el asegurador y el asegurado, pero la falta de pago por parte del asegurado de cualquier franquicia o copago no representará una defensa contra la persona que ha sufrido el daño.

2. Con respecto a la responsabilidad del notificador, o exportador con arreglo al párrafo 1 del artículo 4, o del importador con arreglo al párrafo 2 del artículo 4, sólo se utilizarán el seguro, los bonos o cualquier otra garantía financiera a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo para indemnizar los daños contemplados en el artículo 2 del Protocolo.

3. La notificación a que se hace referencia en el artículo 6 del Convenio deberá ir acompañada de un documento en que se estipulen la cobertura de la responsabilidad del notificador o exportador con arreglo al párrafo 1 del artículo 4 o del importa-

dor con arreglo al párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo. Se presentará a las autoridades competentes del Estado de importación una prueba de la cobertura de la responsabilidad del eliminador.

4. Toda reclamación con arreglo al Protocolo podrá hacerse valer directamente ante cualquier persona que proporcione el seguro, los bonos u otras garantías financieras. El asegurador o la persona que proporciona la garantía financiera tendrá derecho a exigir que la persona responsable con arreglo al artículo 4 sea convocada durante las actuaciones. Los aseguradores y las personas que proporcionan garantías financieras podrán invocar las mismas defensas que tendría derecho a invocar la persona responsable con arreglo al artículo 4.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4, una Parte Contratante indicará, por notificación al Depositario en el momento de la firma, ratificación, aprobación del Protocolo o adhesión a él, si en su legislación no se contempla el derecho a entablar una demanda directa con arreglo al párrafo 4. La Secretaría mantendrá un registro de las Partes Contratantes que han presentado notificaciones con arreglo al presente párrafo.

Artículo 15. Mecanismo financiero

1. En el caso en que la indemnización con arreglo al Protocolo no cubra los costos de los daños, se podrán tomar medidas adicionales y complementarias para garantizar una indemnización pronta y adecuada utilizando los mecanismos existentes.

2. La reunión de las Partes mantendrá en examen la necesidad y posibilidad de mejorar los mecanismos existentes o de establecer un nuevo mecanismo.

Artículo 16. Responsabilidad del Estado

El Protocolo no afectará a los derechos ni obligaciones de las Partes Contratantes en virtud de las normas del derecho internacional general en lo que respecta a la responsabilidad de los Estados.

Artículo 17. Tribunales competentes

1. Las demandas de indemnización en virtud del Protocolo sólo podrán interponerse ante los tribunales de una Parte Contratante donde:

- a) Se ha sufrido el daño; o
- b) Ha ocurrido el incidente; o
- c) El demandado tiene su residencia habitual o su centro principal de operaciones comerciales.

2. Cada Parte Contratante se asegurará de que los tribunales sean competentes para conocer esas demandas de indemnización.

Artículo 18. Acciones conexas

1. Cuando se incoen acciones conexas ante tribunales de distintas Partes, cualquier tribunal que no sea aquél donde se incoó la primera acción podrá suspender sus procedimientos mientras las acciones estén pendientes en primera instancia.

2. Un tribunal podrá, a solicitud de una de las Partes, declinar jurisdicción si la ley de ese tribunal permite la consolidación de acciones conexas y otro tribunal tiene jurisdicción sobre ambas acciones.

3. A los efectos del presente artículo se estimará que las acciones son conexas cuando estén tan estrechamente relacionadas que convenga conocerlas y determinarlas juntas para evitar el riesgo de que de procedimientos distintos resulten sentencias inconciliables.

Artículo 19. Derecho aplicable

Todas las cuestiones de fondo o de procedimiento relativas a reclamaciones que el tribunal competente tiene ante sí que no estén específicamente reguladas en el Protocolo se regirán por la ley de ese tribunal, incluidas todas las disposiciones de esa ley relativas a los conflictos de leyes.

Artículo 20. Relación entre el Protocolo y la ley del tribunal competente

1. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2, ninguna disposición del Protocolo podrá interpretarse en el sentido de que limita o menoscaba cualesquiera de los derechos de las personas que han sufrido daños o en el sentido de que limita las disposiciones relativas a la protección o la rehabilitación del medio ambiente que puedan adoptarse con arreglo a la legislación nacional.

2. No podrá presentarse ninguna reclamación de indemnización por daños basados en la responsabilidad objetiva del notificador o del exportador responsable con arreglo al párrafo 1 del artículo 4, o del importador responsable con arreglo al párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo sino de conformidad con el Protocolo.

Artículo 21. Reconocimiento mutuo y ejecución de sentencias

1. Toda sentencia de un tribunal que tenga jurisdicción con arreglo al artículo 17 del Protocolo, que sea ejecutoria en el Estado de origen y no esté ya sujeta a formas ordinarias de revisión, será reconocida en cualquier Parte Contratante tan pronto como se hayan satisfecho las formalidades requeridas por esa Parte, salvo que:

- a) La sentencia se haya obtenido fraudulentamente;
- b) No se haya notificado al demandado dentro de un plazo razonable ni dado oportunidad suficiente para presentar su defensa;
- c) Cuando la decisión sea inconciliable con una sentencia anterior pronunciada en forma válida en otra Parte Contratante sobre la misma causa y en las mismas Partes; o

d) Cuando la sentencia sea contraria a la política pública de la Parte Contratante en la que se busca reconocimiento.

2. Toda sentencia reconocida en virtud del párrafo 1 del presente artículo será ejecutoria en cada Parte Contratante tan pronto como se hayan satisfecho las formalidades requeridas por esa Parte. Las formalidades no permitirán la reapertura del fondo del asunto.

3. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del presente artículo no se aplicarán entre las Partes Contratantes que sean Partes en un acuerdo o arreglo que esté en vigor sobre el reconocimiento mutuo y la calidad ejecutoria de las sentencias con arreglo a las cuales la sentencia sería reconocible y ejecutoria.

Artículo 22. Relación del Protocolo con el Convenio de Basilea

Las disposiciones del Convenio relativas a sus Protocolos se aplicarán al Protocolo salvo que en éste se disponga otra cosa.

Artículo 23. Enmienda del anexo B

1. En su sexta reunión, la Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea podrá enmendar el párrafo 2 del anexo B con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 18 del Convenio de Basilea.

2. Esa enmienda podrá efectuarse antes de que el Protocolo entre en vigor.

CLÁUSULAS FINALES

Artículo 24. Reunión de las Partes

1. Queda establecida una reunión de las Partes. La Secretaría convocará la primera reunión de las Partes juntamente con la primera reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio después de la entrada en vigor del Protocolo.

2. Posteriormente se celebrarán reuniones ordinarias de las Partes juntamente con las reuniones de la Conferencia de las Partes en el Convenio, a menos que la reunión de las Partes decida otra cosa. Las reuniones extraordinarias de las Partes se celebrarán cuando la reunión de las Partes lo estime necesario o cuando cualquiera de las Partes Contratantes lo solicite por escrito, siempre que, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que la solicitud le sea comunicada por la Secretaría, un tercio de las Partes, como mínimo, apoye esa solicitud.

3. En su primera reunión, las Partes Contratantes adoptarán por consenso el reglamento de sus reuniones, así como su reglamento financiero.

4. Las funciones de la reunión de las Partes serán:

- a) Examinar la aplicación y el cumplimiento del Protocolo;
- b) Tomar las medidas necesarias para la presentación de informes y establecer, cuando sea necesario, directrices y procedimientos para dicha presentación;

- c) Examinar y adoptar, cuando sea necesario, las propuestas de enmiendas del Protocolo o de sus anexos y de inclusión de nuevos anexos; y
- d) Examinar y tomar cualquier medida adicional que sea necesaria a los fines del Protocolo.

Artículo 25. Secretaría

1. A los fines del Protocolo, la Secretaría tendrá las siguientes funciones:
 - a) Organizar las reuniones de las Partes previstas en el artículo 24 y proporcionar servicios a esas reuniones;
 - b) Preparar informes, incluidos datos financieros, sobre las actividades que realice en el desempeño de sus funciones con arreglo al Protocolo y presentarlos a la reunión de las Partes;
 - c) Velar por la coordinación necesaria con los órganos internacionales pertinentes y, en particular, concretar los arreglos administrativos y contractuales que puedan ser necesarios para el desempeño eficaz de sus funciones;
 - d) Recabar información sobre las leyes y disposiciones administrativas nacionales de las Partes Contratantes que aplican el Protocolo;
 - e) Cooperar con las Partes Contratantes y con las organizaciones y los organismos internacionales pertinentes y competentes en el suministro de expertos y equipo a fin de prestar rápidamente asistencia a los Estados en caso de situaciones de emergencia;
 - f) Alentar a los Estados que no son Partes a que asistan a las reuniones de las Partes en calidad de observadores y obren de conformidad con las disposiciones del Protocolo; y
 - g) Desempeñar las demás funciones que le asignen las reuniones de las Partes para el logro de los objetivos del presente Protocolo.
2. La secretaría del Convenio de Basilea desempeñará las funciones de Secretaría.

Artículo 26. Firma

El Protocolo estará abierto a la firma de los Estados y las organizaciones de integración económica regional Partes en el Convenio de Basilea en Berna en el Departamento Federal de Relaciones Exteriores de Suiza, del 6 al 17 de marzo de 2000, y en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, del 1 de abril al 10 de diciembre de 2000.

Artículo 27. Ratificación, aceptación, confirmación formal o aprobación

1. El Protocolo estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados y a confirmación formal o aprobación por las organizaciones de integración económica regional. Los instrumentos de ratificación, aceptación, confirmación formal o aprobación se depositarán en poder del Depositario.

2. Toda organización a la que se refiere el párrafo 1 del presente artículo que llegue a ser Parte en el presente Protocolo sin que sea Parte en él ninguno de sus Estados miembros estará sujeta a todas las obligaciones enunciadas en el Protocolo. Cuando uno o varios Estados miembros de esas organizaciones sean Partes en el Protocolo, la organización y sus Estados miembros decidirán acerca de sus responsabilidades respectivas en lo que concierne a la ejecución de las obligaciones que les incumban en virtud del Protocolo. En tales casos, la organización y los Estados miembros no estarán facultados para ejercer simultáneamente los derechos que establezca el Protocolo.

3. En sus instrumentos de confirmación formal o aprobación, las organizaciones a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo especificarán el alcance de sus competencias en las materias regidas por el Protocolo. Esas organizaciones informarán asimismo al Depositario, quien informará a las Partes Contratantes, de cualquier modificación importante del alcance de sus competencias.

Artículo 28. Adhesión

1. El Protocolo estará abierto a la adhesión de los Estados y de las organizaciones de integración económica regional que sean Partes en el Convenio de Basilea que no hayan firmado el Protocolo. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Depositario.

2. En sus instrumentos de adhesión, las organizaciones a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo especificarán el alcance de sus competencias en las materias regidas por el Protocolo. Esas organizaciones informarán asimismo al Depositario de cualquier modificación importante del alcance de sus competencias.

3. Las disposiciones del párrafo 2 del artículo 27 se aplicarán a las organizaciones de integración económica regional que se adhieran al Protocolo.

Artículo 29. Entrada en vigor

1. El Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación, aceptación, confirmación formal, aprobación o adhesión.

2. Respecto de cada Estado u organización de integración económica regional que ratifique, acepte, apruebe o confirme formalmente el Protocolo o se adhiera a él después de la fecha de depósito del vigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación, confirmación formal o adhesión, el Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que ese Estado u organización de integración económica regional haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación, confirmación formal o adhesión.

3. A los efectos de los párrafos 1 y 2 del presente artículo, los instrumentos depositados por una organización de integración económica regional no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de esa organización.

Artículo 30. Reservas y declaraciones

1. No se podrán formular reservas ni excepciones al Protocolo. A los efectos del Protocolo, las notificaciones efectuadas con arreglo al párrafo 1 del artículo 3, al párrafo 6 del artículo 3 o al párrafo 5 del artículo 15 no se considerarán reservas o excepciones.

2. El párrafo 1 del presente artículo no impedirá que al firmar, ratificar, aceptar, aprobar o confirmar formalmente el Protocolo, o al adherirse a él, un Estado o una organización de integración económica regional formule declaraciones o manifestaciones, cualesquiera que sean su redacción y título, con miras, entre otras cosas, a la armonización de sus leyes y reglamentos con las disposiciones del Protocolo, a condición de que no se interprete que esas declaraciones o manifestaciones tienen por objeto excluir o modificar los efectos jurídicos de las disposiciones del Protocolo y su aplicación a ese Estado u organización.

Artículo 31. Denuncia

1. En cualquier momento después de la expiración de un plazo de tres años contado a partir de la fecha de entrada en vigor del Protocolo respecto de una Parte Contratante, esa Parte Contratante podrá denunciar el Protocolo mediante notificación hecha por escrito al Depositario.

2. La denuncia será efectiva un año después de la fecha en que el Depositario haya recibido la notificación, o en cualquier fecha posterior que se indique en esa notificación.

Artículo 32. Depositario

El Secretario General de las Naciones Unidas será Depositario del Protocolo.

Artículo 33. Textos auténticos

Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso del Protocolo son igualmente auténticos.

ANEXO A

LISTA DE ESTADOS DE TRÁNSITO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL INCISO D) DEL PÁRRAFO 3 DEL ARTÍCULO 3

1. Antigua y Barbuda
2. Bahamas
3. Bahrein
4. Barbados
5. Cabo Verde
6. Cuba
7. Chipre y las Antillas
22. Nauru
23. Niue
26. Palau
24. Nueva Zelandia, en nombre de
25. Países Bajos, en nombre Aruba

8. Dominica Neerlandesas
9. Fiji 26. Palau
10. Granada 27. Papua Nueva Guinea
11. Haití 28. República Dominicana
12. Islas Comoras 29. Samoa
13. Islas Cook 30. San Kitts y Nevis
14. Maldivas 31. San Vicente y las Granadinas
15. Islas Marshall 32. Santa Lucía
16. Islas Salomón 33. Santo Tomás y Príncipe
17. Jamaica 34. Seychelles
18. Kiribati 35. Singapur
19. Malta 36. Tonga
20. Mauricio 37. Trinidad y Tobago
21. Micronesia (Estados Federados 38. Tuvalu de) 39. Vanuatu

ANEXO B

LÍMITES FINANCIEROS

1. La ley nacional determinará los límites financieros por concepto de responsabilidad en virtud del artículo 4 del Protocolo.

2. a) Los límites de la responsabilidad del notificador, exportador o importador por un incidente cualquiera no serán inferiores a:

- i) Un millón de unidades contables para envíos iguales o superiores a cinco toneladas;
- ii) Dos millones de unidades contables para envíos superiores a las cinco toneladas pero iguales o inferiores a 25 toneladas;
- iii) Cuatro millones de unidades contables para envíos superiores a 25 toneladas pero iguales o inferiores a 50 toneladas;
- iv) Seis millones de unidades contables para envíos superiores a 50 toneladas pero iguales o inferiores a 1.000 toneladas;
- v) Diez millones de unidades contables para envíos superiores a las 1.000 toneladas pero iguales o inferiores a 10.000 toneladas;
- vi) Más 1.000 unidades contables adicionales por cada tonelada adicional, hasta un máximo de 30 millones de unidades contables.

b) Los límites de la responsabilidad para el eliminador no serán inferiores a dos millones de unidades contables por un incidente cualquiera.

3. Las Partes Contratantes revisarán periódicamente las cantidades mencionadas en el párrafo 2 teniendo en cuenta, entre otras cosas, los riesgos potenciales planteados al medio ambiente por el movimiento de los desechos peligrosos y otros desechos y su eliminación, el reciclado, y la naturaleza, la cantidad y las propiedades peligrosas de los desechos.

